

Causa Rol N° 15.732.-

Sentencia dictada por el Ministro en Visita Extraordinaria, don Álvaro Mesa Latorre.

Temuco, diecisiete de enero de dos mil veinticuatro. -

VISTOS:

ÍNDICE

I. Relación de la Sentencia.....2-4

II. Resumen ejecutivo.....4-5

III. Actuarios de tramitación y dato técnico.....5

IV. Incidentes.....5-17

V. En cuanto a la Acción Penal:

 A. Declaraciones17-36

 B. Documentos.....36-47

 Artículo 488 del Código de Procedimiento Penal.....47-50

 Calificación jurídica de los hechos.....50-55

 Concepto de Lesa Humanidad.....55-57

 C. Declaraciones indagatorias y sus respectivo análisis:57-116

 En cuanto a las defensas.....116-124

 D. Análisis de las defensas:

 Consideraciones previas al análisis de la defensa:

 Resumen del auto acusatorio.....125-126

 Estado de Derecho.....126-131

 Obligación de Investigar.....131-147

 Jurisprudencia Internacional sobre graves violaciones a los Derechos Humanos (Delitos de Lesa Humanidad) pronunciada por el Tribunales Alemanes.....147-157

 Alevosía.....157-158

 Convenio de Ginebra.....158-159

 E. Análisis de las defensas específicas:.....159-175

 F. Acusaciones particulares.....175-176

 G. Adhesión a la Acusación Judicial.....176

 H. Reflexiones sobre lesa humanidad.....176- 183

 I. Circunstancias Modificadorias de Responsabilidad Penal:

 Atenuante de responsabilidad penal.....183-185

Institución de la Media Prescripción o Prescripción Gradual.....186-188

Agravantes de Responsabilidad Penal.....189-191

Determinación de la Pena.....191-192

Beneficios de la Ley 18.216 y sus modificaciones posteriores.....192-199

VI. Aspectos Resolutivos.....199-202

I. RELACIÓN DE LA SENTENCIA:

Que se ha iniciado esta **causa rol N°15.732** del ingreso del Juzgado del Crimen de Puerto Aysén, para investigar el delito de **Homicidio calificado de Rubén Armando Antimán Nahuelquín** y determinar la responsabilidad que en tales hechos le ha cabido a:

1. VICTOR HERALDO CUEVAS SEGUEL, R.U.N. 5.355.650-7, chileno, natural de Puerto Aysén, casado, de 78 años de edad, sargento segundo en retiro de Carabineros de Chile, domiciliado en calle Erardo Werner N°849, comuna de Llanquihue, región de Los Lagos, nunca antes condenado (extracto de filiación y antecedentes de fs. 1.969 Tomo V).

2. ALBERTO DANIEL VELASQUEZ BARRÍA R.U.N. 7.165.629-2, chileno, natural de Puerto Aysén, de 68 años de edad, casado, sargento segundo en retiro de Carabineros de Chile, domiciliado en Lagunitas KM 3.5 S7N camino Aeropuerto Puerto Montt, nunca antes condenado (extracto de filiación y antecedentes de fs. 1.970 Tomo V).

A **fs. 1 a fs. 3 (Tomo I)**, se inició la causa mediante querrella criminal de Alicia Lira Matus, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, por los delitos de homicidio y de asociación ilícita cometido en la persona de Rubén Armando Antimán Nahuelquín, en contra de los agentes del Estado, integrantes de Carabineros de Chile de Puerto Aysén, y en contra de todos los que resulten responsables, con costas.

A **fs. 376 a fs. 382 (Tomo I)**, con fecha 31 de diciembre de 2011, interpuso querrella criminal Rodrigo Ubilla Mackenney, Subsecretario del Interior, en contra de todos aquellos que resulten responsables, por su intervención en calidad de autores, cómplices y encubridores, en los delitos de aplicación de tormentos y homicidio simple, cometido en perjuicio de Rubén Armando Antimán Nahuelquín, en grado de consumado, con costas.

A fs. 1.370 a fs. 1.377 (Tomo III), con fecha 04 de mayo de 2016, se sometió a proceso a **ALBERTO DANIEL VELÁSQUEZ BARRÍA**, como autor de cuasidelito de homicidio cometido en contra de Rubén Armando Antimán Nahuelquín. Revocado a fs. 1.434 a fs. 1.438 (Tomo III) con fecha 26 de julio de 2016 por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Coyhaique.

A fs. 1.981 a fs. 2.016 (Tomo VI), con fecha 12 de julio de 2021, se sometió a proceso y a arresto domiciliario total a **VICTOR HERALDO CUEVAS SEGUEL** y **ALBERTO DANIEL VELÁSQUEZ BARRÍA** como autores del delito de homicidio calificado, en su carácter de lesa humanidad, en la persona de Rubén Armando Antimán Nahuelquín, perpetrado en la ciudad de Puerto Aysén, en el mes de diciembre de 1985. Confirmado a fs. 2.071 a fs. 2.074 (Tomo VI), con fecha 02 de noviembre de 2021, por la Ilustrísima Corte de Apelaciones Temuco.

A fs. 2.081 (Tomo VI), con fecha 10 de diciembre de 2021, se declaró cerrado el sumario.

A fs. 2.096 a fs. 2.131 (Tomo VI), con fecha 30 de diciembre de 2021, se dictó auto acusatorio en contra de **VICTOR HERALDO CUEVAS SEGUEL** y **ALBERTO DANIEL VELÁSQUEZ BARRÍA**, como autores del delito de homicidio calificado, en su carácter de lesa humanidad, en la persona de Rubén Armando Antimán Nahuelquín, perpetrado en la ciudad de Puerto Aysén, en el mes de diciembre de 1985.

A fs. 2.251 a fs. 2.259 (Tomo VI), el abogado David Osorio Barrios, en representación de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, en lo principal de su escrito presenta **acusación particular**.

A fs. 2.411 a fs. 2.415 (Tomo VI), el abogado Ricardo Lavín Salazar, en representación del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, formula **acusación particular**.

A fs. 2.504 a fs. 2.596 (Tomo VII), el abogado Maximiliano Murath Mansilla, en representación del acusado Alberto Daniel Velásquez Barría, en lo principal de su presentación solicita inhabilidad por aplicación del artículo 19 N°3 de la Constitución Política; y solicita la inhabilidad del juez por el control de convencionalidad. Al primer otrosí, solicita la nulidad de las declaraciones del proceso de indica. Al segundo otrosí, suspensión del procedimiento. Al tercer otrosí, en subsidio opone excepciones de previo y especial pronunciamiento. En el cuarto otrosí, contesta acusación fiscal y acusaciones particulares. En el quinto otrosí, medios de prueba. Al sexto otrosí, acompaña documentos. En el séptimo otrosí, solicita diligencias.

A fs. 2.598 a fs. 2.618 (Tomo VII), en abogado Oscar Álvarez Suarez, en representación de **Víctor Heraldo Cuevas Seguel**, en lo principal de su presentación interpone incidente de nulidad procesal. Al primer otrosí, interpone excepciones de previo y especial pronunciamiento, en carácter de defensa de fondo. En el segundo otrosí, contesta la acusación y adhesión a la misma; en subsidio solicita atenuante de responsabilidad penal del 11 N°6 y N°9 del Código Penal; al tercer otrosí, penas sustitutivas de la ley 18.216.

A fs. 2.730 a fs. 2.741 (Tomo VIII) el abogado Rodrigo Cortes Carrasco, en representación de **Víctor Heraldo Cuevas Seguel**, en el segundo otrosí, contesta acusaciones particulares y adhesiones a la misma.

A fs. 2.807 (Tomo VIII), con fecha 26 de julio de 2023, se recibió la causa a prueba.

A fs. 2.844 (Tomo VIII), con fecha 11 de septiembre de 2023, se certificó que el término probatorio se encontraba vencido.

A fs. 2.845 (Tomo VIII), con fecha 11 de septiembre de 2023, se trajeron los autos para efectos del **artículo 499 del Código de Procedimiento Penal**.

A fs. 2.846 (Tomo VIII), se dictaron medidas para mejor resolver.

A fs. 3.169 (Tomo IX), con fecha 17 de enero de 2024 se trajeron los autos para fallo.

II. RESUMEN EJECUTIVO

- **EN CUANTO A LOS INCIDENTES NULIDAD 1° al 6°**

- **ACCIÓN PENAL 7° al 39°:**

7°) y 8°) En cuanto a la acción penal y elementos probatorios del proceso: Declaraciones y Documentos; 9°) Artículo 488 del Código de Procedimiento Penal; 10°) y 11°) Calificación jurídica de los hechos; 12°) y 13°) Concepto de Lesa Humanidad; 14°) Declaraciones Indagatorias de Víctor Heraldo Cuevas Seguel; 15°) y 16°) Análisis de la declaración del acusado, corroboración con sus propios dichos y ponderación en relación a la prueba del proceso; 17°) Declaraciones indagatorias de Alberto Daniel Velásquez Barría; 18°) y 19°) Análisis de la declaración del acusado, corroboración con sus propios dichos y ponderación en relación a la prueba del proceso; 20°) Defensa de los abogados Oscar Álvarez Suarez y Rodrigo Cortes Carrasco; 21°) Defensa del abogado Maximiliano Murath Mansilla; 22°) Consideraciones Previas al Análisis de la Defensa: Resumen del auto acusatorio; Estado de Derecho; Obligación de investigar; Jurisprudencia internacional sobre graves violaciones a los derechos humanos (delitos de lesa humanidad) pronunciada por Tribunales Alemanes; Alevosía; Convenio de Ginebra; 23°) Análisis de la defensa específica del acusado Víctor Heraldo Cuevas Seguel; 24°) Análisis de la defensa específica del acusado Alberto Daniel Velásquez Barría; 25°) Acusación particular del abogado David Osorio Barrio; 26°) Acusación particular del

*abogado Ricardo Lavín Salazar; 27°) Análisis de las acusaciones particulares; 28°) Adhesión a la acusación; 29°) Reflexiones sobre lesa humanidad; **Circunstancias Modificadorias de Responsabilidad Penal: 30°) Atenuante de responsabilidad penal; 31°) Análisis del Tribunal 32°) Institución de la Media Prescripción o Prescripción Gradual; 33°) Agravantes de responsabilidad penal; 34°), 35°) y 36°) Determinación de la pena; 37°), 38°) y 39°) Beneficios de la ley 18.216 y sus modificaciones posteriores.***

III. ACTUARIOS DE TRAMITACIÓN Y DATO TÉCNICO:

- A. Fecha de inicio de la causa: 14 de julio de 2010
- B. Actuario de Tramitación Sumario: Cecilia Cruces Valdebenito y Francisca Rosales Castillo.
- C. Actuario de Tramitación Plenario: Leslie Villalobos Retamal y Yessica Sobarzo Tragol.
- D. Tomos: IX
 - Tomo I de fs.1 a fs. 446;
 - Tomo II de fs. 447 a fs. 871;
 - Tomo III de fs. 872 a fs. 1.455;
 - Tomo IV de fs. 1.456 a fs. 1.688;
 - Tomo V de fs. 1.690 a fs. 1.971;
 - Tomo VI de fs. 1.972 a fs. 2.431;
 - Tomo VII de fs. 2.432 a fs. 2.718;
 - Tomo VIII de fs. 2.719 a fs. 3.061;
 - Tomo IX desde fs.3.060 en adelante.
- E. Cuadernos agregados.
 - Tomo I, causa rol 4.769 del Juzgado de Crimen de Mayor Cuantía de Puerto Aysén.
 - Tomo I, cuaderno de mandamiento de ejecución y embargo de 2 fojas.
 - Cuaderno custodia que contiene copias de causa rol 4.769 del Juzgado de Crimen de Mayor Cuantía de Puerto Aysén.
 - Cuaderno separado de incidentes de 140 fojas
 - Cuadernos reservados 4
- F. Fojas 202
- G. Considerandos 39

IV. INCIDENTES

I. En cuanto a los incidentes de nulidad de Procesal

1°) Que este incidente se dejó para la definitiva a fs. 34 del Cuaderno Separado, con fecha 14 de noviembre de 2022. En síntesis en lo sustancial y pertinente: A **fs. 1 a fs. 21 (Cuaderno separado)** el **abogado Oscar Álvarez Suarez** en representación de Víctor Heraldo Cuevas Seguel, en lo principal de su

presentación opone incidente de nulidad procesal. Comienza reproduciendo los artículos 69, 71, 211 y 213 del Código de Procedimiento Penal, he indica que las declaraciones de los testigos Doris Antimán Jara fs. 27 y de fs. 107 (Tomo I); y Vitalia Nahuelquín Reinaldo de fs. 1.724 (Tomo V), con los cuales se pudo acreditar la existencia del homicidio calificado en carácter de lesa humanidad en contra de Rubén Antimán Nahuelquín, acaecido en 1985, se ha contravenido, lo prevenido por las normas legales citadas, en atención a que el juez acusador dispone de amplias facultades interrogativas, pudiendo condicionar las respuestas. Escapando de cualquier tipo de control, ya que la defensa no dispone de facultades para controlar dicho ejercicio, siendo esta práctica una causal de nulidad absoluta de las declaraciones de las testigos citadas. Refiere a jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema y continúa sus argumentos proclamando que es fundamental plantear el incidente de nulidad en defensa de los derechos de su representado, por cuanto a las garantías procesales que le asisten, siendo además un presupuesto esencial del debido proceso penal, solicitando la nulidad de las declaraciones del sumario de las testigos precedentemente señaladas.

2°) A fs. 24 a fs. 32 (cuaderno separado) el abogado Ricardo Lavín Salazar, en representación del querellante de autos, evacua traslado solicitado el rechazo del incidente promovido por la defensa del acusado Víctor Herald Cuebas Seguel, de acuerdo a las siguientes consideraciones.

A. Extemporaneidad de la incidencia. Que la defensa no hace referencia alguna a las normas de nulidad procesal, y en ese sentido señala que estas se encuentran reguladas entre los artículos 68 y 73 del Código de Procedimiento Penal, reproduciendo el artículo 68 del cuerpo legal. Que la parte incidentista en ningún momento, durante la vigencia del extenso sumario instruido en la presente causa, incidentó la nulidad procesal de las actuaciones que hoy está cuestionando, ni tampoco lo hizo en la oportunidad indicada en el artículo 401 del texto punitivo, pese a que aduce a vulneración de derechos y garantías jurídicos-procesales penales como constitucionales. Que las normas precitadas deben ser armonizadas con el contenido del artículo 83 del Código de Procedimiento Civil el que transcribe, aplicable en razón del artículo 68 del Código de Procedimiento Penal. Que también se debe estimar lo dispuesto en el artículo 71 bis del Código de Procedimiento Penal y artículo 83 del Código de Procedimiento Civil. Reproduce parte del auto de procesamiento de fs. 1.981 y siguientes (Tomo VI) de fecha 12 de julio de 2021. Que con fecha 28 de julio de 2021, según fs. 2.037 (Tomo VI), se tuvo presente la designación del abogado Oscar Álvarez Suarez, y que además durante

la investigación el abogado puede ejercer todas las facultades que le permite la ley, entre ellas solicitar conocimiento sumario, copias del expediente y diligencias; en consecuencia plantea que tuvo acceso y conocimiento de las piezas del sumario, para hacer efectivo el derecho a la defensa o interponer los recursos que estimara pertinentes, en razón de que el Tribunal no ha prohibido la defensa material ni técnica del acusado Víctor Cuevas Seguel. Que además habiendo transcurrido el plazo señalado por la ley desde el cual la parte conoció los supuestos o presuntos vicios este incidente es extemporáneo. Transcribe los artículos 206, 210 y 213 del Código de Procedimiento Penal, para concluir que estimando las actuaciones procedimentales que ha realizado la defensa del acusado Víctor Cuevas Seguel con posterioridad a la verificación de los actos procesales que hoy plantea, se entiende que existe aceptación de los efectos de los referidos actos o diligencias, y se ha subsanado cualquier presunto vicio.

B. Estándares Internacionales sobre Derechos Humanos: Expresa que nuestro país al ratificar diversos instrumentos sobre protección a los derechos humanos, entre ellos la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, ha adquirido una serie de obligaciones internacionales que implica que todos los poderes del Estado deben realizar todas las acciones que propendan al resguardo y ejercicio de los Derechos Humanos, aludiendo entre ellos a la obligación de investigar graves violaciones a los mismos, citando las convenciones internacionales y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

C. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional: expresa que la defensa cita un fallo de la Excelentísima Corte Suprema respecto de la nulidad procesal del sistema procesal penal nuevo, no aplicable al procedimiento penal antiguo. Que, además en diferentes fallos del Tribunal Constitucional ha declarado la constitucionalidad de este, refiriendo a la sentencia dictada en causa rol N°1.229-21 del Tribunal Constitucional. Reiterando que no se ha impedido el ejercicio del derecho a la defensa técnica, por lo que la petición de nulidad de las declaraciones de Doris Antimán Jara de fojas 27 y fs. 107 (Tomo I) y de Vitalia Nahuelquín Reinaldo de fs. 1.724 (Tomo V) solicitadas por el abogado Oscar Álvarez Suarez, deben ser rechazadas.

3°) Que para un mejor fundamento del incidente promovido por el abogado del acusado **Víctor Herald Cuevas Seguel** el Tribunal razona, que del estudio de los antecedentes, el mérito del proceso y escritos de las partes el Tribunal resuelve lo siguientes:

A. De inicio y antes de entrar al fondo del incidente el Tribunal hace presente que, estos incidentes de nulidad de manera semejante han sido presentado en las siguientes causas: rol 113.089 del ingreso del Juzgado del Crimen de Temuco, seguida para conocer los delitos de apremios ilegítimos y homicidios calificados de Florentino Alberto Molina Ruiz y otros de fecha 15 de septiembre de 2023, donde fue rechazada tal petición; en causa rol 63.556 del ingreso del Juzgado de Letras de Angol, para conocer el delito de apremios ilegítimos con resultado de muerte de Óscar Gutiérrez Gutiérrez, donde dicho incidente fue rechazado y la sentencia de primera instancia confirmada por la II^{ta} Corte de Apelaciones de Temuco con fecha 25 de febrero de 2022; en causa rol 63.534 del ingreso del Juzgado de Letras de Angol, seguida para conocer los delitos de homicidios calificados de Luis Cotal Álvarez y Gustavo Rioseco Montoya de fecha 23 de octubre de 2023.

B. Que del auto de procesamiento dictado contra el acusado Víctor Heraldo Cuevas Seguel de fecha 12 de julio de 2021 según consta a **fs. 1.981 a fs. 2.016 (Tomo VI)**, y notificado personalmente el 15 de julio de 2021 y advertido de los derechos que le confiere la ley apeló del auto de procesamiento. Desde esa fecha hasta la dictación del Auto Acusatorio de fecha 30 de diciembre de 2021 de **fs. 2.096 a fs. 2.131 (Tomo VI)**, transcurrieron cinco meses y quince días, durante ese periodo el abogado del acusado o quien lo representaba no realizó ninguna gestión útil o solicito conocimiento sumario. Como se aprecia entonces y lo reitera el abogado Ricardo Lavín Salazar, la defensa tuvo el tiempo suficiente para realizar su defensa técnica e interponer todos los recursos procesales que consagra el ordenamiento jurídico para impugnar las resoluciones del Tribunal. Por estos primeros argumentos debe **rechazarse** el incidente de nulidad promovido.

C. También cabe hacer presente, que es nuestra propia Constitución Política, a propósito de la reforma procesal penal que estableció en el artículo 77 inciso final que: “La ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales, así como las leyes procesales que regulen un sistema de enjuiciamiento, podrán fijar fechas diferentes para su entrada en vigencia en las diversas regiones del territorio nacional. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo para la entrada en vigor de dichas leyes en todo el país no podrá ser superior a cuatro años”. Refiriendo con ello al principio de gradualidad, a fin que la reforma procesal penal se fuera incorporando gradualmente en las diferentes regiones del país. Lo anterior tal como lo cita el querellante es concordante con el título final del Código

Procesal Penal que refiere a la entrada en vigencia del código en cuanto dispone en el artículo 483 que: “Las disposiciones de este Código sólo se aplicarán a los hechos acaecidos con posterioridad a su entrada en vigencia”; el artículo 484 prescribe: “Entrada en vigencia respecto de hechos acaecidos en el territorio nacional. Este Código comenzará a regir, para las distintas Regiones del país, al término de los plazos que establece el artículo 4º transitorio de la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público. En consecuencia, regirá para las regiones de Coquimbo y de la Araucanía, desde el 16 de diciembre de 2000(...)”. Por tal razón, las normas del Código Procesal Penal se aplican a hechos acaecidos con posteridad al 16 de diciembre del 2000, por estos nuevos argumentos deben ser **rechazados** los incidentes de nulidad.

D. Desde otro punto de vista, este Tribunal comparte los argumentos dados por el querellante Ricardo Lavín Salazar, en cuanto expresa además que, la nulidad procesal se encuentra regulada en los artículos 68 y 73 del Código de Enjuiciamiento Criminal, y demás normas conexas. Aduciendo a la oportunidad en que la parte afectada debe promover citando el artículo 71 del Código de Procedimiento Penal. Que la parte incidentista, en ningún momento, durante la vigencia del extenso sumario instruido en la presente causa, incidentó la nulidad procesal de las actuaciones que hoy está cuestionando, ni tampoco lo hizo en la oportunidad indicada en el artículo 401 del texto de procedimiento penal, pese a que aduce a vulneración de derechos y garantías jurídicos- procesales penales, eran evidentes, sin embargo motiva el incidente mediante esta actuación procesal, con claros fines dilatorios. Efectivamente el incidente, es además extemporáneo por aplicación en primer lugar de la norma de reenvío del artículo 43 del Código de Procedimiento Penal al Libro Primero del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a los incidentes deben promoverse en el término de cinco días, artículos 82 y siguientes de dicho texto legal. Además, cabe citar las normas sobre nulidad del propio Código de Procedimiento Penal artículos 68 a 73. En efecto, el artículo 71 manifiesta que las partes podrán pedir el incidente de nulidad en el plazo señalado en el artículo 401 del código citado, esto es a propósito de la conclusión del sumario, en dicho plazo la parte nada expuso, desde ese punto de vista tal como dispone el artículo 71 bis del mismo código, cualquier nulidad que hubiere existido queda subsanada si las partes no las oponen en las oportunidades respectivas, como ha sucedido en la especie. Este es otro argumento para **rechazar** el incidente de nulidad.

E. Finalmente para rechazar la nulidad del estudio del escrito del abogado Oscar Álvarez, no se desprende cuáles serían los argumentos específicos del porque las declaraciones de los testigos que indican deben declararse nulas. Toda vez que no existe ninguna norma procesal en el actual Código de Procedimiento Penal, que sancione la nulidad por los argumentos que indica el articulista, esto es por haberse tomado las declaraciones en el sumario. Código que se encuentra actualmente vigente por el principio de gradualidad antes indicado para conocer las causas por violaciones a los derechos humanos ocurridas en el periodo de septiembre de 1973 hasta marzo de 1990. Del mismo modo si el abogado quiere imputar aspecto de constitucionalidad a las normas aludidas debe recurrir a la sede constitucional respectiva y no ante este Tribunal. En consecuencia este incidente es rechazado y así se dirá en lo resolutivo.

4°) Que este incidente de nulidad se dejó para la definitiva según consta a **fs. 140 (cuaderno separado)**. En síntesis en lo sustancial y pertinente: A **fs. 36 a fs. 128 (cuaderno separado)** el abogado **Maximiliano Murath Mansilla** en representación de Alberto Daniel Velásquez Barría, en el primer otrosí de su presentación solicita la nulidad de las declaraciones del proceso, por cuanto las actuaciones procesales de su representado no fueron ante el juez competente de conformidad a la ley, y quien verdaderamente instruía la causa, además porque ellas fueron realizadas sin la presencia del secretario del Tribunal y/o abogado defensor; afectando el debido proceso y el derecho a la defensa. Sumando que en dichas declaraciones no constan las preguntas que hizo el Tribunal a los deponentes. Reproduce parte del artículo 205 del Código de Procedimiento Penal y reitera que las actuaciones de su representado fueron sin la presencia de su abogado defensor, que tales actuaciones se infringiría los artículos 1, 5, 6, 7, 19 N°3, 19 N°26 de la Constitución Política de la República, y los artículos 1, 2, 8, 24 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica y los artículos 2, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Que la segunda causal de nulidad de las declaraciones de su representado y demás deponentes se ha realizado sin la presencia del secretario del Tribunal, sino que de un funcionario subalterno que tiene el cargo de actuario y sin la presencia de la defensa, lo que atentaría contra las normas de una investigación racional y justa, replicando la normativa que se estarían infringiendo, continua sus fundamentos en tal sentido que las actuaciones durante el proceso de interrogación pueden llevar a respuestas

guiadas hacia un contenido específico y al no estar en presencia de un defensor letrado se impediría la preparación de una defensa apropiada. Se apoya en actuaciones del Tribunal Constitucional y transcribe normativa constitucional, normativa de tratados internacional y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto. Funda un tercer vicio de nulidad por cuanto en las declaraciones no estaría transcrita las preguntas que el Tribunal ha hecho a los deponentes, lo que ha impedido a la defensa realizar un legítimo control de la forma como se realizaron dichas preguntas, solicitando la nulidad de todas las declaraciones del expediente en que no consten por escrito las preguntas que realizó el Tribunal. Que dichos vicios al producirse en la etapa del sumario, pueden pedirse su nulidad en los escritos principales del plenario, como sería el presente caso, según lo dispuesto en el artículo 71 del Código de Procedimiento Penal. Finalmente solicita la nulidad de todas aquellas actuaciones y declaraciones en que no exista constancia que se haya tomado por el juez en presencia del secretario del Tribunal, además de la nulidad de aquellas donde no obstante cumplir esos requisitos formales, no se haya permitido al abogado defensor estar presente y aquellas donde no conste por escrito las preguntas que hizo el Tribunal.

5°) A fs. 131 a fs. 134 vueltas (cuaderno separado) el abogado Ricardo Lavín Salazar, en representación del querellante de autos, evacua traslado solicitado el rechazo del incidente promovido por la defensa del acusado Alberto Daniel Velásquez Barría, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

A. Extemporaneidad de la incidencia: basa que la defensa no hace referencia alguna a las normas de nulidad procesal, indicando los artículos 68 y 73 del Código de Procedimiento Penal, transcribiendo el primero. Que la parte incidentita en ningún momento del extenso sumario, incidentó la nulidad procesal de las actuaciones que hoy está cuestionando, tampoco lo hizo en la oportunidad indicada en el artículo 401 del mismo texto legal. Que las normas citadas deben ser armonizadas con el artículo 83 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especie, debido a lo dispuesto en el artículo 68 del Código de Procedimiento Penal, reproduciendo los artículos 83 del Código de Procedimiento Civil y 71 bis del Código de Procedimiento Penal. Refiere que con fecha 21 de julio de 2021, a fs. 1.981 y siguiente se sometió a proceso a Alberto Daniel Velásquez Barría, como autor de delito de homicidio calificado de Rubén Armando Antimán Nahuelquín, el que le fue notificado con fecha 27 de julio de 2021, apelando verbalmente. Que durante el proceso de apelación del procesamiento ante la Corte de Apelaciones de Temuco, el abogado defensor solicitó la suspensión alegando entorpecimiento, ya que no

constaba con las copias del expediente, concediéndole dicha suspensión. Que a fs. 2.071 se confirma el procesamiento por la Corte de Apelaciones de Temuco. Que con fecha 24 de marzo solicita la libertad provisional a fs. 2.165 y siguientes. Que a fs. 2.261 la defensa acompaña documento, por lo que durante la investigación, solicitó copias del expediente, las que le fueron otorgadas. En consecuencia, tuvo acceso y conocimiento de las piezas del sumario, para hacer efectivo el derecho a defensa o interponer recursos pertinentes. Quedando demostrado que el Tribunal no ha prohibido la defensa técnica del acusado Alberto Velásquez Barría y habiendo transcurrido el plazo señalado por la ley desde el cual la contraria conoció de los supuestos vicios que refiere lo planteado es extemporáneo. Además estimando que las actuaciones procedimentales que ha realizado la defensa con posterioridad a la verificación de los actos procesales que hoy plantea, existe una aceptación de los efectos de los referidos actos, y por tanto se han subsanado cualquier vicio. Por lo que la incidencia tendría fines dilatorios.

B. Estándar normativo internacional de Derechos Humanos: Soslaya que nuestro país al haber ratificado diversos instrumentos sobre protección a los Derechos Humanos ha adquirido una serie de obligaciones internacionales que propenden al resguardo y ejercicio de los Derechos Humanos, importando en este caso la obligación de investigar y juzgar, garantizando el acceso a la justicia en un plazo razonable. Citando las convenciones internacionales y jurisprudencia al respecto.

C. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional: invoca que la defensa cita algunos fallos del Tribunal Constitucional, sobre las garantías que consagra la Constitución Política respecto al debido proceso, publicidad de los actos jurisdiccionales, derecho a la acción, oportuno conocimiento de ella por la parte contraria entre otros principios, pero su presentación no se entiende como se vulnerarían dichos derecho en el caso en concreto. Cita fallos del Tribunal Constitucional.

D. Consideraciones finales: arguye el querellante que el Tribunal utiliza un estándar normativo en derechos humanos como el control de convencionalidad, es decir, se utiliza todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación como el proceso judicial, otorgando garantías de seguridad a todas las partes del proceso. Que en este caso se analiza de forma seria e imparcial el contexto el cual ocurrieron los hechos como las posibles participaciones de los agentes, realizando un examen acucioso e integral con la prueba que consta en el proceso, no solo las declaraciones del acusado como refiere la defensa. Reiterando que no se ha

impedido el derecho a la defensa técnica, ni se ha producido una afectación jurídico-penal o jurídico-procesal penal o de algún derecho humano al acusado. Por lo que la petición de nulidad de las declaraciones del acusado Alberto Daniel Velásquez Barría, como de aquellas que no existe transcripción de las preguntas deben ser rechazadas.

6°) Que para un mejor fundamento del incidente promovido por el abogado del acusado **Alberto Daniel Velásquez Barría**, el Tribunal razona que del estudio de los antecedentes, el mérito del proceso y escritos de las partes el Tribunal pondera lo siguiente:

A. De inicio, se reitera el mismo argumento dado con anterioridad para el otro incidente, en cuanto estos incidentes de nulidad de manera semejante han sido presentado en las siguientes causas: rol 113.089 del ingreso del Juzgado del Crimen de Temuco, seguida para conocer los delitos de apremios ilegítimos y homicidios calificados de Florentino Alberto Molina Ruiz y otros de fecha 15 de septiembre de 2023, donde fue rechazada tal petición; en causa rol 63.556 del ingreso del Juzgado de Letras de Angol, para conocer el delito de apremios ilegítimos con resultado de muerte de Óscar Gutiérrez Gutiérrez, donde dicho incidente fue rechazado y la sentencia de primera instancia confirmada por la ltma. Corte de Apelaciones de Temuco con fecha 25 de febrero de 2022; en causa rol 63.534 del ingreso del Juzgado de Letras de Angol, seguida para conocer los delitos de homicidios calificados de Luis Cotal Álvarez y Gustavo Rioseco Montoya de fecha 23 de octubre de 2023.

B. Que respecto del acusado Alberto Daniel Velásquez Barría, desde la resolución de auto de procesamiento de fecha 12 de julio de 2021 de fs. 1.981 a fs. 2.016 (Tomo VI) y notificado personalmente el 27 de julio de 2021 fs. 2.190 (Tomo VI) y advertido de los derechos que le confiere la ley apeló del auto de procesamiento. Desde esa fecha hasta la dictación del Auto Acusatorio de fecha 30 de diciembre de 2021 de fs. 2.096 a fs. 2.131(Tomo VI), transcurrieron cinco meses y quince días, durante ese periodo el abogado del acusado o quien lo representaba en su oportunidad, tuvo conocimiento del sumario y de los antecedentes, así consta a fs. 2.054 en que el abogado Fernando Cartes Sepúlveda en representación de Alberto Velásquez Barría solicita ante la Corte de Apelaciones de Temuco la suspensión de la vista de la causa por no haber obtenido las copias del expediente que se le otorgaron en primera instancia, por estar la causa elevada, cuyas copias le fueron otorgadas a fs. 2.058 y las que recibió conforme a fs. 2.059 (Tomo VI). Como se aprecia entonces y lo reitera el

abogado Ricardo Lavín Salazar, la defensa tuvo tiempo suficiente para realizar su defensa técnica e interponer todos los recursos procesales que consagra el ordenamiento jurídico para impugnar las resoluciones del Tribunal. Por estos primeros fundamentos debe rechazarse el incidente de nulidad alegado por la defensa del acusado Alberto Velásquez Barría.

C. También cabe hacer presente, que es nuestra propia Constitución Política, a propósito de la reforma procesal penal que estableció en el artículo 77 inciso final que: “La ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales, así como las leyes procesales que regulen un sistema de enjuiciamiento, podrán fijar fechas diferentes para su entrada en vigencia en las diversas regiones del territorio nacional. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo para la entrada en vigor de dichas leyes en todo el país no podrá ser superior a cuatro años”. Refiriendo con ello al principio de gradualidad, a fin que la reforma procesal penal se fuera incorporando gradualmente en las diferentes regiones del país. Lo anterior tal como lo cita el querellante es concordante con el título final del Código Procesal Penal que refiere a la entrada en vigencia del código en cuanto dispone en el artículo 483 que: “Las disposiciones de este Código sólo se aplicarán a los hechos acaecidos con posterioridad a su entrada en vigencia”; el artículo 484 prescribe: “Entrada en vigencia respecto de hechos acaecidos en el territorio nacional. Este Código comenzará a regir, para las distintas Regiones del país, al término de los plazos que establece el artículo 4º transitorio de la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público. En consecuencia, regirá para las regiones de Coquimbo y de la Araucanía, desde el 16 de diciembre de 2000(...)”. Por tal razón, las normas del Código Procesal Penal se aplican a hechos acaecidos con posteridad al 16 de diciembre del 2000, por estos nuevos argumentos debe ser **rechazado** el incidente de nulidad.

D. En cuanto a normas internacionales y citas de convenciones de Derechos Humanos, como ya se dijo, en las causa de Oscar Gutiérrez Gutiérrez la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha tenido la oportunidad de revisar las normas del Código de Procedimiento Penal y esto lo hizo en la causa Almonacid Arellano y otros versus Chile de fecha 26 de septiembre de 2006, en su párrafo 124 señaló: “La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que los obliga a velar porque los

efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efecto jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de control, de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, interprete última de la Convención Americana”. Lo valioso que se debe destacar es que esta institución denominada **control de convencionalidad** puede ser definida, en términos simples, como el mecanismo que utiliza la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tanto en sede contenciosa como consultiva para determinar la compatibilidad o no del derecho interno o los actos de los agentes de un Estado, con las disposiciones de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Asimismo, como el ejercicio que realizan los jueces domésticos para realizar el mismo cotejo entre las normas internas, las que dispone la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana (García, Gonzalo (2014): “Preguntas esenciales sobre el control de convencionalidad difuso aplicables a Chile”, en: Nogueira, Humberto (coord.) La protección de los Derechos Humanos y fundamentales de acuerdo a la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Santiago de Chile, Librotecnia. pp. 356-357). Que para aplicar entonces el control de convencionalidad hay que observar por supuesto la Convención Americana- ya citada- en especial los artículos 1.1 y 2. Ello por cuanto los Estados tienen la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna (1.1). Por su lado, su artículo 2 nos expresa, que si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Para mayor ilustración sobre esta materia pasamos a resumir lo que sucedió con posterioridad al fallo de la Corte Interamericana respecto del caso Almonacid Arrellano y otros versus Chile citado. La Excma. Corte Suprema con el objeto de dar aplicación a lo preceptuado en el artículo 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en definitiva, proseguir con la investigación del sumario criminal seguido en el Primer Juzgado del Crimen de Rancagua, relativo

al homicidio de Luis Almonacid Arellano, ordena el desarchivo de la causa para continuar con su tramitación, dejando sin efecto la resolución que **sobreseyó total y definitivamente** a los ex funcionarios de Carabineros involucrados, se reabre el sumario, culminando esta etapa procesal el día 18 de agosto de 2011, con la dictación de la sentencia definitiva de primera instancia dictada por el Ministro en Visita Extraordinaria señor Carlos Manuel Moreno Vega por el delito de homicidio en la persona de Luis Almonacid Arellano. Luego la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua con fecha 14 de enero de 2013, confirma la sentencia de Primera instancia, razonando que tal como lo dispuso la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, citada, el Decreto Ley sobre amnistía que se aplicó en un primer momento en la investigación por el homicidio del señor Almonacid ha violado las disposiciones de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, delito que es además de lesa humanidad e impide aplicar en su favor las disposiciones de derecho interno relativas a la prescripción. Finalmente en el fallo de fecha 29 de julio de 2013 la Excelentísima Corte Suprema rechaza los recursos de casación en el fondo presentados, declarando que la sentencia no es nula. Como puede advertirse el Estado de Chile a través del Poder Judicial cumplió lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dejando sin efecto los sobreseimientos dictados por la justicia militar, y dictando una nueva sentencia, aplicando las normas del Código de Procedimiento Penal. En consecuencia no es efectivo lo señalado por el incidentista en cuanto a la objeción a las diferentes normas del Código de Procedimiento Penal. Lo que realmente de fondo rechaza la Corte Interamericana es que los actos como los del señor Almonacid homicidio queden en la **impunidad** y no se haga investigación alguna en los términos que exigen los estándares internacionales de derechos humanos. Este es otro argumento para **rechazar** el incidente de nulidad.

E. Desde otro punto de vista, este Tribunal comparte los argumentos dados por el querellante Ricardo Lavín Salazar, en cuanto expresa además que, la nulidad procesal se encuentra regulada en los artículos 68 y 73 del Código de Enjuiciamiento Criminal, y demás normas conexas. Aduciendo a la oportunidad en que la parte afectada debe promover citando el artículo 71 del Código de Procedimiento Penal. Que la parte incidentista, en ningún momento, durante la vigencia del extenso sumario instruido en la presente causa, incidentó la nulidad procesal de las actuaciones que hoy está cuestionando, ni tampoco lo hizo en la oportunidad indicada en el artículo 401 del texto de procedimiento penal, pese a que aduce a vulneración de derechos y garantías jurídicos- procesales penales, eran

evidentes, sin embargo motiva el incidente mediante esta actuación procesal, con claros fines dilatorios. Efectivamente el incidente, es además extemporáneo por aplicación en primer lugar de la norma de reenvío del artículo 43 del Código de Procedimiento Penal al Libro Primero del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a los incidentes deben promoverse en el término de cinco días, artículos 82 y siguientes de dicho texto legal. Además, cabe citar las normas sobre nulidad del propio Código de Procedimiento Penal artículos 68 a 73. En efecto, el artículo 71 manifiesta que las partes podrán pedir el incidente de nulidad en el plazo señalado en el artículo 401 del código citado, esto es a propósito de la conclusión del sumario, en dicho plazo la parte nada expuso, desde ese punto de vista tal como dispone el artículo 71 bis del mismo código, cualquier nulidad que hubiere existido queda subsanada si las partes no las oponen en las oportunidades respectivas, como ha sucedido en la especie. Este es otro argumento para **rechazar** el incidente de nulidad.

F. Finalmente, para rechazar la nulidad del extenso escrito del articulista, no obstante mencionar reiteradas veces al juez y al secretario, realiza alegaciones de carácter general, no precisando por ejemplo: a que ministro se refiere, titular, subrogante, cuales son las fechas y horas, de que formas dichas actuaciones (si efectivamente fueran esas) afectaron su defensa técnica. Solo a modo de ilustración, cabe hacer presente, a diferencia del actual Código Procesal Penal, las partes en este procedimiento pueden apelar de todas las resoluciones que dicte el Tribunal. No solamente eso, sino que, pueden recurrir además al Tribunal Constitucional para hacer valer los derechos respectivos. Haciendo presente, tal como lo expone el querellante, que no existió durante el sumario ningún impedimento para que el articulista hiciera uso de su defensa técnica. En todo caso, todas las actuaciones del Tribunal de primera instancia fueron y han sido revisadas reiteradas veces por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, en la revisión del auto de procesamiento, en la revisión de las medidas cautelares, entre otras actuaciones. En consecuencia, solo cabe **rechazar** este incidente de nulidad y así se dirá en lo resolutivo.

CONSIDERANDO:

V. EN CUANTO A LA ACCIÓN PENAL

7°) Que a **fs. 2.096 a fs. 2.131 (Tomo VI)**, con fecha 30 de diciembre de 2021, se dictó auto acusatorio en contra de **Víctor Herald Cuevas Seguel** y **Alberto Daniel Velásquez Barría** como **autores** del delito de homicidio calificado,

en su carácter de lesa humanidad, en la persona de Rubén Armando Antimán Nahuelquín, perpetrado en la ciudad de Puerto Aysén, en el mes de diciembre de 1985.

8°) Que con el objeto de establecer en autos la existencia de los ilícitos penales señalados, se han reunido durante el curso de la investigación los siguientes elementos de convicción, además de los ya enunciados que se encuentran en el auto acusatorio de fs. 2.096 a fs. 2.131 (que corren de fs. **1** a fs. **2.131**), como las querellas deducidas antes individualizadas. Sin perjuicio, del análisis de la pruebas rendidas durante el plenario.

A. DECLARACIONES:

- | | |
|---|--|
| 1. Doris Nelfa Antimán Jara. | 7. Jorge Waldemar Paillan Agüero. |
| 2. Selfa Haidée Antimán Nahuelquín. | 8. Eligio Segundo Edén Antimán Nahuelquín. |
| 3. Milton Manuel Zúñiga Sandoval. | 9. José Vera Barría. |
| 4. Silvio Del Carmen Varela Orias. | 10. Segundo Armando Catelicán Cárdenas. |
| 5. Osvaldo Del Carmen Mercegue Andrade. | 11. Miguel Ángel Antimán Jara |
| 6. Jaime Daniel Díaz Castro. | 12. Julia Borquez Antimán. |

Los testimonios que a continuación se detallan corresponden a una síntesis de los aspectos sustanciales y pertinentes en relación a los hechos investigados, que los testigos expresaron:

A.1. Doris Nelfa Antimán Jara, (18 años de edad a la época de los hechos). Quien declaró a fs. 107 a fs. 108 (Tomo I); de fs. 134 a fs. 135 (Tomo I); de fs. 166 a fs. 167 (Tomo I); de fs. 169 (Tomo I); de fs. 1.091 a fs. 1.092 (Tomo III) y de fs. 1.785 a fs. 1.786 (Tomo V).

En declaración extrajudicial de fecha 05 de diciembre de 2010, rolante **de fs. 107 a fs. 108 (Tomo I)** (cuyas copias constan a fs. 134 a fs. 135, de fs. 166 a fs. 167 Tomo I) arguye que en el año 1986 se encontraba viviendo junto a su grupo familiar, entre ellos su padre de nombre Rubén Armando Antimán Nahuelquín. Relatando que en el mes de enero del año 1986, no recuerda fecha exacta, se encontraba en su casa junto a su padre Rubén y su abuela de nombre Vitalia Nahuelquín (fallecida), instante en que se produce una discusión entre su padre y ella, lo cual lleva a que su abuela tropezara y cayera al suelo, provocándole una lesión en su brazo, respecto de lo cual trata de responsabilizar a su padre, para posteriormente dirigirse a carabineros de la ciudad de Aysén, donde les comenta lo sucedido, iniciándose una intensa búsqueda de su padre por parte de carabineros, sin que en ese momento lo ubicasen, puesto que al momento en que se dieron los hechos su padre se retiró del lugar, previendo que

gracias a los dichos de su abuela, pudiesen ubicarlo y detenerlo injustamente. Al día siguiente, en horas de la tarde, su padre Rubén regresa a la casa con todo su cuerpo golpeado, manifestando dolores generalizados producto de una fuerte golpiza que recibió, ante lo cual le pregunta quiénes fueron los responsables de dicha agresión, manifestándole que habían sido los Carabineros de Puerto Aysén, indicando que recordaba haber visto a uno de sus agresores y que conocía con el apodo del “Zorro Velásquez”. Por lo anterior, y ante el grave estado de su padre, decidió llevarlo hasta el hospital de la ciudad, donde al ser recibido por personal médico, y ante la gravedad de su situación, lo trasladaron hasta la ciudad de Coyhaique para recibir una mejor atención médica. Posterior a esos hechos, nunca más vio a su padre. No obstante todo lo anterior, y al transcurrir un par de semanas, y gracias a una hermana de su padre, Selfa Antimán, quien también acompañó el grave estado de él, le indicó que su padre había fallecido en el Hospital de Coyhaique producto de todas las lesiones sufridas e inferidas por personal de carabineros cuando lo detuvieron producto del problema que había tenido con su abuela. Finalmente agrega que no tuvo conocimiento alguno de que su padre estuviese ligado a partido político o movimiento alguno contrario al régimen de gobierno de la época.

En declaración judicial de fecha 24 de mayo de 2011, rolante a **fs. 169 (Tomo I)**, ratifica su declaración extrajudicial y agrega que para el año 1986 tenía 18 años de edad. En el mes de enero del año 1986, en horas de la tarde se encontraba en su domicilio de calle Serrano Montaner N° 745 de la ciudad de Aysén junto a su padre Rubén Armando Antimán Nahuelquín, a su abuela paterna Vitalia Nahuelquín Reinaldo (fallecida). Afirma que esa tarde su padre tuvo una discusión con su abuela paterna, porque su padre estaba un poco mareado; a su abuela no le gustaba que su papá “tomara”; le llamó la atención, le pegó con un bastón, discutieron y su abuela cayó al suelo sentada; se enojó con su padre diciéndole que por culpa de él se cayó; le indicó que iba a llamar a carabineros para decirle que la hacía enojar y por eso se golpeó; su padre salió de la casa para evitar esos conflictos; no regresó hasta el día siguiente. Llegó quejándose de dolor, se tomaba el abdomen decía que tenía mucho dolor y después de consultarle qué le pasó, el señaló “mija me pegaron los pacos”. Recordando entre los carabineros que lo agredieron “el Zorro Velásquez” y otros. A raíz de lo mal que vio a su padre, lo llevó al hospital de Aysén; en ese centro le indicaron primero que era una “pulmonía”, y como era grave lo trasladaron al Hospital de Coyhaique. A ese centro no pudo ir a ver a su padre por lo trasmano del lugar; no existían los

medios para traslado y, además, porque tenía a sus dos hijos pequeños. En ese hospital su padre estuvo grave como dos semanas, hasta que falleció; a ella no la dejaron ir, debido a que era muy joven y, por lo tanto, no vio más a su padre desde la fecha de la golpiza que había recibido de carabineros, según así él le contó.

En declaración extrajudicial de fecha 28 de mayo de 2013, rolante de **fs. 1.091 a fs. 1.092 (Tomo III)**, recuerda que para la fecha de ocurridos los hechos, a principios del mes de febrero del año 1986, vivía junto a su grupo familiar compuesto por su abuela Vitalia Nahuelquín (fallecida), Rubén Armando Antimán Nahuelquín, Moisés Leiva Rodríguez su ex marido, sus hijos Moisés y Hans, en el domicilio ubicado en calle Serrano Montaner, no recuerda su numeración. En lo pertinente reitera que su padre Rubén Armando era un hombre de trabajo, pero al momento de ocurridos los hechos, estaba cesante; asimismo, recuerda que bebía alcohol en forma esporádica y siempre llegaba a la casa. Que un día en horas de la tarde, su padre llegó a la casa en estado etílico, momento en el cual comenzó a jugar con su nieto Hans, instante en que llega su abuela Vitalia y lo golpea con su batón en la cabeza, llamándole la atención del por qué estaba ahí; su padre se paró en forma instantánea y su abuela se fue hacia atrás, cayendo al suelo, interpretando que su padre la iba a golpear, razón por la cual su abuela se dirigió a carabineros a denunciarlo, hecho que fue así, ya que, su abuela al llegar le dijo que efectivamente había denunciado a su padre. Pasado de unas horas llegaron a su casa los funcionarios de carabineros de la unidad de Puerto Aysén; recuerda que les abrió la puerta y comenzaron a buscar a su padre, pero no lo encontraron; era unos cinco uniformados, dentro de los cuales puede mencionar al hijo de un vecino que era de apellido Soto, y manejaba el vehículo policial en esa oportunidad. Que el funcionario que se encontraba a cargo era de tez blanca, pelo claro y ojos de color azul; posteriormente se retiraron. Al día siguiente, su padre llegó en horas de la tarde, quejándose de mucho dolor, tomándose con sus manos su estómago, indicando que le dolía todo el cuerpo; ante esto lo asistió y le quitó la camisa y le revisó el cuerpo, no apreciando marcas de golpe en su cuerpo, excepto de sus brazos, que tenía un surco marcado. Le dio agua y aspirinas para calmar el dolor, pero no fue suficiente y tuvo que llamar la ambulancia y se lo llevaron de urgencia; es en ese momento que al preguntarle qué le había pasado, comentó que “los pacos le habían pegado”, dentro de los cuales estaba “El Chotelo” (Soto chofer), el Cuevas y el “Zorro Velásquez”, que lo habían ido a tirar, pero no comentó en qué lugar lo subieron y menos donde lo golpearon, para luego dejarlo tirado. Consecuentemente, llegó la ambulancia y lo

trasladaron al Hospital de Puerto Aysén. Al llegar al centro médico, su padre fue atendido por un doctor de apellido Silva, quién antes de examinarlo le preguntó qué la había pasado, ante lo cual le indicó que lo habían golpeado los carabineros. Su padre ingresó a la urgencia y le tomó la mano, ese fue el último momento que lo vio con vida, ya que al día siguiente, al parecer, fue trasladado al Hospital de Coyhaique, lugar donde posteriormente, fallece. Al día siguiente concurrió hasta el hospital a ver a su padre entrevistándose con el doctor Silva, quién le indicó que se padre había sido trasladado al Hospital de Coyhaique, producto de una neumonía. Posteriormente a la muerte de su padre en la ciudad de Coyhaique, se enteró por intermedio de su tía Selfa Antimán Nahuelquín, que había realizado una denuncia contra carabineros en la Fiscalía Militar. Por esa razón un momento llegó carabineros a su casa a tomarle declaración a su abuela Vitalia; ella fue citada a la Prefectura a relatar lo ocurrido, instante en el cual la obligaron a firmar un testimonio que los exculpaba de toda responsabilidad de lo ocurrido con su padre. No tiene conocimiento qué pasó con esa investigación que llevaba la Fiscalía Militar, ya que nunca más supo de ella y tampoco la notificaron de alguna resolución. Que con el pasar del tiempo el doctor y los carabineros involucrados en la muerte de su padre salieron de la zona, nunca más los volvió a ver. Que puede reconocer fotográficamente al carabinero que concurrió en primera instancia a buscar a su padre, y como antes indicó, era de tez blanca, pelo claro y ojos de color azul, además, era quien iba a cargo de la patrulla policial.

En declaración judicial de fecha 13 de noviembre de 2018, rolante de **fs. 1.785 a fs. 1.786 (Tomo V)**, ratifica la declaración de fs. 1.091 a fs. 1.092. Se le exhiben copias de las fotografías de carabineros, que rola a fs. 1.746 de autos. El Tribunal le solicita reconocer el rostro de los carabineros que fueron a su casa para detener a su padre, carabinero de la fotografía N° 1 (Héctor Soto Soto) declara: No. No es clara la imagen; carabinero de la fotografía N° 2 (Héctor Soto) dice: Sí. En realidad no. “Muy chiquitita la foto”; carabinero de la fotografía N° 3 (Víctor Gatica Pizarro) señala: No, tampoco; carabinero de la fotografía N° 4 (Víctor Gatica Pizarro), manifiesta: El cuatro “sí, este es el que le contaba que era de ojos claros, nunca se la ha olvidado esa cara”; carabinero de la fotografía N° 5 (Max Fabres Fabres), dice: No; carabinero de la fotografía N° 6 (Max Fabres Fabres), reitera: No; carabinero de la fotografía N° 7 (Waldemar Muñoz Arias), dice: No; carabinero de la fotografía N° 8 (Waldemar Muñoz Arias), replica que no. La declarante manifiesta que le cuesta recordar, porque no sabe si las fotos son de ahora o de antes. Pero como ya declaró, respecto del señor de ojos claros, la

cara siempre se le quedó. Que cuando llegaron era de noche y revisaron toda la casa, ella estaba nerviosa y con dos hijos pequeños, recordando al señor de ojos claros y los nombres que le dijo su padre, que eran conocidos en Aysén. El Tribunal le pregunta si los carabineros que fueron a su casa y los que le mencionó su padre son los mismos, a lo que la deponente contesta: “Sí, porque fue la misma guardia de esa noche a buscarlo a la casa”. El Tribunal le pregunta si una vez que detienen a su padre lo alcanzan a llevar a la comisaria, responde no tener conocimiento de eso, lo único que recuerda es cuando él llegó a la casa con las manos en el estómago arrollado y le comento los nombres de quienes lo golpearon, que eran “El Zorro Velásquez”, quién era muy conocido porque era Aysén, Cuevas y Soto. Que el chofer de la ambulancia, también le dijo que “Chotelo”, era el chofer del furgón policial que andaba ese día.

A.2. Selfa Haidée Antimán Nahuelquín, (42 años a la época de los hechos). Quien declaró a fs. 136 a fs. 138 (Tomo I); de fs. 248 a fs. 250 (Tomo I) y de fs. 252 (Tomo I).

En declaración extrajudicial de fecha 24 de marzo de 2011, rolante de **fs. 136 a fs. 138 (Tomo I)**, (cuya copias consta de fs. 248 a fs. 250 Tomo I), refiere que es hermana de Rubén Armando Antimán Nahuelquín. Que se enteró que su hermano salió de su casa el 25 de diciembre de 1985, día en el cual visitó a su hija Julia Bórquez Antimán, y nunca más regresó a su casa. Que aproximadamente los primeros días del mes de febrero del año 1986, el capellán del Hospital de Coyhaique, padre Doménico Sartori, conocido de su familia, fue a su domicilio ubicado en calle Sargento Aldea en la ciudad de Puerto Aysén, y le avisó que Rubén estaba hospitalizado grave en la ciudad de Coyhaique. Por tal motivo el mismo día viajó a dicha ciudad en compañía del padre Doménico, concurriendo al hospital. En el lugar le solicitó al entonces director del centro asistencial, de quién no recuerda su nombre, que le dejara ver a Rubén, lo que en un comienzo fue negado por esa persona, indicando que su hermano estaba muy grave y se moriría. Que el Director del Hospital le señaló que a Rubén lo habían golpeado cruelmente y que lo habían torturado, sin mencionar quién lo había hecho. Ante su insistencia y la petición del padre Sartori, les autorizó a ambos a entrar a una pieza donde estaba su hermano solo. Recuerda que estaba semi sentado, conectado a una serie de máquinas y con tapones en su nariz y oídos. Lo que le llamó la atención es que estaba lúcido, indicándolo al oído que los autores de su golpiza fueron los carabineros de Puerto Aysén, recordando claramente que le señaló a un carabinero de apellido Cuevas, a quién conocían en Puerto Aysén,

y tiene la impresión que también le señaló a otro que apodaban “El Zorro”. Que vio el cuerpo de su hermano y le sorprendió que no tuviera marcas que llamaran la atención, recordando las palabras del director del hospital, quien señaló que una vez fallecido su hermano, aparecerían sus hematomas, por el hecho que fue torturado. Luego de su visita, se enteró que la jueza Sara Meersohn de Coyhaique le había tomado una declaración a Rubén respecto a los hechos y que esa la habría derivado a la Fiscalía Militar de Coyhaique. Que realizó una serie de trámites para averiguar que le había pasado a su hermano; recuerda que fue a la Fiscalía Militar, donde no le entregaron información; a la radio Coyhaique, donde tampoco sabían antecedentes al respecto, entre otros lugares, lo que derivó en que personas de civil la siguieran; la citaron a carabineros y Policía de Investigaciones de Puerto Aysén. El día 8 de febrero de 1986 falleció su hermano en el hospital de Coyhaique, pero le entregaron el cadáver varios días después, ya que había una orden de que el cuerpo sea trasladado directamente desde la morgue al cementerio de Coyhaique. No obstante, el obispo de la ciudad logró que al cuerpo de su hermano se le hiciera una misa en la iglesia de Coyhaique, y que de ese lugar fuera trasladado al cementerio. Que cuando el cadáver de Rubén estaba en la morgue, entró a escondidas a ese lugar en compañía de su madrina Matilde Muñoz y vieron el cuerpo de Rubén, lo que les impactó, por cuanto estaba completamente morado. Que todos los trámites de su muerte los realizó ella en compañía de sus primos José Nahuelquín Huala y Rossi Humberto Cáceres Nahuelquín, ambos fallecidos. Que por comentarios de la gente de Puerto Aysén, señalaron que a Rubén lo habrían detenido carabineros y que lo habían arrojado a orillas del río Aguas Muertas. Desconoce si su madre denunció a Rubén. Le llama la atención que a su hermano lo atendieran en el Hospital de Puerto Aysén y posteriormente trasladado al Hospital de Coyhaique como NN, siendo que a Rubén y su familia lo conocían en la ciudad, por cuanto eran deportistas y dirigentes sociales. Su hermano Rubén estuvo un tiempo ligado al Partido Socialista, cuando fue funcionario de Correos de Chile, pero era más conocido como futbolista, ya que le decían el “Pelé Antimán”. Que una vez que falleció su hermano, se fue a San Felipe, pero su marido Rigoberto José Bórquez Proschle, quedó en la ciudad de Puerto Aysén, y fue “invitado” por el entonces prefecto de la Prefectura de Aysén, para conocer su opinión respecto de los hechos ocurridos, ante lo cual su marido le manifestó su aprehensiones por el mal procedimiento adoptado por el personal de carabineros y del hospital. Pasados unos días, recibió otra invitación, esta vez de un capitán de apellido Soto de la segunda

Comisaría de Puerto Aysén, quién lo interrogó en relación a lo mismo, por lo que su marido se convenció que solo buscaban alternativas para encubrir el hecho. Su impresión de los hechos es que los que lo provocaron, pensaban que su hermano estaba muerto, lo que no fue así.

En declaración judicial de fecha 10 de agosto de 2011, rolante a **fs. 252 (Tomo I)**, ratifica todo lo que expuso agregando que ha pasado mucho tiempo y todo el sufrimiento que padeció en su oportunidad lo ha logrado pasar por sí misma, sin ayuda de nadie, de ninguna organización ni del Estado, por lo que no desea agregar nada más, además, que por el tiempo transcurrido, lo hecho está, nadie hizo nada y esto va a seguir igual, porque es la justicia de su país.

A.3. Milton Manuel Zúñiga Sandoval, (25 años a la época de los hechos). Quien declaró a fs. 554 a fs. 555 (Tomo II); de fs. 689 a fs. 690 (Tomo II; de fs. 696 (Tomo II) y de fs. 1.540 a fs. 1.542 (Tomo IV).

En declaración extrajudicial de fecha 18 de noviembre de 2012, rolante de **fs. 554 a fs. 555 (Tomo II)** (cuyas copias constan de fs. 689 a fs. 690 Tomo II), refiere en lo pertinente que ignora todo tipo de antecedentes sobre la muerte de Rubén Armando Antimán Nahuelquín. En el caso de los carabineros Alberto Velásquez Barría y Víctor Cuevas Seguel, los conoció cuando prestó servicios en la segunda Comisaría de Carabineros Puerto Aysén, pero nunca tuvo conocimiento que ellos habrían estado involucrados en los hechos que se le pregunta.

En declaración judicial de fecha 16 de enero de 2003, rolante de **fs. 696 (Tomo II)**, ratifica su declaración extrajudicial señalando que el año 1982 ingresó al grupo de instrucción de Punta Arenas y en el año 1983 egresó y fue destinado a Puerto Aysén, segunda Comisaría de Carabineros, en la cual trabajó alrededor de 2 a 3 años, no recuerda fecha exacta, pero si recuerda que durante el año 1985, pero lo destinaron al lugar denominado La Junta, jurisdicción de Aysén. En lo atinente dice que respecto a la muerte de Rubén Armando Antimán Nahuelquín, no lo conoció ni recuerda haber escuchado su nombre. Indica que conoció a los funcionarios de carabineros Alberto Velásquez Barría y Víctor Cuevas Seguel, puesto que ellos trabajaban en la segunda Comisaría de Carabineros de Puerto Aysén, a quiénes veía hacer servicio de turno; eran funcionarios antiguos, pero desconoce si hicieron comisiones de servicio civil, ya que en lo personal no recuerda haberlos visto en esa forma, pero si debe aclarar que ellos tenían sus días libres y no le consta que pudieran trabajar en investigaciones de otro tipo. Tampoco escuchó o tomó conocimiento por terceros

que dichos funcionarios estuvieran involucrados en casos de derechos humanos y específicamente en la muerte de Antimán Nahuelquín.

En declaración judicial de fecha 29 de junio de 2017, rolante de **fs. 1.540 a fs. 1.542 (Tomo IV)**, en lo pertinente dice que para la fecha de los hechos se encontraba trabajando en la segunda Comisaría de Puerto Aysén, ostentando el grado de carabinero, y cumplía servicios de patrullajes en la población como chofer de servicios. Que dependían de la Prefectura de Carabineros N° 27 de Puerto Aysén, no tiene claridad de la orgánica de la segunda Comisaría de Puerto Aysén, pero al parecer era el mayor Gatica Pizarro. De los oficiales recuerda, a los capitanes Mediavilla y Rivadeneira, a los tenientes de apellidos Rojas Lazo, San Martín, dentro de la planta de suboficiales solo puede recordar al sargento Díaz (encargado de sala de armas), sargento primero Muñoz (enfermero), sargento primero Araya Villouta, Sargento Youssef (ranchero), suboficial Gatica y otros que no recuerda. Los servicios de patrullajes en la población se efectuaban de infantería, pese a que se disponía del furgón y de un jeep, pero solo se ocupaban para traslado y relevo de personal, como también para traslado de detenidos en los procedimientos, haciendo presente que para el turno se entregaban como cinco litros de bencina para los vehículos. Que era común que el patrullaje lo conformaran cuatro funcionarios, dos de ellos de punto fijo en la gobernación y prefectura, y los otros dos funcionarios quedaban patrullando de infante y al servicio de la población. En algunos casos quedaba un funcionario en una garita ubicada en la calle Pedro Aguirre Cerda, de la Población del mismo nombre. Agrega que eran notificados vía radial de la comisaría por el personal de guardia, para concurrir a los lugares donde adoptar los procedimientos. La implementación que utilizaban para los servicios correspondía a vestimenta de uniforme, utilizaban un terciado para colocar el armamento (revolver), bastón de servicio (madera) y esposas de seguridad. Que nunca utilizó algún elemento que no estuviese dentro de la normativa institucional. No obstante, sabía de la existencia de un elemento denominado “churro”, el que presumiblemente era utilizado para reducir o contener cuando los detenidos se ponían agresivos hacia el personal, provocaba lesiones a las personas. Que en su condición de conductor de vehículos policiales permanecía siempre en el carro policial de la parte posterior de la unidad o en un punto fijo de la población. Que este elemento denominado “churro”, es probable que determinados carabineros lo haya tenido en sus casilleros para el desarrollo de los servicios, situación que era irregular, no siendo testigo de que alguien lo usara, pero si se enteró por comentarios de sus pares. Respecto documento que

se le exhibe, el que fue emanado de la Prefectura Nro. 27 Aysén, Oficio Nro. 840, de fecha 15 de julio del año 1986, que va direccionado desde la Segunda Comisaría de Puerto Aysén al Juzgado del Crimen de Puerto Aysén, que da cuenta de los servicios de la Unidad del día 28 al 29 de diciembre del año 1985, dentro de los cuales aparece su nombre y grado, específicamente el día 29 de diciembre “chofer de servicio (desde las 08:00 a las 20:00 horas), señala que efectivamente los servicios eran confeccionados de esa forma y el día anterior, los cuales eran puestos en una tabla de servicio. Añade que efectivamente utilizaban la ambulancia del servicio de salud, pero para hechos puntuales, tales como accidentes. Que en la segunda Comisaría de Puerto Aysén existían dependencias destinadas como dormitorio para el personal soltero, encontrándose varios funcionarios viviendo en el cuartel policial, entre ellos los carabineros Mercado, Gutiérrez, Monsalve, dos funcionarios de apellidos Toledo y él. Dice no conocer a Rubén Armando Antimán Nahuelquín, e ignora las circunstancias que rodearon su detención y posterior deceso. Que conforme a los servicios dispuestos los días 28 al 29 de diciembre del año 1985, dentro de los cuales aparece específicamente el día 29 de diciembre “chofer de servicio” (desde las 08:00 a las 20:00 horas), manifiesta que por el tiempo, no recuerda si se practicó la detención de una persona que haya sido denunciada por lesiones o que se haya enterado que el resto del personal de servicio haya adoptado un procedimiento de esa naturaleza o de cualquier índole. No es de su conocimiento que el personal saliente de patrullaje de “tercer turno” del día 28 de diciembre (desde las 23:00 a las 07:00 horas), lo haya efectuado. Finalmente, manifiesta que en la 2ª Comisaría de Puerto Aysén, dentro del personal de la unidad, los cabos Cuevas y Velásquez, se destacaban por tener un trato duro con los detenidos y con el propio personal policial, pero nunca presencié que ellos maltrataran a detenidos.

A.4. Silvio Del Carmen Varela Orias (25 años de edad para el año 1973). Quien declaró de fs. 566 a fs. 567 (Tomo II); de fs. 653 a fs. 654 (Tomo II) y a fs. 656 (Tomo II).

En declaración extrajudicial de fecha 20 de noviembre de 2012, rolante de **fs. 566 a fs. 567 (Tomo II)** (cuyas copia consta de fs. 653 a fs. 654 Tomo II). Acota en lo pertinente que se contrató en noviembre de 1969 en Carabineros de Chile en la Prefectura Norte de Santiago, entre otras destinaciones. En el año 1982 fue destinado a la segunda Comisaría de Puerto Aysén, sirviendo doce años en dicha unidad, como también en la Tenencia de Chacabuco, dependiente de ésta, no pudiendo precisar los años exactos o el

tiempo estimado en que trabajó en cada unidad policial, prosigue mencionando su carrera funcionaria. Que su función dentro de la segunda Comisaría de Puerto Aysén, era la de orden y seguridad y eventualmente labores de mecánico automotriz. Que mientras se desempeñó en Aysén, no tuvo conocimiento de los hechos que se le dan a conocer. En relación a la persona de Rubén Armando Antimán Nahuelquín, no lo conoce y desconoce todo tipo de información sobre su muerte. Que no tiene conocimiento de alguna investigación interna realizada en la segunda Comisaría Puerto Aysén en relación a estos hechos. Que conoce a los funcionarios de carabineros Aliro Quinan Tecai, Alberto Velásquez Barría, Juan Villegas Barrientos, Jorge Talma Talma, José Salas Vera y Víctor Cuevas Seguel, recuerda que Cuevas Seguel se desempeñaba como conductor, labor que muy pocos funcionarios realizaban, por lo que siempre se veía participando en los procedimientos del sector, sumado a que sólo existía un carro policial, específicamente un furgón, no recuerda marca ni modelo.

En declaración judicial de fecha 09 de enero de 2013, rolante de **fs. 656 (Tomo II)**. Ratifica su declaración extrajudicial, haciendo presente que no tiene nada más que agregar.

A.5. Osvaldo Del Carmen Mercegue Andrade (24 años de edad para el año 1986). Quien declaró de fs. 784 a fs. 785 (Tomo II); de fs. 864 a fs. 865 (Tomo II); de fs. 868 a 868 vta. (Tomo II) y de fs. 954 (Tomo III).

En declaración extrajudicial de fecha 15 de marzo de 2013, **rolante a fs. 784 a fs. 785 (Tomo II)** (cuyas copias constan a fs. 864 a fs. 865, Tomo II) sostiene en lo pertinente que cumplió funciones en la segunda Comisaría de Carabineros de Puerto Aysén, durante todo el año 1984, hasta los primeros meses del año 1985. Posteriormente fue destinado al Retén Puerto Aguirre, unidad dependiente de la segunda Comisaría de Carabineros de Puerto Aysén. Respecto a los funcionarios Aliro Quinan Tecai, Alberto Velásquez Barría, Juan Villegas Barrientos, Jorge Talma Talma y José Salas Vera, los ubicaba por ser funcionarios de dotación de la segunda Comisaría de Carabineros de Puerto Aysén. Afirma que existían funcionarios de la unidad mencionada, que cumplían funciones en la comisión civil, siendo estos el suboficial Jaime Daniel Díaz Castro, el cabo Aliro Quinan Tecai, más conocido como el "Indio Quinan"; el cabo Alberto Velásquez Barría, más conocido como "El Zorro Velásquez" y el cabo Víctor Cuevas Seguel, quienes realizaban operativos y detenciones ordenadas por el mando institucional. Con relación a Rubén Armando Antimán Nahuelquín, desconoce todo

antecedente. Que tuvo conocimiento que existían relegados políticos, personas que estaban sujetas a firmas en las unidades de Carabineros de Chile.

En declaración judicial de fecha 10 de junio de 2013, rolante a **fs. 868 a fs. 868 vta. (Tomo II)** ratifica su declaración extrajudicial e indica que su primera unidad de destinación, fue la segunda Comisaría de Puerto Aysén, unidad en la cual se desempeñó hasta el 1 de diciembre del año 1988, continua detallando su carrera funcionaria. Respecto a los funcionarios Aliro Quinan Tecai, Alberto Velásquez Barría, Juan Villegas Barrientos, Jorge Talma Talma y José Salas Vera, los ubica porque todos eran funcionarios de dotación de la segunda Comisaría de Carabineros de Puerto Aysén y algunos de ellos, como el suboficial Jaime Daniel Díaz Castro; el cabo Aliro Quinan Tecai, más conocido como “el Indio Quinan”, el cabo Alberto Velásquez Barría, conocido como “el Zorro Velásquez” y el cabo Víctor Cuevas Seguel, cumplían funciones en la comisión civil y les correspondía realizar operativos y detenciones ordenadas por el mando institucional. Con relación a la persona que por la cual se le consulta, don Rubén Armando Antimán Nahuelquín, desconoce todo tipo de antecedentes. Tuvo conocimiento que existían relegados políticos, que estaban sujetos a firmas en las unidades de Carabineros de Chile, pero desconoce si en la segunda Comisaría de Carabineros de Puerto Aysén había o no personas en esa situación.

En declaración extrajudicial de fecha 25 de octubre de 2013, rolante a **fs. 954 (Tomo III)** precisa que si bien es cierto, su nombre aparece consignado en la nómina como dotación de la Segunda Comisaría de Puerto Aysén, no cumplió labores en dicha unidad, ya que al momento de presentarse a esa comisaría, a fines del año 1984, fue destinado de inmediato al Retén Puerto Aguirre, donde estuvo cumpliendo labores hasta finales del año 1987. Por lo anterior, no posee ningún tipo de información respecto de la detención y posterior muerte de Rubén Armando Antimán Nahuelquín. Recuerda que en la segunda Comisaría de Aysén, cumplían funciones los carabineros de apellidos Velásquez y Cuevas, quienes eran parte de la denominada comisión civil de esa unidad, la que estaba al mando del mayor Emilio Morales Clavero, e integrada por el Capitán Víctor Gutiérrez, agregando que en este grupo también recuerda estaban los carabineros de apellidos Quevedo, Díaz Castro y Quinan.

A.6. Jaime Daniel Díaz Castro (41 años de edad para el año 1986). Quien declaró de fs. 786 a fs. 787 (Tomo II); de fs. 848 a fs. 849 (Tomo II); de fs. 851 a fs. 852 (Tomo II) y de fs. 1.847 a fs. 1.848 (Tomo V).

En declaración extrajudicial de fecha 1 de abril de 2013, rolante de **fs. 786 a fs. 787 (Tomo II)** (cuya copias consta a fs. 848 a fs. 849 Tomo II), en lo pertinente manifestó que cumplió funciones en la segunda Comisaría de Carabineros de Puerto Aysén, entre el 20 de enero de 1978 y el 20 de enero de 1993, donde realizaba labores administrativas, ya que era el encargado de la sala de armas. Con relación a los funcionarios de apellido Cuevas, cuyo nombre completo es Víctor Herald Cuevas Seguel, indicó que los conoce bastante bien, ya que se desempeñaba como conductor de un furgón policial que existía en la mencionada unidad y el tal "Zorro Velásquez", cuya identidad es Alberto Daniel Velásquez Barría, era un funcionario que realizaba labores de orden y seguridad en la población. Ambas personas mencionadas son nacidas y criadas en la localidad de Puerto Aysén. Respecto a Rubén Armando Antimán Nahuelquín, desconoce todo tipo de antecedentes.

En declaración judicial de fecha 20 de junio de 2013, rolante de **fs. 851 a fs. 852 (Tomo II)**, deliberó que se enteró de la muerte de esta persona, a través de policía de investigaciones, quienes le preguntaron por lo que sabía al respecto, hecho que desconocía. Se le dijo que murió en forma posterior a una golpiza que le habrían propinado dos funcionarios de la unidad uno de: ellos Cuevas Seguel cabo primero y Velásquez Barría cabo segundo, ambos oriundos la zona, hecho que no le consta, ya que nunca se comentó nada al respecto y piensa que el evento que se hubiese cometido algún ilícito, la jefatura habría dado cuenta de inmediato al Tribunal.

En declaración extrajudicial de fecha 10 de enero de 2019, rolante de **fs. 1.847 a fs. 1.848 (Tomo V)**, reitera su desempeño funcionario, y en cuanto a Rubén Antimán Nahuelquín, fallecido en octubre del año 1986, desconoce cualquier antecedente respecto a su muerte. Como tampoco escuchó comentarios, respecto a hechos de tal naturaleza, que hayan ocurrido en la unidad policial.

A.7. Jorge Waldemar Paillan Agüero (33 años de edad para el año 1986). Quien declaró de fs. 790 a fs. 791 (Tomo II); de fs. 842 a fs. 843 (Tomo II) y de fs. 845 a fs. 846 (Tomo II).

En declaración extrajudicial de fecha 10 de abril de 2013, rolante a **fs. 790 a fs. 791 (Tomo II)** (cuyas copias constan a fs. 842 a fs. 843 Tomo II), en lo pertinente dice que realizó toda su carrera en la segunda Comisaría de Puerto Aysén y sus destacamentos dependientes. En cuanto a Rubén Armando Antimán Nahuelquín, desconoce todo tipo de antecedentes. Que en la segunda Comisaría

de Puerto Aysén, existía una comisión civil, la cual estaba integrada por alrededor de dos o tres funcionarios los cuales eran designados por el comisario mayor Morales Clavero o Gatica Pizarro, en ocasiones a proposición del subcomisario de los servicios quien podría haber sido el capitán Gerardo Mediavilla Izurieta y al parecer tenían como misión entre otras, realizar los procedimientos relativos a temas políticos. Entre los funcionarios que en algún momento estuvieron en la comisión civil y luego eran cambiados en forma esporádica, recuerda a un cabo primero Vargas, al cabo segundo Alberto Velásquez, más conocido como "El Zorro Velásquez", al cabo segundo Aliro Quinan, al cabo segundo Juan Villegas, al cabo José Salas que era el encargado de las lanchas patrulleras y el cabo Jorge Talma.

En declaración judicial de fecha 28 de junio de 2013, rolante de **fs. 845 a fs. 846 (Tomo II)**, ratifica declaración extrajudicial, y en lo adecuado reitera que no conoció a Rubén Armando Antimán Nahuelquín. Que no tuvo conocimiento de que funcionarios de carabineros estuvieran envueltos en algún hecho que tiene relación con el señor Antimán Nahuelquín.

A.8. Eligio Segundo Edén Antimán Nahuelquín (36 años de edad a la época de los hechos). Quien declaró de fs. 918 a fs. 920 (Tomo III) y de fs. 1754 a fs. 1755 (Tomo I).

En declaración extrajudicial de fecha 25 de septiembre de 2013 rolante a **fs. 918 a fs. 920 (Tomo III)** arguye que es hermano de la víctima, que para el mes de diciembre del año 1985, se encontraba viviendo junto a su esposa en Puerto Cisnes. Su hermano Rubén Armando, vivía en calle Doctor Estefen interior, en la comuna de Puerto Aysén, junto a su esposa Eliana Jara Burgos, sus hijos Patricia Antimán Jara, Miguel Ángel Antimán Jara, Leopoldo Antimán Jara y Doris Nelfa Antimán Jara. En ese mismo inmueble, pero en una casa que se encontraba en el frente del mismo terreno, vivía su madre Vitalia del Carmen Nahuelquín Reinaldo. Que para esa fecha no tiene conocimiento que éste haya sido militante de algún partido político. Que para el año 1986, debido al aislamiento y la poca existencia de comunicación, tanto telefónica como radial, no tenía constantemente relación con su familia en Puerto Aysén, solo los veía cuando iba a visitarlos cada dos a tres años aproximadamente. Respecto a la muerte de su hermano Rubén Armando, puede manifestar que para el mes de febrero del año 1986, no recuerda día exacto a través de un amigo se enteró que su hermano se encontraba hospitalizado grave en el Hospital de Coyhaique, sin tener mayores antecedentes. Por tal motivo, viajó inmediatamente desde Puerto Cisne a Coyhaique y cuando llegó al Hospital, recuerda que habían muchos

familiares acompañándolo, pero también recuerda que habían muchos carabineros, militares y amigos en general que lo estaban acompañando. Una vez que tomó contacto con los familiares que se encontraban en el hospital, recuerda que se le informó que su hermano había fallecido al parecer por golpes propiciados por diferentes personas. Al tomar contacto con el doctor que había realizado la autopsia de apellido Vergara, recuerda que su informe médico indicaba que la causa de muerte había sido producida por golpes atribuibles a terceras personas. Que sus primos Humberto Cáceres Nahuelquín y José Nahuelquín Huala, (fallecidos), le comentaron que Rubén Armando, había sido golpeado por personal de carabineros de Puerto Aysén, sin especificar nombres de los responsables. Que una vez que se entregó el cuerpo de su hermano fue puesto en un ataúd y trasladado directamente al cementerio de Coyhaique, donde fue enterrado encontrándose en ese mismo lugar hasta la fecha. Hace presente, que mientras efectuaron el traslado de su hermano de la morgue al cementerio, recuerda que se fue conversando con sus primos Humberto Cáceres y José Nahuelquín, quienes le relataron que su hermano Rubén había tenido problemas con su madre Vitalia en la casa. En esa época al parecer su madre tenía una lesión en un brazo o una pierna, se encontraba convaleciente. Que su hermano llegó un día a la casa en estado de ebriedad y le había pedido plata y por alguna razón la empujó y su madre se habría caído al suelo. De esta situación de agresión por parte de su hermano hacia su madre, ella se levantó del suelo y habría salido de la casa en dirección al cuartel de la Policía de Investigaciones que se encontraba a una cuadra de la casa con la intención de denunciarlo ante la agresión que había recibido por parte de su hermano, pero antes de llegar a la unidad policial se habría encontrado con personal de carabineros de Puerto Aysén, desconociendo el nombre de estos funcionarios. Estos la habrían aconsejado que se devolviera a la casa y que ellos irían en busca de Rubén, que en esos momentos ya había salido de la casa y se encontraba escondido debajo de un camión, desconociendo el lugar exacto donde pudo haber estado. Sus primos le señalaron que estos carabineros lo encontraron debajo del camión y lo habrían subido a un vehículo para llevarlo hasta el sector del Kilómetro N°4, camino antiguo desde Aysén a Coyhaique, donde habrían procedido a golpearlo, desconociendo que es lo que posteriormente sucedió con él. Por comentarios de familiares y de terceras personas, pero que a él no le constan, su hermano Rubén Armando, habría llegado a la casa mal herido, producto de golpes y desde la casa habría sido recogido por una ambulancia del Hospital de Puerto Aysén, siendo

trasladado en compañía al parecer de su hija Doris Nelfa Antimán Jara, hasta ese centro hospitalario. Desconoce cuántos días estuvo en el Hospital de Puerto Aysén, solo recuerda que posteriormente y a raíz de sus lesiones fue trasladado al hospital de Coyhaique donde finalmente falleció. Desconociendo el estado de salud en que su hermano ingresó al hospital de Puerto Aysén como tampoco cuando fue trasladado al hospital de Coyhaique. Adiciona que días posteriores y a través de los comentarios, tanto familiares como de los amigos de la familia, se enteró que los responsables de los golpes propinados a su hermano Rubén Armando y que en definitiva le provocaron la muerte serían los carabineros de apellidos Cuevas, Velásquez y Pereira, este último fallecido, todos de dotación de la Comisaría de Carabineros de Puerto Aysén.

En declaración judicial de fecha 05 de julio de 2018 rolante a **fs. 1.754 a fs. 1.755 (Tomo V)** ratifica la declaración extrajudicial de fs. 918 y siguientes de autos. En lo pertinente dice que se enteró, a través de un amigo lo que sucedió con su hermano Rubén. Que Luis Pereira, Cuevas y Velásquez, los carabineros, quienes serían los responsables de lo sucedido con su hermano, eran conocidos suyos de muchos años. Una vez le quiso a hablar a “Lucho Pereira”, pero el no quiso hablar y se escabulló. Con los otros dos carabineros nunca tuvo la oportunidad de hablar. Que los antecedentes de los responsables de la detención de su hermano se la dio un joven de nombre Manuel Quinillao, que al parecer el vio cuando lo tomaron o cuando lo tiraron al río. Afirma que su hermano nunca estuvo involucrado en política. Que la razón por la que había militares y carabineros acompañando a su hermano en el hospital, no la sabe. Cuando él llegó a Aysén llegó a la morgue y se encontró con muchos carabineros y militares, los conocía a todos, porque eran amigos de años. En la morgue vio a su familia y carabineros y militares. Las condiciones en que estaba su hermano en la morgue es que estaba “todo negro, muy golpeado, todo el cuerpo”. Lo mismo le dijeron sus tías, quienes lo vistieron por lo que no quiso ver su cara. No pudo conversar con su mamá, porque lo llamaron a buscar un barco a Cisnes. Le dijeron que su mamá estaba mal. A los dos años conversó con su mamá y le dijo que Rubén la empujó porque quería plata y ella fue a dar cuenta a investigaciones, pero en el camino se encontró con los carabineros y allí los carabineros le dijeron “no se preocupe tía Vitalia, váyase no más pa la casa”. Que ella nunca le dijo que carabineros fueron. Que sus primos sabían lo que pasó con Rubén porque su mamá se los comentó. Que al parecer los hechos ocurrieron en la noche. Nunca supo de alguien más que haya sido testigo de lo que le ocurrió a su hermano Rubén. Piensa que su

hermano nunca tuvo problemas con carabineros o alguna rama de las fuerzas armadas, tampoco perteneció o participó alguna vez de algún movimiento político. El único amigo de Rubén que recuerda que perteneciera a algún partido político era Carlos Vargas, trabajador de correos de Chile. En el diario salía la noticia de la muerte de su hermano. No escuchó que carabineros haya hecho algún sumario o haya investigado algo respecto al fallecimiento de Rubén. Su hermana con su esposo y él, fueron a la Fiscalía militar, en ese entonces Fiscal Militar de apellido Leal recibió la denuncia firmada por su hermana Ninfa. Su cuñado conversó con el señor Leal y supo que la señora jueza le había ido a tomar declaración a su hermano en el hospital, esto a petición del médico de la época, para saber quiénes lo habían golpeado y su hermano les respondió que habían sido los carabineros Pereira, Cuevas y Velásquez y al parecer alguien de apellido Ulloa. La versión de los implicados nunca la supo, desconoce lo que ellos hayan dicho.

A.9. José Vera Barría (de 37 años de edad a la época de los hechos). **En declaración extrajudicial** de fecha 12 de diciembre de 2013, rolante de **fs. 1.029 a fs. 1.030 (Tomo III)** arguye en lo pertinente que para fines del año 1985 y principios del año 1986, se encontraba prestando servicios en el hospital de Puerto Aysén como chofer de ambulancia, junto a otros tres choferes, recordando a Humberto Aro, Oscar Barahona y Sergio Vergara. Para esa época del año 1985 y 1986, sus salidas a terreno dependían directamente de las ordenes emanadas de los médicos o paramédicos de turno. En relación a Rubén Armando Antimán Nahuelquín, no lo conoció, pero si recuerda a una mujer de nombre Vitalia Nahuelquín, quien tenía varios hijos recordando a Genaro y Selfa, quienes vivían en Aysén, desconociendo si eran familiares de Rubén Antimán. Indica, que no recuerda haber trasladado en ambulancia en alguna oportunidad, a la señora Vitalia Nahuelquín o algunos de sus hijos. Hace presente que por el tiempo transcurrido no recuerda con exactitud los traslados, pero en el caso puntual de la víctima Rubén Armando Antimán Nahuelquín, no participó en ese traslado. Puntualiza que en la época que sucedió lo relacionado con Rubén Antimán Nahuelquín, no recuerda que en el hospital de Aysén haya habido algún servicio continuo por parte de personal de carabineros, pero si recuerda que en esa fecha existía cercano al centro hospitalario la Comisaría de Carabineros de Puerto Aysén.

A.10. Segundo Armando Catelicán Cárdenas (de 29 años de edad a la época de los hechos). **En declaración judicial** de 30 de noviembre de 2017, que rola a **fs. 1.605 (Tomo IV)**, acota que prestó servicios en la Segunda

Comisaría de Puerto Aysén y en distintos destacamento de esa unidad, desde el año 1980 hasta 1988. En relación al hecho, señala que atendido el tiempo transcurrido a la fecha no recuerda fehacientemente haber participado en la detención de la víctima que se le hace mención, como tampoco haber sido testigo de ello, ya que los procedimientos policiales los ejecuta el jefe de turno y acompañantes, generalmente. Que era el chofer del furgón en esa época y no tenía mayor participación en los procedimientos. El día en que según los antecedentes aportados por los familiares del ofendido, este fue detenido, el 28 de diciembre de 1985, él trabajó en el segundo patrullaje como chofer del furgón, desde las 20:00 a las 08:00 del día siguiente, de acuerdo a la fotocopia que el Tribunal le exhibe y que rola a fs. 43. A la víctima no lo conocía e ignora si los demás colegas lo ubicaban. Que la comisaría atendía todos los procedimientos policiales de la ciudad de Puerto Aysén en su totalidad, en esa época no había sectores acotados o cuadrantes. Que todos los procedimientos policiales quedan estampados en los libros de guardia y de servicio de población, respectivamente, motivo por el cual si la víctima fue detenida, debería haber quedado allí ingresado, por cuanto todo procedimiento por mandato legal debe quedar registrado.

A.11. Miguel Ángel Antimán Jara (de 22 años a la época de los hechos). **En declaración judicial** de fecha 02 de diciembre de 2019, rolante de fs. **1.890 a fs. 1.891 (Tomo V)**, en lo pertinente indica que iba siempre a visitar a su padre y a su abuela, que no supo del altercado de su padre y su abuela, que él llegó en la tarde. Que es hijo de la víctima. En cuanto a lo sucedido con su padre Rubén Antimán, arguye que llegó a la casa y uno de los hijos de su hermana estaba llorando en la cocina, sintió que alguien se quejaba en el dormitorio, así que entró a ver a su papá y le preguntó “qué te pasa y me dice: fue el zorro Velásquez y Cuevas”, pero no sabía quiénes eran, pensó que eran amigos de su padre. Luego su hermana le dice que fueron los carabineros, le preguntó porque le pegaron y ella le contó lo sucedido con su abuela. Al otro día cuando volvió, lo habían llevado al hospital y cuando fue al hospital le dijeron que lo habían trasladado a Coyhaique, lugar al que no alcanzó a ir ya que falleció. Interrogado dice que su padre le nombró dos personas “El zorro Velásquez y Cuevas”, a quienes no conoce y pensaba que eran amigos de su padre, que este se quejaba mucho y conversaba poco. Que su padre no estuvo detenido en la comisaría, que lo encontraron en la calle y ahí le pegaron. No pudo ver las marcas en su cuerpo porque estaba tapado. Su hermana no le comentó que haya visto lesiones en su cuerpo. Lo que puede decir es que gritaba mucho de dolor, le ofreció llevarlo al

hospital y no quiso. No se percató de la presencia de militares o carabineros en el hospital, preguntó en la guardia y le dijeron que había sido trasladado a Coyhaique. No sabe quién más puede haber sido testigo de lo acontecido con su padre. Preguntado si tuvo conocimiento que su padre haya tenido problemas con carabineros o alguna rama de la Fuerza Armadas, responde: que sabe que perdió el trabajo, era empleado del correo, y cuando entro el gobierno militar, quedo sin trabajo, su padre no participaba en movimientos políticos. Que no conoce a los carabineros que golpearon a su padre. Tampoco de parte de la comisaría, no tenían a quien preguntarle.

A.12. Julia Borquez Antimán (de 9 años a la época de los hechos).

Declaración extrajudicial de fecha 21 de septiembre de 2020, rolante de **fs. 1.973 a fs. 1.976 (Tomo VI)**, interrogada por el Tribunal en lo pertinente afinca que conocía a la víctima, era su tío, hermano de su madre, que tenía 9 años en ese tiempo. Que vio a su tío en la navidad, les pasó a dejar unas cosas y ahí “desapareció” y no lo vio nunca más. Hasta que en febrero su madre escuchó en la radio que buscaban a la familia de Rubén Armando, porque estaba hospitalizado en Coyhaique. Entonces fueron a Coyhaique donde estuvieron unos días hasta que su tío falleció. Se lee declaración de fs. 186 de Selfa Antimán, la testigo dice: que no sabe, porque su tío la saludo en la entrada de la casa, no ingreso, solo dejo unos “cachureos” y después se fue. Recuerda que iba en buenas condiciones, que era una persona normal, tranquila, “ni siquiera con alcohol”. Que su mamá le contó que su tío le había hablado y le dijo que los carabineros lo habían golpeado y lo pisaron, que eran como seis carabineros, lo tiraron al suelo y lo pisaron. Después lo habían bañado en agua, entonces no se le notaba. Cuando falleció su madre le dijo que fue con la madrina de ella al hospital, y la madrina conocía mucha gente, la dejaron entrar a la morgue y su tío estaba “negro y ella le beso los pies”. Después fueron a una misa y lo sepultaron en Coyhaique. La madrina se llama Matilde Muñoz (fallecida). Que al parecer la familia lo había denunciado y por eso los carabineros usaron mucha fuerza. Que su tío también le dijo a su mamá que lo habían dejado tirado en el río y ahí ingreso al hospital de Aysén y nadie lo quiso identificar y por eso fue enviado a Coyhaique. Lo que le parece raro porque Aysén era “chico y todo el mundo se conocía”. A la pregunta si recuerda que su madre le diera nombre de los carabineros que pudieran haber participado, responde: que le nombró al carabinero de apellido Cuevas, no recuerda otro nombre. Que su madre los tenía anotados en una

libreta, pero no la encontró. Refiere a la situación de su madre y replica sus dichos.

DOCUMENTOS:

- | | |
|---|--|
| 1. Certificado defunción Rubén Antimán Nahuelquín. | 8. Copias autorizadas causal rol 4.667 Juzgado del Crimen de Puerto Aysén. |
| 2. Informe Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad. | 9. Informe del Departamento de Derechos Humanos de Carabineros de Chile. |
| 3. Relación del personal de Carabineros Puerto, año 1986 | 10. Informe pericial médico forense del Servicio Médico Legal. |
| 4. Relación del personal de Carabineros Puerto, diciembre del año 1985. | 11. Ordenes de investigar de la Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos, Policía de Investigaciones de Chile. |
| 5. Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. | |
| 6. Ordinario Hospital Regional Coyhaique. | |
| 7. Cuaderno Custodia copia causa rol 4.769 Juzgado del Crimen Puerto Aysén. | |

B.1. A fs. 4 (Tomo I) (copia fs. 116 vuelta (Tomo I), Certificado de defunción de Rubén Armando Antimán Nahuelquín que señala como causa de muerte septicemia/ hemoneumotorax traumático/ agresión por terceros.

B.2. A fs. 9 a 90 (Tomo I), de fs. 1.346, de fs. 1.355 a fs. 1.356 (Tomo III) Informe del Arzobispado de Santiago, Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, el que remite certificado de defunción de Rubén Armando Antimán Nahuelquín y Copia del expediente de la causa rol N° 4.769, del Juzgado de Letras de Aysén, seguida por la muerte de Rubén Antimán Nahuelquín, el cual contiene en resumen:

B.2.1. A fs. 17 a fs. 18 (Tomo I) informe de autopsia realizado por el médico legista Carlos Vergara Quezada, en causa rol N°6.155 de fecha 18 de febrero de 1986, que indica: “Se había trasladado desde Hospital de Puerto Aisen hacia Hospital de Coyhaique, con fecha 2/1/86 con el antecedente de haber ingresado a ese el 29/12/85 debido a haber sido agredido en la vía pública sufriendo por tal motivo un Neumotórax a tensión izquierda, complicándose con una Empiema del mismo lado, drenado parcialmente en Aysén. Se ingresa a Coyhaique con el diagnóstico de Hemopioneumotorax, contusión torácica complicada” y concluye: “La muerte de Don: Rubén Antimán Nahuelquín, se debió a las múltiples complicaciones que fue sufriendo sucesivamente secundarias a la lesión originaria, es decir, al traumatismo de tórax con el consecuente pnoneumotórax izquierdo, punto de partida de la infección generalizada (septicemia). Siendo su forma médico legal cuasi delito de homicidio”.

B.2.2. A **fs. 26 (Tomo I)** (cuyas copia consta a fs. 233 Tomo I), declaración extrajudicial de Francisco Ernesto Otárola Zapata, quien declara en lo pertinente que el paciente Rubén Antimán Nahuelquín ingresó por el Servicio de Urgencia el 29 de diciembre de 1985, a las 22:45 horas, siendo hospitalizado con los diagnósticos de policontundido, shock-hipovolémico secundario y fracturas costales, ingresado en completo estado de inconsciencia. Que el medico de turno en su oportunidad, no tenía antecedentes suficientes para determinar el origen de las lesiones, debido a que el paciente no recuperó el estado de consciencia, para ser interrogado, que permitiera efectuar la anamnesis; del mismo modo que el paciente fue traído por la ambulancia desde su domicilio. Que una vez informado el deceso del paciente se solicita se ordenara la autopsia correspondiente, debido a que la interconsulta de traslado mencionaba una probable agresión.

B.2.2.a. En declaración judicial a **fs. 39 a fs. 40 (Tomo I)** de fecha 17 de abril de 1986, ratifica su declaración extrajudicial y en lo pertinente glosa que Rubén Antimán Nahuelquín, ingresó al hospital local el día 29 de diciembre de 1985 a las 23:45 horas, a través del servicio de urgencia y fue traído desde su domicilio particular por la ambulancia del hospital. Fue internado por los diagnostico de shock, neumotórax traumático y contusión torácica. Que además ingresó en completo estado de inconciencia, estando internado hasta el 2 de enero y al no lograr una mejoría de su estado se decidió su traslado al hospital base de Coyhaique. Agregando otros antecedentes y que solicitó la autopsia ya que la interconsulta de traslado efectuada por el doctor Aguayo, se mencionaba una probable agresión.

B.2.3. A **fs. 27 a fs. 28 (Tomo I)** (cuya copia consta a fs. 234 a fs. 235 Tomo I), declaración extrajudicial de Doris Nelfa Antimán Jara, quien relata en lo pertinente que Rubén Antimán Nahuelquín, era su padre, quien al momento de fallecer tenía la edad de 46 años. Que el día jueves 26 de diciembre del año 1985, alrededor de las 20:30 horas, llegó hasta su antigua casa su padre bebido, discutió con su abuela Vitalia Nahuelquín ya que no quiso entrar leña, fue entonces que su abuela golpeó con el bastón de madera a su padre, en la cabeza, detallando lo acontecido en ese contexto, y que luego su abuela señaló que iría a carabineros saliendo del domicilio para luego regresar acompañada de dos carabineros a quienes ubicaba de vista, pero no sabía sus nombres. Su abuela preguntó al ingresar si estaba su padre, respondiendo ella que no, que había salido, pero su padre al ver a los carabineros se escondió en el baño de la casa, su abuela no lo vio y su padre se durmió esa noche en la cocina, saliendo temprano en la mañana.

El día 27 de diciembre de 1985 su padre regresó cerca de las 11:00 horas, no andaba bebido, se acostó en su dormitorio, su abuela no se dio cuenta que había llegado, ya que se encontraba acostada. Cerca de las 18:00 horas su padre se levantó y su abuela lo escuchó, ante eso se levantó de inmediato y fue a buscar nuevamente a los carabineros, su padre se fue debido a este hecho, alrededor de las 19:30 horas llegó "La Cuca", con tres carabineros, el que conducía era de apellido Larenas, y a los otros dos los ubica de vista. Los carabineros le preguntaron si era verdad que su padre andaba vestido con una casaca negra con blanco, lo que era falso, pero ella le dijo que sí, ya que no quería que lo detuvieran, pues sabía que le iban a pegar. Además le preguntaron qué lugares frecuentaba, los carabineros le dijeron que lo andaban buscando, porque su abuela había dicho que él le había pegado. No volvió a ver a los carabineros ese día y su padre no llegó a dormir. El día 28 de diciembre, no lo vio durante el día, pero en la noche cerca de las 23:30 horas, por la ventana que da a la calle, vio que venía hacia a la casa caminando desde la costanera, le parece que cuando vio a su abuela, se fue en la misma dirección que venía. No lo volvió a ver ese día. El día domingo 29 de diciembre de 1985, su padre llegó a la casa cerca de las 13:30 horas, recuerda bien ese día y hora, ya que se encontraba viendo un programa de televisión. Llegó transpirando helado, se quejaba de dolor de espalda, en general le dolía todo el cuerpo. Le preguntó que le sucedía y le contestó que los carabineros le habían pegado, que lo habían tomado detenido cerca del restaurante "El Cafetal", en la población Aguirre Cerda, que lo habían llevado a la comisaria, "la única que hay, la que está en el sector La Balsa, lo llevaron en la Cuca", que lo tuvieron detenido una hora y que lo habían golpeado tres, que le habían dado patadas, combos y le pegaban con un "churro". Que lo llevó a su dormitorio y le sacó la chaqueta, tenía los brazos morados, se veía muy mal, lo acostó. Cerca de las 14:00 horas llegó su hermano Miguel Ángel Antimán Jara, y a este le contó lo mismo que a ella. Su abuela al verlo en ese estado llamó a la ambulancia siendo trasladado al hospital de Puerto Aysén. Ingresado a urgencia su padre no hablaba solo pedía agua, el doctor Silva le preguntó qué había sucedido y ella le comentó que su padre había dormido afuera y que lo habían golpeado los carabineros. Cíñe que lo dejaron hospitalizado y no volvió a ver a su padre.

B.2.3.a. En declaración judicial **fs. 48 a fs. 52 (Tomo II)**, de fecha 05 de mayo de 1986, ratifica su declaración extrajudicial y atestigua en lo pertinente que es hija de Rubén Armando Antimán Nahuelquín quien a la fecha de su deceso

tenía 46 años de edad. Que el día 26 de diciembre del año pasado (1985), alrededor de las 20:30 horas llegó hasta la casa de su abuela Vitalia Nahuelquín, con quien ella vive, su padre Rubén Antimán Nahuelquín, quien discutió con su abuela ya que no quiso entrar leña, fue entonces que su abuelita, golpeó con su bastón de madera a su padre en la cabeza, narrando lo sucedido y que su abuela se asustó y cayó sentada a la entrada de la pieza, al levantarse señaló indignada que iría a acusarlo a los carabineros, pasado unos quince minutos salió de la casa y regresó pasadas las doce de la noche en una ambulancia y dos carabineros a quienes ubica de vista, pero no sabe sus nombres. Al entrar preguntó por su padre Rubén y ella respondió que había salido, lo que era falso porque su padre al ver a los carabineros se escondió en el baño de la casa, su abuela no lo vio y se acostó, su padre una vez que se fueron los carabineros durmió esa noche en la cocina, saliendo temprano en la mañana. El día 27 de diciembre de 1985, su padre regreso cerca de la once de la mañana, no andaba bebido, se acostó en su dormitorio, su abuela no se dio cuenta que había llegado ya que se encontraba acostada en su cama, cerca de las dieciocho horas su padre se levantó y su abuela lo escuchó, ante esto se levantó de inmediato y se fue a buscar nuevamente a los carabineros, su padre se fue y alrededor de las diecinueve treinta horas llegó “la cuca”, el furgón policial de los carabineros, con tres policías, el conductor de apellido Larenas y a los otros los ubica pero no sabe sus nombres. Los carabineros le preguntaron si era verdad que su padre andaba vestido con una casa negra con blanco, lo que era falso, pero ella le dijo que sí, ya que no quería que lo detuvieran, pues sabía que le iban a pegar. Además le preguntaron qué lugares frecuentaba su papá y les mintió diciéndoles que el lugar de “La balsa”, pero su padre siempre iba donde una abuelita amiga que vive en el barrio Pedro Aguirre Cerda, cerca del “Cafetal”. Los carabineros le dijeron que lo andaban buscando porque su abuela había dicho que le había pegado. Que no volvió a ver a los carabineros ese día y su padre no llegó a dormir. El día 28 de diciembre de 1985, no lo vio durante el día, pero en la noche cerca de las veintitrés treinta horas por una ventana vio que venía hacia la casa, a su parecer cuando vio que estaba su abuela no se atrevió a golpear en la casa y se volvió por la misma dirección. El día 29 de diciembre, su padre llegó a la casa cerca de las trece treinta horas, lo recuerda bien, ya que ella se encontraba viendo un programa de televisión “Magnetoscopio Musical”, llegó transpirando helado, se quejaba de dolor en la espalda, le dolía todo el cuerpo. Le preguntó que le sucedía y le contó que los carabineros le habían pegado, que lo habían tomado detenido

cerca del restaurante “El Calafate” en la población Pedro Aguirre Cerda, que lo habían llevado a la comisaria en “La cuca”. Agregando que lo tuvieron detenido una hora y que lo habían golpeado tres policías, que le daban patadas y combos y además le pegaban con “churros”. Lo llevó a su dormitorio, le saco la chaqueta y tenía los brazos morados, “se veía muy mal, lo acosté”. Cerca de las catorce horas llegó su hermano Miguel Ángel Antimán Jara y a este le contó su padre lo mismo que a ella. Su abuela a verlo en ese estado llamo la ambulancia siendo trasladado a la urgencia del hospital quedando hospitalizado de inmediato. Su padre no hablaba mucho solo pedía agua, el doctor Silva le preguntó que le había pasado y ella le comento que lo habían golpeado los carabineros. Que después lo trasladaron a Coyhaique y no pudo verlo más por falta de dinero. Falleciendo en ese establecimiento el día 8 de febrero de 1986. Que su tía fue a la casa donde ella vive y le dijo que su padre le había comentado antes de morir que los carabineros que lo habían “apaleado”, era un funcionario de carabineros hijo de un ex – funcionario de la banda de carabineros de Aysén a quien conocen como “Chotelo”, Heraldo Cuevas y el otro policía era de apellido Velásquez Barría.

B.2.4. A fs. 29 (Tomo I) (cuya copias consta a fs. 236 Tomo I), declaración extrajudicial de Selfa Haidée Antimán Nahuelquín, expresa en lo pertinente que Rubén Antimán Nahuelquín era su hermano, quien falleció el día 8 de febrero “de este año”, en el hospital regional de Coyhaique. Que se enteró de su hospitalización a través de una información radial, comunicándose con el doctor Aguayo del hospital de Aysén, quien le manifestó que lo había atendido, que su hermano había llegado en estado grave, a consecuencia de golpes profundos y muy precisos, al preguntarle cómo se los habría ocasionado, le respondió que eso debía averiguarlo por fuera. Continúa relatando lo acontecido con su hermano y agrega que se impresionó mucho al verlo, la reconoció y le preguntó que le había sucedido, señalándole este que “su madre Vitalia Nahuelquín Reinaldo, lo había mandado a apalear, por lo carabineros”, indicándole que su madre lo había acusado de golpearla. Y al preguntarle quien lo había golpeado, le dijo que el cabo de carabineros Heraldo Cuevas, el yerno de la “Tila Osorio” y otro que no conocía. Que posteriormente averiguó que el yerno de la “Tila Osorio” era el carabinero Alberto Velásquez Barría.

B.2.5. A fs. 37 a fs. 38 (Tomo I), declaración judicial de Vitalia Nahuelquín Reinaldo, de fecha 07 de abril de 1986, que en lo atinente relata lo sucedido con su hijo Rubén Armando Antimán Nahuelquín y ella, donde resultó lesionada en su brazo derecho. Que tras la atención medica el doctor le dio un

certificado médico para que lo presentara en carabineros, que no hizo denuncia, que solo fue a dejar el papel que le dieron en el hospital a la comisaría. Que no supo nada en carabineros, que procedimiento iban a tomar ellos, ni tampoco fueron a su casa y desde esa fecha no volvió a ver a su hijo. Supo cómo a los dos o tres días después, que una “chica le dijo que al negro, como le decíamos a mi hijo Rubén, lo habían tomado preso los carabineros”. No sabe quiénes fueron los policías que lo detuvieron, ni cuál fue el motivo de su detención, si por su lesión o por algún otro motivo. Que su hijo estuvo internado en Coyhaique, porque lo habían golpeado mucho los carabineros, pero no le consta, ya que la única que sabe de la situación es su hija Selfa, quien se hizo cargo de toda la hospitalización de su hermano.

B.2.6. A fs. 74 (Tomo I) informe N°757 de Carabineros Prefectura de Aysén N°27 2da Comisaría Puerto Aysén, de fecha 23 de junio de 1986, en el que se señala. “Que, efectivamente el día 27 de diciembre del año 1985, existe una denuncia hecha por Vitalia del Carmen Nahuelquín Reinaldo, de lesiones de carácter grave en agresión, ocasionada por su hijo Rubén Armando Antimán Nahuelquín, de lo cual se dio cuenta a ese Tribunal, con parte Nro. 409”.

B.2.7. A fs. 77 a fs. 78 (Tomo I) (cuya copia consta a fs. 143 a fs. 144; a fs. 238 a fs. 239 Tomo I y a fs. 1.501 a fs. 1.502, a fs. 1.506 a 1.507; a fs. 1.593 fs. 1.594 Tomo IV), informe N°840 de la Segunda Comisaría de Puerto Aysén, mediante el cual se comunica los turnos del día 28 de diciembre de 1985, tercer turno indica: (desde las 23:00 a 07:00 horas) Cabo primero Aliro Quinan Tecai; cabo segundo Alberto Velásquez Barría; cabo segundo Juan Villegas Barrientos; cabo segundo Jorge Talma Talma y carabinero José Salas Veras.

B.3. A fs. 225 a fs. 226 (Tomo I) relación del personal de Carabineros de Chile, que figura en la dotación de la Segunda Comisaría de Puerto Aysén, año 1986. En el número veinticuatro se indica cabo primero Víctor Herald Cuevas Seguel y en el número ochenta y uno cabo segundo Alberto Daniel Velásquez Barría.

B.4. A fs. 257 a fs. 262 (Tomo I), relación del personal de Carabineros de Chile, que figuran en la dotación de la Segunda Comisaría Puerto Aysén en el periodo del mes de diciembre de 1985, en cuya dotación en el número treinta alude a cabo primero Víctor Herald Cuevas Seguel, y en el número setenta y uno dice cabo segundo Alberto Daniel Velásquez Barría.

B.5. A fs. 361 a fs. 366 (Tomo I), informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en cuya nómina que se acompaña refiere a Rubén

Armando Antimán Nahuelquín y reseña: “Rubén Armando Antimán Nahuelquín, muerto. Puerto Aysén, febrero de 1986. Rubén Antimán tenía 45 años de edad, estaba casado y tuvo cuatro hijos. Se encontraba cesante al momento de los hechos, pero efectuaba trabajos esporádicos. Murió el 8 de febrero de 1986, a consecuencia de un traumatismo de tórax, con el consecuente pnoneumotórax izquierdo, complicado por una septicemia, atribuible a terceros según autopsia. Las lesiones fueron causadas por funcionarios de carabineros, que actuaron haciendo uso excesivo de fuerza”.

B.6. A fs. 1.187 a fs. 1.221 (Tomo III), ordinario N°1229 del Hospital Regional de Coyhaique, que contiene ficha clínica N°76555 correspondiente a Rubén Armando Antimán Nahuelquín, que en lo pertinente contiene ha:

B.6.1. A fs. 1.189 (Tomo III) (cuyas copias consta a fs. 1.259 a fs. 1.292 Tomo III) resumen clínico de traslado en cual se señala diagnóstico clínico: “Neumotórax a tensión drenado, empiema pleural izquierdo, alcoholismo crónico y síndrome de depresión alcohólica”. En el título principal sintomatología, se reseña: “Ingresó el 29-12-85 a las 23. Horas, con cuadro de shock (PA= 0, pulso 0), con antecedentes de agresión 2 días antes. Por clínica y radiología se demuestra Neumotórax a tensión”.

B.7. A fs. 1.347 (Tomo III) cuaderno custodia de las copias de causa rol 4.769 del Juzgado del Crimen de Aysén, acompañadas por la Fundación, Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.

B.8. A fs. 1.717 a fs. 1.740 (Tomo V) copia autorizada de expediente causa rol N°4.667 del Juzgado del Crimen de Puerto Aysén, seguida por el delito de lesiones en contra de Vitalia del Carmen Nahuelquín Reinaldo, que en lo pertinente se desglosa:

B.8.1. A fs. 1.719 (Tomo V) Parte N°409 de Carabineros de Puerto Aysén de fecha 28 de diciembre de 1985, mediante el cual ciñe: “Doy cuenta a Us., que hoy a las 00:30 horas, se presentó al cuerpo de guardia de esta unidad Vitalia Del Carmen Nahuelquín Reinaldo, 75 años, casada, labores de casa (...) y expuso: Que, ayer aproximadamente a las 21:30 horas, en circunstancias que se encontraba en su domicilio, antes indicado llegó su hijo Rubén Armando Antimán Nahuelquín, en estado bebido, quien le pidió que le sirva café, a no acceder a su petición, éste la agredió con golpes de puños y pies, a consecuencia de ello resultó con fractura de A-B izquierdo, de carácter grave, según pronóstico del médico de turno en el hospital local, Dra. Cecilia Bahamonde Carrasco, que la atendió y envió a su domicilio. Se adjunta el certificado médico en mención”.

B.8.2. A fs. 1.724 a fs. 1.725 (Tomo V) declaración judicial de Vitalia Del Carmen Nahuelquín Reinaldo, de fecha 31 de enero de 1986, que en lo concerniente alude que el día 27 de diciembre de 1985, en circunstancias que se encontraba en su domicilio, llegó su hijo Rubén Armando Antimán Nahuelquín, en manifiesto estado de ebriedad, lo reprendió con buenas palabras por llegar nuevamente a la casa ebrio, entonces él decidió irse de la casa; ella fue detrás de él con la intención de cerrar la puerta, ya que en ese momento la cocina estaba temperada. Que fue en ese instante que su hijo en forma sorpresiva, se dio vuelta y “me lanzó un golpe violento en el brazo provocándome una fractura”, que ese fue el único golpe que le dio. Que no la agredió con golpes de pies como dice el parte, que eso es falso.

B.8.3. A fs. 1728 (Tomo V) con fecha 03 de febrero de 1986, el Tribunal se constituyó en el Hospital Regional de Coyhaique, donde se procedió a tomar declaración judicial a Rubén Armando Antimán Nahuelquín, quien expresa conocer el motivo por el cual se le interroga, ya que su madre Vitalia Del Carmen Nahuelquín lo inculpa de haberla golpeado. Que no es efectivo y su hija Doris Antimán Jara de 18 años de edad estaba presente cuando alrededor de 23 de diciembre su madre no quería dejarlo entrar a la casa y lo atacó con un “palo”. Que su madre salió sola a la calle y se golpeó con el mismo palo que había atacado.

B.8.4. A fs. 1.733 a fs. 1.736 (Tomo V) con fecha 18 de febrero de 1986, declaración judicial de Doris Nelfa Antimán Jara, proclama que es hija de Rubén Armando Antimán Nahuelquín, quien falleció en el Hospital Regional de Coyhaique, al parecer el día 09 de febrero. Que el día 23 de diciembre, en circunstancias que su padre se encontraba al interior de su dormitorio, jugando con su nieto, su abuela que esta “Chochita” por los años, se puso a discutir con su padre, pero como éste no le hizo caso fue hasta el dormitorio y le pegó un bastonazo. Entonces su padre hizo un ademán que le iba a pegar y al retroceder esta se cayó y salió indignada a buscar a los carabineros, se cayó y se quebró el brazo. Cuando su abuela se fue a buscar a los carabineros su padre se dio a la fuga. Continúa su relato en relación a cómo sucedieron los hechos. Agrega que la última vez que vio a su padre con vida fue el día domingo 29 de diciembre de 1985, cuando llegó a la casa, agachado, quejándose y prácticamente no podía hablar, ella le preguntó qué había sucedido, contestándole este que el día anterior el sábado 28 de diciembre de 1985, cuando caminaba cerca del restaurante “ El Cafetal” en la población Pedro Aguirre Cerda, había sido detenido por dos

carabineros, a quienes no conocía, que al parecer eran de Santiago y que posteriormente lo habían golpeado entre tres, no indicándole si fue al interior de la comisaría o en la calle. Le dijo que lo habían detenido alrededor de las ocho de la noche y que lo habían soltado como a las hora y media después. Al verlo en ese estado solicitaron la ambulancia, pero su padre no quiso irse al hospital, posteriormente llegó su hermano Miguel Ángel Antimán Jara, entre los dos atendieron a su papá que no podía moverse, le dolía todo el cuerpo y lo que más le molestaba según expresaba eran sus riñones. A su hermano también le contó que los carabineros lo habían golpeado. Que alrededor de las diez de la noche su padre seguía quejándose y transpiraba todo su cuerpo del dolor, llevándolo al hospital, siendo atendido en urgencia, quedando hospitalizado en el hospital local, luego de lo cual fue trasladado al hospital regional de Coyhaique, donde falleció. Suma que quien pudiera tener mayores antecedentes es su tía Selfa Antimán Nahuelquín, pues ella lo asistió en Coyhaique. Rectifica la fecha de los hechos en cuanto indica que estos ocurrieron el 28 de diciembre de 1985.

B.9. A fs. 1.746 a fs. 1.748 (Tomo V) informe N°247 remitidos por el Departamento Derechos Humanos de Carabineros de Chile, antecedentes que se ordenan formar a fs. 1.751 (Tomo V) cuaderno reservado que contienen hojas de vida y calificaciones del personal de la dotación de la segunda Comisaría de Carabineros de Puerto Aysén 1985 a 1986.

B.10. A fs. 1.919 a fs. 1.933 (Tomo V) ordinario N°9590 remitido por el Servicio Médico Legal que contiene informe pericial médico forense RM-UEIFD-04-20, relativa a la autopsia de Rubén Antimán Nahuelquín, elaborado por el equipo de identificación forense de la Unidad de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal, que concluye en lo pertinente que: Con la información documental disponible para la realización de este informe y en base al conocimiento científico actual, no es posible evaluar si la autopsia realizada se ajustó a la lex artis médica correspondiente a la fecha y lugar en que se efectuó. No es posible discriminar en base a la información médica si las lesiones observadas son resultado de una agresión por terceros o fueron causadas por una enfermedad. Que tanto el neumotórax a tensión como la sepsis son diagnósticos de riesgo vital que, de no ser tratados, llevan a la muerte del paciente. La información disponible orienta a que, de no haber tenido un tratamiento, el fallecimiento de Antimán Nahuelquín se habría producido antes. La fecha de fallecimiento corresponde al 08 de febrero de 1986. Que no es posible deducir la fecha de la presunta agresión y, por lo tanto, tampoco el intervalo entre ella y el fallecimiento.

B.11. Ordenes de investigar debidamente diligenciadas por la Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile, que se desglosan de la siguiente manera:

B.11.1. A fs. 94 a fs. 109 (Tomo I) informe policial N°161 que establece que Rubén Armando Antimán Nahuelquín, falleció el día 08 de febrero de 1986, en Puerto Aysén, producto de una septicemia- hemoneumotorax traumático- agresión por terceros, siendo sus posibles autores funcionarios de carabineros de Chile, quienes habrían hecho uso excesivo de la fuerza.

B.11.2. A fs. 127 a fs. 138 (Tomo I) informe N° 529/703 que contiene el establecimiento de los hechos que rodearon la muerte de la víctima de autos y declaración policial de Doris Nelfa Antimán Jara y Selfa Haidée Antimán Nahuelquín.

B.11.3. A fs. 172 a fs. 174 (Tomo I) informe N° 2738/703 que individualiza al sacerdote Doménico Sartori Lionzo.

B.11.4. A fs. 178 a fs. 240 (Tomo I) informe N° 2892/702 que identifica a la víctima y testigos de los hechos investigados.

B.11.5. A fs. 267 a fs. 355 (Tomo I) informe N° 5145/702 que contiene la identificación e individualización del personal de la época en la 2° Comisaria de Puerto Aysén.

B.11.6. A fs. 395 a fs. 408 (Tomo I) informe N° 893/702 declaraciones voluntarias de Santiago Humberto Salas Vera Omar Rigoberto Vera Cartés, Luis Orellana Garrido y Pedro Villegas Barrientos.

B.11.7. A fs. 453 a fs. 464 (Tomo I) informe N° 3203/702 declaraciones voluntarias de Víctor Heraldo Cuevas Seguel y Alberto Daniel Velásquez Barría.

B.11.8. A fs. 517 a fs. 594 (Tomo II) informe N° 5499/702 que contiene declaraciones voluntarias de Olegario Oyarzun Fuentealba, Emilio Alarcón Vera, Benito Nactoch Ojeda, Abel Santana Cárcamo, Milton Zúñiga Sandoval, Lucio Villegas García, José Ortega Peña, Dante Cárdenas Contreras, Marcelo Soto Aguilar, Juan Arriagada Alvarado, Silvio Varela Orias, Germán Bastidas Buijuy, Juan Rebolledo Jiménez, Luis Castro Castro, Juan Formantel Cárdenas, Hugo Guíñez Concha, Odilio Flores Valenzuela y Alejandro Huaiquil Sánchez.

B.11.9. A fs. 726 a fs. 738 (Tomo II) informe N° 554/702 declaración voluntaria de Víctor Guillermo Gatica Pizarro.

B.11.10. A fs. 767 a fs. 803 (Tomo II) informe N° 2063/702 declaraciones voluntarias de Enrique Alejandro Pizarro Pinto, Osvaldo del Carmen

Mercegue Andrade, Jaime Daniel Díaz Castro, Luis Barrientos Soto, Jorge Waldemar Paillan Agüero, Daniel Mansilla Ruiz, Juan Guichapani Ayan, Juan Oyarzo Muñoz, Marco Gallardo Paredes, Víctor Alvarado Díaz y Juan Villegas Barrientos.

B.11.11. A fs. 881 a fs. 900 (Tomo III) informe N° 4212/703 declaraciones voluntarias de Alejandro Rivadeneira Piñeiro, Patricio del Carmen Arancibia Tapia, Pedro Bustos Montesinos, José Molina Fuentes y Luis Navarro Pinto.

B.11.12. A fs. 902 a fs. 938 (Tomo III) informe N° 4658/702 declaraciones voluntarias de Eden Antimán Nahuelquín, Oscar Barahona Aguilar, Humberto Haro Vargas y Carlos Aguayo Zamora.

B.11.13. A fs. 949 a fs. 961(Tomo III) informe N° 5203/702 contiene declaraciones voluntarias de Osvaldo Mercegue Andrade, Manuel Flores Mondaca, Sergio Toledo Pérez y Gerardo Moya Arrepol.

B.11.14. A fs. 1022 a fs. 1036(Tomo III) informe N° 23/702 declaraciones voluntarias de René Vera Barría, Pastorisa de Jesús Arriagada Loayza y Guillermo Bravo Craig.

B.11.15. A fs. 1042 a fs. 1057(Tomo III) informe N° 381/702 contiene declaraciones voluntarias de Bernardo Peña Lizama, Patricio Toledo Mella, Juan Morales Araneda y Emilio Pérez Mora.

B.11.16. A fs. 1086 a fs. 1093(Tomo III) informe N° 3506/702 declaración voluntaria de Doris Nelfa Antimán Jara.

B.11.17. A fs. 1113 a fs. 1121 (Tomo III) informe N° 864/702 declaraciones voluntarias de Santiago Humberto Salas Vera y Humberto Hari Vargas.

B.11.18. A fs. 1224 a fs. 1231 (Tomo III) informe N° 3710/702 contiene la ubicación de las dependencias del club deportivo Lord Cochrane, adjuntado fotografías del lugar y declaración voluntaria de Juan Carlos Ballesteros Muñoz.

B.11.19. A fs. 1336 a fs. 1338 (Tomo III) informe N° 7377/702 contiene la identificación de los últimos domicilios de Daniel Velásquez Barría y Víctor Cuevas Seguel.

B.11.20. A fs. 1441 a fs. 1452 (Tomo III) informe N° 4706/703 contiene identificación de domicilios de carabineros que integraban el tercer turno del día 28 de diciembre de 1985 en la Segunda Comisaria de Puerto Aysén.

B.11.21. A fs. 1440 a fs. 1484 (Tomo III) informe N° 4706/703 contiene individualización de testigos de la época.

B.11.22. A fs. 1765 a fs. 1767(Tomo V) informe N° 3369/702 contiene individualización de testigos de la época.

B.11.23. A fs. 1771 fs. 1772 (Tomo V) informe N° 3369/702 contiene individualización de testigos de la época.

B.11.24. A fs. 1843 a fs.1851 (Tomo V) informe N° 1901/702 declaración voluntaria de Jaime Daniel Díaz Castro y Víctor Heraldo Cuevas Seguel.

B.11.25. A fs. 1853 a fs. 1855 (Tomo V) informe N° 2805/702 contiene individualización de testigos de la época.

B.11.26. A fs. 1877 a fs. 1882(Tomo V) informe N° 4473/702 declaración voluntaria de Carlos Edison Vergara Quezada.

B.11.27. A fs. 1913 a fs. 1913 vuelta (Tomo V) informe N° 4464/702 contiene individualización de testigos de la época.

B.11.28. A fs. 1957 a fs. 1963(Tomo V) informe N° 2007/703 contiene ubicación de testigos de la época.

B.11.29. A fs. 1966 a fs. 1968 (Tomo V) informe N° 4988/702 contiene individualización y ubicación de testigos de la época.

9°) Artículo 488 del Código de Procedimiento Penal. Que los elementos de convicción antes reseñados constituyen presunciones judiciales, que por reunir las exigencias del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, permiten tener legalmente acreditado que:

A.- Que a partir del 11 de septiembre de 1973, a raíz de los sucesos acaecidos en el país, en todas las comisarías se formó un grupo operativo denominado “comisión civil”, dedicado a labores de inteligencia que consistían en averiguar situaciones de búsqueda de información respecto de grupos violentistas, detención de personas que estaban consideradas en los bandos militares, entre otras; es decir, eran labores que escapaban a los procedimientos comunes policiales [Lo anterior consta en causas rol 113.987 del ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, rol 14-2013 del ingreso de la Ilma. Corte de Apelaciones de Valdivia, rol 45.359 del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, entre otras, todas seguidas por este Tribunal y que son de público conocimiento.]

En el caso de la Segunda Comisaría de Puerto Aysén, tal comisión civil estuvo integrada por el cabo segundo de carabineros Alberto Daniel Velásquez Barría y el cabo primero de carabineros Víctor Heraldo Cuevas Seguel, entre otros [según consta de declaraciones de Alberto Daniel Velásquez Barría a fs. 68 (Tomo I); de Jorge Waldemar Paillan Agüero a fs. 790 (Tomo II); de Osvaldo del Carmen

Mercegue Andrade a fs. 868 (Tomo II); de Víctor Heraldó Cuevas Seguel a fs. 1.849 (Tomo IV) entre otros antecedentes].

B.- Que en este contexto, Rubén Armando Antimán Nahuelquín, 45 años de edad, casado y con cuatro hijos, el día 27 de diciembre de 1985, en horas de la tarde, llegó a su casa en la ciudad de Puerto Aysén, donde vivía junto a su hija Doris Nelfa Antimán y su madre Vitalia del Carmen Nahuelquín, momento y lugar donde tuvo una discusión con su madre, empujándola y haciéndola caer, producto de lo cual esta concurrió hasta la Segunda Comisaría de Carabineros de Puerto Aysén para hacer la respectiva denuncia por agresiones [Según consta de declaración de Doris Nelfa Antimán Jara a fojas 27 y fs. 107 (Tomo I); Informe de la Segunda Comisaría de Carabineros de Puerto Aysén a fs. 74 (Tomo I) y fs. 1.722 (Tomo V); de Parte N° 409 emitido por la Segunda Comisaría de Carabineros de Puerto Aysén a fs. 1.719 (Tomo V); de declaración de Vitalia Nahuelquín Reinaldo a fs. 1.724 (Tomo V) entre otros antecedentes].

C.- Que producto de la denuncia realizada, un grupo de Carabineros de la Segunda Comisaría de Puerto Aysén llegó hasta la casa de Rubén Antimán en su búsqueda, sin poder hallarlo pues este, al tener conocimiento que los carabineros lo buscarían, salió de su casa para no ser encontrado [Según consta de declaración de Doris Nelfa Antimán Jara a fojas 27 (Tomo I) y fs. 1091 (Tomo III); de declaración de Víctor Heraldó Cuevas Seguel a fs. 461 (Tomo II) entre otros antecedentes]

D.- Que luego de esto, el día 28 de diciembre de 1985, en horas de la noche, Rubén Antimán regresa a su casa golpeado y quejándose de dolor, siendo recibido por su hija Doris Antimán, a quien le informa que los carabineros lo habían encontrado y golpeado y que entre sus agresores se encontraba el “zorro Velásquez” y “Cuevas”. Posteriormente Miguel Ángel Antimán Jara, hijo de la víctima, relata que ese día llegó a la casa de su padre y escuchó que se quejaba en el dormitorio, por lo que entró y le preguntó qué le había ocurrido, contestándole que le había pegado “el zorro Velásquez” y “Cuevas”. Este declarante afirma que su padre gritaba mucho a causa del dolor, por lo que le ofreció llevarlo al hospital, a lo que la víctima se negó. [Según consta de declaración de Doris Antimán Jara a fs. 27, fs. 107, fs. 169 (Tomo I) y fs. 1.091 (Tomo III) y declaración de Miguel Ángel Antimán Jara de fs. 1.890 (Tomo V) entre otros antecedentes].

Producto de las lesiones sufridas, debió ser ingresado al Hospital de Puerto Aysén, el día 29 de diciembre de 1985, lugar donde su situación se agravó

por lo cual fue trasladado hasta el hospital de Coyhaique, siendo ingresado al servicio de urgencia de ese recinto hospitalario el día 02 de enero de 1986. [Según consta en informe del director de Hospital Regional de Coyhaique a fs. 12 (Tomo I); en declaración de Francisco Otárola Zapata a fs. 26, (Tomo I) entre otros antecedentes]. Allí, en el Hospital Regional de Coyhaique, su hermana Selma Antimán fue a visitarlo y, luego de insistir, pudo ingresar a verlo y conversar con él. Su hermano la reconoció y le contó lo sucedido, señalándole que quienes lo habían golpeado eran el cabo de carabineros Heraldos Cuevas, el yerno de la “Tila Osorio” y otro que no conocía. Tiempo después supo que el yerno de la “Tila Osorio” se trataba de Alberto Velásquez Barría. [Según consta de declaración de Sella Antimán Nahuelquín a fs. 29, fs. 136 y fs. 252 (Tomo I) y declaración de Julia Bórquez Antimán de fs. 1.972 (Tomo VI) entre otros antecedentes].

Posteriormente, el 8 de febrero de 1986, Rubén Antimán fallece en el Hospital de Coyhaique, a consecuencia de un “traumatismo de tórax, con el consecuente pneumotórax izquierdo, atribuible a terceros” según lo señalado por la autopsia. Autopsia que se realizó a más de un mes de la agresión sufrida, habiéndose realizado previamente tres cirugías a nivel de tórax, de acuerdo a lo que declara el médico encargado de este informe [Según consta en certificado de defunción de Rubén Antimán Nahuelquín a fs. 4, fs. 9, fs. 14, fs. 116 (Tomo I), informe de autopsia de fs. 17 (Tomo I), declaración de Carlos Édison Vergara Quezada de fs. 1.880 (Tomo V) entre otros antecedentes].

Como puede observarse con los antecedentes probatorios anteriores, carabineros sabía por el parte de la señora Vitalia Nahuelquín, que debían encontrar a Rubén Antimán Nahuelquín. El grupo de carabineros, según lo relatado, era de al menos tres, lo que implica que estaban en superioridad numérica en relación a la víctima y bajo ese contexto aprovecharon la situación y procedieron a agredirlo y lesionarlo de tal forma, como relata la autopsia, que terminó días posteriores con la muerte de Rubén Antimán. Lo anterior, sumado a que la víctima, luego de ser golpeada, fue abandonada en la vía pública, teniendo que llegar por sus propios medios a su hogar. Cabe agregar a esto que la institución carabineros tampoco ha facilitado la investigación, pues se solicitó el sumario sin que hasta la fecha este Tribunal tenga ningún antecedente sobre la materia, lo que revela la política en esa época de impunidad respecto a la represión que había sobre la población civil.

E.- Que cabe hacer presente, que el relato de los testigos que conversaron con la víctima y señalan los nombres de los agresores, coinciden con

el turno de carabineros del día 28 de diciembre de 1985, en cuya nómina aparece mencionado Alberto Velásquez Barría, y, si bien en dicha nómina no se registra a Víctor Cuevas Seguel, es este mismo quien en su declaración entregada en causa rol N° 4.769 (seguida por la muerte de Rubén Antimán Nahuelquín) indica que ese día alrededor de las 21:00 horas tuvo que reemplazar al suboficial de guardia hasta las 8:00 del día siguiente, esto, además de declarar posteriormente que fue a buscar al Sr. Antimán a su casa para dar cumplimiento a una orden de investigar por el delito de lesiones. [Según consta en nómina de fojas 143 y fs. 238 (Tomo I) y declaración de Víctor Cuevas Seguel de fojas 69 (Tomo I) y fs. 461 (Tomo II) entre otros antecedentes]

10°) Calificación. Que los hechos reseñados en esta etapa procesal son constitutivos del delito de **homicidio calificado** en su carácter de lesa humanidad, en la persona de **Rubén Armando Antimán Nahuelquín**, previsto y sancionado en artículo 391 N°1, circunstancias primera, esto es, con alevosía, del Código Penal vigente a la época de los hechos.

11°) Calificación. Que el ilícito antes reseñado, es además delito de **lesa humanidad**. Así se ha pronunciado este Tribunal, la ltma. Corte de Apelaciones de Temuco y la Excm. Corte Suprema en las siguientes causas tramitadas ante este Ministro en Visita Extraordinaria:

A. Causa rol 27.525 del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el delito de homicidios calificados de Segundo Cayul Tranamil, sentencia de 26 de diciembre de 2014;

B. Causa rol 27.526 del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el homicidio calificado de Juan Segundo Palma Arévalo y Arcenio del Carmen Saravia Fritz, sentencia de 18 de diciembre de 2014;

C. Causa rol 45.345 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de homicidios calificados de Juan Tralcal Huenchumán, sentencia de 11 de diciembre de 2014;

D. Causa rol 113.990 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio de Manuel Alberto Burgos Muñoz, sentencia de fecha 06 de noviembre de 2015;

E. Causa rol 113.989, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado de Segundo Enrique Candía Reyes, sentencia de fecha 18 de abril de 2016;

F. Causa rol 18.780 del Juzgado de Letras de Curacautín, seguida por el delito de homicidio de Jorge San Martín Lizama, sentencia de fecha 28 de septiembre de 2015;

G. Causa rol 29.877, del ingreso del Juzgado de Letras de Pitrufulquén, seguida por el delito de homicidios calificados de Nicanor Moyano Valdés, sentencia de 25 de enero de 2016;

H. Causa rol 45.344, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de Homicidio calificado de Osvaldo Moreira Bustos y apremios ilegítimos de Juana Rojas Viveros, sentencia de 23 de marzo de 2016;

I. Causa rol 45.371, del Juzgado de Letras de Lautaro, por el delito de apremios ilegítimos de Jorge Contreras Villagra y otros, sentencia de 17 de agosto de 2016;

J. Causa rol 45.342, del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de homicidio en la persona de Gumerindo Gutiérrez Contreras, sentencia de 09 de octubre de 2015;

K. Causa rol 29.869, del Juzgado de Letras de Pitrufulquén, por el homicidio de Guillermo Hernández Elgueta, sentencia de 29 de diciembre de 2016;

L. Causa rol 27.527, del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el delito de homicidio de Anastasio Molina Zambrano, sentencia de 15 de septiembre de 2016;

M. Causa rol 114.001, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el secuestro calificado de Osvaldo y Gardenio, ambos de apellido Sepúlveda Torres, sentencia de 17 de noviembre de 2016;

N. Causa rol 113.986, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el homicidio de Moisés Marilao Pichún, sentencia de fecha 24 de junio de 2016;

O. Causa rol 63.541, del Juzgado de Letras de Angol, seguida por el homicidio de Sergio Navarro Mellado, sentencia de 27 de mayo de 2016;

P. Causa rol 45.363, del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de secuestro calificado de Gervasio Huaiquil Calviqueo, sentencia de 19 de mayo de 2017;

Q. Causa rol 114.048, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el secuestro calificado de Arturo Navarrete Leiva, sentencia de 10 de febrero de 2017;

R. Causa rol 10.868, del Primer Juzgado del Crimen de Puerto Montt, seguida por el delito de apremios ilegítimos o aplicación de tormentos seguida de

muerte en la persona de Juan Lleucún Lleucún, sentencia de 22 de noviembre de 2017;

S. Causa rol 114.003, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio de Gabriel Salinas Martínez, sentencia de 10 de noviembre de 2017;

T. Causa rol 10.851, de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, seguida por el homicidio simple, en carácter de reiterado de Pedro Antonio Bahamonde Rogel, José Santiago Soto Muñoz, Héctor Hugo Maldonado Ulloa y José Mañao Ampuero, sentencia de 20 de enero de 2016;

V. Causa rol 10.854, del Primer Juzgado de Letras de Puerto Montt, seguida por el homicidios calificados en las personas de Dagoberto Segundo Cárcamo Navarro, José René Argel Marilicán, Adolfo Omar Arismendi Pérez, Carlos Mansilla Coñuecar, Jorge Melipillán Aros, José Armando Ñancuman Maldonado, sentencia de 28 de octubre de 2017;

W. Causa rol 45.359 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado en la persona de Domingo Huenul Huaquil, sentencia de 31 de agosto de 2017.

X. Causa rol 54.035 del Primer Juzgado de Crimen de Puerto Montt, apremios ilegítimos en las personas de Mario Enrique Contreras Vega, Cesar Vladimir Leiva Garrido, Domingo Álvarez Cárdenas, Raúl Ángel Andrade Oyarzún, Marco Antonio Romero Arias, Enrique Becker Álvarez, Carlos Jerges Torres Vera, Noé Alejandro Cárdenas Alvarado, Werne Víctor Haro Oyarzún, sentencia de 23 de diciembre de 2017.

Y. Causa rol 65.535 del Juzgado de Letras de Angol, seguida por los apremios ilegítimos en las personas de Manuel Marcelino Ramírez Zurita, sentencia de 25 de mayo de 2018.

Z. Causa rol 45.343, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el homicidios calificados en las personas de Segundo Lepín Antilaf, Juan Segundo Nahuel Huaquimil, Julio Augusto Ñiripil Paillao, Segundo Levío Llaupe, Víctor Yanquin Tropa y Heriberto Collío Naín, sentencia de 09 de noviembre de 2020.

A.1 Causa rol 57.071, del Juzgado de Letras de Victoria seguida por el Homicidios calificados en la persona de Jorge Arturo Toy Vergara, perpetrado en la comuna de Victoria, sentencia de 09 abril de 2021.

B.2. Causa rol 113.997, del Juzgado de Juzgado del Crimen de Temuco para investigar el delito de Secuestro Calificado en la persona de

Segundo Elías Llancaqueo Millán, perpetrado en la comuna de Lautaro en el mes de abril de 1975, sentencia de 02 de junio de 2021.

C.3 Causa rol 45.354, del Juzgado de Letras de Lautaro seguida por el secuestro calificado de Samuel Huichallán Levián, Ceferino Antonio Yaufulem Mañil, Miguel Eduardo Yaufulem Mañil y Oscar Rumualdo Yaufulem Mañil, sentencia de 16 de junio de 2021.

D.4 Causa rol 45.361, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de Manuel Elías Catalán Paillal, sentencia de 23 de diciembre de 2020;

E.5 Causa rol 114.000, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio simple de Waldo Enrique Rivera Concha, sentencia de 29 de abril de 2020;

F.6 Causa rol 4-2010, de la Corte de Apelaciones de Valdivia, seguida por el homicidios calificados en la persona de Víctor Carreño Zúñiga, sentencia de 16 de abril de 2018;

G.7 Causa rol 45.362, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado en la persona de José Domingo Llabulén Pilquinao, sentencia de 16 de febrero de 2018.

H.8 Causa rol 114.007, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidios calificados en la persona de Exequiel Zigomar Contreras Plotsqui, sentencia de 23 de octubre de 2018.

I.9 Causa rol 114.042, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidios calificados en la persona de José Alberto Fuentes Fuentes, sentencia de 17 de agosto de 2018.

J.10 Causa rol 113.996, del Primer Juzgado del crimen de Temuco, seguida por el Homicidios calificados y apremios ilegítimos en la persona de Tomás Segundo Esparza Osorio y apremios ilegítimos en la persona de Javier Enrique Esparza Osorio, sentencia de 30 de junio de 2018.

K.11 Causa rol 29.979 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el homicidios calificados de Domingo Obreque Obreque, sentencia de 07 de abril de 2014.

L.12 Causa rol 45.365, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el Secuestro Calificado de Luis Armando Horn Roa, sentencia de 25 de febrero de 2021.

M.13 Causa rol 45.367 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de Pedro Millalén Huenchunir, sentencia de 11 de mayo de 2022.

N.14 Causa rol 44.305 del juzgado del Crimen de Puerto Varas, seguida por el homicidios calificados en las personas de Abraham Oliva Espinoza y Luis Espinoza Villalobos, sentencia de 25 de enero de 2019.

O.15 Causa rol 45.368 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de secuestro calificado de José Bernardino Cuevas Cifuentes, sentencia de 30 de marzo de 2019.

P.16. Causa rol 114.103 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el delito de secuestro calificado en la persona de Alejandro Ancao Paine, sentencia de 03 de septiembre de 2021.

Q.17. Causa rol 113.991 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el delito de homicidio calificado en la persona de Ramón Carrero Chanqueo, sentencia de 21 de noviembre de 2022.

R.18. Causa rol 113.478 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el delito de homicidio calificado en la persona de Luis Omar Torres Antinao, sentencia del 13 de junio de 2019.

S.19. Causa rol 114.051 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el delito de secuestro calificado en la persona de José Edulio Muñoz Concha, sentencia del 30 de abril de 2021. Todos los anteriores fallos condenatorios y ejecutoriados.

T.20. Causa rol 5-2013 del ingreso Criminal de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, seguida por el delito de aplicación de tormentos en la persona de Harry Cohen Vera, sentencia de fecha 30 de septiembre de 2019.

U.21. Causa rol 113.999 del ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el delito de aplicación de tormentos con resultado de muerte de Nolberto Enrique Teodoro Seiffert Dossow, sentencia de fecha 03 de octubre de 2019.

V.22. Causa rol 114.058 del ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el delito de apremios ilegítimos (tormentos) en la persona de Manuel Antivil Huenqueo, sentencia de 30 de octubre de 2019.

W.22. Causa rol 6.345 del ingreso Juzgado del Crimen de Chile Chico, seguida por el delito de Homicidio calificado de José Ananías Zapata Carrasco, sentencia de fecha 09 de marzo de 2020.

X.23. Causa rol 114.043 del ingreso criminal Primer Juzgado del Crimen de Temuco seguida por el delito de homicidio calificado en la persona de Gonzalo Hernández Morales, sentencia de fecha 15 de mayo de 2020.

Y.24. Causa rol 45.464 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de Secuestro Calificado de Benedicto Poo Álvarez, sentencia de fecha 06 de junio de 2021.

Z.25. Causa rol 18.782 del ingreso del Juzgado de Letras de Curacautín, para investigar los delitos de secuestro simple, apremios ilegítimos y homicidio calificado de Julio San Martín San Martín, sentencia de fecha 28 de julio de 2022.

A.26. Causa rol 114.039 del ingreso criminal del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, para investigar el delito de Homicidio Calificado en las personas de Diego Celso Saldías Cid, sentencia de fecha 21 de septiembre de 2022.

B.27. Causa rol 45.355 del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, para investigar el delito de Secuestro Calificado de José Ignacio Beltrán Meliqueo, sentencia de 20 de abril de 2023.

C. 28. Causa rol 18-2011 del ingreso de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, para investigar el delito de homicidio simple de José Avelino Runca, sentencia de 27 de julio de 2020.

12°) Concepto de Lesa Humanidad. Que sobre lo anterior y en cuanto al origen, evolución histórica y definición de los delitos de lesa humanidad el concepto de delitos de "lesa humanidad" o de "leyes o normas de la humanidad", surgieron durante el siglo XX y ha permanecido en constante evolución a través del tiempo. Este concepto, tuvo su origen en varios instrumentos internacionales a saber:

A. Convención de la Haya sobre las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre de 1899 y 1907. Fundamento del concepto de: "leyes de la humanidad" plasmado en la Cláusula Martens: "Mientras que se forma un código más completo de las leyes de la guerra, las altas partes contratantes juzgan oportuno declarar que en los casos no comprendidos en las disposiciones reglamentarias adoptadas por ellas, las poblaciones y los beligerantes permanecen bajo la garantía y el régimen de los principios del derecho de gentes preconizados por los usos establecidos entre las naciones civilizadas, por las leyes de la humanidad y por las exigencias de la conciencia pública" (**Óscar López Goldaracena. Derecho**

Internacional y crímenes contra la humanidad. 2008. Fundación de Cultura Universitaria, Uruguay. pp. 29 – 34).

B. Que en la Declaración de 28 de mayo de 1915 de los Gobiernos de Francia, Gran Bretaña y Rusia en la que denunciaron las masacres a los armenios por parte del Imperio Otomano como crímenes de lesa humanidad, tal como lo expresan los autores (Derechos Humanos: Justicia y Reparación. **Ricardo Lorenzetti**, editorial Sudamericana). Hay que precisar, como lo ha dicho la literatura, que el crimen contra la humanidad excede con mucho en su conducta el contenido ilícito de cualquier otro delito. Asimismo, el Derecho Penal no está legitimado para exigir la prescripción de las acciones emergentes de estos delitos y si lo hiciere sufriría un grave desmedro ético: no hay argumento jurídico ni ético que le permita invocar la prescripción (Nueva Doctrina Penal, “Notas Sobre el Fundamentos de la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad” **Eugenio Raúl Zaffaroni**, pág. 437 a 446). Del mismo modo, el crimen de lesa humanidad es aquel injusto que no solo contraviene los bienes jurídicos comúnmente garantizados por las leyes penales, sino que al mismo tiempo suponen una negación de la personalidad moral del hombre, esto es, se mira al individuo como cosa. La característica principal es la forma cruel y bestial con que diversos hechos criminales son perpetrados. Sin perjuicio de otros elementos que también lo constituyen como son la indefensión, la impunidad, que serán analizados con posterioridad. Es un ultraje a la dignidad humana y representan una violación grave y manifiesta de los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales pertinentes.

13°) Que en una reflexión más integral podemos indicar que una perspectiva para abordar la justicia de transición es el valor social y jurídico de la verdad, esto es, la función que asume el concepto de verdad no sólo en contextos específicos, sino también en la justicia de transición y en especial en el plano más amplio de la dinámica social política y jurídica. Así Bernard Williams nos plantea las virtudes de la verdad como la sinceridad y la precisión en referencia a la realidad, son factores esenciales en la dinámica social. El mismo autor plantea la conexión entre verdad y política e indica que la verdad constituye una característica esencial de la democracia por cuanto asegura la libertad de los ciudadanos contra el poder tiránico. Plantea también que la exigencia de que el poder actúe el valor de la verdad determina el factor efectivamente democrático en el ámbito del sistema político liberal. Esto es, el valor político de la verdad deriva

del hecho de que la medida de un sistema político funda sus relaciones entre el poder y los ciudadanos en la verdad y determina el grado de democracia del sistema. El poder tiránico se funda en una verdad envenenada, es decir, sobre una mentira, mientras que el sistema democrático se funda en el principio de verdad. Por su lado, Michael Lynch insiste en el valor fundamental de la verdad en el contexto de la democracia liberal, puesto que señala que si nos importan los valores liberales, nos debe importar la verdad. Por otro lado, desde un punto de vista más amplio el principio de la verdad se configura como una condición esencial para la efectividad del ordenamiento jurídico, esto es, la efectividad del ordenamiento jurídico se funda en la hipótesis de que el sistema sea capaz de establecer la verdad respecto de tales conductas. Más específico, la consideración del valor jurídico de la verdad se refiera a la administración de justicia. En términos más simples, en palabras de Gerome Frank, no existe una decisión justa que se funde en hechos equivocados. Es decir, la verdad de los hechos es una condición necesaria para que se arribe a una decisión justa. A propósito de la justicia de transición ha habido un discurso ambiguo, puesto que se ha expresado que el silencio y el olvido respecto de los crímenes pasados son el mejor método para facilitar la construcción de la nueva sociedad. Esto puede ser respondido no solo por las víctimas sino por la sociedad entera en cuanto puede ser difícil o imposible aceptar que los graves actos de violencia cometidos contra miles de personas sean silenciados en nombre de la pacificación social. Hay que reflexionar sobre las dudas que surgen, sobre el tipo de paz social que se quiere lograr sobre la base de la falta de verdad efectiva sobre los crímenes y las correspondientes responsabilidades relacionadas con los hechos cometidos. El principal efecto del silencio es que antiguos criminales escapan masivamente de la justicia (ejemplos caso del Alemania post nazista y la Italia post fascista) se convierten en buenos y honorables ciudadanos de la democracia, en ese sentido se pregunta el autor si realmente se puede hablar de democracia cuando se habla de un sistema político que evita sistemáticamente la búsqueda de la verdad sobre sus precedentes históricos inmediatos, no obstante ser clara la cantidad y calidad de los crímenes cometidos. En consecuencia, citando nuevamente a Williams, es que el diagnóstico es negativo respecto a las pretendidas democracias que sistemáticamente rechazan la búsqueda de la verdad. **(Michele Taruffo (2018): “La verdad. Consideraciones sobre la verdad y justicia de transición” En Revista de Estudios Judiciales, año 2018, n° 5, ediciones DER. pp. 19 – 30).**-

C. DECLARACIÓN INDAGATORIA

14°) Que prestando declaración indagatoria **VICTOR HERALDO CUEVAS SEGUEL** (40 años de edad a la época de los hechos) quien declaró de fs. 460 a fs. 462 (Tomo II); de fs. 503 a fs. 505 (Tomo II); de fs. 507 a fs. 509 (Tomo II); de fs. 1.364 a fs. 1.369 (Tomo III); de fs. 1.849 a fs. 1.849 vta. (Tomo V).

En declaración extrajudicial de fecha 06 de julio de 2012 rolante a **fs. 460 a fs. 462 (Tomo II)** (cuya copia consta a fs. 503 a fs. 504 Tomo II), espeta que se contrató el año 1967 en Carabineros de Chile en la Segunda Comisaría de Puerto Aysén, para la Prefectura General de Santiago, relatando su carrera funcionaria y en lo pertinente que en el año 1970 es destinado a la Primera Comisaría Coyhaique, después de permanecer alrededor de seis u ocho meses aproximadamente, permutó a la Segunda Comisaría Puerto Aysén, unidad donde permaneció hasta el año 1985 o 1986. Que su función dentro de la Segunda Comisaría de Puerto Aysén, era la de orden y seguridad, y como chofer de los comisarios Ortega y Mario Héctor Díaz Tabilo, además, realizó servicio de patrullajes ordinarios. En relación a Rubén Armando Antimán Nahuelquín, puede decir que lo conoce desde la niñez, ya que se criaron en el mismo barrio, y “nos ubicábamos mucho”. Que posteriormente, se fue de Puerto Aysén, ya que ingresó a Carabineros de Chile en la ciudad de Santiago, y regreso a su ciudad en el año 1970, donde se percató que esta persona tenía un restaurant, en la calle Eusebio Ibar, Puerto Aysén. Recuerda que en varias ocasiones vio a Rubén Antimán Nahuelquín, detenido en la unidad por estado de ebriedad. Que nunca le correspondió detenerlo por este delito, pero si fue detenido por otros funcionarios policiales de la Segunda Comisaria Puerto Aysén. Recuerda que el Antimán, se separó de su señora producto de los malos tratos que éste le daba, todo ello bajo los efectos del alcohol, posteriormente, este sujeto se fue a vivir con su madre. No recuerda bien si fue en el mes de diciembre del año 1984, cuando el cabo primero Guillermo Villalobos, le solicita que le trabaje una orden de investigar, por el delito de lesiones emanada del Juzgado del Crimen de Puerto Aysén, en contra de Rubén Armando Antimán Nahuelquín, con el fin de que éste sujeto concurra a la segunda comisaría a prestar declaración con el cabo primero Villalobos, ya que, éste era el funcionario a cargo de la investigación. Para dar cumplimiento a lo solicitado, fue en el furgón Z.024, en compañía de dos funcionarios más antiguos que el deponente, de los cuales no recuerda sus nombres, posteriormente, se trasladaron a calle Doctor Steffen, específicamente al domicilio de la madre de Antimán, donde el pernoctaba, al llegar a su vivienda, lo atendió su mamá, de la

cual no recuerda su nombre, y le preguntó por su hijo Rubén, y ella le manifestó que no se encontraba en la casa, por lo que procedió a retirarse del lugar. Al llegar a la Comisaría, le hizo entrega de la orden al cabo primero Villalobos, informándole que el sujeto no se encontraba en su domicilio. Consecutivamente, no recuerda fecha, el capitán Julio Soto Soto, le informa que debe declarar en un sumario administrativo que se abrió producto de la muerte de Rubén Antimán Nahuelquín, dicha investigación fue requerida por la Vicaría de la Solidaridad de Santiago, debido a que familiares de la víctima habrían sindicado a personal de la Segunda Comisaría Puerto Aysén, como los autores de las lesiones que le provocaron la muerte. El capitán Soto, fue el fiscal de este sumario administrativo, y le indicó los pormenores de la investigación, de los cuales recuerda que Antimán Nahuelquín, habría sido golpeado por funcionarios policiales, y que posiblemente el deponente habría sido uno de ellos, involucrando además al carabinero Alberto Velásquez Barría, y a cuatro carabineros más, de los cuales no recuerda sus nombres. Que al finalizar el sumario administrativo, se demostró que él y el resto de los funcionarios, no tenían participación en los hechos investigados. Que tomó conocimiento de parte del capitán Soto, que la “Chaura”, quien tenía un restaurant a los pies de la casa de Antimán, señaló que ella en horas de la noche, sintió unos gritos de auxilio que provenían del sitio de Antimán, seguidamente, ésta señora miró por una ventana de su casa hacia el patio, percatándose que Antimán estaba siendo agredido por su madre con un bastón, que Antimán quedó tendido en el piso del patio. Que desde que se cerró el sumario administrativo por la muerte de Antimán Nahuelquín, nunca más ha declarado en esta investigación.

En declaración judicial de fecha 12 de septiembre de 2012 rolante a **fs. 507 a fs. 509 (Tomo II)** ratifica su declaración extrajudicial de fecha de 6 de julio de 2012. Que efectivamente el 16 de agosto de 1966 egresó del grupo de instrucción de Carabineros de Chile de Santiago y destinado a unidades de Santiago, luego a Coyhaique por un lapso de 3 años, luego a la Segunda Comisaría de Puerto Aysén 1971 a 1986, Puerto Chacabuco 1973 a 1975 dependiente de Puerto Aysén, luego en Puerto Varas de 1986 hasta 1989 y finalmente se retira en la Segunda Comisaría de Puerto Montt en el año 1991. Escruta que no tiene participación alguna en la muerte de Rubén Antimán Nahuelquín a quien conocía desde la niñez, estudiaron juntos en la escuela y se criaron en el mismo barrio. Que efectivamente cuando este falleció, él prestaba servicios en la Segunda Comisaría de Puerto Aysén, ubicada en sector La Balsa. Estuvo varios años, pero no recuerda cuanto tiempo, fue agregado a diferentes

retenes dependientes de la comisaría, también chofer del comisario, y de la prefectura. Que en esa época tenía dieciocho años de servicio con el grado de cabo primero. Reitera que ubicaba perfectamente a Rubén Antimán Nahuelquín, quien además fue detenido en muchas ocasiones por ebriedad y desordenes. Recuerda que este se separó de su mujer, justamente por los malos tratos y los desórdenes que ocasionaba y se fue a la casa de su mamá. No recuerda si fue en el año 1984 o 1985 cuando el cabo Guillermo Villalobos le pasó una orden de investigar para citar a Rubén Antimán a fin de que declarara en la comisaría por lesiones que habría ocasionado ésta persona a su madre, “dicha orden no prosperó por cuanto éste no fue habido en su domicilio”, según lo señalado por su madre. Que luego entregó la orden al cabo Villalobos, manifestándole lo relatado anteriormente. En relación a la muerte de esta persona debe señalar que no tiene conocimiento de cómo habría ocurrido, sin embargo, tiempo después se hizo un sumario administrativo que fue requerido por la Vicaría de la Solidaridad de Santiago, debido a que familiares de la víctima habrían sindicado a funcionarios de la unidad a la cual pertenecía como autores de las lesiones que le provocaron posteriormente la muerte. Que la investigación la realizó el capitán Julio Soto, interrogó a todos los funcionarios de la unidad que participaron en alguna oportunidad en la detención de Antimán Nahuelquín. Que él en lo personal nunca lo detuvo, ya que, como señaló fue conductor de los carros policiales, solamente le correspondía abrir y cerrar la puerta del calabozo del furgón hasta llegar a la guardia de la comisaría donde era entregado al sub oficial de guardia. Desconoce cómo terminó el sumario, pero si puede señalar que el fiscal investigador les manifestó que de acuerdo a los dichos de una vecina, de apellido “Chaura”, ésta vio, días antes de que desapareciera ésta persona, que Antimán estaba siendo agredido por su madre con un bastón, quien quedó tendido en el patio. Que no tiene conocimiento si se habría realizado en la unidad alguna denuncia por presunta desgracia de ésta persona. Que lo lógico es que tendría que haberse hecho, ya que supuestamente y de acuerdo a lo que se le ha leído, el señor Antimán fue agredido a fines de 1985 y encontrado por su hermana el 8 de febrero de 1986 y al día siguiente habría fallecido.

En declaración judicial de fecha 04 de mayo de 2016 rolante a **fs. 1.364 a fs. 1.369 (Tomo III)** ratifica sus declaraciones anteriores. Que prestó declaración el día 18 de junio de 1986 ante el Tribunal de Puerto Aysén, donde relató los hechos en que fue interrogado y en donde dejó constancia de que no tenía ninguna participación en la muerte de Antimán, tampoco participó en

procedimiento policial que se relacionara con la detención de Antimán Nahuelquín y también dijo que ignoraba las razones por las que la familia de Antimán lo estaban inculcando de su muerte. Que después volvió a ser interrogado en la ciudad de Llanquihue el día 6 de junio de 2012 por funcionarios policiales donde manifestó lo mismo, pero además, agregó que por la muerte de Rubén Armando Antimán Nahuelquín se hizo un sumario administrativo al interior de carabineros a cargo del capitán Julio Soto quién lo interrogó junto a otros carabineros y entiende que allí fue sobreseído. Que volvió a ser interrogado por el Tribunal de Puerto Varas el día 12 de septiembre de 2012, donde reiteró su inocencia, en cuanto a no tener ninguna participación en algún procedimiento policial que se relacionara con la detención de esta persona y tampoco ha tenido participación en la muerte de la misma, y volvió a decir que hubo una investigación administrativa al interior de carabineros a cargo del capitán Julio Soto, el cual lo interrogó sobre estos hechos y salió sobreseído, y agregó que Antimán fue agredido a fines del año 1985 por su madre, esto se lo comentó al capitán Soto en la comisaría donde él también estaba. Que fue la madre quién con un bastón le pegó a Antimán Nahuelquín, e incluso la señora "Chaura" dijo que lo había visto botado en el sitio. Vuelve a ratificar todas las declaraciones referidas precedentemente. Preguntado, sí el día 28 de diciembre de 1985, él se encontraba en funciones en la segunda Comisaría de Carabineros de Puerto Aysén responde: que se imagina que sí, porque él estaba activo y era conductor de los vehículos fiscales con servicios de doce horas. Preguntado para que aclare si cumplía labores de carabinero o de conductor, responde: que las dos cosas. De carabinero por orden y seguridad, hacía servicios en las poblaciones y pasaba a la calle, y cuando faltaba conductor lo nominaban a él, porque estaba autorizado por la Escuela de Conductores de Santiago que autoriza para manejar vehículos fiscales. Recuerda que los choferes de servicio de la segunda comisaría efectivamente eran los cabos Washington Agurto, Segundo Catelicán, Milton Zúñiga y cuando faltaba alguno de estos porque salían con permiso lo nominaban a él para hacer el servicio de conductor como correspondía. Que él en realidad era el conductor del comisario Mario Héctor Díaz Tabilo, que los comisarios estaban un periodo determinado de unos tres años más o menos y en ese periodo él conducía el vehículo fiscal, él a cargo del vehículo. Respecto a los carabineros que cumplieron turno el día 28 de diciembre de 1985 y conforme al documento que se le exhibe de fs. 42 a fs. 43 causa Rol N° 4. 769, él no aparece en ninguno de los turnos de ese día porque seguramente se encontraba de franco, esto es, el día anterior él seguramente hizo

un servicio nocturno y por eso le correspondía tener libre todo el día 28 de diciembre de 1985, por esa razón tampoco aparece en la nómina de conductores. En relación al sumario administrativo dispuesto en forma interna por carabineros a raíz de la muerte de Rubén Armando Antimán Nahuelquín, debe decir que a él por lo menos en ese sumario lo interrogó el capitán Julio Soto, que oficiaba de fiscal investigador, poco recuerda al comandante Orlando Correa porque este no lo interrogó, y también respecto al coronel Ramón Sánchez del cual recuerda poco, pero en ningún caso este superior lo interrogó. En esa investigación el capitán Soto le manifestó que tenía una orden emanada de la prefectura, la orden la tuvo que haber dado el coronel Sánchez, para investigar si hubo participación de carabineros en la muerte de Rubén Armando Antimán Nahuelquín, y cuando se le interrogó dijo que no había tenido participación, ni en su detención ni en alguna agresión a Rubén Armando Antimán Nahuelquín que hubiera sufrido y que después le hubiera provocado su muerte. No sabe el resultado del sumario administrativo, pero a él nunca más le interrogaron, por lo que supone que “salí bien”. Respecto a cómo se desarrollaban los turnos de los carabineros, debe señalar que en el caso del día 28 de diciembre de 1985, el tercer turno, según el documento ordinario N° 840, que se le exhibe, lo cumplieron los siguientes funcionarios: cabo primero Aliro Quinan Tecai, a éste él lo conocía porque trabajaban juntos en la misma comisaría; el cabo segundo Alberto Velásquez Barría; también lo conocía porque eran colegas, “ambos aiseninos y ambos carabineros de la misma unidad”; cabo segundo Juan Villegas Barrientos, también lo conoció y era de Aysén; cabo segundo Jorge Talma Talma, a quién también conoció por ser carabineros de la misma comisaría; el carabinero José Salas Vera, lo conoció en Puerto Aysén. Que este turno se desarrolla como sigue: se prepara el turno a las 22:25 horas allí se leen las instrucciones que dan los superiores, tales como buen trato con el público, adecuado uso de las armas según las circunstancias, encargos, casas de protección, rondas en la población. En esta preparación solo intervienen los que van a cumplir el turno. En este caso el más antiguo era el cabo Aliro Quinan Tecai, quien pasa a ser el jefe del turno, a cargo de toda la población y de todos los hechos que puedan pasar durante el servicio del turno. El acompañante del jefe del turno puede ser cualquiera de los otros carabineros, en este caso, cualquiera de los otros cuatro que iban a cumplir el tercer turno, elegido por el jefe del turno. Más el carro del servicio del turno con su conductor. En el caso del tercer turno del día 28 de diciembre de 1985, comenzó a las 23:00 horas y terminó a las 07:00 de la mañana. De los carabineros que

cumplen el turno, todos están facultados para detener a cualquier persona si comete un delito flagrante o sospechoso, ebriedad o desorden. En cuanto a la división de funciones, esa labor le corresponde al jefe del turno, éste nombra a un funcionario que va de punto fijo a la gobernación para que resguarde a esta institución, después nombra a las parejas para que hagan recorrido de población y son los encargados de concurrir y tomar el procedimiento que corresponda cuando ocurren hechos en la población, pero siempre dándole cuenta al jefe del turno que es el responsable final de todo lo que pase en la población y también es responsable de cualquier anormalidad o exceso que cometan los carabineros que tiene a su cargo en el turno. En el caso que se le consulta, el tercer turno del día 28 de diciembre de 1985, dice que seguramente Quinan como jefe del turno nombró a un carabinero como punto fijo de la gobernación y le quedaban otros tres carabineros para patrullar la población, por lo tanto, no pudo hacer dos parejas, sino que seguramente uno de esos tres carabineros salió a patrullar sin pareja, salvo que haya sido acompañado por el conductor del carro, pero no es lo normal. Piensa que sí Antimán Nahuelquín, en teoría, si fue detenido durante el tercer turno, automáticamente tuvo que habersele dado cuenta al jefe del turno que en este caso era Aliro Quinan Tecai, pero más no sabe porque él se encontraba de franco ese día y por lo tanto ignora que pudo haber pasado durante ese tercer turno, ni tampoco sabe los hechos sobre la detención o agresión a esta persona. En cuanto a las declaraciones prestadas por doña Selfa Haidée Antimán Nahuelquín, la conoce porque era hermana de Rubén Armando Antimán Nahuelquín y, además, se encontraba casada con un escribiente de carabineros de apellido Bórquez que vivía en Aysén, la que relata haber conversado con su hermano antes de que éste falleciera, el cual le habría revelado los nombres de los carabineros que lo detuvieron y le dieron una golpiza, entre los cuales menciona a Alberto Velásquez y a Heraldo Cuevas, o sea a él, lo cual desmiente absolutamente, ya que, no ha intervenido en ningún procedimiento policial que se relacionara con su detención y agresión, cree que confundió su nombre “ya que eran súper amigos, ambos aiseninos”, que éste era un poco mayor que el deponente. Que nunca intervino como carabinero en alguna detención de él, salvo los traslados al Tribunal cuando llegaba por ebriedad, e incluso recuerda que varias veces él mismo le canceló la multa para que recuperara su libertad, “por lo que mal podría haberle hecho un mal a mi amigo”. Que tampoco sabe a qué se debe que doña Selfa Heidée Antimán Nahuelquín le haya involucrado a él con Alberto Velásquez como los carabineros que según le confesó su hermano antes

de morir eran los autores de la agresión que sufrió, lo que en su caso desmiente otra vez, por cuanto, el día 28 de diciembre de 1985 en que supuestamente éste, fue agredido y detenido por carabineros, él se encontraba de franco, lo que comprueba con el documento de fs. 42 a fs. 43. Que conoce a Héctor Ulloa Matamala, porque trabajaban en la misma comisaría en los años 1985 y 1986, y conforme al mismo documento que se le ha exhibido aparece cumpliendo el primer turno del día 29 de diciembre de 1985, turno que comenzó a las 07:00 de la mañana y finalizado a las 13:00 horas, a él también lo interrogaron en el sumario administrativo por el capitán Soto al igual que a él, sabe que se fue al norte, pero no lo ha vuelto a ver. Respecto al funcionario, Marcelo Soto Aguilar; éste también era un colega suyo que trabajó en la Segunda Comisaría de Puerto Aysén durante los años 1985 y 1986, que también fue interrogado por el capitán Soto en el sumario administrativo que este llevaba y después supo que se habría radicado en Temuco, pero no lo ha vuelto a ver. Respecto a Alberto Velásquez Barría, dice que es otro colega que trabajó con él en la Segunda Comisaría de Puerto Aysén en el periodo ya referido y también fue interrogado en el sumario administrativo. Aduce que a Aliro Quinan lo perdió de vista hace muchos años, porque el deponente se fue el año 1987 a Puerto Varas, desde la Segunda Comisaría de Puerto Aysén y no volvió a ver a Aliro Quinan Tecai. Que tampoco ha vuelto a ver a Alberto Velásquez Barría. Respecto a Juan Villegas Barrientos, cree que está viviendo en Chiloé, en cuanto a Jorge Talma Talma ignora donde tendrá actualmente su paradero y José Salas Vera era oriundo de Puerto Aysén, pero perdió todo contacto con éste.

En declaración extrajudicial de fecha 12 de marzo de 2019 rolante a **fs. 1.849 a fs. 1.849 vuelta (Tomo V)** en lo pertinente replica su carrera funcionaria y dotaciones que integro, que para el mes de diciembre del año 1985 trabajaba en la Segunda Comisaría de Puerto Aysén, recordando que como jefe de dicha unidad se encontraba el mayor Ortega Neuman o Mario Díaz Tabilo, con el grado de oficiales recuerda al capitán Soto y con el grado de suboficiales al sargento primero Farías y González, suboficial mayor Víctor Rodríguez. En relación a la comisión civil, deja en claro que no recuerda con claridad los integrantes de dicha agrupación en el año 1985, sin embargo, lo que sí recuerda es que fue participe de dicha comisión, pero no recuerda en qué año, solo puede hacer presente que podría haber coincidido con la del mes de diciembre del año 1985. Que dicha comisión, recuerda que estaba conformada por el cabo segundo Luis Armando Quevedo Muñoz, carabinero Velásquez, carabinero Santiago Salas

y dos funcionarios que no recuerda su nombre y él como más antiguo. Como misión fundamental de dicha agrupación era la investigación de abigeatos en la zona, de igual manera, se investigaba diversos delitos comunes, sin tener inconvenientes con persona alguna. En relación a Rubén Antimán Nahuelquín, lo recuerda muy bien, ya que, fue su compañero de colegio de la escuela de los curas, y porque se juntaban a jugar fútbol. Que al salir del colegio cada cual tomó distintos caminos, sin saber nada de Antimán, hasta cuando regresó a Puerto Aysén a trabajar como carabinero. En ese mismo contexto, recuerda que Rubén mantenía problemas con el alcohol, lo que lo llevó a tener problemas familiares, hasta el punto en que las veces que ingresaba como detenido a la comisaría, le pedía ayuda para poder salir a la brevedad, ayuda en que en varias veces le brindó, pagándole la multa para que se fuera en libertad. De lo anterior, recuerda que en una oportunidad el subcomisario Soto quien era el sub jefe de la comisaría, le entregó una orden de investigar al sargento segundo Villalobos para que investigara unas lesiones graves, hecho, que tenía directa relación con la víctima de autos. Conforme a dicha orden se le ordenó ir a citar a Rubén a su domicilio, lugar donde se entrevistó con su madre que mantenía uno de sus brazos enyesado, agregando que su hijo no se encontraba en el inmueble y que por su adicción al alcohol podría estar deambulando en la vía pública. Seguidamente, con posterioridad a la concurrencia a la casa de Antimán, se acercó a la comisaría una señora que recuerda como "Chaura" quien mantenía un restaurant colindante a la casa de la madre de Rubén, quien manifestó que en relación al hecho que investigaba el sargento Villalobos, mientras se encontraba en su lugar de trabajo, escuchó una pelea y gritos que provenían de la casa de Antimán, lugar donde fue a observar lo que estaba ocurriendo, percatándose que la madre de Rubén lo estaba golpeando en su cabeza con el bastón que utilizaba como apoyo en su caminar, en reiteradas ocasiones aprovechando el estado etílico que mantenía su hijo, del cual desconoce el estado en que pudo haber quedado producto de los golpes recibidos. Dice dejar en claro que con posterioridad a este hecho, nunca vio a Rubén detenido en la comisaría, enterándose al poco tiempo que Antimán había fallecido, desconociendo su causa de muerte.

Declaración judicial, de fecha 18 de junio de 1986, rolante de **fs. 69 a fs. 70 (Tomo I)**, quien en lo pertinente dice que es cabo primero de carabineros de dotación de la segunda Comisaría de Carabineros de Aysén. Que el día 28 de diciembre de 1985, asumió como suboficial de guardia el cabo primero Luis Castro Castro y ese mismo día alrededor de las veintiuna a veintidós horas, se le nombró

suboficial de guardia en la comisaría de carabineros, en reemplazo del citado Castro, razón por la cual tuvo que trabajar como suboficial de guardia hasta el día siguiente a las 08:00 horas de la mañana; en las horas que desempeñó su función no recibió ninguna denuncia de doña Vitalia Nahuelquín Reinaldo, ni tampoco recepcionó como detenido a Rubén Antimán Nahuelquín, a quien conocía desde hace muchos años, por cuanto era oriundo de Aysén, y durante años fue empleado de correos de esa ciudad. Que las veces que salió de servicio a la población no recuerda haber detenido a Rubén Antimán Nahuelquín. Lo que si recuerda es que durante el curso del año 1985 cuya fecha no puede precisar, un día le correspondió traer detenidos desde la comisaría hasta el Tribunal, y en esa oportunidad venia detenido Rubén Antimán, por ebriedad y como no tenía dinero para pagar la multa, él mismo, como lo conocía de chico, le paso dinero para cubrir su multa, recargo legales y costas de la causa, a fin de que este pudiera obtener su libertad. Que ignora, si Antimán fue detenido por carabineros y si así fue, no sabe quién o quienes pueden haber tomado este procedimiento. En todo caso, de existir detención en contra de Antimán, debe existir la constancia en el libro de guardia o en los archivos de la comisaría, en ellos se podría saber quiénes fueron sus aprehensores. Reiterando que a él no le cabe ninguna responsabilidad en el hecho. Ignorando el motivo que tiene la familia de Rubén Antimán de inmiscuirlo en un hecho que no le ha cabido ninguna participación, retirando que jamás lo aprehendió y por tanto jamás ha sido apremiado físicamente por él.

15°) Que haciéndonos cargo de las declaraciones indagatorias del acusado, **Víctor Heraldo Cuevas Seguel**, quien fue sometido a proceso a **fs. 1.981 a fs. 2.016 (Tomo VI)**, con fecha 12 de julio de 2021. A **fs. 2.071 a fs. 2.074 (Tomo VI)** con fecha 02 de noviembre de 2021, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, confirma auto procesamiento. **Acusado** según el auto de **fs. 2.096 a fs. 2.131 (Tomo VI)**, con fecha 30 de diciembre de 2021, como autor del delito de homicidio calificado en su carácter de lesa humanidad, en la persona de Rubén Armando Antimán Nahuelquín, perpetrado en la ciudad de Puerto Aysén en el mes de diciembre de 1985. Que si bien el acusado se ubica en la fecha, lugar y sitio del suceso, agrega factores que podrían eximirlo de responsabilidad en los hechos. No obstante lo anterior, según el mérito del proceso, las pruebas rendidas y ponderadas en conformidad a la ley, obran en su contra los siguientes elementos de convicción.

Desde ya, por síntesis y economía procesal se dan por reproducidos todos los elementos probatorios generales antes ponderados y los específicos relacionados y aquilatados puntualizando lo siguiente:

A. DECLARACIONES

A parte de lo que se ha detallado en la prueba de los testigos conviene puntualizar respecto de éstas personas lo siguiente:

A.1. Segundo Armando Catelicán Cárdenas

En declaración judicial de 30 de noviembre de 2017, que rola a **fs. 1.605 (Tomo IV)**, acota en lo pertinente que prestó servicios en la Segunda Comisaría de Puerto Aysén desde el año 1980 hasta 1988. No recuerda haber participado en la detención de la víctima, como tampoco haber sido testigo de ello, ya que los procedimientos policiales los ejecuta el jefe de turno y acompañantes. Que era chofer del furgón en esa época y no tenía mayor participación en los procedimientos. El día en que según los antecedentes aportados por los familiares del ofendido, este fue detenido, el 28 de diciembre de 1985, él trabajó en el segundo patrullaje como chofer del furgón, desde las 20:00 a las 08:00 del día siguiente, de acuerdo a la fotocopia que el Tribunal le exhibe y que rola a fs. 43. Que la comisaría atendía todos los procedimientos policiales de la ciudad de Puerto Aysén en su totalidad, en esa época no había sectores acotados o cuadrantes. Que todos los procedimientos policiales quedan estampados en los libros de guardia y de servicio de población, respectivamente, motivo por el cual si la víctima fue detenida, debería haber quedado allí ingresado, por cuanto todo procedimiento por mandato legal debe quedar registrado.

A.2. Osvaldo Del Carmen Mercegue Andrade

En declaración extrajudicial de fecha 15 de marzo de 2013, **rolante a fs. 784 a fs. 785 (Tomo II)** sostiene en lo pertinente que cumplió funciones en la segunda Comisaría de Carabineros de Puerto Aysén. Respecto a los funcionarios Aliro Quinan Tecai, Alberto Velásquez Barría, Juan Villegas Barrientos, Jorge Talma Talma y José Salas Vera, los ubicaba por ser funcionarios de dotación de la segunda Comisaría de Carabineros de Puerto Aysén. Afirma que existían funcionarios de la unidad mencionada, que cumplían funciones en la comisión civil, siendo estos el suboficial Jaime Daniel Díaz Castro, el cabo Aliro Quinan Tecai, más conocido como el "Indio Quinan"; el cabo Alberto Velásquez Barría, más conocido como "El Zorro Velásquez" y el cabo Víctor Cuevas Seguel, quienes realizaban operativos y detenciones ordenadas por el mando institucional. Con relación a Rubén Armando Antimán Nahuelquín, desconoce todo antecedente.

Que tuvo conocimiento que existían relegados políticos, personas que estaban sujetas a firmas en las unidades de Carabineros de Chile.

En declaración judicial de fecha 10 de junio de 2013, rolante a **fs. 868 a fs. 868 vta. (Tomo II)** ratifica su declaración extrajudicial replicando en lo atinente los nombre de los funcionarios Aliro Quinan Tecai, Alberto Velásquez Barría, Juan Villegas Barrientos, Jorge Talma Talma y José Salas Vera, todos de dotación de la segunda Comisaría de Carabineros de Puerto Aysén y algunos de ellos, como el suboficial Jaime Daniel Díaz Castro; el cabo Aliro Quinan Tecai, más conocido como “el Indio Quinan”, el cabo Alberto Velásquez Barría, conocido como “el Zorro Velásquez” y el cabo Víctor Cuevas Seguel, cumplían funciones en la comisión civil y les correspondía realizar operativos y detenciones ordenadas por el mando institucional. Entre otras declaraciones.

A.3. Milton Manuel Zúñiga Sandoval.

En declaración judicial de fecha 29 de junio de 2017, rolante de **fs. 1.540 a fs. 1.542 (Tomo IV)**, en lo pertinente y entre otras declaraciones, dice que para la fecha de los hechos se encontraba trabajando en la segunda Comisaría de Puerto Aysén, mencionado parte de la orgánica de dicha unidad. Que los servicios de patrullajes en la población se efectuaban de infantería, pese a que se disponía del furgón y de un jeep, pero solo se ocupaban para traslado y relevo de personal, como también para traslado de detenidos en los procedimientos, haciendo presente que para el turno se entregaban como cinco litros de bencina para los vehículos. Que era común que el patrullaje lo conformaran cuatro funcionarios, dos de ellos de punto fijo en la gobernación y prefectura, y los otros dos funcionarios quedaban patrullando de infante y al servicio de la población. En algunos casos quedaba un funcionario en una garita ubicada en la calle Pedro Aguirre Cerda, de la Población del mismo nombre. Agrega que eran notificados vía radial de la comisaría por el personal de guardia, para concurrir a los lugares donde adoptar los procedimientos. Que sabía de la existencia de un elemento denominado “churro”, el que presumiblemente era utilizado para reducir o contener cuando los detenidos se ponían agresivos hacia el personal, provocaba lesiones a las personas. Este elemento denominado “churro”, es probable que determinados carabineros lo haya tenido en sus casilleros para el desarrollo de los servicios, se enteró por comentarios de sus pares. Respecto documento que se le exhibe, el que fue emanado de la Prefectura Nro. 27 Aysén, Oficio Nro. 840, de fecha 15 de julio del año 1986, que va direccionado desde la Segunda Comisaría de Puerto Aysén al Juzgado del Crimen de Puerto Aysén, que da cuenta de los servicios de

la Unidad del día 28 al 29 de diciembre del año 1985, dentro de los cuales aparece su nombre y grado, específicamente el día 29 de diciembre “chofer de servicio (desde las 08:00 a las 20:00 horas), señala que efectivamente los servicios eran confeccionados de esa forma y el día anterior, los cuales eran puestos en una tabla de servicio. Dice no conocer a Rubén Armando Antimán Nahuelquín, e ignora las circunstancias que rodearon su detención y posterior deceso. Que conforme a los servicios dispuestos los días 28 al 29 de diciembre del año 1985, dentro de los cuales aparece específicamente el día 29 de diciembre “chofer de servicio” (desde las 08:00 a las 20.00 horas), manifiesta que por el tiempo, no recuerda si se practicó la detención de una persona que haya sido denunciada por lesiones o que se haya enterado que el resto del personal de servicio haya adoptado un procedimiento de esa naturaleza o de cualquier índole. No es de su conocimiento que el personal saliente de patrullaje de “tercer turno” del día 28 de diciembre (desde las 23:00 a las 07:00 horas), lo haya efectuado. Finalmente, manifiesta que en la 2ª Comisaría de Puerto Aysén, dentro del personal de la unidad, los cabos Cuevas y Velásquez, se destacaban por tener un trato duro con los detenidos y con el propio personal policial, pero nunca presencié que ellos maltrataran a detenidos.

A.4. Julia Borquez Antimán.

Declaración extrajudicial de fecha 21 de septiembre de 2020, rolante de **fs. 1.973 a fs. 1.976 (Tomo VI)**, interrogada por el Tribunal en lo pertinente afirca que la víctima, era su tío, hermano de su madre. Que vio a su tío en la navidad, les pasó a dejar unas cosas y ahí “desapareció” y no lo vio nunca más. Hasta que en febrero su madre escuchó en la radio que buscaban a la familia de Rubén Armando, porque estaba hospitalizado en Coyhaique. Entonces fueron a Coyhaique donde estuvieron unos días hasta que su tío falleció. Se lee declaración de fs. 186 de Selfa Antimán, la testigo dice: que no sabe, porque su tío la saludo en la entrada de la casa, no ingreso, solo dejó unos “cachureos” y después se fue. Recuerda que iba en buenas condiciones, que era una persona normal, tranquila, “ni siquiera con alcohol”. Que su mamá le contó que su tío le había hablado y le dijo que los carabineros lo “habían golpeado y lo pisaron, que eran como seis carabineros, lo tiraron al suelo y lo pisaron”. Después lo habían bañado en agua, entonces no se le notaba. Cuando falleció su madre le indicó que fue al hospital la dejaron entrar a la morgue y su tío estaba “negro y ella le beso los pies”. Después fueron a una misa y lo sepultaron en Coyhaique. Que al parecer la familia lo había denunciado y por eso los carabineros usaron mucha

fuerza. Que su tío también le dijo a su mamá que lo habían dejado tirado en el río y ahí ingreso al hospital de Aysén y nadie lo quiso identificar y por eso fue enviado a Coyhaique. A la pregunta si recuerda que su madre le diera nombre de los carabineros que pudieran haber participado, responde: que le nombró al carabinero de apellido Cuevas, no recuerda otro nombre.

A.5. Doris Nelfa Antimán Jara,

En declaración judicial de fecha 24 de mayo de 2011, rolante a **fs. 169 (Tomo I)**, en lo tocante, ratifica su declaración extrajudicial y agrega que para el año 1986 tenía 18 años de edad. En el mes de enero del año 1986, en horas de la tarde se encontraba en su domicilio de calle Serrano Montaner N° 745 de la ciudad de Aysén junto a su padre Rubén Armando Antimán Nahuelquín, a su abuela paterna Vitalia Nahuelquín Reinaldo (fallecida). Afirma que esa tarde su padre tuvo una discusión con su abuela paterna, porque su padre estaba un poco mareado; a su abuela no le gustaba que su papá “tomara”; le llamó la atención, le pegó con un bastón, discutieron y su abuela cayó al suelo sentada; se enojó con su padre diciéndole que por culpa de él se cayó; le indicó que iba a llamar a carabineros para decirle que la hacía enojar y por eso se golpeó; su padre salió de la casa para evitar esos conflictos; no regresó hasta el día siguiente. Llegó quejándose de dolor, se tomaba el abdomen decía que tenía mucho dolor y después de consultarle qué le pasó, el señaló “mija me pegaron los pacos”. Recordando entre los carabineros que lo agredieron “el Zorro Velásquez” y otros. A raíz de lo mal que vio a su padre, lo llevó al hospital de Aysén; en ese centro le indicaron primero que era una “pulmonía”, y como era grave lo trasladaron al Hospital de Coyhaique. A ese centro no pudo ir a ver a su padre por lo trasmano del lugar; no existían los medios para traslado y, además, porque tenía a sus dos hijos pequeños. En ese hospital su padre estuvo grave como dos semanas, hasta que falleció; a ella no la dejaron ir, debido a que era muy joven y, por lo tanto, no vio más a su padre desde la fecha de la golpiza que había recibido de carabineros, según así él le contó.

En declaración extrajudicial de fecha 28 de mayo de 2013, rolante de **fs. 1.091 a fs. 1.092 (Tomo III)**, recuerda que para la fecha de ocurridos los hechos, a principios del mes de febrero del año 1986, vivía junto a su grupo familiar compuesto por su abuela Vitalia Nahuelquín (fallecida), Rubén Armando Antimán Nahuelquín, Moisés Leiva Rodríguez su ex marido, sus hijos Moisés y Hans, en el domicilio ubicado en calle Serrano Montaner, no recuerda su numeración. En lo pertinente reitera que su padre Rubén Armando era un hombre

de trabajo, pero al momento de ocurridos los hechos, estaba cesante; asimismo, recuerda que bebía alcohol en forma esporádica y siempre llegaba a la casa. Que un día en horas de la tarde, su padre llegó a la casa en estado etílico, momento en el cual comenzó a jugar con su nieto Hans, instante en que llega su abuela Vitalia y lo golpea con su batón en la cabeza, llamándole la atención del por qué estaba ahí; su padre se paró en forma instantánea y su abuela se fue hacia atrás, cayendo al suelo, interpretando que su padre la iba a golpear, razón por la cual su abuela se dirigió a carabineros a denunciarlo, hecho que fue así, ya que, su abuela al llegar le dijo que efectivamente había denunciado a su padre. Pasado de unas horas llegaron a su casa los funcionarios de carabineros de la unidad de Puerto Aysén; recuerda que les abrió la puerta y comenzaron a buscar a su padre, pero no lo encontraron; era unos cinco uniformados, dentro de los cuales puede mencionar al hijo de un vecino que era de apellido Soto, y manejaba el vehículo policial en esa oportunidad. Que el funcionario que se encontraba a cargo era de tez blanca, pelo claro y ojos de color azul; posteriormente se retiraron. Al día siguiente, su padre llegó en horas de la tarde, quejándose de mucho dolor, tomándose con sus manos su estómago, indicando que le dolía todo el cuerpo; ante esto lo asistió y le quitó la camisa y le revisó el cuerpo, no apreciando marcas de golpe en su cuerpo, excepto de sus brazos, que tenía un surco marcado. Le dio agua y aspirinas para calmar el dolor, pero no fue suficiente y tuvo que llamar la ambulancia y se lo llevaron de urgencia; es en ese momento que al preguntarle qué le había pasado, comentó que “los pacos le habían pegado”, dentro de los cuales estaba “El Chotelo” (Soto chofer), el Cuevas y el “Zorro Velásquez”, que lo habían ido a tirar, pero no comentó en qué lugar lo subieron y menos donde lo golpearon, para luego dejarlo tirado. Consecuentemente, llegó la ambulancia y lo trasladaron al Hospital de Puerto Aysén. Al llegar al centro médico, su padre fue atendido por un doctor de apellido Silva, quién antes de examinarlo le preguntó qué le había pasado, ante lo cual le indicó que lo habían golpeado los carabineros. Su padre ingresó a la urgencia y le tomó la mano, ese fue el último momento que lo vio con vida, ya que al día siguiente, al parecer, fue trasladado al Hospital de Coyhaique, lugar donde posteriormente, fallece. Al día siguiente concurrió hasta el hospital a ver a su padre entrevistándose con el doctor Silva, quién le indicó que su padre había sido trasladado al Hospital de Coyhaique, producto de una neumonía. Posteriormente a la muerte de su padre en la ciudad de Coyhaique, se enteró por intermedio de su tía Selfa Antimán Nahuelquín, que había realizado una denuncia contra carabineros en la Fiscalía Militar. Por esa razón un momento llegó

carabineros a su casa a tomarle declaración a su abuela Vitalia; ella fue citada a la Prefectura a relatar lo ocurrido, instante en el cual la obligaron a firmar un testimonio que los exculpaba de toda responsabilidad de lo ocurrido con su padre. No tiene conocimiento qué pasó con esa investigación que llevaba la Fiscalía Militar, ya que nunca más supo de ella y tampoco la notificaron de alguna resolución. Que con el pasar del tiempo el doctor y los carabineros involucrados en la muerte de su padre salieron de la zona, nunca más los volvió a ver. Que puede reconocer fotográficamente al carabinero que concurrió en primera instancia a buscar a su padre, y como antes indicó, era de tez blanca, pelo claro y ojos de color azul, además, era quien iba a cargo de la patrulla policial. Entre otras declaraciones.

A.6. Miguel Ángel Antimán Jara

En declaración judicial de fecha 02 de diciembre de 2019, rolante de fs. **1.890 a fs. 1.891 (Tomo V)**, en lo pertinente indica que iba siempre a visitar a su padre y a su abuela, que no supo del altercado de su padre y su abuela, que él llegó en la tarde. Que es hijo de la víctima. En cuanto a lo sucedido con su padre Rubén Antimán, arguye que llegó a la casa y uno de los hijos de su hermana estaba llorando en la cocina, sintió que alguien se quejaba en el dormitorio, así que entró a ver a su papá y le preguntó “qué te pasa y me dice: fue el zorro Velásquez y Cuevas”, pero no sabía quiénes eran, pensó que eran amigos de su padre. Luego su hermana le dice que fueron los carabineros, le preguntó porque le pegaron y ella le contó lo sucedido con su abuela. Al otro día cuando volvió, lo habían llevado al hospital y cuando fue al hospital le dijeron que lo habían trasladado a Coyhaique, lugar al que no alcanzó a ir ya que falleció. Interrogado dice que su padre le nombró dos personas “El zorro Velásquez y Cuevas”, a quienes no conoce y pensaba que eran amigos de su padre, que este se quejaba mucho y conversaba poco. Que su padre no estuvo detenido en la comisaria, que lo encontraron en la calle y ahí le pegaron. No pudo ver las marcas en su cuerpo porque estaba tapado. Su hermana no le comentó que haya visto lesiones en su cuerpo. Lo que puede decir es que gritaba mucho de dolor, le ofreció llevarlo al hospital y no quiso. No se percató de la presencia de militares o carabineros en el hospital, preguntó en la guardia y le dijeron que había sido trasladado a Coyhaique. No sabe quién más puede haber sido testigo de lo acontecido con su padre. Preguntado si tuvo conocimiento que su padre haya tenido problemas con carabineros o alguna rama de la Fuerza Armadas, responde: que sabe que perdió el trabajo, era empleado del correo, y cuando entro el gobierno militar, quedó sin

trabajo, su padre no participaba en movimientos políticos. Que no conoce a los carabineros que golpearon a su padre. Tampoco de parte de la comisaría, no tenían a quien preguntarle.

A.7. Selfa Heidée Antimán Nahuelquín,

En declaración extrajudicial de fecha 24 de marzo de 2011, rolante de **fs. 136 a fs. 138 (Tomo I)**, en lo adecuado, refiere ser hermana de Rubén Armando Antimán Nahuelquín. Que se enteró que su hermano salió de su casa el 25 de diciembre de 1985, día en el cual visitó a su hija Julia Bórquez Antimán, y nunca más regresó a su casa. Que aproximadamente los primeros días del mes de febrero del año 1986, el capellán del Hospital de Coyhaique, padre Doménico Sartori, conocido de su familia, fue a su domicilio ubicado en calle Sargento Aldea en la ciudad de Puerto Aysén, y le avisó que Rubén estaba hospitalizado grave en la ciudad de Coyhaique. Por tal motivo el mismo día viajó a dicha ciudad en compañía del padre Doménico, concurriendo al hospital. En el lugar le solicitó al entonces director del centro asistencial, de quién no recuerda su nombre, que le dejara ver a Rubén, lo que en un comienzo fue negado por esa persona, indicando que su hermano estaba muy grave y se moriría. Que el Director del Hospital le señaló que a Rubén lo habían golpeado cruelmente y que lo habían torturado, sin mencionar quién lo había hecho. Ante su insistencia y la petición del padre Sartori, les autorizó a ambos a entrar a una pieza donde estaba su hermano solo. Recuerda que estaba semi sentado, conectado a una serie de máquinas y con tapones en su nariz y oídos. Lo que le llamó la atención es que estaba lúcido, indicándolo al oído que los autores de su golpiza fueron los carabineros de Puerto Aysén, recordando claramente que le señaló a un carabiniere de apellido Cuevas, a quién conocían en Puerto Aysén, y tiene la impresión que también le señaló a otro que apodaban “El Zorro”. Que vio el cuerpo de su hermano y le sorprendió que no tuviera marcas que llamaran la atención, recordando las palabras del director del hospital, quien señaló que una vez fallecido su hermano, aparecerían sus hematomas, por el hecho que fue torturado. Luego de su visita, se enteró que la jueza Sara Meersohn de Coyhaique le había tomado una declaración a Rubén respecto a los hechos y que esa la habría derivado a la Fiscalía Militar de Coyhaique. Que realizó una serie de trámites para averiguar que le había pasado a su hermano; recuerda que fue a la Fiscalía Militar, donde no le entregaron información; a la radio Coyhaique, donde tampoco sabían antecedentes al respecto, entre otros lugares, lo que derivó en que personas de civil la siguieran; la citaron a carabineros y Policía de Investigaciones de Puerto Aysén. El día 8 de

febrero de 1986 falleció su hermano en el hospital de Coyhaique, pero le entregaron el cadáver varios días después, ya que había una orden de que el cuerpo sea trasladado directamente desde la morgue al cementerio de Coyhaique. No obstante, el obispo de la ciudad logró que al cuerpo de su hermano se le hiciera una misa en la iglesia de Coyhaique, y que de ese lugar fuera trasladado al cementerio. Que cuando el cadáver de Rubén estaba en la morgue, entró a escondidas a ese lugar en compañía de su madrina Matilde Muñoz y vieron el cuerpo de Rubén, lo que les impactó, por cuanto estaba completamente morado. Que todos los trámites de su muerte los realizó ella en compañía de sus primos José Nahuelquín Huala y Rossi Humberto Cáceres Nahuelquín, ambos fallecidos. Que por comentarios de la gente de Puerto Aysén, señalaron que a Rubén lo habrían detenido carabineros y que lo habían arrojado a orillas del río Aguas Muertas. Desconoce si su madre denunció a Rubén. Le llama la atención que a su hermano lo atendieran en el Hospital de Puerto Aysén y posteriormente trasladado al Hospital de Coyhaique como NN, siendo que a Rubén y su familia lo conocían en la ciudad, por cuanto eran deportistas y dirigentes sociales. Su hermano Rubén estuvo un tiempo ligado al Partido Socialista, cuando fue funcionario de Correos de Chile, pero era más conocido como futbolista, ya que le decían el “Pelé Antimán”. Que una vez que falleció su hermano, se fue a San Felipe, pero su marido Rigoberto José Bórquez Proschle, quedó en la ciudad de Puerto Aysén, y fue “invitado” por el entonces prefecto de la Prefectura de Aysén, para conocer su opinión respecto de los hechos ocurridos, ante lo cual su marido le manifestó su aprehensiones por el mal procedimiento adoptado por el personal de carabineros y del hospital. Pasados unos días, recibió otra invitación, esta vez de un capitán de apellido Soto de la segunda Comisaría de Puerto Aysén, quién lo interrogó en relación a lo mismo, por lo que su marido se convenció que solo buscaban alternativas para encubrir el hecho. Su impresión de los hechos es que los que lo provocaron, pensaban que su hermano estaba muerto, lo que no fue así. Declaración que ratifica a fs. 252 (Tomo I).

A.8. Eligio Segundo Edén Antimán Nahuelquín

En declaración extrajudicial de fecha 25 de septiembre de 2013 rolante a **fs. 918 a fs. 920 (Tomo III)** arguye en lo pertinente ser hermano de la víctima, que para el mes de diciembre del año 1985, se encontraba viviendo en Puerto Cisnes. Su hermano Rubén Armando, vivía en calle Doctor Estefen interior, en la comuna de Puerto Aysén, junto a su esposa Eliana Jara Burgos, sus hijos Patricia Antimán Jara, Miguel Ángel Antimán Jara, Leopoldo Antimán Jara y Doris

Nelfa Antimán Jara. En ese mismo inmueble, pero en una casa que se encontraba en el frente del mismo terreno, vivía su madre Vitalia del Carmen Nahuelquín Reinaldo. Que para esa fecha no tiene conocimiento que éste haya sido militante de algún partido político. Respecto a la muerte de su hermano Rubén Armando, dice que para el mes de febrero de 1986, no recuerda día exacto a través de un amigo se enteró que su hermano se encontraba hospitalizado grave en el Hospital de Coyhaique, sin tener mayores antecedentes. Por tal motivo, viajó inmediatamente desde Puerto Cisne a Coyhaique y cuando llegó al Hospital, recuerda que habían muchos familiares acompañándolo, pero también recuerda que habían muchos carabineros, militares y amigos en general que lo estaban acompañando. Una vez que tomó contacto con los familiares que se encontraban en el hospital, recuerda que se le informó que su hermano había fallecido al parecer por golpes propiciados por diferentes personas. Al tomar contacto con el doctor que había realizado la autopsia de apellido Vergara, recuerda que su informe médico indicaba que la causa de muerte había sido producida por golpes atribuibles a terceras personas. Que sus primos Humberto Cáceres Nahuelquín y José Nahuelquín Huala, (fallecidos), le comentaron que Rubén Armando, había sido golpeado por personal de carabineros de Puerto Aysén, sin especificar nombres de los responsables. Que una vez que se entregó el cuerpo de su hermano fue puesto en un ataúd y trasladado directamente al cementerio de Coyhaique, donde fue enterrado encontrándose en ese mismo lugar hasta la fecha. Hace presente, que mientras efectuaron el traslado de su hermano de la morgue al cementerio, recuerda que se fue conversando con sus primos Humberto Cáceres y José Nahuelquín, quienes le relataron que su hermano Rubén había tenido problemas con su madre Vitalia en la casa. En esa época al parecer su madre tenía una lesión en un brazo o una pierna, se encontraba convaleciente. Que su hermano llegó un día a la casa en estado de ebriedad y le había pedido plata y por alguna razón la empujó y su madre se habría caído al suelo. De esta situación su madre, habría salido de la casa con la intención de denunciarlo ante la agresión que había recibido, pero antes de llegar a la unidad policial se habría encontrado con personal de carabineros de Puerto Aysén, desconociendo el nombre de estos funcionarios. Estos la habrían aconsejado que se devolviera a la casa y que ellos irían en busca de Rubén, que en esos momentos ya había salido de la casa y se encontraba escondido debajo de un camión. Sus primos le dijeron que estos carabineros lo encontraron debajo del camión y lo habrían subido a un vehículo para llevarlo hasta el sector del Kilómetro N°4, camino antiguo desde

Aysén a Coyhaique, donde habrían procedido a golpearlo, desconociendo que es lo que posteriormente sucedió con él. Por comentarios de familiares y de terceras personas, pero que a él no le constan, su hermano Rubén Armando, habría llegado a la casa mal herido, producto de golpes y desde la casa habría sido recogido por una ambulancia del Hospital de Puerto Aysén, siendo trasladado en compañía al parecer de su hija Doris Nelfa Antimán Jara, hasta ese centro hospitalario. Desconoce cuántos días estuvo en el Hospital de Puerto Aysén, solo recuerda que posteriormente y a raíz de sus lesiones fue trasladado al hospital de Coyhaique donde finalmente falleció. Desconociendo el estado de salud en que su hermano ingresó al hospital de Puerto Aysén como tampoco cuando fue trasladado al hospital de Coyhaique. Adiciona que días posteriores y a través de los comentarios, tanto familiares como de los amigos de la familia, se enteró que los responsables de los golpes propinados a su hermano Rubén Armando y que en definitiva le provocaron la muerte serían los carabineros de apellidos Cuevas, Velásquez y Pereira, este último fallecido, todos de dotación de la Comisaría de Carabineros de Puerto Aysén.

En declaración judicial de fecha 05 de julio de 2018 rolante a **fs. 1.754 a fs. 1.755 (Tomo V)** ratifica la declaración extrajudicial de fs. 918 y siguientes de autos. En lo pertinente dice que se enteró, a través de un amigo lo que sucedió con su hermano Rubén. Que Luis Pereira, Cuevas y Velásquez, los carabineros, quienes serían los responsables de lo sucedido con su hermano, eran conocidos suyos de muchos años. Que los antecedentes de los responsables de la detención de su hermano se la dio un joven de nombre Manuel Quinillao, que al parecer el vio cuando lo tomaron o cuando lo tiraron al río. Afinca que su hermano nunca estuvo involucrado en política. Que la razón por la que había militares y carabineros acompañando a su hermano en el hospital, no la sabe. Cuando él llegó a Aysén llegó a la morgue y se encontró con muchos carabineros y militares, los conocía a todos, porque eran amigos de años. En la morgue vio a su familia y carabineros y militares. Las condiciones en que estaba su hermano en la morgue es que estaba “todo negro, muy golpeado, todo el cuerpo”. Lo mismo le dijeron sus tías, quienes lo vistieron por lo que no quiso ver su cara. A los dos años conversó con su mamá y le dijo que Rubén la empujó porque quería plata y ella fue a dar cuenta a investigaciones, pero en el camino se encontró con los carabineros y allí los carabineros le dijeron "no se preocupe tía Vitalia, váyase no más pa la casa". Que sus primos sabían lo que pasó con Rubén porque su mamá se los comentó. Que al parecer los hechos ocurrieron en la noche. No escuchó que carabineros

haya hecho algún sumario o haya investigado algo respecto al fallecimiento de Rubén. Su hermana con su esposo y él, fueron a la Fiscalía militar, en ese entonces Fiscal Militar de apellido Leal recibió la denuncia firmada por su hermana Ninfa. Su cuñado conversó con el señor Leal y supo que la señora jueza le había ido a tomar declaración a su hermano en el hospital, esto a petición del médico de la época, para saber quiénes lo habían golpeado y su hermano les respondió que habían sido los carabineros Pereira, Cuevas y Velásquez y al parecer alguien de apellido Ulloa. La versión de los implicados nunca la supo, desconoce lo que ellos hayan dicho.

A.9. Alberto Daniel Velásquez Barría

En declaración extrajudicial de fecha 08 de julio de 2012, rolante de **fs. 463 a fs. 464 (Tomo II)** aduce que se contrató en Carabineros de Chile 1 de diciembre de 1974, específicamente en la Segunda Comisaría Puerto Aysén, y el curso de instrucción lo realizó en la Primera Comisaría de Ancud, egresando en el mes de septiembre de 1975 y su primera destinación fue en la Segunda Comisaría Puerto Aysén, unidad donde presto servicios hasta el año 1989, posteriormente, es destinado a la Quinta Comisaría Pitrufquén, desde donde se acogió a retiro en el mes de marzo de 1996, con el grado de sargento segundo de Carabineros de Chile. Por otra parte agrega que su función dentro de la segunda Comisaría Puerto Aysén, era la de orden y seguridad, lo que involucraba servicios de población y guardias en el cuartel. Que en relación a Rubén Armando Antimán Nahuelquín, dice que lo conoce desde la niñez, ya que sus padres conocían a la familia de éste, por lo tanto se veían siempre en la ciudad, recuerda que éste trabaja en el correo de Puerto Aysén, que Antimán era mucho mayor de edad que él. Que era una persona tranquila, y que en algunas ocasiones lo vio con sus "tragos", pero siempre con un buen comportamiento, nunca supo que haya realizado escándalos o que agrediera a alguna persona, por ende nunca lo vio detenido en su unidad policial. No obstante, no puede asegurar que algún funcionario de la segunda comisaría lo haya detenido en alguna ocasión. Comunica que Antimán, se encontraba separado de su señora. No puede precisar donde vivía exactamente Antimán, ya que en Puerto Aysén residía su madre y sus hermanos, que eran alrededor de tres o cuatro, por lo que no sabe con quién de estos podrían haber estado viviendo. Que nunca le correspondió ir al domicilio de Antimán, ya sea, para trabajar alguna orden o para detenerlo. No recuerda fecha exacta, pero se encontraba trabajando en la Segunda Comisaría Puerto Aysén, cuando le notifican que tenía que presentarse en la Prefectura N° 27 Puerto

Aysén, y entrevistarse con el subprefecto de los servicios comandante Orlando Correa Foulon, seguidamente, el comandante Correa, le informa que debe declarar un sumario administrativo, debido a que había llegado un documento a la prefectura, el cual involucraba a quien suscribe y a tres funcionarios más de la Segunda Comisaría Puerto Aysén, entre ellos estaba el cabo Herald Cuebas Seguel, cabo Héctor Ulloa Matamala y el carabinero Marcelo Soto Aguilar, ya que supuestamente ellos y quien suscribe habían agredido a Rubén Antimán Nahuelquín, y que producto de esta acción este falleció en la ciudad de Coyhaique. Que posteriormente, prestó declaración en el sumario administrativo y finalmente salió sobreseído, ya que nunca se acreditó su participación en los hechos investigados, y del resto de los carabineros supo que también salieron sobreseídos, por no tener participación. Que a fines del año 1985 y principios del año 1986, le toco en algunas ocasiones realizar servicios de población en diferentes turnos con el cabo primero Herald Cuebas Seguel, cabo Héctor Ulloa Matamala y el carabinero Marcelo Soto Aguilar, ya que en la unidad habían cuatro escuadras para los servicios y durante estos turnos que realizó con estos tres carabineros, nunca le correspondió realizar un procedimiento policial con el señor Antimán, y desconoce si estos tres funcionarios en alguna ocasión adoptaron algún procedimiento con esta persona. Manifiesta que desde que se cerró el sumario administrativo por la muerte de Antimán Nahuelquín, nunca más ha declarado en esta investigación.

En declaración judicial de fecha 10 de septiembre de 2012, rolante **de fs. 488 a fs. 489 (tomo II)** reitera que ingresó al cuerpo de carabineros el primero de diciembre de 1974. Que hizo el curso, que era de seis meses y volvió a la misma unidad la Segunda Comisaría de Puerto Aysén, trabajó ahí hasta diciembre de 1989 y fue destinado a varios destacamentos dependiente de la misma Unidad. Que en el año 1989 fue trasladado a la Prefectura de Cautín y destinado a la Quinta Comisaría de Pitruquén, donde se acogió a retiro. Dice que conocía a Rubén Armando Antimán Nahuelquín desde la niñez. El trabajaba en el correo de Puerto Aysén. No recuerda haber tenido un procedimiento donde éste estuviese comprometido, era una persona tranquila, aunque a veces bebía, “pero era muy tranquilo”, nunca supo que haya realizado escándalos o situaciones de carácter público. Que nunca participó de alguna detención o procedimiento policial en el que estuviese involucrado Antimán. Sabe que estaba separado, pero ignora con quien vivía, si con sus padres u otra persona. Que jamás le correspondió ir hasta su domicilio. Que hubo un sumario administrativo en la prefectura N° 27 de

Aysén, siendo llamado a declarar junto con el cabo Herald Cuevas, Héctor Ulloa Matamala y el carabinero Marcelo Soto. Que dicho sumario una vez agotada la investigación se archivó sin resultados contra el personal. Acota que Puerto Aysén es un “pueblo chico, todas las cosas se saben”. Que efectivamente Antimán fue agredido, pero ignora quienes cometieron ese hecho. Que fue llevado a Coyhaique falleciendo en el hospital. Reiterando que después de que declaró en el sumario administrativo, nunca ha sido interrogado en algún tribunal.

En declaración judicial de fecha 08 de julio de 2012, rolante **de fs.1.358 a fs. 1.363 (Tomo III)** acota que las declaraciones anteriores las presto de forma voluntarias y en relación al procedimiento policial en el que habría sido detenido Rubén Armando Antimán Nahuelquín dice derechamente que él no ha participado nunca en alguna detención de esta persona. A Antimán Nahuelquín lo conoció desde su infancia toda vez que es nacido y criado en Puerto Aysén, y por tanto, desde niño que lo conoció, este era mayor que él, pero Antimán Nahuelquín jugaba por el deportivo Cochrane en Puerto Aysén y como era bueno se destacaba y por esa razón era conocido en todo el pueblo y también él lo conocía, era mayor, porque le llevaba aproximadamente unos quince años, de vista también conoció a los padres de Nahuelquín, éste último trabajó en correos un tiempo y después no sabe las razones porque no siguió trabajando allí. Que no tuvo conocimiento de que Antimán Nahuelquín hubiera sido detenido por carabineros, ni tampoco que posteriormente lo hubieran agredido. Que en carabineros se hizo un sumario administrativo, precisamente a raíz de la muerte de Rubén Armando Antimán Nahuelquín. Fue interrogado en ese sumario administrativo, no recuerda la fecha exacta, pero fue interrogado en la prefectura, a lo interrogó el comandante y subprefecto de los servicios Orlando Correa Foulon, era teniente coronel. El comandante le narró una denuncia que había llegado a la prefectura, sobre el fallecimiento de una persona, se refería a Antimán Nahuelquín, y que inculpaban a cuatro funcionarios policiales por la muerte de esta persona en un procedimiento policial. Los inculpados eran el cabo Herald Cuevas Seguel, el cabo Héctor Ulloa Matamala, el carabinero Marcelo Soto Aguilar y él. Se les inculpaba o acusaba de que ellos habían agredido a Antimán Nahuelquín, con golpes, no con armas, recordando que el comandante lo interrogó, allí respondió que no había participado en esos hechos, ni en ningún procedimiento relacionado con la detención de Antimán. No sabe si los demás carabineros inculpados eran o no inocentes. Después conversaron entre los cuatro carabineros inculpados y los demás le dijeron que tampoco habían participado en

un procedimiento de detención de Antimán, ni menos que lo habían agredido. Que en esos años, el carabinero que llegaba a la prefectura "era cortado de cabeza seguro", porque lo daban de baja, y por eso cuando a él se le citó, los colegas le dijeron "oye que te pasó" o "porque te citaron", los que le preguntaban eso eran los carabineros que trabajaban en la comisaría, porque querían saber porque estaba citado a la prefectura y les contó que se le inculpaba de un hecho del que era inocente porque no había participado en nada. No supo cómo terminó el sumario administrativo. Que en esos años, cuando se ordenaba un sumario administrativo, la orden venía del prefecto y éste designaba al oficial investigador, en este caso, fue el comandante, cree que en el año 1984, y el oficial designado fue el comandante de apellido Correa. No recuerda el nombre del prefecto de esa época, ni el resultado del sumario administrativo, nunca más lo llamaron. Que un año después que ocurrieron los hechos, el año 1986 y él fue trasladado a la Tenencia de la Junta en la Carretera Austral y estuvo hasta el año 1989, año en que fue trasladado a la Prefectura Cautín y después a la Quinta Comisaría de Pitrufrquén, donde estuvo hasta el año 1996 año en que se acogió a retiro. Musita que a los colegas Cabo, Heraldo Cuevas, Héctor Ulloa y Marcelo Soto que fue su compañero de promoción, nunca más los volvió a ver, y por lo tanto entre ellos nunca se tocó el tema relacionado con la muerte de Rubén Antimán Nahuelquín. Desmiente la versión de Selfa Antimán Nahuelquín, al parecer hermana de Rubén Antimán Nahuelquín, quién habría; manifestado que antes de morir, su hermano, habría dicho que los carabineros que lo golpearon fue el cabo Heraldo Cuevas, "el yerno de la Tila", refiriéndose a su persona y otro carabinero que no dio su nombre. Explica que su suegra se llama Bertila Osorio y le dicen "Tila", y él es casado con Gloria Villegas Osorio, reiterando que no es efectivo que él haya participado en una agresión o golpiza contra Rubén Antimán Nahuelquín, ni tampoco en una probable detención policial en contra de este. A la vez desmiente la versión de Doris Nelfa Antimán Jara, hija de Rubén Armando Antimán Nahuelquín, que dice que su tía Selfa Antimán Nahuelquín le habría contado que antes de morir su padre identificó a los tres carabineros que lo habrían agredido, uno el "chotelo"; de nombre Marcelo Soto, otro Heraldo Cuevas y el tercero habría sido quien suscribe, cosa que desmiente absolutamente. También desmiente la declaración perteneciente a Selfa Antimán Nahuelquín (declara por exhorto ante el Juzgado del Crimen de San Felipe, fojas 31 y 32), donde dice que ella le habría preguntado a su hermano Rubén Armando Antimán Nahuelquín, mientras estaba hospitalizado acerca de quién lo había golpeado y su hermano le habría

respondido que fueron el cabo de carabineros Heraldó Cuevas, “el yerno de la Tila Osorio”, refiriéndose a su persona, Alberto Daniel Velásquez Barría y, a un tercer carabineros al que no conocía, ya que ello no es efectivo, porque él no ha participado ni en la detención ni en la muerte de Antimán Nahuelquín. Preguntado si la noche del día 28 de diciembre de 1985, en que conforme al parte de la Policía de Investigaciones, de fojas 9, habría sido detenido Rubén Armando Antimán Nahuelquín, en horas de la noche, él se encontraba cumpliendo algún turno en la Segunda Comisaría de Carabineros de Puerto Aysén, responde: No recuerda bien si estaba de turno o de franco. El Tribunal le exhibe el documento que rola en fs. 42 a fs. 43, en que carabineros detalla los turnos de ese día, y al respecto señala: que mirando el documento, recuerda haber hecho turno el día 28 de diciembre de 1985, desde las 23:00 horas a las 07:00 de la mañana, que correspondía al tercer turno. El turno lo hizo con el cabo primero Aliro Quinan Tecai, con el carabinero Juan Villegas Barrientos, con los carabineros Jorge Taima y José Safas Vera. Ese turno lo realizó en la facción Sargento Aldea recorrido, o sea, se recorría Sargento Aldea, en ese entonces había un punto fijo en la prefectura y otro en la gobernación provincial y a él le tocó Sargento Aldea. Detalla como desarrollaron el tercer turno: el cabo Quinan iba en el carro con un funcionario, no recuerda quién era, los demás uno de ellos era punto fijo en prefectura y otro punto fijo en la gobernación provincial y a él le tocó por ser el más antiguo Sargento Aldea. A su vez asegura que esa noche, no recuerda la hora, sonó la sirena y fueron a atender un procedimiento de incendio, no recuerda la calle, aunque le parece que era Cochrane, se estaba quemando una bodega de Alberto Mauret cerca de la cárcel antigua como a una cuadra de la antigua comisaría y recuerda que llegaron a ese procedimiento el jefe de tenencia de Chacabuco, porque esa noche había una convivencia en el casino de oficiales. El jefe de turno Aliro Quinan al término del turno dejaba constancia en el “libro de población” de todos los procedimientos del turno, ese libro se maneja en la guardia y cuando se llenaba el libro se iba al archivo de la Comisaría y se quedaba allí. Interrogado si el día 28 de diciembre de 1985, alrededor de las 23:00 horas, el tercer turno que él integraba ya se encontraba patrullando las calles de Puerto Aysén, responde: Que, efectivamente, el tercer turno que integraba comenzaba a las 23:00 horas terminaba a las 07:00 de la mañana del día 29 de ese mes y año, y el recorrido de las calles de Puerto Aysén lo hicieron en la forma que ya lo detalló anteriormente, donde dijo que en lo que a él respecta le correspondió recorrer Sargento Aldea, recorrido que abarcaba desde el sector Copec hasta el sur, donde se encontraba el antiguo cuerpo de

bomberos, y en este turno no se detuvo a ninguna persona ni se detuvo a Rubén Armando Antimán Nahuelquín, al cual, espeta, él nunca ha agredido. Evidencia que cuando se era punto fijo y necesitaba detener a alguien o quería detener a alguien siempre se le pedía colaboración al carro, por lo que entre todos los del turno se enteraban de cualquier procedimiento de detención. Nuevamente consultado narra que Aliro Quinan vive en Chillan, Juan Villegas vive en Ancud y José Salas era de Aysén aunque tiene la impresión de que está fallecido y respecto al chico Talma perdió conocimiento no sabe dónde se encuentra. Cuenta que el chofer del servicio de turno del tercer turno del día 28 de diciembre de 1985, era segundo Catelicán Cárdenas, cabo, que tiene entendido vivía en Puerto Montt. Descarga que en el sumario administrativo a él lo interrogó el comandante Orlando Correa y no el capitán Julio Soto, al cual él ubicaba porque trabajaba en la prefectura, el fiscal investigador del sumario administrativo fue el comandante Correa. Consultado dice que el oficial que ordenó el sumario administrativo donde él fue interrogado por el comandante Correa, recuerda que era el coronel Ramón Sánchez Urzúa. Aclara que, en relación a los turnos del día 28 de diciembre de 1985, no recuerda que hubieran hecho turno ese día Heraldo Cuevas, Héctor Ulloa o Marcelo Soto. Al día siguiente, 29 de diciembre de 1985, él estaba libre así es que no puedo saber quiénes estaban de turno. Conforme al documento que en este acto se le exhibe (fs. 42 a fs. 43) Héctor Ulloa Matamala figura integrando un turno de ese día y específicamente fue quien recibió el turno que ellos entregaron en la mañana del día 29, ya que, se desempeñaba como jefe de turno.

Declaración judicial de fecha 17 de junio de 1986, rolante de **fs. 67 a fs. 69 (Tomo I)**, afinsa en lo concerniente que es cabo segundo de la Comisaria de Carabineros de Aysén, y que en su calidad de funcionario policial no le ha tocado jamás ningún procedimiento relativo a alguna denuncia interpuesta por doña Vitalia Nahuelquín Reinaldo por el delito de lesiones, en la cual inculpara a su hijo Rubén Antimán Nahuelquín. Que conoce a ambos, porque desde niño los ha conocido en Puerto Aysén. Que inclusive Rubén Antimán fue funcionario de correos durante muchos años. Que jamás durante el curso del año 1985, ni posteriormente en los primeros meses del año 1986 ha detenido por alguna razón al citado Rubén Antimán Nahuelquín. Recordando que en el curso del año 1984, le parece que a fines de ese año, cuando se desempeñaba en la comisión civil de carabineros, detuvieron a Rubén Antimán, por sospecha de robo, pero después de algunas horas fue puesto en libertad por no haber existido mérito para ponerlo a disposición del Tribunal. Que ignora si fue detenido por personal de carabineros

que le tocó el procedimiento, aduciendo que existe el libro de guardia, donde cada turno informa sobre sus detenidos, además las constancias de lo ocurrido en la población, que se lleva en un libro aparte de novedades de la población. En cuanto al día 28 de diciembre de 1985 se encontraba de servicio de tercer turno en la población desde las 23:00 a las 07:00 del día siguiente. Turno que se encontraba a cargo del cabo primero Aliro Quiñon Tecny, relatando un procedimiento policial por incendio donde habría participado y que habían detenido a una persona de apellido Barriga a petición de su cónyuge, el que fue detenido y llevado a la guardia de la comisaría; que en el mismo recorrido casi al llegar a la garita de carabineros de avenida Eusebio Ibar, se procedió a detener a tres personas por ebriedad, los que fueron llevados a la guardia y posteriormente salió nuevamente a cumplir con sus servicios, no existiendo posterior a esa hora, que serían alrededor de 02:00 de la madrugada ningún otro procedimiento policial. Que la guardia estaba a cargo del cabo primero Víctor Cuevas Seguel, durante veinticuatro horas, por lo que debía entregar la guardia a las ocho horas del día siguiente. Reiterando no haber detenido a Rubén Antimán en el curso del año 1985, por tanto es inexacto que sea él uno de los aprehensores de este. En cuanto al funcionario cuyo padre se conocía como “El chotelo”, es el cabo segundo Marcelo Soto Aguilar, quien no se encontraba de turno la noche del 28 de diciembre, entre el personal de servicio a la población y tampoco lo vio integrando el personal de guardia, pensando que esa noche estaba de franco.

B. DOCUMENTOS

B.1. A fs. 4 (Tomo I) (copia fs. 116 vuelta (Tomo I), Certificado de defunción de Rubén Armando Antimán Nahuelquín que señala como causa de muerte septicemia/ hemoneumotorax traumático/ agresión por terceros.

B.2. A fs. 9 a 90 (Tomo I), de fs. 1.346, de fs. 1.355 a fs. 1.356 (Tomo III) Informe del Arzobispado de Santiago, Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, el que remite copia del expediente de la causa rol N° 4.769, del Juzgado de Letras de Aysén, seguida por la muerte de Rubén Antimán Nahuelquín, el cual en lo pertinente:

B.2.1. A fs. 17 a fs. 18 (Tomo I) informe de autopsia realizado por el médico legista Carlos Vergara Quezada, en causa rol N°6.155 de fecha 18 de febrero de 1986, que indica: “Se había trasladado desde Hospital de Puerto Aisen hacia Hospital de Coyhaique, con fecha 2/1/86 con el antecedente de haber ingresado a ese el 29/12/85 debido a haber sido agredido en la vía pública sufriendo por tal motivo un Neumotorax a tensión izquierda, complicándose con

una Empiema del mismo lado, drenado parcialmente en Aísen. Se ingresa a Coyhaique con el diagnóstico de Hemopionemotorax, contusión torácica complicada” y concluye: “La muerte de Don: Rubén Antimán Nahuelquín, se debió a las múltiples complicaciones que fue sufriendo sucesivamente secundarias a la lesión originaria, es decir, al traumatismo de tórax con el consecuente pionemotórax izquierdo, punto de partida de la infección generalizada (septicemia). Siendo su forma médico legal cuasi delito de homicidio”.

B.2.2. Declaración judicial de **fs. 39 a fs. 40 (Tomo I)** de fecha 17 de abril de 1986, de Francisco Ernesto Otarola Zapata, quien declara en lo pertinente que Rubén Antimán Nahuelquín, ingresó al hospital local el día 29 de diciembre de 1985 a las 23:45 horas, a través del servicio de urgencia y fue traído desde su domicilio particular por la ambulancia del hospital. Fue internado por los diagnósticos de shock, neumotórax traumático y contusión torácica. Que además ingresó en completo estado de inconciencia, estando internado hasta el 2 de enero y al no lograr una mejoría de su estado se decidió su traslado al hospital base de Coyhaique. Agregando otros antecedentes y que solicitó la autopsia ya que la interconsulta de traslado efectuada por el doctor Aguayo, se mencionaba una probable agresión.

B.2.3. A **fs. 74 (Tomo I)** informe N°757 de Carabineros Prefectura de Aysén N°27 2da Comisaría Puerto Aysén, de fecha 23 de junio de 1986, en el que se señala. “Que, efectivamente el día 27 de diciembre del año 1985, existe una denuncia hecha por Vitalia del Carmen Nahuelquín Reinaldo, de lesiones de carácter grave en agresión, ocasionada por su hijo Rubén Armando Antimán Nahuelquín, de lo cual se dio cuenta a ese Tribunal, con parte Nro. 409”.

B.2.4. A **fs. 77 a fs. 78 (Tomo I)** (cuya copia consta a fs. 143 a fs. 144; a fs. 238 a fs. 239 Tomo I y a fs. 1.501 a fs. 1.502, a fs. 1.506 a 1.507; a fs. 1.593 fs. 1.594 Tomo IV), informe N°840 de la Segunda Comisaría de Puerto Aysén, mediante el cual se comunica los turnos del día 28 de diciembre de 1985, tercer turno indica: (desde las 23:00 a 07:00 horas) Cabo primero Aliro Quinan Tecai; cabo segundo Alberto Velásquez Barría; cabo segundo Juan Villegas Barrientos; cabo segundo Jorge Talma Talma y carabinero José Salas Veras.

B.3. A **fs. 225 a fs. 226 (Tomo I)** relación del personal de Carabineros de Chile, que figura en la dotación de la Segunda Comisaría de Puerto Aysén, año 1986. En el número veinticuatro se indica cabo primero Víctor Heraldo Cuevas Seguel y en el número ochenta y uno cabo segundo Alberto Daniel Velásquez Barría.

B.4. A fs. 257 a fs. 262 (Tomo I), relación del personal de Carabineros de Chile, que figuran en la dotación de la Segunda Comisaría Puerto Aysén en el periodo del mes de diciembre de 1985, en cuya dotación en el número treinta alude a cabo primero Víctor Herald Seguel, y en el número setenta y uno dice cabo segundo Alberto Daniel Velásquez Barría.

B.5. A fs. 361 a fs. 366 (Tomo I), informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en cuya nómina que se acompaña refiere a Rubén Armando Antimán Nahuelquín y reseña: “Rubén Armando Antimán Nahuelquín, muerto. Puerto Aysén, febrero de 1986. Rubén Antimán tenía 45 años de edad, estaba casado y tuvo cuatro hijos. Se encontraba cesante al momento de los hechos, pero efectuaba trabajos esporádicos. Murió el 8 de febrero de 1986, a consecuencia de un traumatismo de torax, con el consecuente pneumotórax izquierdo, complicado por una septicemia, atribuible a terceros según autopsia. Las lesiones fueron causadas por funcionarios de carabineros, que actuaron haciendo uso excesivo de fuerza”.

B.6. A fs. 1.187 a fs. 1.221 (Tomo III), ordinario N°1229 del Hospital Regional de Coyhaique, que contiene ficha clínica N°76555 correspondiente a Rubén Armando Antimán Nahuelquín, que en lo pertinente contiene a:

B.6.1. A fs. 1.189 (Tomo III) (cuyas copias consta a fs. 1.259 a fs. 1.292 Tomo III) resumen clínico de traslado en cual se señala diagnóstico clínico: “Neumotorax a tensión drenado, empiema pleural izquierdo, alcoholismo crónico y síndrome de depresión alcohólica”. En el título principal sintomatología, se reseña: “Ingresó el 29-12-85 a las 23. Horas, con cuadro de shock (PA= 0, pulso 0), con antecedentes de agresión 2 días antes. Por clínica y radiología se demuestra Neumotorax a tensión”.

B.8. A fs. 1.717 a fs. 1.740 (Tomo V) copia autorizada de expediente causa rol N°4.667 del Juzgado del Crimen de Puerto Aysén, seguida por el delito de lesiones en contra de Vitalia del Carmen Nahuelquín Reinaldo, que en lo pertinente se desglosa:

B.8.1. A fs. 1.719 (Tomo V) Parte N°409 de Carabineros de Puerto Aysén de fecha 28 de diciembre de 1985, mediante el cual ciñe: “Doy cuenta a Us., que hoy a las 00:30 horas, se presentó al cuerpo de guardia de esta unidad Vitalia Del Carmern Nahuelquín Reinaldo, 75 años, casada, labores de casa (...) y expuso: Que, ayer aproximadamente a las 21:30 horas, en circunstancias que se encontraba en su domicilio, antes indicado llegó su hijo Rubén Armando Antimán Nahuelquín, en estado bebido, quien le pidió que le sirva café, a no acceder a su

petición, éste la agredió con golpes de puños y pies, a consecuencia de ello resultó con fractura de A-B izquierdo, de carácter grave, según pronóstico del médico de turno en el hospital local, Dra. Cecilia Bahamonde Carrasco, que la atendió y envió a su domicilio. Se adjunta el certificado médico en mención”.

Que como se aprecia en una ponderación integral de todos los medios de pruebas relacionados, hay una coherencia de los hechos y relatos desde el inicio hasta el final. En efecto, el occiso efectivamente tuvo una discusión con su madre la señora Vitalia y producto del cual esta persona fue hacer la denuncia a carabineros de Chile. A consecuencia de esa denuncia se inició una causa judicial rol 4.667 del Juzgado del Crimen de Puerto Aysén, y por parte de la policía se inició la ubicación y posible detención del fallecido Rubén Antimán Nahuelquín. Del estudio de la causa, y de las propias declaraciones de diferentes testigos y también puede decirse de los acusados, no existen ningún registro que hubiera habido alguna rencilla u altercado en la noche en que fue agredido Rubén Antimán. Ahora bien, desde el inicio Rubén Antimán llega a la casa de su madre quejándose y lesionado, y tanto a sus hijos como en el hospital y a sus otros parientes les manifiesta que fue agredido por carabineros. Más aún les indica los nombres. Nombres que para él además no eran desconocidos, ya que es el propio Víctor Cuevas que indica, que se conocían desde la infancia. A lo anterior, para ratificar lo serio de la denuncia en su momento la Vicaria de la Solidaridad presentó una denuncia por los dichos de la familia de Rubén Antimán, que habría sido agredido por carabineros. Sobre el sumario interno de carabineros no obstante que este Tribunal lo solicito, carabineros informó que no se encontraron registros magnéticos como tampoco físicos, de algún expediente que diga relación con la víctima Rubén Antimán Nahuelquín a fs.1.038 (Tomo III). Por otro lado, hay que hacer notar al turno realizado por el acusado Víctor Herald Cuevas Seguel, que ya este acusado, en 18 de junio de 1986 a fs. 69 a fs. 70 (Tomo I) ya se ubicó en el lugar y época de los hechos indicando: “Que el día 28 de diciembre de 1985, asumió como suboficial de guardia el cabo primero Luis Castro Castro y ese mismo día alrededor de las veintiuna a veintidós horas, se le nombró suboficial de guardia en la comisaría de carabineros, en reemplazo del citado Castro, razón por la cual tuvo que trabajar como suboficial de guardia hasta el día siguiente a las 08:00 horas de la mañana”. En consecuencia, el relato de Rubén Antimán que realizó mientras pudo a sus familiares resulta plausible con la ponderación de los medios de prueba legal que se han detallado.

16°) Que del conjunto de elementos probatorios antes detallados y relacionados generales y específicos, ponderados consistentes en testigos directos, indirectos, documentos y pericias antes señaladas. Como además se indica en el auto acusatorio **fs. 2.096 a fs. 2.131 (Tomo VI)**, permiten al Tribunal a través de los medios de prueba legal que se han detallados y relacionados, llegar a la convicción:

A. Primero que han existido el delito de **homicidio calificado** en la persona de Rubén Armando Antimán Nahuelquín previstos y sancionados en el artículo 391 N°1 circunstancia Primera del Código Penal vigente a la época de los hechos, ilícito en su carácter de lesa humanidad.

B. Segundo que en ese ilícito le ha correspondido la participación en calidad de **Autor** en los términos del artículo 15 N°1 del Código Penal al acusado **Víctor Herald Cuevas Seguel**, ello sin perjuicio de otras reflexiones que puedan hacerse al analizar los escritos de los querellantes y la defensa.

17°) Que prestando declaración indagatoria **ALBERTO DANIEL VELÁSQUEZ BARRÍA** (24 años a la fecha de los hechos) quien declaró de fs. 463 a fs. 464 (Tomo II), de fs. 485 a fs. 486 (Tomo II), de fs. 488 a fs. 489 (Tomo II) y de fs. 1.358 a fs. 1.363 (Tomo III).

En declaración extrajudicial de fecha 08 de julio de 2012, rolante de **fs. 463 a fs. 464 (Tomo II)** (copia de fs. 485 a fs. 486 Tomo II) aduce que se contrató en Carabineros de Chile 01 de diciembre de 1974, específicamente en la Segunda Comisaría Puerto Aysén, y el curso de instrucción lo realizó en la Primera Comisaría de Ancud, egresando en el mes de septiembre de 1975 y su primera destinación fue en la Segunda Comisaría Puerto Aysén, unidad donde presto servicios hasta el año 1989, posteriormente, es destinado a la Quinta Comisaría Pitrufuquén, desde donde se acogió a retiro en el mes de marzo de 1996, con el grado de sargento segundo de Carabineros de Chile. Por otra parte agrega que su función dentro de la segunda Comisaría Puerto Aysén, era la de orden y seguridad, lo que involucraba servicios de población y guardias en el cuartel. Que en relación a Rubén Armando Antimán Nahuelquín, dice que lo conoce desde la niñez, ya que sus padres conocían a la familia de éste, por lo tanto se veían siempre en la ciudad, recuerda que él trabaja en el correo de Puerto Aysén, que Antimán era mucho mayor de edad que él. Que era una persona tranquila, y que en algunas ocasiones la vio con sus "tragos", pero siempre con un buen comportamiento, nunca supo que haya realizado escándalos o que agrediera a alguna persona, por ende nunca lo vio detenido en su unidad policial. No

obstante, no puede asegurar que algún funcionario de la segunda comisaría lo haya detenido en alguna ocasión. Comunica que Antimán, se encontraba separado de su señora. No puede precisar donde vivía exactamente Antimán, ya que en Puerto Aysén residía su madre y sus hermanos, que eran alrededor de tres o cuatro, por lo que no sabe con quién de estos podrían haber estado viviendo. Que nunca le correspondió ir al domicilio Antimán, ya sea para trabajar alguna orden o para detenerlo. No recuerda fecha exacta, pero se encontraba trabajando en la Segunda Comisaría Puerto Aysén, cuando le notifican que tenía que presentarse en la Prefectura N° 27 Puerto Aysén, y entrevistarse con el subprefecto de los servicios comandante Orlando Correa Foulon, seguidamente, el comandante Correa, le informa que debe declarar en un sumario administrativo, debido a que había llegado un documento a la prefectura, el cual le involucraba a quien suscribe y a tres funcionarios más de la Segunda Comisaría Puerto Aysén, entre ellos estaba el cabo Herald Cuevas Seguel, cabo Héctor Ulloa Matamala y el carabinero Marcelo Soto Aguilar, ya que supuestamente ellos y quien suscribe habían agredido a Rubén Antimán Nahuelquín, y que producto de esta acción este falleció en la ciudad de Coyhaique. Que posteriormente, prestó declaración en el sumario administrativo y finalmente salió sobreseído, ya que nunca se acreditó su participación en los hechos investigados, y del resto de los carabineros supo que también salieron sobreseídos, por no tener participación. Que a fines del año 1985 y principios del año 1986, le toco en algunas ocasiones realizar servicios de población en diferentes turnos con el cabo primero Herald Cuevas Seguel, cabo Héctor Ulloa Matamala y el carabinero Marcelo Soto Aguilar, ya que en la unidad habían cuatro escuadras para los servicios y durante estos turnos que realizó con estos tres carabineros, nunca le correspondió realizar un procedimiento policial con el señor Antimán, y desconoce si estos tres funcionarios en alguna ocasión adoptaron algún procedimiento con esta persona. Manifiesta que desde que se cerró el sumario administrativo por la muerte de Antimán Nahuelquín, nunca más ha declarado en esta investigación.

En declaración judicial de fecha 10 de septiembre de 2012, rolante **de fs. 488 a fs. 489 (Tomo II)** reitera que ingresó al cuerpo de carabineros el primero de diciembre de 1974. Que hizo el curso, que era de seis meses y volvió a la misma unidad, la Segunda Comisaría de Puerto Aysén, trabajó ahí hasta diciembre de 1989 y fue destinado a varios destacamentos dependiente de la misma Unidad. Que en el año 1989 fue trasladado a la Prefectura de Cautín y destinado a la Quinta Comisaría de Pitrufquén, donde se acogió a retiro. Dice que

conocía a Rubén Armando Antimán Nahuelquín desde la niñez. El trabajaba en el correo de Puerto Aysén. No recuerda haber tenido un procedimiento donde éste estuviese comprometido, era una persona tranquila, aunque a veces bebía, “pero era muy tranquilo”, nunca supo que haya realizado escándalos o situaciones de carácter público. Que nunca participó de alguna detención o procedimiento policial en el que estuviese involucrado Antimán. Sabe que estaba separado, pero ignora con quien vivía, si con sus padres u otra persona. Que jamás le correspondió ir hasta su domicilio. Que hubo un sumario administrativo en la prefectura N° 27 de Aysén, siendo llamado a declarar junto con el cabo Heraldo Cuevas, Héctor Ulloa Matamala y el carabinero Marcelo Soto. Que dicho sumario una vez agotada la investigación se archivó sin resultados contra el personal. Acota que Puerto Aysén es un “pueblo chico, todas las cosas se saben”. Que efectivamente Antimán fue agredido, pero ignora quienes cometieron ese hecho. Que fue llevado a Coyhaique falleciendo en el hospital. Reiterando que después de que declaró en el sumario administrativo, nunca ha sido interrogado en algún tribunal.

En declaración judicial de fecha 03 de mayo de 2016, rolante **de fs.1.358 a fs. 1.363 (Tomo III)** acota que las declaraciones anteriores, las preste de forma voluntarias y en relación al procedimiento policial en el que habría sido detenido Rubén Armando Antimán Nahuelquín dice derechamente que él no ha participado nunca en alguna detención de esta persona. A Antimán Nahuelquín lo conoció desde su infancia toda vez que es nacido y criado en Puerto Aysén, y por tanto, desde niño que lo conoció, este era mayor que él, pero Antimán Nahuelquín jugaba por el deportivo Cochrane en Puerto Aysén y como era bueno se destacaba y por esa razón era conocido en todo el pueblo y también él lo conocía, era mayor, porque le llevaba aproximadamente unos quince años, de vista también conoció a los padres de Nahuelquín, éste último trabajó en correos un tiempo y después no sabe las razones porque no siguió trabajando allí. Que no tuvo conocimiento de que Antimán Nahuelquín hubiera sido detenido por carabineros, ni tampoco que posteriormente lo hubieran agredido. Que en carabineros se hizo un sumario administrativo, precisamente a raíz de la muerte de Rubén Armando Antimán Nahuelquín. Fue interrogado en ese sumario administrativo, no recuerda la fecha exacta, pero fue interrogado en la prefectura, lo interrogó el comandante y subprefecto de los servicios Orlando Correa Foulon, era teniente coronel. El comandante le narró una denuncia que había llegado a la prefectura, sobre el fallecimiento de una persona, se refería a Antimán Nahuelquín, y que inculpaban a cuatro funcionarios policiales por la muerte de

esta persona en un procedimiento policial. Los inculpados eran el cabo Heraldo Cuevas Seguel, el cabo Héctor Ulloa Matamala, el carabinero Marcelo Soto Aguilar y él. Se les inculpaba o acusaba de que ellos habían agredido a Antimán Nahuelquín, con golpes, no con armas, recordando que el comandante lo interrogó, allí respondió que no había participado en esos hechos, ni en ningún procedimiento relacionado con la detención de Antimán. No sabe si los demás carabineros inculpados eran o no inocentes. Después conversaron entre los cuatro carabineros inculpados y los demás le dijeron que tampoco habían participado en un procedimiento de detención de Antimán, ni menos que lo habían agredido. Que en esos años, el carabinero que llegaba a la prefectura "era cortado de cabeza seguro, porque lo daban de baja", y por eso cuando a él se le citó, los colegas le dijeron "oye que te pasó" o "porque te citaron", los que le preguntaban eso eran los carabineros que trabajaban en la comisaría, porque querían saber porque estaba citado a la prefectura y les contó que se le inculpaba de un hecho del que era inocente porque no había participado en nada. No supo cómo terminó el sumario administrativo. Que en esos años, cuando se ordenaba un sumario administrativo, la orden venía del prefecto y éste designaba al oficial investigador, en este caso, fue el comandante, cree que en el año 1984, y el oficial designado fue el comandante de apellido Correa. No recuerda el nombre del prefecto de esa época, ni el resultado del sumario administrativo, nunca más lo llamaron. Que un año después que ocurrieron los hechos, el año 1986 él fue trasladado a la Tenencia de la Junta en la Carretera Austral y estuvo hasta el año 1989, año en que fue trasladado a la Prefectura Cautín y después a la Quinta Comisaría de Pitruquén, donde estuvo hasta el año 1996 año en que se acogió a retiro. Musita que a los colegas Cabo, Heraldo Cuevas, Héctor Ulloa y Marcelo Soto que fue su compañero de promoción, nunca más los volvió a ver, y por lo tanto entre ellos nunca se tocó el tema relacionado con la muerte de Rubén Antimán Nahuelquín. Desmiente la versión de Selfa Antimán Nahuelquín, al parecer hermana de Rubén Antimán Nahuelquín, quién habría; manifestado que antes de morir, su hermano, habría dicho que los carabineros que lo golpearon fue el cabo Heraldo Cuevas, "el yerno de la Tila", refiriéndose a su persona y otro carabinero que no dio su nombre. Explica que su suegra se llama Bertila Osorio y le dicen "Tila", y él es casado con Gloria Villegas Osorio, reiterando que no es efectivo que él haya participado en una agresión o golpiza contra Rubén Antimán Nahuelquín, ni tampoco en una probable detención policial en contra de este. A la vez desmiente la versión de Doris Nelfa Antimán Jara, hija de Rubén Armando Antimán

Nahuelquín, que dice que su tía Selfa Antimán Nahuelquín le habría contado que antes de morir su padre identificó a los tres carabineros que lo habrían agredido, uno el "chotelo"; de nombre Marcelo Soto, otro Heraldo Cuevas y el tercero habría sido quien suscribe, cosa que desmiente absolutamente. También desmiente la declaración perteneciente a Selfa Antimán Nahuelquín (declara por exhorto ante el Juzgado del Crimen de San Felipe, fojas 31 y 32), donde dice que ella le habría preguntado a su hermano Rubén Armando Antimán Nahuelquín, mientras estaba hospitalizado acerca de quién lo había golpeado y su hermano le habría respondido que fueron el cabo de carabineros Heraldo Cuevas, "el yerno de la Tila Osorio", refiriéndose a su persona, Alberto Daniel Velásquez Barría y, a un tercer carabineros al que no conocía, ya que ello no es efectivo, porque él no ha participado ni en la detención ni en la muerte de Antimán Nahuelquín. Preguntado sí la noche del día 28 de diciembre de 1985, en que conforme al parte de la Policía de Investigaciones, de fojas 9, habría sido detenido Rubén Armando Antimán Nahuelquín, en horas de la noche, él se encontraba cumpliendo algún turno en la Segunda Comisaría de Carabineros de Puerto Aysén, responde: No recuerda bien si estaba de turno o de franco. El Tribunal le exhibe el documento que rola en fs. 42 a fs. 43, en que carabineros detalla los turnos de ese día, y al respecto señala: que mirando el documento, recuerda haber hecho turno el día 28 de diciembre de 1985, desde las 23:00 horas a las 07:00 de la mañana, que correspondía al tercer turno. El turno lo hizo con el cabo primero Aliro Quinan Tecaí, con el carabinero Juan Villegas Barrientos, con los carabineros Jorge Taima y José Safas Vera. Ese turno lo realizó en la facción Sargento Aldea recorrido, o sea, se recorría Sargento Aldea, en ese entonces había un punto fijo en la prefectura y otro en la gobernación provincial y a él le tocó Sargento Aldea. Detalla como desarrollaron el tercer turno: el cabo Quinan iba en el carro con un funcionario, no recuerda quién era, los demás uno de ellos era punto fijo en prefectura y otro punto fijo en la gobernación provincial y a él le tocó por ser el más antiguo Sargento Aldea. A su vez asegura que esa noche, no recuerda la hora, sonó la sirena y fueron a atender un procedimiento de incendio, no recuerda la calle, aunque le parece que era Cochrane, se estaba quemando una bodega de Alberto Mauret cerca de la cárcel antigua como a una cuadra de la antigua comisaría y recuerda que llegaron a ese procedimiento el jefe de tenencia de Chacabuco, porque esa noche había una convivencia en el casino de oficiales. El jefe de turno Aliro Quinan al término del turno dejaba constancia en el "libro de población" de todos los procedimientos del turno, ese libro se maneja en la guardia y cuando se llenaba el libro se iba al

archivo de la Comisaría y se quedaba allí. Interrogado si el día 28 de diciembre de 1985, alrededor de las 23:00 horas, el tercer turno que él integraba ya se encontraba patrullando las calles de Puerto Aysén, responde: Que, efectivamente, el tercer turno que integraba comenzaba a las 23:00 horas terminaba a las 07:00 de la mañana del día 29 de ese mes y año, y el recorrido de las calles de Puerto Aysén lo hicieron en la forma que ya lo detalló anteriormente, donde dijo que en lo que a él respecta le correspondió recorrer Sargento Aldea, recorrido que abarcaba desde el sector Copec hasta el sur, donde se encontraba el antiguo cuerpo de bomberos, y en este turno no se detuvo a ninguna persona ni se detuvo a Rubén Armando Antimán Nahuelquín, al cual, espeta, él nunca ha agredido. Evidencia que cuando se era punto fijo y necesitaba detener a alguien o quería detener a alguien siempre se le pedía colaboración al carro, por lo que entre todos los del turno se enteraban de cualquier procedimiento de detención. Nuevamente consultado narra que Aliro Quinan vive en Chillan, Juan Villegas vive en Ancud y José Salas era de Aysén aunque tiene la impresión de que está fallecido y respecto al “chico Talma” perdió conocimiento no sabe dónde se encuentra. Cuenta que el chofer del servicio de turno del tercer turno del día 28 de diciembre de 1985, era Segundo Catelicán Cárdenas, cabo, que tiene entendido vivía en Puerto Montt. Descarga que en el sumario administrativo a él lo interrogó el comandante Orlando Correa y no el capitán Julio Soto, al cual él ubicaba porque trabajaba en la prefectura, el fiscal investigador del sumario administrativo fue el comandante Correa. Consultado dice que el oficial que ordenó el sumario administrativo donde él fue interrogado por el comandante Correa, recuerda que era el coronel Ramón Sánchez Urzúa. Aclara que, en relación a los turnos del día 28 de diciembre de 1985, no recuerda que hubieran hecho turno ese día Heraldo Cuevas, Héctor Ulloa o Marcelo Soto. Al día siguiente, 29 de diciembre de 1985, él estaba libre así es que no puedo saber quiénes estaban de turno. Conforme al documento que en este acto se le exhibe (fs. 42 a fs. 43) Héctor Ulloa Matamala figura integrando un turno de ese día y específicamente fue quien recibió el turno que ellos entregaron en la mañana del día 29, ya que, se desempeñaba como jefe de turno.

Declaración judicial de fecha 17 de junio de 1986, rolante de **fs. 67 a fs. 69 (Tomo I)**, afínca en lo concerniente que es cabo segundo de la Comisaria de Carabineros de Aysén, y que en su calidad de funcionario policial no le ha tocado jamás ningún procedimiento relativo a alguna denuncia interpuesta por doña Vitalia Nahuelquín Reinaldo por el delito de lesiones, en la cual inculpara a

su hijo Rubén Antimán Nahuelquín. Que conoce a ambos, porque desde niño los ha conocido en Puerto Aysén. Que inclusive Rubén Antimán fue funcionario de correos durante muchos años. Que jamás durante el curso del año 1985, ni posteriormente en los primeros meses del año 1986 ha detenido por alguna razón al citado Rubén Antimán Nahuelquín. Recordando que en el curso del año 1984, le parece que a fines de ese año, cuando se desempeñaba en la comisión civil de carabineros, detuvieron a Rubén Antimán, por sospecha de robo, pero después de algunas horas fue puesto en libertad por no haber existido mérito para ponerlo a disposición del Tribunal. Que ignora si fue detenido por personal de carabineros que le tocó el procedimiento, aduciendo que existe el libro de guardia, donde cada turno informa sobre sus detenidos, además las constancias de lo ocurrido en la población, que se lleva en un libro aparte de novedades de la población. En cuanto al día 28 de diciembre de 1985 se encontraba de servicio de tercer turno en la población desde las 23:00 a las 07:00 del día siguiente. Turno que se encontraba a cargo del cabo primero Aliro Quiñon Tecny, relatando un procedimiento policial por incendio donde habría participado y que habían detenido a una persona de apellido Barriga a petición de su cónyuge, el que fue detenido y llevado a la guardia de la comisaría; que en el mismo recorrido casi al llegar a la garita de carabineros de avenida Eusebio Ibar, se procedió a detener a tres personas por ebriedad, los que fueron llevados a la guardia y posteriormente salió nuevamente a cumplir con sus servicios, no existiendo posterior a esa hora, que serían alrededor de 02:00 de la madrugada ningún otro procedimiento policial. Que la guardia estaba a cargo del cabo primero Víctor Cuevas Seguel, durante veinticuatro horas, por lo que debía entregar la guardia a las ocho horas del día siguiente. Reiterando no haber detenido a Rubén Antimán en el curso del año 1985, por tanto es inexacto que sea él uno de los aprehensores de este. En cuanto al funcionario cuyo padre se conocía como "El chotelo", es el cabo segundo Marcelo Soto Aguilar, quien no se encontraba de turno la noche del 28 de diciembre, entre el personal de servicio a la población y tampoco lo vio integrando el personal de guardia, pensando que esa noche estaba de franco.

18°) Que haciéndonos cargo de las declaraciones indagatorias del acusado, **Alberto Daniel Velásquez Barría**, quien fue sometido a proceso a **fs. 1.370 a fs. 1.377 (Tomo III)**, con fecha 04 de mayo de 2016. A **fs. 1.434 a fs. 1.438 (Tomo III)** con fecha 26 de julio de 2016 la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Coyhaique, revoca el auto de procesamiento. Con fecha 12 de julio de 2021 a **fs. 1.981 a fs. 2.016 (Tomo VI)** se sometió a proceso. A **fs. 2.071 a fs. 2.074**

(**Tomo VI**) con fecha 02 de noviembre de 2021 la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco confirma al auto de procesamiento. **Acusado** según el auto de **fs. 2.096 a fs. 2.131 (Tomo VI)** con fecha 30 de diciembre de 2021, como autor del delito de homicidio calificado en su carácter de lesa humanidad en la persona de Rubén Armando Antimán Nahuelquín, perpetrado en la ciudad de Puerto Aysén, en el mes de diciembre de 1985. Que si bien el acusado se ubica en la fecha, lugar y sitio del suceso, agrega factores que podrían eximirlo de responsabilidad en los hechos. No obstante lo anterior, según el mérito del proceso, las pruebas rendidas y ponderadas en conformidad a la ley, obran en su contra los siguientes elementos de convicción.

Desde ya, por síntesis y economía procesal se dan por reproducidos todos los elementos probatorios generales antes ponderados y específicos relacionados y aquilatados puntualizando lo siguiente:

A. DECLARACIONES

A parte de lo que se ha detallado en la prueba de los testigos conviene puntualizar respecto de éstas personas lo siguiente:

A.1. Segundo Armando Catelicán Cárdenas

En declaración judicial de 30 de noviembre de 2017, que rola a **fs. 1.605 (Tomo IV)**, acota en lo pertinente que prestó servicios en la Segunda Comisaría de Puerto Aysén desde el año 1980 hasta 1988. No recuerda haber participado en la detención de la víctima, como tampoco haber sido testigo de ello, ya que los procedimientos policiales los ejecuta el jefe de turno y acompañantes. Que era chofer del furgón en esa época y no tenía mayor participación en los procedimientos. El día en que según los antecedentes aportados por los familiares del ofendido, este fue detenido, el 28 de diciembre de 1985, él trabajó en el segundo patrullaje como chofer del furgón, desde las 20:00 a las 08:00 del día siguiente, de acuerdo a la fotocopia que el Tribunal le exhibe y que rola a fs. 43. Que la comisaría atendía todos los procedimientos policiales de la ciudad de Puerto Aysén en su totalidad, en esa época no había sectores acotados o cuadrantes. Que todos los procedimientos policiales quedan estampados en los libros de guardia y de servicio de población, respectivamente, motivo por el cual si la víctima fue detenida, debería haber quedado allí ingresado, por cuanto todo procedimiento por mandato legal debe quedar registrado.

A.2. Osvaldo Del Carmen Mercegue Andrade

En declaración extrajudicial de fecha 15 de marzo de 2013, **rolante a fs. 784 a fs. 785 (Tomo II)** sostiene en lo pertinente que cumplió funciones en la

segunda Comisaría de Carabineros de Puerto Aysén. Respecto a los funcionarios Aliro Quinan Tecai, Alberto Velásquez Barría, Juan Villegas Barrientos, Jorge Talma Talma y José Salas Vera, los ubicaba por ser funcionarios de dotación de la segunda Comisaría de Carabineros de Puerto Aysén. Afirmó que existían funcionarios de la unidad mencionada, que cumplían funciones en la comisión civil, siendo estos el suboficial Jaime Daniel Díaz Castro, el cabo Aliro Quinan Tecai, más conocido como el "Indio Quinan"; el cabo Alberto Velásquez Barría, más conocido como "El Zorro Velásquez" y el cabo Víctor Cuevas Seguel, quienes realizaban operativos y detenciones ordenadas por el mando institucional. Con relación a Rubén Armando Antimán Nahuelquín, desconoce todo antecedente. Que tuvo conocimiento que existían relegados políticos, personas que estaban sujetas a firmas en las unidades de Carabineros de Chile.

En declaración judicial de fecha 10 de junio de 2013, rolante a **fs. 868 a fs. 868 vta. (Tomo II)** ratifica su declaración extrajudicial replicando en lo atinente los nombres de los funcionarios Aliro Quinan Tecai, Alberto Velásquez Barría, Juan Villegas Barrientos, Jorge Talma Talma y José Salas Vera, todos de dotación de la segunda Comisaría de Carabineros de Puerto Aysén y algunos de ellos, como el suboficial Jaime Daniel Díaz Castro; el cabo Aliro Quinan Tecai, más conocido como "el Indio Quinan", el cabo Alberto Velásquez Barría, conocido como "el Zorro Velásquez" y el cabo Víctor Cuevas Seguel, cumplían funciones en la comisión civil y les correspondía realizar operativos y detenciones ordenadas por el mando institucional. Entre otras declaraciones.

A.3. Milton Manuel Zúñiga Sandoval.

En declaración judicial de fecha 29 de junio de 2017, rolante de **fs. 1.540 a fs. 1.542 (Tomo IV)**, en lo pertinente y entre otras declaraciones, dice que para la fecha de los hechos se encontraba trabajando en la segunda Comisaría de Puerto Aysén, mencionado parte de la orgánica de dicha unidad. Que los servicios de patrullajes en la población se efectuaban de infantería, pese a que se disponía del furgón y de un jeep, pero solo se ocupaban para traslado y relevo de personal, como también para traslado de detenidos en los procedimientos, haciendo presente que para el turno se entregaban como cinco litros de bencina para los vehículos. Que era común que el patrullaje lo conformaran cuatro funcionarios, dos de ellos de punto fijo en la gobernación y prefectura, y los otros dos funcionarios quedaban patrullando de infante y al servicio de la población. En algunos casos quedaba un funcionario en una garita ubicada en la calle Pedro Aguirre Cerda, de la Población del mismo nombre. Agrega que eran notificados vía

radial de la comisaría por el personal de guardia, para concurrir a los lugares donde adoptar los procedimientos. Que sabía de la existencia de un elemento denominado “churro”, el que presumiblemente era utilizado para reducir o contener cuando los detenidos se ponían agresivos hacia el personal, provocaba lesiones a las personas. Este elemento denominado “churro”, es probable que determinados carabineros lo haya tenido en sus casilleros para el desarrollo de los servicios, se enteró por comentarios de sus pares. Respecto documento que se le exhibe, el que fue emanado de la Prefectura Nro. 27 Aysén, Oficio Nro. 840, de fecha 15 de julio del año 1986, que va direccionado desde la Segunda Comisaría de Puerto Aysén al Juzgado del Crimen de Puerto Aysén, que da cuenta de los servicios de la Unidad del día 28 al 29 de diciembre del año 1985, dentro de los cuales aparece su nombre y grado, específicamente el día 29 de diciembre “chofer de servicio (desde las 08:00 a las 20:00 horas), señala que efectivamente los servicios eran confeccionados de esa forma y el día anterior, los cuales eran puestos en una tabla de servicio. Dice no conocer a Rubén Armando Antimán Nahuelquín, e ignora las circunstancias que rodearon su detención y posterior deceso. Que conforme a los servicios dispuestos los días 28 al 29 de diciembre del año 1985, dentro de los cuales aparece específicamente el día 29 de diciembre “chofer de servicio” (desde las 08:00 a las 20.00 horas), manifiesta que por el tiempo, no recuerda si se practicó la detención de una persona que haya sido denunciada por lesiones o que se haya enterado que el resto del personal de servicio haya adoptado un procedimiento de esa naturaleza o de cualquier índole. No es de su conocimiento que el personal saliente de patrullaje de “tercer turno” del día 28 de diciembre (desde las 23:00 a las 07:00 horas), lo haya efectuado. Finalmente, manifiesta que en la 2ª Comisaría de Puerto Aysén, dentro del personal de la unidad, los cabos Cuevas y Velásquez, se destacaban por tener un trato duro con los detenidos y con el propio personal policial, pero nunca presencié que ellos maltrataran a detenidos.

A.4. Julia Borquez Antimán.

Declaración extrajudicial de fecha 21 de septiembre de 2020, rolante de **fs. 1.973 a fs. 1.976 (Tomo VI)**, interrogada por el Tribunal en lo pertinente afín a que la víctima, era su tío, hermano de su madre. Que vio a su tío en la navidad, les pasó a dejar unas cosas y ahí “desapareció” y no lo vio nunca más. Hasta que en febrero su madre escuchó en la radio que buscaban a la familia de Rubén Armando, porque estaba hospitalizado en Coyhaique. Entonces fueron a Coyhaique donde estuvieron unos días hasta que su tío falleció. Se lee

declaración de fs. 186 de Selfa Antimán, la testigo dice: que no sabe, porque su tío la saludo en la entrada de la casa, no ingreso, solo dejo unos “cachureos” y después se fue. Recuerda que iba en buenas condiciones, que era una persona normal, tranquila, “ni siquiera con alcohol”. Que su mamá le contó que su tío le había hablado y le dijo que los carabineros lo “habían golpeado y lo pisaron, que eran como seis carabineros, lo tiraron al suelo y lo pisaron”. Después lo habían bañado en agua, entonces no se le notaba. Cuando falleció su madre le indicó que fue al hospital la dejaron entrar a la morgue y su tío estaba “negro y ella le beso los pies”. Después fueron a una misa y lo sepultaron en Coyhaique. Que al parecer la familia lo había denunciado y por eso los carabineros usaron mucha fuerza. Que su tío también le dijo a su mamá que lo habían dejado tirado en el río y ahí ingreso al hospital de Aysén y nadie lo quiso identificar y por eso fue enviado a Coyhaique. A la pregunta si recuerda que su madre le diera nombre de los carabineros que pudieran haber participado, responde: que le nombró al carabinero de apellido Cuevas, no recuerda otro nombre.

A.5. Doris Nelfa Antimán Jara,

En declaración judicial de fecha 24 de mayo de 2011, rolante a **fs. 169 (Tomo I)**, en lo tocante, ratifica su declaración extrajudicial y agrega que para el año 1986 tenía 18 años de edad. En el mes de enero del año 1986, en horas de la tarde se encontraba en su domicilio de calle Serrano Montaner N° 745 de la ciudad de Aysén junto a su padre Rubén Armando Antimán Nahuelquín, a su abuela paterna Vitalia Nahuelquín Reinaldo (fallecida). Afirma que esa tarde su padre tuvo una discusión con su abuela paterna, porque su padre estaba un poco mareado; a su abuela no le gustaba que su papá “tomara”; le llamó la atención, le pegó con un bastón, discutieron y su abuela cayó al suelo sentada; se enojó con su padre diciéndole que por culpa de él se cayó; le indicó que iba a llamar a carabineros para decirle que la hacía enojar y por eso se golpeó; su padre salió de la casa para evitar esos conflictos; no regresó hasta el día siguiente. Llegó quejándose de dolor, se tomaba el abdomen decía que tenía mucho dolor y después de consultarle qué le pasó, el señaló “mija me pegaron los pacos”. Recordando entre los carabineros que lo agredieron “el Zorro Velásquez” y otros. A raíz de lo mal que vio a su padre, lo llevó al hospital de Aysén; en ese centro le indicaron primero que era una “pulmonía”, y como era grave lo trasladaron al Hospital de Coyhaique. A ese centro no pudo ir a ver a su padre por lo trasmano del lugar; no existían los medios para traslado y, además, porque tenía a sus dos hijos pequeños. En ese hospital su padre estuvo grave como dos semanas, hasta

que falleció; a ella no la dejaron ir, debido a que era muy joven y, por lo tanto, no vio más a su padre desde la fecha de la golpiza que había recibido de carabineros, según así él le contó.

En declaración extrajudicial de fecha 28 de mayo de 2013, rolante de **fs. 1.091 a fs. 1.092 (Tomo III)**, recuerda que para la fecha de ocurridos los hechos, a principios del mes de febrero del año 1986, vivía junto a su grupo familiar compuesto por su abuela Vitalia Nahuelquín (fallecida), Rubén Armando Antimán Nahuelquín, Moisés Leiva Rodríguez su ex marido, sus hijos Moisés y Hans, en el domicilio ubicado en calle Serrano Montaner, no recuerda su numeración. En lo pertinente reitera que su padre Rubén Armando era un hombre de trabajo, pero al momento de ocurridos los hechos, estaba cesante; asimismo, recuerda que bebía alcohol en forma esporádica y siempre llegaba a la casa. Que un día en horas de la tarde, su padre llegó a la casa en estado etílico, momento en el cual comenzó a jugar con su nieto Hans, instante en que llega su abuela Vitalia y lo golpea con su batón en la cabeza, llamándole la atención del por qué estaba ahí; su padre se paró en forma instantánea y su abuela se fue hacia atrás, cayendo al suelo, interpretando que su padre la iba a golpear, razón por la cual su abuela se dirigió a carabineros a denunciarlo, hecho que fue así, ya que, su abuela al llegar le dijo que efectivamente había denunciado a su padre. Pasado de unas horas llegaron a su casa los funcionarios de carabineros de la unidad de Puerto Aysén; recuerda que les abrió la puerta y comenzaron a buscar a su padre, pero no lo encontraron; era unos cinco uniformados, dentro de los cuales puede mencionar al hijo de un vecino que era de apellido Soto, y manejaba el vehículo policial en esa oportunidad. Que el funcionario que se encontraba a cargo era de tez blanca, pelo claro y ojos de color azul; posteriormente se retiraron. Al día siguiente, su padre llegó en horas de la tarde, quejándose de mucho dolor, tomándose con sus manos su estómago, indicando que le dolía todo el cuerpo; ante esto lo asistió y le quitó la camisa y le revisó el cuerpo, no apreciando marcas de golpe en su cuerpo, excepto de sus brazos, que tenía un surco marcado. Le dio agua y aspirinas para calmar el dolor, pero no fue suficiente y tuvo que llamar la ambulancia y se lo llevaron de urgencia; es en ese momento que al preguntarle qué le había pasado, comentó que “los pacos le habían pegado”, dentro de los cuales estaba “El Chotelo” (Soto chofer), el Cuevas y el “Zorro Velásquez”, que lo habían ido a tirar, pero no comentó en qué lugar lo subieron y menos donde lo golpearon, para luego dejarlo tirado. Consecuentemente, llegó la ambulancia y lo trasladaron al Hospital de Puerto Aysén. Al llegar al centro médico, su padre fue

atendido por un doctor de apellido Silva, quién antes de examinarlo le preguntó qué la había pasado, ante lo cual le indicó que lo habían golpeado los carabineros. Su padre ingresó a la urgencia y le tomó la mano, ese fue el último momento que lo vio con vida, ya que al día siguiente, al parecer, fue trasladado al Hospital de Coyhaique, lugar donde posteriormente, fallece. Al día siguiente concurrió hasta el hospital a ver a su padre entrevistándose con el doctor Silva, quién le indicó que se padre había sido trasladado al Hospital de Coyhaique, producto de una neumonía. Posteriormente a la muerte de su padre en la ciudad de Coyhaique, se enteró por intermedio de su tía Selfa Antimán Nahuelquín, que había realizado una denuncia contra carabineros en la Fiscalía Militar. Por esa razón un momento llegó carabineros a su casa a tomarle declaración a su abuela Vitalia; ella fue citada a la Prefectura a relatar lo ocurrido, instante en el cual la obligaron a firmar un testimonio que los exculpaba de toda responsabilidad de lo ocurrido con su padre. No tiene conocimiento qué pasó con esa investigación que llevaba la Fiscalía Militar, ya que nunca más supo de ella y tampoco la notificaron de alguna resolución. Que con el pasar del tiempo el doctor y los carabineros involucrados en la muerte de su padre salieron de la zona, nunca más los volvió a ver. Que puede reconocer fotográficamente al carabinero que concurrió en primera instancia a buscar a su padre, y como antes indicó, era de tez blanca, pelo claro y ojos de color azul, además, era quien iba a cargo de la patrulla policial. Entre otras declaraciones.

A.6. Miguel Ángel Antimán Jara

En declaración judicial de fecha 02 de diciembre de 2019, rolante de fs. **1.890 a fs. 1.891 (Tomo V)**, en lo pertinente indica que iba siempre a visitar a su padre y a su abuela, que no supo del altercado de su padre y su abuela, que él llegó en la tarde. Que es hijo de la víctima. En cuanto a los sucedido con su padre Rubén Antimán, arguye que llegó a la casa y uno de los hijos de su hermana estaba llorando en la cocina, sintió que alguien se quejaba en el dormitorio, así que entró a ver a su papá y le preguntó “qué te pasa y me dice: fue el zorro Velásquez y Cuevas”, pero no sabía quiénes eran, pensó que eran amigos de su padre. Luego su hermana le dice que fueron los carabineros, le preguntó porque le pegaron y ella le contó lo sucedido con su abuela. Al otro día cuando volvió, lo habían llevado al hospital y cuando fue al hospital le dijeron que lo habían trasladado a Coyhaique, lugar al que no alcanzó a ir ya que falleció. Interrogado dice que su padre le nombró dos personas “El zorro Velásquez y Cuevas”, a quienes no conoce y pensaba que eran amigos de su padre, que este se quejaba

mucho y conversaba poco. Que su padre no estuvo detenido en la comisaría, que lo encontraron en la calle y ahí le pegaron. No pudo ver las marcas en su cuerpo porque estaba tapado. Su hermana no le comentó que haya visto lesiones en su cuerpo. Lo que puede decir es que gritaba mucho de dolor, le ofreció llevarlo al hospital y no quiso. No se percató de la presencia de militares o carabineros en el hospital, preguntó en la guardia y le dijeron que había sido trasladado a Coyhaique. No sabe quién más puede haber sido testigo de lo acontecido con su padre. Preguntado si tuvo conocimiento que su padre haya tenido problemas con carabineros o alguna rama de la Fuerza Armada, responde: que sabe que perdió el trabajo, era empleado del correo, y cuando entro el gobierno militar, quedo sin trabajo, su padre no participaba en movimientos políticos. Que no conoce a los carabineros que golpearon a su padre. Tampoco de parte de la comisaría, no tenían a quien preguntarle.

A.7. Selfa Heidée Antimán Nahuelquín,

En declaración extrajudicial de fecha 24 de marzo de 2011, rolante de **fs. 136 a fs. 138 (Tomo I)**, en lo adecuado, refiere ser hermana de Rubén Armando Antimán Nahuelquín. Que se enteró que su hermano salió de su casa el 25 de diciembre de 1985, día en el cual visitó a su hija Julia Bórquez Antimán, y nunca más regresó a su casa. Que aproximadamente los primeros días del mes de febrero del año 1986, el capellán del Hospital de Coyhaique, padre Doménico Sartori, conocido de su familia, fue a su domicilio ubicado en calle Sargento Aldea en la ciudad de Puerto Aysén, y le avisó que Rubén estaba hospitalizado grave en la ciudad de Coyhaique. Por tal motivo el mismo día viajó a dicha ciudad en compañía del padre Doménico, concurriendo al hospital. En el lugar le solicitó al entonces director del centro asistencial, de quién no recuerda su nombre, que le dejara ver a Rubén, lo que en un comienzo fue negado por esa persona, indicando que su hermano estaba muy grave y se moriría. Que el Director del Hospital le señaló que a Rubén lo habían golpeado cruelmente y que lo habían torturado, sin mencionar quién lo había hecho. Ante su insistencia y la petición del padre Sartori, les autorizó a ambos a entrar a una pieza donde estaba su hermano solo. Recuerda que estaba semi sentado, conectado a una serie de máquinas y con tapones en su nariz y oídos. Lo que le llamó la atención es que estaba lúcido, indicándole al oído que los autores de su golpiza fueron los carabineros de Puerto Aysén, recordando claramente que le señaló a un carabiniere de apellido Cuevas, a quién conocían en Puerto Aysén, y tiene la impresión que también le señaló a otro que apodaban “El Zorro”. Que vio el cuerpo de su hermano y le sorprendió

que no tuviera marcas que llamaran la atención, recordando las palabras del director del hospital, quien señaló que una vez fallecido su hermano, aparecerían sus hematomas, por el hecho que fue torturado. Luego de su visita, se enteró que la jueza Sara Meersohn de Coyhaique le había tomado una declaración a Rubén respecto a los hechos y que esa la habría derivado a la Fiscalía Militar de Coyhaique. Que realizó una serie de trámites para averiguar que le había pasado a su hermano; recuerda que fue a la Fiscalía Militar, donde no le entregaron información; a la radio Coyhaique, donde tampoco sabían antecedentes al respecto, entre otros lugares, lo que derivó en que personas de civil la siguieran; la citaron a carabineros y Policía de Investigaciones de Puerto Aysén. El día 8 de febrero de 1986 falleció su hermano en el hospital de Coyhaique, pero le entregaron el cadáver varios días después, ya que había una orden de que el cuerpo sea trasladado directamente desde la morgue al cementerio de Coyhaique. No obstante, el obispo de la ciudad logró que al cuerpo de su hermano se le hiciera una misa en la iglesia de Coyhaique, y que de ese lugar fuera trasladado al cementerio. Que cuando el cadáver de Rubén estaba en la morgue, entró a escondidas a ese lugar en compañía de su madrina Matilde Muñoz y vieron el cuerpo de Rubén, lo que les impactó, por cuanto estaba completamente morado. Que todos los trámites de su muerte los realizó ella en compañía de sus primos José Nahuelquín Huala y Rossi Humberto Cáceres Nahuelquín, ambos fallecidos. Que por comentarios de la gente de Puerto Aysén, señalaron que a Rubén lo habrían detenido carabineros y que lo habían arrojado a orillas del río Aguas Muertas. Desconoce si su madre denunció a Rubén. Le llama la atención que a su hermano lo atendieran en el Hospital de Puerto Aysén y posteriormente trasladado al Hospital de Coyhaique como NN, siendo que a Rubén y su familia lo conocían en la ciudad, por cuanto eran deportistas y dirigentes sociales. Su hermano Rubén estuvo un tiempo ligado al Partido Socialista, cuando fue funcionario de Correos de Chile, pero era más conocido como futbolista, ya que le decían el “Pelé Antimán”. Que una vez que falleció su hermano, se fue a San Felipe, pero su marido Rigoberto José Bórquez Proschle, quedó en la ciudad de Puerto Aysén, y fue “invitado” por el entonces prefecto de la Prefectura de Aysén, para conocer su opinión respecto de los hechos ocurridos, ante lo cual su marido le manifestó su aprehensiones por el mal procedimiento adoptado por el personal de carabineros y del hospital. Pasados unos días, recibió otra invitación, esta vez de un capitán de apellido Soto de la segunda Comisaría de Puerto Aysén, quién lo interrogó en relación a lo mismo, por lo que su marido se convenció que solo buscaban

alternativas para encubrir el hecho. Su impresión de los hechos es que los que lo provocaron, pensaban que su hermano estaba muerto, lo que no fue así. Declaración que ratifica a fs. 252 (Tomo I).

A.8. Eligio Segundo Edén Antimán Nahuelquín

En declaración extrajudicial de fecha 25 de septiembre de 2013 rolante a **fs. 918 a fs. 920 (Tomo III)** arguye en lo pertinente ser hermano de la víctima, que para el mes de diciembre del año 1985, se encontraba viviendo en Puerto Cisnes. Su hermano Rubén Armando, vivía en calle Doctor Estefen interior, en la comuna de Puerto Aysén, junto a su esposa Eliana Jara Burgos, sus hijos Patricia Antimán Jara, Miguel Ángel Antimán Jara, Leopoldo Antimán Jara y Doris Nelfa Antimán Jara. En ese mismo inmueble, pero en una casa que se encontraba en el frente del mismo terreno, vivía su madre Vitalia del Carmen Nahuelquín Reinaldo. Que para esa fecha no tiene conocimiento que éste haya sido militante de algún partido político. Respecto a la muerte de su hermano Rubén Armando, dice que para el mes de febrero de 1986, no recuerda día exacto a través de un amigo se enteró que su hermano se encontraba hospitalizado grave en el Hospital de Coyhaique, sin tener mayores antecedentes. Por tal motivo, viajó inmediatamente desde Puerto Cisne a Coyhaique y cuando llegó al Hospital, recuerda que habían muchos familiares acompañándolo, pero también recuerda que habían muchos carabineros, militares y amigos en general que lo estaban acompañando. Una vez que tomó contacto con los familiares que se encontraban en el hospital, recuerda que se le informó que su hermano había fallecido al parecer por golpes propiciados por diferentes personas. Al tomar contacto con el doctor que había realizado la autopsia de apellido Vergara, recuerda que su informe médico indicaba que la causa de muerte había sido producida por golpes atribuibles a terceras personas. Que sus primos Humberto Cáceres Nahuelquín y José Nahuelquín Huala, (fallecidos), le comentaron que Rubén Armando, había sido golpeado por personal de carabineros de Puerto Aysén, sin especificar nombres de los responsables. Que una vez que se entregó el cuerpo de su hermano fue puesto en un ataúd y trasladado directamente al cementerio de Coyhaique, donde fue enterrado encontrándose en ese mismo lugar hasta la fecha. Hace presente, que mientras efectuaron el traslado de su hermano de la morgue al cementerio, recuerda que se fue conversando con sus primos Humberto Cáceres y José Nahuelquín, quienes le relataron que su hermano Rubén había tenido problemas con su madre Vitalia en la casa. En esa época al parecer su madre tenía una lesión en un brazo o una pierna, se encontraba convaleciente.

Que su hermano llegó un día a la casa en estado de ebriedad y le había pedido plata y por alguna razón la empujó y su madre se habría caído al suelo. De esta situación su madre, habría salido de la casa con la intención de denunciarlo ante la agresión que había recibido, pero antes de llegar a la unidad policial se habría encontrado con personal de carabineros de Puerto Aysén, desconociendo el nombre de estos funcionarios. Estos la habrían aconsejado que se devolviera a la casa y que ellos irían en busca de Rubén, que en esos momentos ya había salido de la casa y se encontraba escondido debajo de un camión. Sus primos le dijeron que estos carabineros lo encontraron debajo del camión y lo habrían subido a un vehículo para llevarlo hasta el sector del Kilómetro N°4, camino antiguo desde Aysén a Coyhaique, donde habrían procedido a golpearlo, desconociendo que es lo que posteriormente sucedió con él. Por comentarios de familiares y de terceras personas, pero que a él no le constan, su hermano Rubén Armando, habría llegado a la casa mal herido, producto de golpes y desde la casa habría sido recogido por una ambulancia del Hospital de Puerto Aysén, siendo trasladado en compañía al parecer de su hija Doris Nelfa Antimán Jara, hasta ese centro hospitalario. Desconoce cuántos días estuvo en el Hospital de Puerto Aysén, solo recuerda que posteriormente y a raíz de sus lesiones fue trasladado al hospital de Coyhaique donde finalmente falleció. Desconociendo el estado de salud en que su hermano ingresó al hospital de Puerto Aysén como tampoco cuando fue trasladado al hospital de Coyhaique. Adiciona que días posteriores y a través de los comentarios, tanto familiares como de los amigos de la familia, se enteró que los responsables de los golpes propinados a su hermano Rubén Armando y que en definitiva le provocaron la muerte serían los carabineros de apellidos Cuevas, Velásquez y Pereira, este último fallecido, todos de dotación de la Comisaría de Carabineros de Puerto Aysén.

En declaración judicial de fecha 05 de julio de 2018 rolante a **fs. 1.754 a fs. 1.755 (Tomo V)** ratifica la declaración extrajudicial de fs. 918 y siguientes de autos. En lo pertinente dice que se enteró, a través de un amigo lo que sucedió con su hermano Rubén. Que Luis Pereira, Cuevas y Velásquez, los carabineros, quienes serían los responsables de lo sucedido con su hermano, eran conocidos suyos de muchos años. Que los antecedentes de los responsables de la detención de su hermano se la dio un joven de nombre Manuel Quinillao, que al parecer el vio cuando lo tomaron o cuando lo tiraron al río. A finca que su hermano nunca estuvo involucrado en política. Que la razón por la que había militares y carabineros acompañando a su hermano en el hospital, no la sabe. Cuando él

llegó a Aysén llegó a la morgue y se encontró con muchos carabineros y militares, los conocía a todos, porque eran amigos de años. En la morgue vio a su familia y carabineros y militares. Las condiciones en que estaba su hermano en la morgue es que estaba “todo negro, muy golpeado, todo el cuerpo”. Lo mismo le dijeron sus tías, quienes lo vistieron por lo que no quiso ver su cara. A los dos años conversó con su mamá y le dijo que Rubén la empujó porque quería plata y ella fue a dar cuenta a investigaciones, pero en el camino se encontró con los carabineros y allí los carabineros le dijeron “no se preocupe tía Vitalia, váyase no más pa la casa”. Que sus primos sabían lo que pasó con Rubén porque su mamá se los comentó. Que al parecer los hechos ocurrieron en la noche. No escuchó que carabineros haya hecho algún sumario o haya investigado algo respecto al fallecimiento de Rubén. Su hermana con su esposo y él, fueron a la Fiscalía militar, en ese entonces Fiscal Militar de apellido Leal recibió la denuncia firmada por su hermana Ninfa. Su cuñado conversó con el señor Leal y supo que la señora jueza le había ido a tomar declaración a su hermano en el hospital, esto a petición del médico de la época, para saber quiénes lo habían golpeado y su hermano les respondió que habían sido los carabineros Pereira, Cuevas y Velásquez y al parecer alguien de apellido Ulloa. La versión de los implicados nunca la supo, desconoce lo que ellos hayan dicho.

A.9. Víctor Herald Cuevas Seguel

En declaración extrajudicial de fecha 06 de julio de 2012 rolante a **fs. 460 a fs. 462 (Tomo II)** (cuya copia consta a fs. 503 a fs. 504 Tomo II)), espeta que se contrató el año 1967 en Carabineros de Chile en la Segunda Comisaría de Puerto Aysén, para la Prefectura General de Santiago, relatando su carrera funcionaria y en lo pertinente que en el año 1970 es destinado a la Primera Comisaría Coyhaique, después de permanecer alrededor de seis u ocho meses aproximadamente, permutó a la Segunda Comisaría Puerto Aysén, unidad donde permaneció hasta el año 1985 o 1986. Que su función dentro de la Segunda Comisaría de Puerto Aysén, era la de orden y seguridad, y como chofer de los comisarios Ortega y Mario Héctor Díaz Tabilo, además, realizó servicio de patrullajes ordinarios. En relación a Rubén Armando Antimán Nahuelquín, puede decir que lo conoce desde la niñez, ya que se criaron en el mismo barrio, y “nos ubicábamos mucho”. Que posteriormente, se fue de Puerto Aysén, ya que ingresó a Carabineros de Chile en la ciudad de Santiago, y regreso a su ciudad en el año 1970, donde se percató que esta persona tenía un restaurant, en la calle Eusebio Ibar, Puerto Aysén. Recuerda que en varias ocasiones vio a Rubén Antimán

Nahuelquín, detenido en la unidad por estado de ebriedad. Que nunca le correspondió detenerlo por este delito, pero si fue detenido por otros funcionarios policiales de la Segunda Comisaría Puerto Aysén. Recuerda que el Antimán, se separó de su señora producto de los malos tratos que éste le daba, todo ello bajo los efectos del alcohol, posteriormente, este sujeto se fue a vivir con su madre. No recuerda bien si fue en el mes de diciembre del año 1984, cuando el cabo primero Guillermo Villalobos, le solicita que le trabaje una orden de investigar, por el delito de lesiones emanada del Juzgado del Crimen de Puerto Aysén, en contra de Rubén Armando Antimán Nahuelquín, con el fin de que éste sujeto concurra a la segunda comisaría a prestar declaración con el cabo primero Villalobos, ya que, éste era el funcionario a cargo de la investigación. Para dar cumplimiento a lo solicitado, fue en el furgón Z.024, en compañía de dos funcionarios más antiguos que el deponente, de los cuales no recuerda sus nombres, posteriormente, se trasladaron a calle Doctor Steffen, específicamente al domicilio de la madre de Antimán, donde el pernoctaba, al llegar a su vivienda, lo atendió su mamá, de la cual no recuerda su nombre, y le preguntó por su hijo Rubén, y ella le manifestó que no se encontraba en la casa, por lo que procedió a retirarse del lugar. Al llegar a la Comisaría, le hizo entrega de la orden al cabo primero Villalobos, informándole que el sujeto no se encontraba en su domicilio. Consecutivamente, no recuerda fecha, el capitán Julio Soto Soto, le informa que debe declarar en un sumario administrativo que se abrió producto de la muerte de Rubén Antimán Nahuelquín, dicha investigación fue requerida por la Vicaría de la Solidaridad de Santiago, debido a que familiares de la víctima habrían sindicado a personal de la Segunda Comisaría Puerto Aysén, como los autores de las lesiones que le provocaron la muerte. El capitán Soto, fue el fiscal de este sumario administrativo, y le indicó los pormenores de la investigación, de los cuales recuerda que Antimán Nahuelquín, habría sido golpeado por funcionarios policiales, y que posiblemente el deponente habría sido uno de ellos, involucrando además al carabinero Alberto Velásquez Barría, y a cuatro carabineros más, de los cuales no recuerda sus nombres. Que al finalizar el sumario administrativo, se demostró que él y el resto de los funcionarios, no tenían participación en los hechos investigados. Que tomó conocimiento de parte del capitán Soto, que la “Chaura”, quien tenía un restaurant a los pies de la casa de Antimán, señaló que ella en horas de la noche, sintió unos gritos de auxilio que provenían del sitio de Antimán, seguidamente, ésta señora miró por una ventana de su casa hacia el patio, percatándose que Antimán estaba siendo agredido por su madre con un bastón, que Antimán quedó tendido en el

piso del patio. Que desde que se cerró el sumario administrativo por la muerte de Antimán Nahuelquín, nunca más ha declarado en esta investigación.

En declaración judicial de fecha 12 de septiembre de 2012 rolante a **fs. 507 a fs. 509 (Tomo II)** ratifica su declaración extrajudicial de fecha de 6 de julio de 2012. Que efectivamente el 16 de agosto de 1966 egresó del grupo de instrucción de Carabineros de Chile de Santiago y destinado a unidades de Santiago, luego a Coyhaique por un lapso de 3 años, luego a la Segunda Comisaría de Puerto Aysén 1971 a 1986, Puerto Chacabuco 1973 a 1975 dependiente de Puerto Aysén, luego en Puerto Varas de 1986 hasta 1989 y finalmente se retira en la Segunda Comisaría de Puerto Montt en el año 1991. Escruta que no tiene participación alguna en la muerte de Rubén Antimán Nahuelquín a quien conocía desde la niñez, estudiaron juntos en la escuela y se criaron en el mismo barrio. Que efectivamente cuando este falleció, él prestaba servicios en la Segunda Comisaría de Puerto Aysén, ubicada en sector La Balsa. Estuvo varios años, pero no recuerda cuanto tiempo, fue agregado a diferentes retenes dependientes de la comisaría, también chofer del comisario, y de la prefectura. Que en esa época tenía dieciocho años de servicio con el grado de cabo primero. Reitera que ubicaba perfectamente a Rubén Antimán Nahuelquín, quien además fue detenido en muchas ocasiones por ebriedad y desórdenes. Recuerda que este se separó de su mujer, justamente por los malos tratos y los desórdenes que ocasionaba y se fue a la casa de su mamá. No recuerda si fue en el año 1984 o 1985 cuando el cabo Guillermo Villalobos le pasó una orden de investigar para citar a Rubén Antimán a fin de que declarara en la comisaría por lesiones que habría ocasionado ésta persona a su madre, “dicha no prosperó por cuanto éste no fue habido en su domicilio”, según lo señalado por su madre. Que luego entregó la orden al cabo Villalobos, manifestándole lo relatado anteriormente. En relación a la muerte de esta persona debe señalar que no tiene conocimiento de cómo habría ocurrido, sin embargo, tiempo después se hizo un sumario administrativo que fue requerido por la Vicaría de la Solidaridad de Santiago, debido a que familiares de la víctima habrían sindicado a funcionarios de la unidad a la cual pertenecía como autores de las lesiones que le provocaron posteriormente la muerte. Que la investigación la realizó el capitán Julio Soto, interrogó a todos los funcionarios de la unidad que participaron en alguna oportunidad en la detención de Antimán Nahuelquín. Que él en lo personal nunca lo detuvo, ya que, como señaló fue conductor de los carros policiales, solamente le correspondía abrir y cerrar la puerta del calabozo del furgón hasta

llegar a la guardia de la comisaría donde era entregado al sub oficial de guardia. Desconoce cómo terminó el sumario, pero si puede señalar que el fiscal investigador les manifestó que de acuerdo a los dichos de una vecina, de apellido “Chaura”, ésta vio, días antes de que desapareciera ésta persona, que Antimán estaba siendo agredido por su madre con un bastón, quien quedó tendido en el patio. Que no tiene conocimiento si se habría realizado en la unidad alguna denuncia por presunta desgracia de ésta persona. Que lo lógico es que tendría que haberse hecho, ya que supuestamente y de acuerdo a lo que se le ha leído, el señor Antimán fue agredido a fines de 1985 y encontrado por su hermana el 8 de febrero de 1986 y al día siguiente habría fallecido.

En declaración judicial de fecha 04 de mayo de 2016 rolante a **fs. 1.364 a fs. 1.369 (Tomo III)** ratifica sus declaraciones anteriores. Que prestó declaración el día 18 de junio de 1986 ante el Tribunal de Puerto Aysén, donde relató los hechos en que fue interrogado y en donde dejó constancia de que no tenía ninguna participación en la muerte de Antimán, tampoco participó en procedimiento policial que se relacionara con la detención de Antimán Nahuelquín y también dijo que ignoraba las razones por las que la familia de Antimán lo estaban inculcando de su muerte. Que después volvió a ser interrogado en la ciudad de Llanquihue el día 6 de junio de 2012 por funcionarios policiales donde manifestó lo mismo, pero además, agregó que por la muerte de Rubén Armando Antimán Nahuelquín se hizo un sumario administrativo al interior de carabineros a cargo del capitán Julio Soto quién lo interrogó junto a otros carabineros y entiende que allí fue sobreseído. Que volvió a ser interrogado por el Tribunal de Puerto Varas el día 12 de septiembre de 2012, donde reiteró su inocencia, en cuanto a no tener ninguna participación en algún procedimiento policial que se relacionara con la detención de esta persona y tampoco ha tenido participación en la muerte de la misma, y volvió a decir que hubo una investigación administrativa al interior de carabineros a cargo del capitán Julio Soto, el cual lo interrogó sobre estos hechos y salió sobreseído, y agregó que Antimán fue agredido a fines del año 1985 por su madre, esto se lo comentó al capitán Soto en la comisaría donde él también estaba. Que fue la madre quién con un bastón le pegó a Antimán Nahuelquín, e incluso la señora “Chaura” dijo que lo había visto botado en el sitio. Vuelve a ratificar todas las declaraciones referidas precedentemente. Preguntado, sí el día 28 de diciembre de 1985, él se encontraba en funciones en la segunda Comisaría de Carabineros de Puerto Aysén responde: que se imagina que sí, porque él estaba activo y era conductor de los vehículos fiscales con servicios de doce

horas. Preguntado para que aclare si cumplía labores de carabinero o de conductor, responde: que las dos cosas. De carabinero por orden y seguridad, hacía servicios en las poblaciones y pasaba a la calle, y cuando faltaba conductor lo nominaban a él, porque estaba autorizado por la Escuela de Conductores de Santiago que autoriza para manejar vehículos fiscales. Recuerda que los choferes de servicio de la segunda comisaría efectivamente eran los cabos Washington Agurto, Segundo Catelicán, Milton Zúñiga y cuando faltaba alguno de estos porque salían con permiso lo nominaban a él para hacer el servicio de conductor como correspondía. Que él en realidad era el conductor del comisario Mario Héctor Díaz Tabilo, que los comisarios estaban un periodo determinado de unos tres años más o menos y en ese periodo él conducía el vehículo fiscal, él a cargo del vehículo. Respecto a los carabineros que cumplieron turno el día 28 de diciembre de 1985 y conforme al documento que se le exhibe de fs. 42 a fs. 43 causa Rol N° 4. 769, él no aparece en ninguno de los turnos de ese día porque seguramente se encontraba de franco, esto es, el día anterior él seguramente hizo un servicio nocturno y por eso le correspondía tener libre todo el día 28 de diciembre de 1985, por esa razón tampoco aparece en la nómina de conductores. En relación al sumario administrativo dispuesto en forma interna por carabineros a raíz de la muerte de Rubén Armando Antimán Nahuelquín, debe decir que a él por lo menos en ese sumario lo interrogó el capitán Julio Soto, que oficiaba de fiscal investigador, poco recuerda al comandante Orlando Correa porque este no lo interrogó, y también respecto al coronel Ramón Sánchez del cual recuerda poco, pero en ningún caso este superior lo interrogó. En esa investigación el capitán Soto le manifestó que tenía una orden emanada de la prefectura, la orden la tuvo que haber dado el coronel Sánchez, para investigar si hubo participación de carabineros en la muerte de Rubén Armando Antimán Nahuelquín, y cuando se le interrogó dijo que no había tenido participación, ni en su detención ni en alguna agresión a Rubén Armando Antimán Nahuelquín que hubiera sufrido y que después le hubiera provocado su muerte. No sabe el resultado del sumario administrativo, pero a él nunca más le interrogaron, por lo que supone que “salí bien”. Respecto a cómo se desarrollaban los turnos de los carabineros, debe señalar que en el caso del día 28 de diciembre de 1985, el tercer turno, según el documento ordinario N° 840, que se le exhibe, lo cumplieron los siguientes funcionarios: cabo primero Aliro Quinan Tecai, a éste él lo conocía porque trabajaban juntos en la misma comisaría; el cabo segundo Alberto Velásquez Barría; también lo conocía porque eran colegas, “ambos aiseninos y ambos

carabineros de la misma unidad"; cabo segundo Juan Villegas Barrientos, también lo conoció y era de Aysén; cabo segundo Jorge Talma Talma, a quién también conoció por ser carabineros de la misma comisaría; el carabinero José Salas Vera, lo conoció en Puerto Aysén. Que este turno se desarrolla como sigue: se prepara el turno a las 22:25 horas allí se leen las instrucciones que dan los superiores, tales como buen trato con el público, adecuado uso de las armas según las circunstancias, encargos, casas de protección, rondas en la población. En esta preparación solo intervienen los que van a cumplir el turno. En este caso el más antiguo era el cabo Aliro Quinan Tecai, quien pasa a ser el jefe del turno, a cargo de toda la población y de todos los hechos que puedan pasar durante el servicio del turno. El acompañante del jefe del turno puede ser cualquiera de los otros carabineros, en este caso, cualquiera de los otros cuatro que iban a cumplir el tercer turno, elegido por el jefe del turno. Más el carro del servicio del turno con su conductor. En el caso del tercer turno del día 28 de diciembre de 1985, comenzó a las 23:00 horas y terminó a las 07:00 de la mañana. De los carabineros que cumplen el turno, todos están facultados para detener a cualquier persona si comete un delito flagrante o sospechoso, ebriedad o desorden. En cuanto a la división de funciones, esa labor le corresponde al jefe del turno, éste nombra a un funcionario que va de punto fijo a la gobernación para que resguarde a esta institución, después nombra a las parejas para que hagan recorrido de población y son los encargados de concurrir y tomar el procedimiento que corresponda cuando ocurren hechos en la población, pero siempre dándole cuenta al jefe del turno que es el responsable final de todo lo que pase en la población y también es responsable de cualquier anomalía o exceso que cometan los carabineros que tiene a su cargo en el turno. En el caso que se le consulta, el tercer turno del día 28 de diciembre de 1985, dice que seguramente Quinan como jefe del turno nombró a un carabinero como punto fijo de la gobernación y le quedaban otros tres carabineros para patrullar la población, por lo tanto, no pudo hacer dos parejas, sino que seguramente uno de esos tres carabineros salió a patrullar sin pareja, salvo que haya sido acompañado por el conductor del carro, pero no es lo normal. Piensa que sí Antimán Nahuelquín, en teoría, si fue detenido durante el tercer turno, automáticamente tuvo que habersele dado cuenta al jefe del turno que en este caso era Aliro Quinan Tecai, pero más no sabe porque él se encontraba de franco ese día y por lo tanto ignora que pudo haber pasado durante ese tercer turno, ni tampoco sabe los hechos sobre la detención o agresión a esta persona. En cuanto a las declaraciones prestadas por doña Selfa Haidée Antimán

Nahuelquín, la conoce porque era hermana de Rubén Armando Antimán Nahuelquín y, además, se encontraba casada con un escribiente de carabineros de apellido Bórquez que vivía en Aysén, la que relata haber conversado con su hermano antes de que éste falleciera, el cual le habría revelado los nombres de los carabineros que lo detuvieron y le dieron una golpiza, entre los cuales menciona a Alberto Velásquez y a Heraldo Cuevas, o sea a él, lo cual desmiente absolutamente, ya que, no ha intervenido en ningún procedimiento policial que se relacionara con su detención y agresión, cree que confundió su nombre “ya que eran súper amigos, ambos aiseninos”, que éste era un poco mayor que el deponente. Que nunca intervino como carabinero en alguna detención de él, salvo los traslados al Tribunal cuando llegaba por ebriedad, e incluso recuerda que varias veces él mismo le canceló la multa para que recuperara su libertad, “por lo que mal podría haberle hecho un mal a mi amigo”. Que tampoco sabe a qué se debe que doña Selfa Heidée Antimán Nahuelquín le haya involucrado a él con Alberto Velásquez como los carabineros que según le confesó su hermano antes de morir eran los autores de la agresión que sufrió, lo que en su caso desmiente otra vez, por cuanto, el día 28 de diciembre de 1985 en que supuestamente éste, fue agredido y detenido por carabineros él se encontraba de franco, lo que comprueba con el documento de fs. 42 a fs. 43. Que conoce a Héctor Ulloa Matamala, porque trabajaban en la misma comisaría en los años 1985 y 1986, y conforme al mismo documento que se le ha exhibido aparece cumpliendo el primer turno del día 29 de diciembre de 1985, turno que comenzó a las 07:00 de la mañana y finalizado a las 13:00 horas, a él también lo interrogaron en el sumario administrativo por el capitán Soto al igual que a él, sabe que se fue al norte, pero no lo ha vuelto a ver. Respecto al funcionario, Marcelo Soto Aguilar; éste también era un colega suyo que trabajó en la Segunda Comisaría de Puerto Aysén durante los años 1985 y 1986, que también fue interrogado por el capitán Soto en el sumario administrativo que este llevaba y después supo que se habría radicado en Temuco, pero no lo ha vuelto a ver. Respecto a Alberto Velásquez Barría, dice que es otro colega que trabajó con él en la Segunda Comisaría de Puerto Aysén en el periodo ya referido y también fue interrogado en el sumario administrativo. Aduce que a Aliro Quinan lo perdió de vista hace muchos años, porque el deponente se fue el año 1987 a Puerto Varas, desde la Segunda Comisaría de Puerto Aysén y no volvió a ver a Aliro Quinan Tecai. Que tampoco ha vuelto a ver a Alberto Velásquez Barría. Respecto a Juan Villegas Barrientos, cree que está viviendo en Chiloé, en cuanto a Jorge Talma Talma ignora donde tendrá

actualmente su paradero y José Salas Vera era oriundo de Puerto Aysén, pero perdió todo contacto con éste.

En declaración extrajudicial de fecha 12 de marzo de 2019 rolante a **fs.1.849 a fs. 1.849 vuelta (Tomo V)** en lo pertinente replica su carrera funcionaria y dotaciones que integro, que para el mes de diciembre del año 1985 trabajaba en la Segunda Comisaría de Puerto Aysén, recordando que como jefe de dicha unidad se encontraba el mayor Ortega Neuman o Mario Díaz Tabilo, con I grado de oficiales recuerda al capitán Soto y con el grado de suboficiales al sargento primero Farias y González, suboficial mayor Víctor Rodríguez. En relación a la comisión civil, deja en claro que no recuerda con claridad los integrantes de dicha agrupación en el año 1985, sin embargo, lo que sí recuerda es que fue participe de dicha comisión, pero no recuerda en qué año, solo puede hacer presente que podría haber coincidido con la del mes de diciembre del año 1985. Que dicha comisión, recuerda que estaba conformada por el cabo segundo Luis Armando Quevedo Muñoz, carabinero Velásquez, carabinero Santiago Salas y dos funcionarios que no recuerda su nombre y él como más antiguo. Como misión fundamental de dicha agrupación era la investigación de abigeatos en la zona, de igual manera, se investigaba diversos delitos comunes, sin tener inconvenientes con persona alguna. En relación a Rubén Antimán Nahuelquín, lo recuerda muy bien, ya que, fue su compañero de colegio de la escuela de los curas, y porque se juntaban a jugar futbol. Que al salir del colegio cada cual tomo distintos caminos, sin saber nada de Antimán, hasta cuando regresó a Puerto Aysén a trabajar como carabinero. En ese mismo contexto, recuerda que Rubén mantenía problemas con al alcohol, lo que lo llevo a tener problemas familiares, hasta el punto en que las veces que ingresaba como detenido a la comisaria, le pedía ayuda para poder salir a la brevedad, ayuda en que en varias veces le brindó, pagándole la multa para que se fuera en libertad. De lo anterior, recuerda que en una oportunidad el subcomisario Soto quien era el sub jefe de la comisaria, le entregó una orden de investigar al sargento segundo Villalobos para que investigara unas lesiones graves, hecho, que tenía directa relación con la víctima de autos. Conforme a dicha orden se le ordeno ir a citar a Rubén a su domicilio, lugar donde se entrevistó con su madre que mantenía uno de sus brazos enyesado, agregando que su hijo no se encontraba en el inmueble y que por su adicción al alcohol podría estar deambulando en la vía pública. Seguidamente, con posterioridad a la concurrencia a la casa de Antimán, se acercó a la comisaria una señora que recuerda como “Chaura” quien mantenía un restaurant colindante

a la casa de la madre de Rubén, quien manifestó que en relación al hecho que investigaba el sargento Villalobos, mientras se encontraba en su lugar de trabajo, escucho una pelea y gritos que provenían de la casa de Antimán, lugar donde fue a observar lo que estaba ocurriendo, percatándose que la madre de Rubén lo estaba golpeando en su cabeza con el bastón que utilizaba como apoyo en su caminar, en reiteradas ocasiones aprovechando el estado etílico que mantenía su hijo, del cual desconoce el estado en que pudo haber quedado producto de los golpes recibidos. Dice dejar en claro que con posterioridad a este hecho, nunca vio a Rubén detenido en la comisaría, enterándose al poco tiempo que Antimán había fallecido, desconociendo su causa de muerte.

Declaración judicial, de fecha 18 de junio de 1986, rolante de **fs. 69 a fs. 70 (Tomo I)**, quien en lo pertinente dice que es cabo primero de carabineros de dotación de la segunda Comisaría de Carabineros de Aysén. Que el día 28 de diciembre de 1985, asumió como suboficial de guardia el cabo primero Luis Castro Castro y ese mismo día alrededor de las veintiuna a veintidós horas, se le nombró suboficial de guardia en la comisaría de carabineros, en reemplazo del citado Castro, razón por la cual tuvo que trabajar como suboficial de guardia hasta el día siguiente a las 08:00 horas de la mañana; en las horas que desempeñó su función no recibió ninguna denuncia de doña Vitalia Nahuelquín Reinaldo, ni tampoco recepcionó como detenido a Rubén Antimán Nahuelquín, a quien conocía desde hace muchos años, por cuanto era oriundo de Aysén, y durante años fue empleado de correos de esta ciudad. Que las veces que salió de servicio a la población no recuerda haber detenido a Rubén Antimán Nahuelquín. Lo que si recuerda es que durante el curso del año 1985 cuya fecha no puede precisar, un día le correspondió traer detenidos desde la comisaría hasta el Tribunal, y en esa oportunidad venia detenido Rubén Antimán, por ebriedad y como no tenía dinero para pagar la multa, él mismo, como lo conocía de chico, le paso dinero para cubrir su multa, recargo legales y costas de la causa, a fin de que este pudiera obtener su libertad. Que ignora, si Antimán fue detenido por carabineros y si así fue, no sabe quién o quienes pueden haber tomado este procedimiento. En todo caso, de existir detención en contra de Antimán, debe existir la constancia en el libro de guardia o en los archivos de la comisaría, en ellos se podría saber quiénes fueron sus aprehensores. Reiterando que a él no le cabe ninguna responsabilidad en el hecho. Ignorando el motivo que tiene la familia de Rubén Antimán de inmiscuirlo en un hecho que no le ha cabido ninguna participación, retirando que jamás lo aprehendió y por tanto jamás ha sido apremiado físicamente por él.

B. DOCUMENTOS

B.1. A fs. 4 (Tomo I) (copia fs. 116 vuelta (Tomo I), Certificado de defunción de Rubén Armando Antimán Nahuelquín que señala como causa de muerte septicemia/ hemoneumotorax traumático/ agresión por terceros.

B.2. A fs. 9 a 90 (Tomo I), de fs. 1.346, de fs. 1.355 a fs. 1.356 (Tomo III) Informe del Arzobispado de Santiago, Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, el que remite copia del expediente de la causa rol N° 4.769, del Juzgado de Letras de Aysén, seguida por la muerte de Rubén Antimán Nahuelquín, el cual en lo pertinente:

B.2.1. A fs. 17 a fs. 18 (Tomo I) informe de autopsia realizado por el médico legista Carlos Vergara Quezada, en causa rol N°6.155 de fecha 18 de febrero de 1986, que indica: “Se había trasladado desde Hospital de Puerto Aísen hacia Hospital de Coyhaique, con fecha 2/1/86 con el antecedente de haber ingresado a ese el 29/12/85 debido a haber sido agredido en la vía pública sufriendo por tal motivo un Neumotorax a tensión izquierda, complicándose con una Empiema del mismo lado, drenado parcialmente en Aísen. Se ingresa a Coyhaique con el diagnóstico de Hemopioneumotorax, contusión torácica complicada” y concluye: “La muerte de Don: Rubén Antimán Nahuelquín, se debió a las múltiples complicaciones que fue sufriendo sucesivamente secundarias a la lesión originaria, es decir, al traumatismo de tórax con el consecuente pnoneumotórax izquierdo, punto de partida de la infección generalizada (septicemia). Siendo su forma médico legal cuasi delito de homicidio”.

B.2.2. Declaración judicial de fs. 39 a fs. 40 (Tomo I) de fecha 17 de abril de 1986, de Francisco Ernesto Otarola Zapata, quien declara en lo pertinente que Rubén Antimán Nahuelquín, ingresó al hospital local el día 29 de diciembre de 1985 a las 23:45 horas, a través del servicio de urgencia y fue traído desde su domicilio particular por la ambulancia del hospital. Fue internado por los diagnóstico de shock, neumotórax traumático y contusión torácica. Que además ingresó en completo estado de inconciencia, estando internado hasta el 2 de enero y al no lograr una mejoría de su estado se decidió su traslado al hospital base de Coyhaique. Agregando otros antecedentes y que solicitó la autopsia ya que la interconsulta de traslado efectuada por el doctor Aguayo, se mencionaba una probable agresión.

B.2.3. A fs. 74 (Tomo I) informe N°757 de Carabineros Prefectura de Aysén N°27 2da Comisaría Puerto Aysén, de fecha 23 de junio de 1986, en el que se señala. “Que, efectivamente el día 27 de diciembre del año 1985, existe una

denuncia hecha por Vitalia del Carmen Nahuelquín Reinaldo, de lesiones de carácter grave en agresión, ocasionada por su hijo Rubén Armando Antimán Nahuelquín, de lo cual se dio cuenta a ese Tribunal, con parte Nro. 409”.

B.2.4. A fs. 77 a fs. 78 (Tomo I) (cuya copia consta a fs. 143 a fs. 144; a fs. 238 a fs. 239 Tomo I y a fs. 1.501 a fs. 1.502, a fs. 1.506 a 1.507; a fs. 1.593 fs. 1.594 Tomo IV), informe N°840 de la Segunda Comisaría de Puerto Aysén, mediante el cual se comunica los turnos del día 28 de diciembre de 1985, tercer turno indica: (desde las 23:00 a 07:00 horas) Cabo primero Aliro Quinan Tecai; cabo segundo Alberto Velásquez Barría; cabo segundo Juan Villegas Barrientos; cabo segundo Jorge Talma Talma y carabinero José Salas Veras.

B.3. A fs. 225 a fs. 226 (Tomo I) relación del personal de Carabineros de Chile, que figura en la dotación de la Segunda Comisaría de Puerto Aysén, año 1986. En el número veinticuatro se indica cabo primero Víctor Herald Cuevas Seguel y en el número ochenta y uno cabo segundo Alberto Daniel Velásquez Barría.

B.4. A fs. 257 a fs. 262 (Tomo I), relación del personal de Carabineros de Chile, que figuran en la dotación de la Segunda Comisaría Puerto Aysén en el periodo del mes de diciembre de 1985, en cuya dotación en el número treinta alude a cabo primero Víctor Herald Cuevas Seguel, y en el número setenta y uno dice cabo segundo Alberto Daniel Velásquez Barría.

B.5. A fs. 361 a fs. 366 (Tomo I), informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en cuya nómina que se acompaña refiere a Rubén Armando Antimán Nahuelquín y reseña: “Rubén Armando Antimán Nahuelquín, muerto. Puerto Aysén, febrero de 1986. Rubén Antimán tenía 45 años de edad, estaba casado y tuvo cuatro hijos. Se encontraba cesante al momento de los hechos, pero efectuaba trabajos esporádicos. Murió el 8 de febrero de 1986, a consecuencia de un traumatismo de torax, con el consecuente pñeumotórax izquierdo, complicado por una septicemia, atribuible a terceros según autopsia. Las lesiones fueron causadas por funcionarios de carabineros, que actuaron haciendo uso excesivo de fuerza”.

B.6. A fs. 1.187 a fs. 1.221 (Tomo III), ordinario N°1229 del Hospital Regional de Coyhaique, que contiene ficha clínica N°76555 correspondiente a Rubén Armando Antimán Nahuelquín, que en lo pertinente contiene a:

B.6.1. A fs. 1.189 (Tomo III) (cuyas copias consta a fs. 1.259 a fs. 1.292 Tomo III) resumen clínico de traslado en cual se señala diagnóstico clínico: “Neumotorax a tensión drenado, empiema pleural izquierdo, alcoholismo crónico y

síndrome de depresión alcohólica”. En el título principal sintomatología, se reseña: “Ingresó el 29-12-85 a las 23. Horas, con cuadro de shock (PA= 0, pulso 0), con antecedentes de agresión 2 días antes. Por clínica y radiología se demuestra Neumotorax a tensión”.

B.8. A fs. 1.717 a fs. 1.740 (Tomo V) copia autorizada de expediente causa rol N°4.667 del Juzgado del Crimen de Puerto Aysén, seguida por el delito de lesiones en contra de Vitalia del Carmen Nahuelquín Reinaldo, que en lo pertinente se desglosa:

B.8.1. A fs. 1.719 (Tomo V) Parte N°409 de Carabineros de Puerto Aysén de fecha 28 de diciembre de 1985, mediante el cual ciñe: “Doy cuenta a Us., que hoy a las 00:30 horas, se presentó al cuerpo de guardia de esta unidad Vitalia Del Carmen Nahuelquín Reinaldo, 75 años, casada, labores de casa (...) y expuso: Que, ayer aproximadamente a las 21:30 horas, en circunstancias que se encontraba en su domicilio, antes indicado llegó su hijo Rubén Armando Antimán Nahuelquín, en estado bebido, quien le pidió que le sirva café, a no acceder a su petición, éste la agredió con golpes de puños y pies, a consecuencia de ello resultó con fractura de A-B izquierdo, de carácter grave, según pronóstico del médico de turno en el hospital local, Dra. Cecilia Bahamonde Carrasco, que la atendió y envió a su domicilio. Se adjunta el certificado médico en mención”.

Que como se observa en una valoración integral de todos los medios de pruebas relacionados, hay una coherencia de los hechos y relatos desde el inicio hasta el final. En efecto, el occiso efectivamente tuvo una discusión con su madre la señora Vitalia y producto del cual esta persona fue hacer la denuncia a carabineros de Chile. A consecuencia de esa denuncia se inició una causa judicial rol 4.667 del Juzgado del Crimen de Puerto Aysén, y por parte de la policía se inició la ubicación y posible detención del fallecido Rubén Antimán Nahuelquín. Del estudio de la causa, y de las propias declaraciones de diferentes testigos y también puede decirse de los acusados, no existen ningún registro que hubiera habido alguna rencilla u altercado en la noche en que fue agredido Rubén Antimán. Ahora bien, desde el inicio Rubén Antimán llega a la casa de su madre quejándose y lesionado, y tanto a sus hijos como en el hospital y a sus otros parientes les manifiesta que fue agredido por carabineros. Más aún les indica los nombres. Nombres que para él además no eran desconocidos, ya que es el propio Alberto Velásquez que indica, que se conocían desde la niñez. A lo anterior, para ratificar lo serio de la denuncia, en su momento la Vicaria de la Solidaridad presentó una denuncia por los dichos de la familia de Rubén Antimán, que habría

sido agredido por carabineros. Sobre el sumario interno de carabineros no obstante que este Tribunal lo solicito, carabineros informó que no se encontraron registros magnéticos como tampoco físicos, de algún expediente que diga relación con la víctima Rubén Antimán Nahuelquín a fs.1.038 (Tomo III). Por otro lado, hay que hacer notar que en el turno de la noche de los hechos está acreditado, que tanto se encontraba el acusado Alberto Velásquez y el acusado Víctor Cuevas. Como ya se ha relatado, pero haciendo presente que, es el propio Alberto Velásquez a fs. 67 a fs. 69 (Tomo I) del 17 de junio de 1986 quien además sitúa a Víctor Cuevas de turno esa noche. En consecuencia, el relato de Rubén Antimán que realizó mientras pudo a sus familiares resulta plausible en conformidad a la ponderación, como se ha realizado de los medios de prueba legal antes detallados.

19°) Que del conjunto de elementos probatorios antes detallados y relacionados generales y específicos, ponderados consistentes en testigos directos, indirectos, documentos y pericias antes señaladas. Como además se indica en el auto acusatorio **fs. 2.096 a fs. 2.131 (Tomo VI)**, permiten al Tribunal a través de los medios de prueba legal que se han detallados y relacionados, llegar a la convicción:

A. Primero que han existido el delito de **homicidio calificado** en la persona de Rubén Armando Antimán Nahuelquín, previsto y sancionado en el artículo 391 N°1 circunstancia Primera del Código Penal vigente a la época de los hechos, ilícito en su carácter de lesa humanidad.

B. Segundo que en ese ilícito le ha correspondido la participación en calidad de **autor** en los términos del artículo 15 N°1 del Código Penal al acusado **Alberto Daniel Velásquez Barría**, ello sin perjuicio de otras reflexiones que puedan hacerse al analizar los escritos de los querellantes y la defensa.

EN CUANTO A LAS DEFENSAS:

20°) Defensa de VÍCTOR HERALDO CUEVAS SEGUEL

A. Que a **fs. 2.598 a fs. 2.618 (Tomo VII)**, el abogado Oscar Álvarez Suarez, en representación de **Víctor Heraldo Cuevas Seguel**, en lo principal de su presentación interpone incidente de nulidad procesal. Al primer otrosí, interpone excepciones de previo y especial pronunciamiento, en carácter de defensa de fondo. En el segundo otrosí, contesta la acusación y adhesión a la misma; en subsidio solicita atenuante de responsabilidad penal del 11 N°6 y N°9 del Código Penal; al tercer otrosí, penas sustitutivas de la ley 18.216.

I. En cuanto al incidente de nulidad procesal. Este ya fue analizado y resuelto previamente en este fallo.

II. Excepciones de fondo del 433 N°4 y 433 N°7. La defensa interpone como excepciones de fondo.

a). Cosa Juzgada. Comienza dando una definición y que fluye del texto de la acusación, el mérito del expediente judicial que los hechos por los cuales se le acusa a su representado fueron ventilados hace más de veintiséis años en el Juzgado de Letras de Aysén, en causa rol 4.769., y que el auto de procesamiento generado en dicha causa fue revocado por la Corte respectiva. De tal forma que la cosa juzgada en materia penal opera en favor de su defendido, procediendo los requisitos. Realiza comentarios generales y refiere al artículo 1 inciso segundo y al artículo 13 del Código Procesal Penal en cuanto a los efectos que tienen en Chile las sentencias penales de tribunales extranjeros. Que la cosa juzgada obrará como causal de sobreseimiento definitivo y como excepción de previo y especial pronunciamiento en sede penal.

b). Prescripción de la acción penal. Afinca que el Código Penal en su artículo 94 establece un sistema de cuatro diferentes plazos de prescripción los que menciona y que se discute en doctrina si para la prescripción de la acción penal debe considerarse la pena en abstracto o en concreto, considerando la defensa que debería estarse a la pena en abstracto, de lo contrario sostiene que sería necesario acreditar en el procedimiento las circunstancias que eventualmente modifiquen la responsabilidad penal. Que la contabilización de los plazos debería hacerse según el artículo 48 del Código Civil y artículo 95 del Código Penal. Plantea que en el caso existen hechos que no son objeto de controversia desde diciembre de 1985 a octubre de 2022 han ocurrido treinta años y diez meses; y que tal plazo no ha sido objeto de suspensión o interrupción. Reproduce parte del auto acusatorio, señalando que los hechos no se enmarcan dentro del tipo penal de homicidio calificado en carácter de lesa humanidad, esbozando el concepto de crímenes de lesa humanidad sucintamente y que este tipo de ilícitos están constituidos por acciones generalizadas o sistemáticas contra la población civil, que requiere una planificación metódica y una organización y planificación previa. Aduce que el silogismo es, si los hechos se enmarcan dentro de la categoría de delito de lesa humanidad para analizar si el ilícito está prescrito o bien es imprescriptible. Que del conjunto de hechos, dan cuenta de un procedimiento policial típico, que las causas del deceso de Rubén Antimán si bien resultan atribuibles a la acción de terceros, esos no fueron suficientemente

identificados por la víctima. De forma que los hechos no permiten en modo alguno sustentar que se está en presencia de un delito de homicidio calificado y de lesa humanidad, replicando los requisitos de tal delito, y que el hecho investigado al no ser de lesa humanidad, debe considerarse legalmente prescrito.

III. Contesta acusación fiscal y adhesiones. Ciñe la defensa que no se encuentra acreditado el delito materia de la acusación, ni la participación criminal atribuida a su defendido, replicando parte de la acusación fiscal. Que los hechos reseñados son constitutivos del delito de homicidio calificado de lesa humanidad, para poder sostener esta premisa es indispensable que los hechos judicialmente asentados en el sumario y que son objeto de reproche penal a su defendido, tengan la debida congruencia con el delito objeto de la acusación. Que los crímenes y delitos de lesa humanidad y genocidio están regulados en la ley 20.537 transcribiendo los artículos 1, 2, 3 y 4 de la norma, aludiendo que en el caso en comento por remisión normativa y por interpretación legal, el delito de homicidio consumado, en carácter de lesa humanidad, debería remitirnos al artículos 4 y 1 de la ley 20.537; que en el caso de marras no se encuentra ninguna conexión entre los hechos objeto de la acusación y la calificación jurídica de los mismos. Arguye la defensa que su representado no participó de ningún procedimiento policial que culminara con el fallecimiento de la víctima, no pertenecía a ningún grupo represivo, creado por la dictadura militar para detener, torturar y asesinar opositores políticos, en forma sistemática y generalizada. Que la víctima solo indica que lo golpearon Herald Cuebas, el yerno de la Tila y otro que no conocía. Que tampoco se encontraría acreditada la participación criminal en calidad de autor de su defendido, cita el artículo 111 del Código Procedimiento Penal. Que la identificación de su representado no se condice con los datos entregados por los testigos de oídas (su hermana y su hijo), tampoco figura en la nómina de funcionarios policiales y la identidad del mismo solo aparece en la declaración de su defendido a fs. 69 (Tomo I). Que la participación criminal, en cualquier calidad, no puede determinarse con la sola confesión del inculcado, pues es insuficiente, si los otros medios de prueba no arrojan convicción contra su representado.

IV. Recalificación del hecho. En subsidio la defensa solicita se califique el hecho como homicidio en riña o pelea del artículo 392 del Código Penal.

V. Circunstancias modificatorias de responsabilidad.

a. Atenuantes. Solicita aplicación de las atenuantes del artículo 11 N°6 y 11 N°9.

V. Beneficios de la Ley 18.216. La defensa requiere se concedan en beneficio de su representado algunas de las penas sustitutivas.

B. Que a fs. 2.730 a fs. 2.741 (Tomo VIII) el abogado Rodrigo Cortes Carrasco, en representación de **Víctor Heraldó Cuevas Seguel**, en lo principal de su presentación interpone incidente de nulidad procesal. En el segundo otrosí, contesta acusaciones particulares y adhesiones a la misma; en subsidio solicita recalificación de los delitos; en subsidio atenuantes de responsabilidad penal. Al tercer otrosí, penas sustitutivas de libertad.

I. En cuanto a esta defensa solo se reproducirá la contestación a las acusaciones particulares, por cuanto los demás planteamientos y tratándose del mismo acusado fue resuelto a fs. 2.742 a fs. 2.743 (Tomo VIII).

II. Contestación a las acusaciones particulares. La defensa comienza refiriendo que no se encuentra acreditado el delito materia de las acusaciones, ni la participación criminal atribuida a su defendido. Por cuanto se sostiene que los hechos son constitutivos del delito de homicidio calificado de lesa humanidad, que para poder sostener esa premisa es indispensable que los hechos judicialmente asentados en el sumario, y que son objeto del reproche penal tengan la debida congruencia con el delito objeto de la acusación, resultando necesario adentrarse en lo jurídico y doctrinario para verificar la correspondencia entre el hecho de la acusación y la calificación jurídica de los mismos. Refiere a los artículos 1 y 4 de la ley 20.537, alegando no encontrar conexión entre los hechos y la calificación jurídica, para luego reproducir los mismos argumentos que la defensa planteada por el abogado Oscar Álvarez Suarez, en su contestación.

21°) Defensa de ALBERTO DANIEL VELÁSQUEZ BARRÍA

Que a **fs. 2.504 a fs. 2.596 (Tomo VII)** el abogado Maximiliano Murath Mansilla, en representación de Alberto Daniel Velásquez Barría, en lo principal de su presentación solicita inhabilidad por aplicación del artículo 19 N°3 de la Constitución Política; y solicita la inhabilidad del juez por el control de convencionalidad. Al primer otrosí, solicita la nulidad de las declaraciones del proceso de indica. Al segundo otrosí, suspensión del procedimiento. Al tercer otrosí, en subsidio opone excepciones de previo y especial pronunciamiento. En el cuarto otrosí, contesta acusación fiscal y acusaciones particulares. En el quinto

otrosí, medios de prueba. Al sexto otrosí, acompaña documentos. En el séptimo otrosí, solicita diligencias.

I. Excepciones de previo y especial pronunciamiento. La defensa interpone excepciones de previo y especial pronunciamiento de conformidad al artículo 433 N°7 del Código de Procedimiento Penal, la que ya fue analizada y fallada a fs. 2.775 y siguientes (Tomo VII), con fecha 07 de julio de 2023.

II. En cuanto a la inhabilidad solicita por la defensa. Esto ya fue resuelto a fs. 2.597 (Tomo VII) con fecha 14 de octubre de 2022.

III. En cuanto al incidente de nulidad procesal. Este ya fue analizado y resuelto previamente en este fallo.

IV. En cuanto a la suspensión del procedimiento. Esto ya fue resuelto a fs. 2.597 (Tomo VII) con fecha 14 de octubre de 2022.

V. Contestación de la acusación fiscal y acusaciones particulares. Comienza solicitando la absolución de su representado, por falta de participación, por cuanto la prueba sería insuficiente para demostrar más allá de toda duda razonable, alguna participación o relación de su representado con la víctima.

a. Hechos de la causa. La defensa refiere al numeral 33°, letra B) de la acusación fiscal, argumentando que se puede concluir que este hecho no se enmarca en un delito de lesa humanidad, ni dice relación alguna con una conducta ilícita de su representado. Que en la misma la letra C), tampoco es punible a su representado, toda vez, que da cuenta de una actuación policial lícita y que no tuvo resultado. En cuanto a la letra D), que este último hecho se le reprocha a su representado y mediante el cual se le acusa como autor directo artículo 15 N°1 del Código Penal, en relación con el artículo 391 circunstancia primera.

b. Los hechos investigados no configuran un delito de lesa humanidad. Insiste la defensa que los hechos narrados en el auto acusatorio y la prueba rendida en el proceso no encuadran en el tipo penal de naturaleza de lesa humanidad, toda vez que el contexto en el que ocurren es un contexto de un hecho policial, en relación a la situación de violencia intrafamiliar. Reseña causa rol 4.667 del Juzgado del Crimen de Puerto Aysén, seguida por el delito de lesiones y violencia física e intrafamiliar de Vitalia Nahuelquín, citado sucintamente declaración de Vitalia Nahuelquín. Que el solo hecho de haber presuntamente usado la violencia excesiva por parte de funcionarios policiales en contra de la víctima, no transforma ese hecho policial en uno de carácter de lesa humanidad. Considerando que el actuar no está circunscrito a una conducta generalizada o permanente de maltratos y violencia o de violaciones de derechos humanos, sino

que es un caso aislado de posible violencia innecesaria, de haber sido de esa manera. Que está sola circunstancia es suficiente para que se decrete el sobreseimiento de la presente causa o decrete la absolución de su representado, por estar prescrita la acción penal de un presunto delito común.

c. No está suficientemente acreditado el hecho punible. Arguye la defensa que de la lectura y análisis de los medios de prueba que obran en el sumario no permiten, más allá de toda duda, acreditar que lo sucedido con la víctima es un delito, y no un hecho distinto y atípico, con excepción de los dichos supuestamente por la víctima, cuestión que no es posible acreditar, no existirían otros medios prueba que acrediten que la víctima fue golpeado por terceras personas y esos fueran funcionarios de carabineros. Así también que los antecedentes no arrojan conclusión sobre el traslado de la víctima a la Segunda Comisaría de Carabineros de Puerto Aysén, asimismo, en cuanto al día y hora cierta en que los hechos ocurrieron, se apoya en declaración de fs. 1.880 de Carlos Vergara, alegando incongruencias en las declaraciones de la víctima y lo planteado por la hija de este en causa rol 4.667. Así como el sobreseimiento temporal de fs.82 y su consulta a fs. 87 de dicho proceso.

d. No está acreditada la participación de su representado. Reitera la defensa que no existirían los medios de prueba para acreditar quienes habrían realizado la presunta acción punible, a excepción de los supuestos dichos de terceros a la víctima, los que impugna, entre ellos declaraciones de Doris Antimán Jara, por ser familiar de la víctima le restaría credibilidad, objetividad y serian contradictorias, que no habiéndose aplicado la regla del 470 del Código de Procedimiento Penal, lo único que puede aplicarse es lo dispuesto en el 464 del mismo texto legal, el cual podría servir para un presunción judicial, refiriendo a como se constituyen las mismas y reproduciendo partes de sus declaraciones. Luego refiere a las declaraciones de Selfa Antimán, hermana de la víctima, quien advierte es sólo una testigo de oídas, apoyándose en los mismos argumentos precedentes y transcribiendo fragmento de sus declaraciones, y que a estos le restarían credibilidad lo declarado por Francisco Otarola a fs. 39 y siguientes por cuando indica que “el paciente no recuperó el estado de consciencia para ser interrogado”. En cuanto a la declaración de Miguel Antimán Jara de fs. 1.890, no habrían otros testigo para validar sus dichos. De forma tal que no habrían otros medios de prueba para atribuirle a su representado algún tipo de participación. Así también la defensa enuncia lo declarado por su representado a fs. 67 y siguientes, a fs. 456 y siguientes, y a fs. 488 y siguientes, donde niega haber participado en el

procedimiento respecto a la denuncia interpuesta por doña Vitalia Nahuelquín, negando que su defendido hubiese agredido a la víctima, apoyándose en variadas declaraciones del proceso. Que del mérito de los elementos de cargo de autos, no es posible establecer la culpabilidad y responsabilidad de su representado en base a presunciones judiciales, teniendo especial atención a que no se dan los presupuestos establecidos y estipulados en el 488 del Código de Procedimiento Penal y 456 bis del mismo texto, así como demás normas legales probatorias.

e. Inexigibilidad de una responsabilidad objetiva en materia penal.

Proclama que la acusación supone la responsabilidad de su representado por el solo hecho de ser uno de los funcionarios de la unidad de carabineros de Puerto Aysén, lo que implicaría una vulneración legal al principio de responsabilidad subjetiva, apoyando sucintamente en doctrina. Que el transgredir dicho principio atentaría lo dispuesto en el artículo 19 N°3 inciso 5° de la Constitución Política de la República.

f. Ponderación de la prueba y estándar de convicción. Barbulla que habiéndose analizado con detalle cada uno de los presuntos elementos de cargo de los acusadores, puede sostener que ninguno de ellos por sí mismo o junto a otros permite siquiera tener indicios sobre una presunta participación penal de su representado, y no son suficientes para configurar ninguna probanza legal o medio de prueba conforme a la ley. Que no habría testigo que cumpla con el 459 del Código de Procedimiento Penal, así también no habría ningún documento escrito, público o privado que permita demostrar alguna participación de su defendido, en concordancia con los artículo 477 y 478 del mismo cuerpo legal, por el contrario si existen prueba documental a favor de la inocencia de su defendido. De la misma forma no habría prueba pericial inculpatoria respecto a la presunta participación penal, según lo dispuesto en los artículos 471, 472 y 474 del texto citado, tampoco una confesión judicial en los términos de los artículo 481 o 482 de dicho texto, no siendo posible construir una presunción judicial de culpabilidad en su contra, según dispone el 488 del Código de Procedimiento Penal, señalando los requisitos de las mismas. Que la acusación vulneraría normas legales que indica al atribuirle la participación en calidad de autor de homicidio calificado a su representado. Reiterando la defensa plantea que el Tribunal no acreditó con los medios de prueba legal, de manera suficiente y más allá de toda duda razonable que su representado habría tenido relación con el hecho punible, así también no se habría acreditado cual es la conducta que su representado habría desplegado respecto a la víctima de autos. Indicando que la responsabilidad objetiva en materia penal se

encuentra prohibida expresamente por el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República, que sostener lo contrario es grave, y en este caso habría evidente falta de fundamentación en el sentido de no tener ninguna consideración sobre la presunta conducta desplegada por el presunto autor, sobre el punto refiere a la doctrina del Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hace presente que no se aplican las normas de Derecho Internacional y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para justificar el juzgamiento de delitos como imprescriptibles y no amnistiabiles, pero no aplicar estas mismas normas cuando se trata del estándar probatorio para condenar.

g. Sobre la inconstitucionalidad de las presunciones judiciales.

Basa que la aplicación del artículo 488 en relación al artículo 457 del Código de Procedimiento Penal, lo que reproduce y sustenta que el primer conflicto constitucional se produce al vulnerar esta norma el artículo 19 N°3 inciso sexto de la Constitución Política el principio del debido proceso, en relación con la producción de la prueba en un juicio penal, en relación al principio de imparcialidad. Refiere al antiguo sistema penal y sus etapas, al rol del juez y la valoración de la prueba, reiterando la vulneración de los artículos en comento respecto del principio de la imparcialidad que debe tener el juzgador, citando doctrina al efecto, y continua sus argumentos en ese sentido citando normas legales del Código de Procesal Penal. Y que las presunciones judiciales además transgreden el principio de contradicción que debe informar a todo el procedimiento penal, no a ciertas partes de él, apoyando en normas del Código Procesal Penal. Afirma la defensa que a su representado, no se le permite durante el plenario, poder controlar o controvertir al medio de prueba de las presunciones judiciales, puesto que ellas nacerán en la sentencia y no antes. Argumentado que la aplicación del artículo 488 y 457 del Código de Procedimiento Penal es propender a la doctrina denominada “el derecho penal del enemigo”, lo que no está permitido por las normas internacionales y en especial por las normas de derechos humanos incluido en el debido proceso.

h. Recalificación del delito a cuasidelito de homicidio. Solicita la defensa que el tipo penal atribuido en la acusación sea recalificado al delito de cuasidelito de homicidio, en atención a lo dispuesto en el artículo 490 y 492 del Código Penal de la época, toda vez que no se darían los presupuestos de calificación del delito respecto de la víctima y en relación a la presunta conducta desplegada por su representado, toda vez que las lesiones a la víctima no fueron con la intención de matarlo, sino que lo fueron producto de una negligencia o

imprudencia en el uso de la fuerza, ejerciendo una violencia excesiva, con el ánimo de lesionar, mas no con el de causar la muerte, lo que se uniría a la situación de alcoholismo y la tardanza en concurrir a un centro hospitalario por su propia decisión influyeron en el destino final de la víctima los que terminaron con su vida.

VI. Circunstancia modificatorias de responsabilidad penal.

A. Circunstancias atenuantes:

a. Atenuantes del artículo 11 N°6 y 11 N°9 Código Penal: La defensa solicita la aplicación de estas atenuantes, en atención a la irreprochable conducta anterior y el reconocimiento de su representado en haber estado en la época de los hechos investigados en la Segunda Comisaría de Puerto Aysén, además de haber hecho el tercer turno del día 28 de diciembre de 1985.

b. Prescripción gradual artículo 103 Código Penal: plantea dicha institución, para que por el eventual caso que se deba imponer a su representado, continua sus argumentos en ese sentido, aludiendo a jurisprudencia y normas internacionales.

c. Atenuante de los artículos 211 y 214 del Código de Justicia Militar: refiere la defensa que es además aplicable en subsidio de la absolución, la concesión de esta atenuante del cumplimiento de órdenes militares, en razón a lo prescrito en dichos artículos.

B. Circunstancias agravantes:

a. Agravantes 12 N°8, 12 N°10 y 12 N°11 del Código Penal. Solicita el rechazo de dichas agravantes en razón de que la agravante del artículo 12 N°8 del texto citado, si bien está acreditada la calidad de funcionario público del acusado, lo cierto es que el carácter público parte de la calificación del delito de homicidio calificado configurado como delito de lesa humanidad, en tanto en su comisión han actuado agentes del Estado, que en definitiva pertenecen al aparato público. Por lo que no puede ser parte al mismo tiempo del hecho punible y de una circunstancia agravante. En cuanto a las agravantes del artículo 12 N°10 y 12 N°11, esboza que debe ser desestimadas en razón de los mismos argumentos y el aplicarlas atentaría contra el principio non bis ídem.

VII. Beneficio de la Ley 18.216. Solicita se le conceda alguna de las medidas alternativa de cumplimiento de condena.

VIII. Documentos. La defensa acompaña documentos en su contestación, los que no se tuvieron por acompañados en su oportunidad fs. 2.779, además acompaña lista de testigo.

F. ANÁLISIS DE LA DEFENSA

22°) CONSIDERACIONES PREVIAS AL ANÁLISIS DE LA DEFENSA ESPECÍFICA:

Que previo al análisis de las defensas específicas es necesario tener en consideración los antecedentes y reflexiones que seguidamente se detallarán:

A. Resumen del auto acusatorio.

B. Estado de derecho.

C. Obligación de investigar

D. Jurisprudencia Internacional sobre graves violaciones a los derechos humanos (delitos de lesa humanidad) pronunciada por los tribunales alemanes

E. Alevosía.

F. Convenio de Ginebra

A. RESUMEN DEL AUTO ACUSATORIO

Que, para un adecuado análisis de las defensas específicas, es necesario realizar un resumen preciso y ejecutivo del auto acusatorio de fs. 2.096 a fs. 2.131 (Tomo VI), de fecha 30 de diciembre de 2021. En efecto, en la letra B) se describe quien era Rubén Antimán Nahuelquín a la fecha (27 de diciembre de 1985), quien durante la tarde, en la ciudad de Puerto Aysén visita el domicilio de su madre Vitalia Nahuelquín, quien además vivía junto a su hija Doris Antimán Jara. A continuación se describe la discusión que tuvo Rubén Antimán con su madre, producto de lo anterior, esta concurre hasta un lugar específico, que no es la gobernación, no es la policía de investigaciones, no es los tribunales de justicia, sino, que es la segunda Comisaría de Carabineros de Puerto Aysén, donde realiza la respectiva denuncia por agresiones. En este punto se describe entre otras pruebas el parte N°409 de la segunda comisaría aludida fs. 1.719 (Tomo V). En la letra C) se anota que un grupo de carabineros de la segunda comisaría esbozada, a consecuencia, de la denuncia llegó hasta la casa de Rubén Antimán, donde no lo encontraron, ya que, este tenía conocimiento que lo andaba buscando carabineros. En la letra D) es importante porque el 28 de diciembre de 1985 en horas de la noche Rubén Antimán regresa a su casa golpeado y quejándose de dolor y lo primero que le manifiesta a su hija Doris Antimán, no que un tercero u que desconocidos, ni que otra institución, sino que carabineros lo habría encontrado y golpeado, y que entre sus agresores se encontraba “El zorro Velásquez y Cuevas”. Lo anterior, respecto del relato de Doris Antimán Jara, en cuanto a los agresores es ratificado por el hijo, Miguel Antimán Jara quien llega también, en la tarde a ese domicilio y escucha que su padre se quejaba en el

dormitorio, y al preguntar que le habría ocurrido le señala que le habría pegado “El Zorro Velásquez y Heraldo Cuevas”. Incluso el hijo manifiesta que su padre se quejaba mucho del dolor, le ofreció llevarlo al hospital y este se negó. También en la misma letra, se indica que debido a las lesiones sufridas fue ingresado al hospital de Aysén y debido su situación gravedad fue traslado al hospital de Coyhaique, ingresando el 2 de enero 1986. Continuando la primera historia, el primer relato de Rubén Antimán Nahuelquín en Coyhaique lo visita su hermana Selfa Antimán, quien expresa que su hermano le manifestó que lo habían golpeado los carabineros Heraldo Cuevas y el yerno de “La Tila Osorio”, que se supo después que se trataba de Alberto Daniel Velásquez Barría. En la misma letra se da a conocer que Rubén Armando Nahuelquín habría fallecido el 8 de febrero de 1986 por traumatismo de tórax, con el consecuente pneumotórax izquierdo atribuibles a terceros. En la letra E) además se hace presente que del relato de los testigos que conversaron con la víctima es coincidente con el turno de carabineros del 28 de diciembre de 1985.

B. ESTADO DE DERECHO:

B.1. Estado Autoritario: Un Estado autoritario, es aquel donde **el poder se encuentra concentrado en una persona o grupo de personas**. Hay una estructuración estatal, existe autoridad, pero las leyes no obedecen a órganos que tengan origen democrático y por lo general no hay subordinación ni respeto a ella. (Roberto Ruiz Díaz Labrano: El Estado de Derecho algunos elementos y condicionamientos para su efectiva vigencia, p. 3. Disponible en: www.tprmercosur.org/es/doc). La historia nos muestra demasiados casos de Estados autoritarios. Al hombre contemporáneo le resultan insoportables e indignos esos Estados autoritarios. Del mismo modo, el Estado autoritario- poder arbitrario- es la antítesis del Estado de Derecho. Las diversas perspectivas políticas que apoyan el Estado de Derecho comparten su aversión hacia el uso arbitrario del poder. En una sociedad abierta y pluralista, que ofrece espacio para hacer competir ideales del bien público, la noción del Estado de Derecho se torna una protección común contra el poder arbitrario. (Oscar Vilhena Vieira (2007): La desigualdad y la subversión del Estado de Derecho. Sur – Revista Internacional de Derechos Humanos. Número 6, Año 4. p.33). En esa línea el concepto de Estado de Derecho **es una respuesta al Estado absolutista**, caracterizado por la ausencia de libertades, la concentración del poder y la irresponsabilidad de los titulares de los órganos del poder. De ahí que la garantía jurídica del Estado de Derecho corresponda al constitucionalismo moderno. (Dante Jaime Haro Reyes: Estado de

Derecho, Derechos Humanos y Democracia. www.juridicas.unam.mx. p. 123). Puede sostenerse entonces, que **su búsqueda va dirigida a limitar y restringir el poder del Estado en favor de la libertad de los individuos**. Es decir, permite entender al Estado de Derecho como contraposición al estado de fuerza o de fuerza política. (Pablo Marshall Barberán (2010): El Estado de Derecho como principio y su consagración en la Constitución Política. Revista de Derecho Universidad Católica del Norte sección ensayos, año 17 - N° 2, pp. 185-204).

B.2. Origen: El Estado de Derecho nace como como un Estado respetuoso de la ley y de las libertades del ciudadano frente al poder despótico del Estado Absolutista. Luego su tarea es el aseguramiento de la libertad y propiedad del ciudadano, su objeto la promoción del bienestar del individuo. Se trata de un orden estatal justo expresado a través de una constitución escrita, el reconocimiento de los derechos del hombre, la separación de poderes y garantizado por leyes producidas y promulgadas conforme a procedimientos debidamente establecidos (Luis Villar Borda (2007): Estado de Derecho y Estado Social de Derecho. Revista de Derecho del Estado N° 20, p. 74). En todo caso, el Estado de Derecho surge como el servidor, rigurosamente controlado, de la sociedad; queda sometido a un sistema cerrado de normas jurídicas o, sencillamente, identificado con ese sistema de normas, así que se convierte en solo norma o procedimiento (Haro, p. 118).

B.3. Fundamento: El fundamento del Estado de Derecho se encuentra en la doctrina del Derecho Natural Racional. En realidad, la explicación del término no debe entenderse, en su origen, como la sujeción del Estado al Derecho estatal, sino al Derecho Suprapositivo, permanente y universal que emana de la razón. Así, **su fundamento se encuentra en la naturaleza del individuo**: en la libertad y la igualdad de las personas que se reúnen en una comunidad y que se desarrollan en la autonomía moral, la igualdad jurídica y la posibilidad de lograr el bienestar económico a través de la adquisición de la propiedad y el ejercicio libre de la empresa. Es decir, el Estado de Derecho proyecta así, un criterio de legitimidad para el dominio del Estado, en la garantía de la libertad y la propiedad de los individuos. En Alemania, el argumento del Derecho Natural ha revivido en la forma de un Derecho de rango superior, frente al cual el Derecho estatal tiene que ceder (Marshall, pp. 187-188).

B.4. Concepto: El Estado de Derecho es aquel Estado en el que autoridades e individuos se rigen por el derecho, y éste incorpora los derechos y las libertades fundamentales, y es aplicado por instituciones imparciales y

accesibles que generan certidumbre (Haro, p. 124). Del mismo modo, como expresa Guastini en primer sentido el Estado de Derecho es aquel en el que están garantizados los derechos de libertad de los ciudadanos, en un segundo sentido, Estado de Derecho es aquel Estado en el cual el poder político está limitado por el derecho, en un tercer sentido, Estado de Derecho es aquel Estado en el cual todo acto de ejercicio del poder político está sujeto al principio de legalidad (Haro, p.123). Resumiendo, para nuestro objetivo el Estado de Derecho alude a un particular diseño institucional que, con el objeto de proteger y garantizar los derechos fundamentales de las personas, intenta guiar, controlar y limitar el ejercicio del poder público a través de normas de carácter general, que conformen un sistema claro y conocido por todos (Haro, p. 126).

B.5. Elementos: Marshall siguiendo Böckenförde, expresa que las características originales del Estado de Derecho es la siguiente: **a)** el Estado es una creación de la comunidad política y está a su servicio, no es una creación de, ni está encomendado a, ningún orden superior o divino; **b)** los objetivos del Estado quedan restringidos a la garantía de la libertad, la seguridad y la propiedad de los individuos; y **c)** la organización y regulación de la actividad del Estado debe realizarse de acuerdo a principios racionales, incluyendo entre estos los siguientes: el reconocimiento de los derechos básicos de la ciudadanía (libertad, igualdad y propiedad), la independencia de los jueces, la responsabilidad del gobierno, el dominio de la ley, la representación del pueblo y la separación de funciones (**Marshall**, p.191). En esa línea Benda considera que el Estado de Derecho **involucra:** **a)** seguridad jurídica y justicia; **b)** que la Constitución sea la norma suprema; **c)** la vinculación de los poderes públicos a la ley y al Derecho; **d)** vinculación de los poderes públicos por la primacía y reserva de ley; **e)** división de poderes; **f)** protección de los derechos fundamentales; **g)** tutela judicial; **h)** protección de la confianza jurídica. (**Marshall**, p.191). Sobre lo anterior **Villar Borda** (p. 74-81) realiza una buena síntesis de los elementos del Estado de Derecho- principios racionales dirá Böckenförde-. En realidad, en Estado de Derecho hay una acumulación de ideas de **muchas fuentes y distintas épocas**, así: **a)** sometimiento del poder al derecho; **b)** el gobierno de la razón; **c)** El gobierno de la leyes y no de los hombres; **d)** La Obligación del gobernante de proteger el derecho, la separación del poder, las libertades de los ciudadanos, los derechos del hombre y Estado Constitucional.

B.6. Chile y el Estado de Derecho: Chile siempre mantuvo una disposición a proteger los derechos fundamentales. La conciencia jurídica ya

estaba instalada. Así, se aprecia en los albores de la república, se verifica esto en el Mensaje para la promulgación de la Constitución Política de 1828, que dentro de sus párrafos expresaba, que ha llegado el día solemne de la consolidación de nuestras libertades, cesaron para nosotros los tiempos en que la suerte nos condenada a la ciega obediencia de una autoridad sin límites. Los depositarios de la autoridad se convierten en verdaderos servidores de la causa pública. Del pueblo mismo. Depositarios de su seguridad. Barreras ante las cuales deben detenerse todas las usurpaciones y todas las injusticias. **La Constitución establece la más formidable garantía contra los abusos de toda especie de autoridad, de todo exceso de poder.** La libertad, la igualdad, la facultad de publicar vuestras opiniones, de presentar reclamaciones y quejas a los diferentes órganos de la soberanía nacional, están al abrigo de todo ataque. La constitución es un tesoro que no podemos perder, ni menoscabar, sin degradarnos, ni envilecernos. En esa perspectiva la Constitución de 1925 mantuvo el mismo temple jurídico. En efecto, se presenta como un Estado de Derecho toda vez que al analizar las normas esta Constitución - vigentes al 11 de septiembre de 1973- Había Constitución escrita, **Separación de Poderes, Principio de la legalidad, Principio de garantía de los Derechos Fundamentales, Seguridad jurídica y protección de la confianza y Principio de proporcionalidad.** Lo anterior, de inicio es comprobable por la práctica democrática desde 1932 hasta 1973 en la denominada Cuarta República o bien la República democrática (**Renato Cristi y Pablo Ruiz- Tagle** (2006): La República en Chile. Teoría y práctica del Constitucionalismo Republicano. Ediciones LOM. pp. 114- 130). Además de la lectura de la Constitución de 1925 esta consagra, además, **el principio constitucional del Estado de Derecho como un principio normativo.** Así es verificable en sus artículos 1 a 4 que consagra el gobierno republicano y democrático (1) la soberanía reside en la nación (2). Ninguna magistratura, ni reunión de personas puede atribuirse ni aún pretexto de circunstancias extraordinarias otra autoridad o derechos que lo que expresamente le haya conferido por la leyes (4). Del mismo modo, el capítulo III está consagrado a las garantías Constitucionales, que el capítulo IV está dedicado al Congreso Nacional; el capítulo V al Presidente de la República; el capítulo VII al Poder Judicial.

Por su lado la Constitución de 1980 (con todas sus precariedades, limitaciones e infinitas críticas) con las reformas realizadas desde 1980 en forma incipiente nos anuncia en su artículo 4 que Chile es una República democrática. En su artículo 5 que la soberanía reside en la nación. El capítulo III prescribe De

los Derechos y Deberes Constitucionales, el capítulo IV gobierno; el capítulo V Congreso Nacional; capítulo VI Poder Judicial. **Marshall** (pp.199-202) expresa de los artículos 5 a 7 de la carta fundamental se desprenden algunos principios constitucionales que contribuyen a darle forma al Estado de Derecho en la Constitución Política: Esta disposición plantea varias cuestiones interesantes. (i) El enunciado del artículo 5 inciso 2º como consagración del principio de distribución. La afirmación de que **el Estado tiene un deber de respetar los derechos fundamentales** es la afirmación central del Estado de Derecho e implementa de esa manera el principio de distribución entre lo permitido y lo no permitido para el Estado. Por su lado el principio de Organización en supremacía constitucional (art. 6 inc. 1º), legalidad en sentido amplio (arts. 6 inc. 1º y 7 inc. 1º), garantía del orden institucional (art. 6 inc. 1º), fuerza normativa de la Constitución (art. 6 inc. 2º); responsabilidad (art. 6 inc. 3º y 7 inc. 3º), distribución de competencias-separación de poderes- (art. 7 inc. 1º y 2º), legalidad en sentido estricto (art. 7º inc. 1º).

Todas estas ideas sugieren que la idea del Estado de Derecho es la concreción institucional de las ideas de la filosofía política liberal racional. El lugar que tiene la institución de la ley para el Estado de Derecho es central para afirmar la primacía del individuo frente al Estado y va a ser el eje de continuidad sobre el cual el concepto de Estado de Derecho se va a desarrollar. (Marshall, pp. 191-192).

En la actualidad la idea del Estado de Derecho se lo considera **uno de los pilares principales de un régimen democrático** Sería difícil encontrar otro ideal político encomiado por un público tan diverso. (Vilhena, p.30).

En este caso, el homicidio calificado (como indica el mérito del proceso y el auto acusatorio de **fs. 2.096 a fs. 2.131 (Tomo VI)**, comenzó con una detención irregular e ilícita para luego agredir a **Rubén Armando Antimán Nahuelquín** quien producto de lo anterior resulto fallecido. Como se describe en el auto acusatorio de **fs. 2.096 a fs. 2.131 (Tomo VI)**, las múltiples pruebas, directas e indirectas generales y específicas que se han detallado y ponderado precedentemente dan cuenta de lo razonado, lo que demuestra que los acusados actuaron en estos hechos descritos en el auto acusatorio de **fs. 2.096 a fs. 2.131 (Tomo VI)**. Luego se dan todos los elementos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los delitos de lesa humanidad para formularles a los acusados el reproche penal que se ha señalado. Ello sin perjuicio del análisis de las defensas.

Que como se aprecia, complementado e iluminando lo que se ha expresado con anterioridad hay que tener presente que las autoridades que tomaron el Poder tras el 11 de septiembre de 1973 tenían una mayor exigencia de respetar y garantizar sin discriminación los derechos de todas las personas. En especial, porque si desde ya hay un quiebre constitucional significa que las personas no pueden recurrir en forma normal a las instituciones que pueden resguardar sus derechos, por ello cualquier actuación de la autoridad debe ser con la mayor exigencia y cuidado respecto de los derechos de las personas, ya que, está actuando sin un mandato constitucional, legal y democrático. En este caso entonces las personas detenidas y llevadas a un centro o lugar de detención estaban en una alta indefensión. El homicidio calificado (como indica el mérito del proceso) de **Rubén Armando Antimán Nahuelquín**, fue al margen de todo derecho. En consecuencia, tanto el mando superior como los subordinados respectivos y grupos especiales para detener a personas por motivos políticos o bien por capricho o abuso de poder, se encuentran en condiciones como se ha cavilado, de realizarles un **reproche penal** como se ha hecho en esta sentencia. Ello sin perjuicio del estudio de las defensas.

C. OBLIGACIÓN DE INVESTIGAR:

Cabe hacer presente que para la ponderación y aquilatación de los medios de pruebas del proceso en materia de violación a los derechos humanos (delitos de Lesa Humanidad) debe estarse al contexto de la época y lo que significa la obligación de investigar como a continuación se indica:

C.1. Los estándares normativos e interpretativos en materia de graves violaciones a los de derechos humanos (delitos de lesa humanidad) en relación a la obligación de investigar. Partamos expresando que un estándar normativo en derechos humanos corresponde a la idea de descubrir mediante un razonamiento judicial una nueva regla que inspire la solución de un caso que puede ser perfectamente aplicable a casos similares. Un estándar importa alcanzar un determinado nivel, puesto que todas las herramientas interpretativas apuntan a una mayor realización de los derechos fundamentales. En este caso la interpretación debe ser plausible conforme al artículo 5° inciso 2° de nuestra Constitución que impele a reconocer y promover tales derechos fundamentales (García Pino, Gonzalo: “La consideración de los estándares sobre derechos fundamentales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Tribunal Constitucional”. En Actas XI Jornadas Constitucionales. Temuco 2015, pp. 27 -53). Agregando este Tribunal que a partir de la normativa aludida, está debe ser

aplicada e interpretada en conformidad con lo que ha decidido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de derechos humanos (Corte IDH) sobre determinado estándar normativo. En este caso sobre la **Obligación de investigar**.

C.2. Que sobre la normativa interna y las prácticas judiciales de los Estados y en este caso del Poder Judicial, ya la Corte IDH en el **fallo Almonacid Arellano y otros versus Chile**, de 26 de septiembre de 2006, en su párrafo 124, señaló: “La Corte es consciente que los jueces y Tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”.

C.3. Que esta institución denominada **control de convencionalidad** puede ser definida, en términos simples, como el mecanismo que utiliza la Corte IDH tanto en sede contenciosa como consultiva para determinar la compatibilidad o no del derecho interno o los actos de los agentes de un Estado, con las disposiciones de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Asimismo, como el ejercicio que realizan los jueces domésticos para realizar el mismo cotejo entre las normas internas, las que dispone la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana (García, Gonzalo (2014): “Preguntas esenciales sobre el control de convencionalidad difuso aplicables a Chile”, en: Nogueira, Humberto (coord.) La protección de los Derechos Humanos y fundamentales de acuerdo a la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Santiago de Chile, Librotecnia. pp. 356-357).

C.4. Que para aplicar entonces el control de convencionalidad hay que observar por supuesto la Convención Americana- ya citada- en especial los artículos 1.1 y 2. Ello por cuanto los Estados tienen la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a

toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna (1.1). Por su lado, su artículo 2 nos expresa, que si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

C.5. Que del mismo modo, debemos analizar ahora si la Corte IDH en su jurisprudencia contenciosa o consultiva ha dictado al menos una sentencia o ha emitido alguna Opinión Consultiva sobre la materia, que permita al Juez respectivo aquilatar que se encuentra en presencia de un estándar normativo en materia de derechos humanos. En este caso (obligación de investigar) en relación a cómo se deben desarrollar las investigaciones cuando han ocurrido graves violaciones a los DDHH (delitos de lesa humanidad). En esta materia podemos observar que sí ha existido por parte de la Corte IDH un estándar y jurisprudencia robusta y contundente sobre la materia.

C.6. Que siguiendo el razonamiento anterior observamos lo siguiente:

Sentencia en caso Velásquez Rodríguez versus Honduras de 29 de julio de 1988. Párrafos 176 y 177, afirma en el **176** que (...) el Estado está, por otra parte, obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es válido cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la Convención. Por su lado en el **177** acota que (...) la de investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad. Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación,

aun los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado.

Sentencia caso Villagrán Morales y otros versus Guatemala de 19 de noviembre de 1999. Párrafo 225, añade que del artículo 1.1 se desprende claramente la obligación de investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos en la Convención como medio para garantizar tales derechos.

Sentencia caso Barrios Altos versus Perú de fecha 14 de marzo de 2001. Párrafo 41 asevera que esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Sentencia caso Las Palmeras versus Colombia de 6 de diciembre de 2001, en su párrafo 42 anexa que (...) La Corte estima que es posible que, en un caso determinado, se pueda interpretar la omisión de investigación como una forma de encubrir a los autores de un delito contra la vida, pero no puede erigirse este razonamiento en una norma válida para todos los casos. Independientemente de la cuestión de la validez de la pretendida norma, es de señalar que ella sería aplicable en ausencia de una investigación seria (...).

Sentencia caso Juan Humberto Sánchez versus Honduras de 7 de junio de 2003. Párrafo 184 expresa que (...) el Estado parte de la Convención Americana tiene el deber de investigar las violaciones de los derechos humanos y sancionar a los autores y a quienes encubran dichas violaciones. Y toda persona que se considere víctima de éstas o bien sus familiares tienen derecho de acceder a la justicia para conseguir que se cumpla, en su beneficio y en el del conjunto de la sociedad, ese deber del Estado.

Sentencia caso Bulacio versus Argentina de 18 septiembre de 2003. En el párrafo 115 explicita que (...) el derecho a la tutela judicial efectiva exige entonces a los jueces que dirijan el proceso de modo de evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos, conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos.

Sentencia caso Myrna Mack Chang versus Guatemala de 25 de noviembre de 2003. Párrafo 277 expone que (...) asimismo, en el cumplimiento

de esta obligación, el Estado debe remover todos los obstáculos y mecanismos de hecho y derecho que mantienen la impunidad en el presente caso; otorgar las garantías de seguridad suficientes a las autoridades judiciales, fiscales, testigos, operadores de justicia y a los familiares de Myrna Mack Chang y utilizar todas las medidas a su alcance para diligenciar el proceso.

Sentencia caso Tibi versus Ecuador de 7 septiembre de 2004.

Párrafo **159** acota que (...) la Corte entiende que, a la luz de la obligación general de los Estados partes de respetar y garantizar los derechos a toda persona sujeta a su jurisdicción, contenida en el artículo 1.1 de la Convención Americana, el Estado tiene el deber de iniciar de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables, cuando existe denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en violación del artículo 5 de la Convención Americana.

Sentencia caso de las Hermanas Serrano Cruz versus El Salvador de 1 de marzo de 2005. Párrafo **83** añade que (...) la Corte ya ha señalado que la debida diligencia exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue. De otro modo, la investigación no es efectiva en los términos de la Convención.

Sentencia caso Comunidad Moiwana versus Suriname de 15 de junio 2005. Párrafo **145** anexa que (...) está expresamente reconocido por Suriname, que agentes estatales estuvieron involucrados en el ataque del 29 de noviembre de 1986 en el que murieron al menos 39 residentes indefensos de la aldea de Moiwana – entre los cuales había niños, mujeres y ancianos – y muchos otros resultaron heridos. De esta manera, los hechos muestran múltiples ejecuciones extrajudiciales; en tal situación, la jurisprudencia del Tribunal es inequívoca: el Estado tiene el deber de iniciar ex officio, sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva.

Sentencia caso de la Masacre de Mapiripán versus Colombia de 15 de septiembre de 2005. En sus párrafos 137, 233 y 299. Afirma en el **137** (...) Tal como se desarrolla en las consideraciones sobre los artículos 8 y 25 de la Convención una de las condiciones para garantizar efectivamente el derecho a la vida se refleja necesariamente en el deber de investigar las afectaciones a ese derecho. De tal manera, la obligación de investigar los casos de violaciones al derecho a la vida constituye un elemento central al momento de determinar la responsabilidad estatal en el presente caso. **233** (...) Este deber de investigar

deriva de la obligación general que tienen los Estados partes en la Convención de respetar y garantizar los derechos humanos consagrados en ella, es decir, de la obligación establecida en el artículo 1.1 de dicho tratado en conjunto con el derecho sustantivo que debió ser amparado, protegido o garantizado. De tal manera, en casos de violaciones al derecho a la vida, el cumplimiento de la obligación de investigar constituye un elemento central al momento de determinar la responsabilidad estatal por la inobservancia de las debidas garantías judiciales y protección judiciales; **299 (...)** Para cumplir la obligación de investigar y sancionar a los responsables en el presente caso, Colombia debe: **a)** remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad; **b)** utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y el proceso judicial; y **c)** otorgar las garantías de seguridad adecuadas a las víctimas, investigadores, testigos, defensores de derechos humanos, empleados judiciales, fiscales y otros operadores de justicia, así como a los ex pobladores y actuales pobladores de Mapiripán.

Sentencia caso de la Masacre de Pueblo Bello versus Colombia de 31 de enero de 2006. Párrafo **143** afínca que en particular, por constituir el goce pleno del derecho a la vida la condición previa para la realización de los demás derechos una de esas condiciones para garantizar efectivamente este derecho está constituida por el deber de investigar las afectaciones al mismo. De tal manera, en casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Estado tiene el deber de iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva que no se emprenda como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales.

Sentencia caso Goiburú y otros versus Paraguay de 22 de septiembre de 2006. Párrafos 117, 129 y 130. Asevera que **117 (...)** Además, es preciso reiterar que esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. Durante la investigación y el trámite judicial las

víctimas o sus familiares deben tener amplias oportunidades para participar y ser escuchados, tanto en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, como en la búsqueda de una justa compensación, de acuerdo con la ley interna y la Convención Americana. No obstante, la investigación y el proceso deben tener un propósito y ser asumidos por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. **129 (...)** una vez establecido el amplio alcance de las obligaciones internacionales erga omnes contra la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos, la Corte reitera que en los términos del artículo 1.1 de la Convención Americana los Estados están obligados a investigar las violaciones de derechos humanos y a juzgar y sancionar a los responsables. **130 (...)** Por ende, según la obligación general de garantía establecida en el artículo 1.1 de la Convención Americana, el Paraguay debe adoptar todas las medidas necesarias, de carácter judicial y diplomático, para juzgar y sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas, inclusive impulsando por todos los medios a su alcance las solicitudes de extradición que correspondan. La inexistencia de tratados de extradición no constituye una base o justificación suficiente para dejar de impulsar una solicitud en ese sentido.

Sentencia caso Almonacid Arellano y otros versus Chile de 26 de septiembre de 2006. Párrafos 111 y 114. Expresa **111 (...)** Los crímenes de lesa humanidad producen la violación de una serie de derechos inderogables reconocidos en la Convención Americana, que no pueden quedar impunes. En reiteradas oportunidades el Tribunal ha señalado que el Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que la Corte ha definido como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”. Asimismo, la Corte ha determinado que la investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. **114 (...)** Por las consideraciones anteriores, la Corte estima que los Estados no pueden sustraerse del deber de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad aplicando leyes de amnistía u otro tipo de normativa interna.

Consecuentemente, los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no se puede conceder amnistía.

Sentencia caso del penal Miguel Castro versus Perú de 25 de noviembre de 2006. Párrafo 387. (...) Explicita que en primer término, esta Corte considera que el tiempo transcurrido entre el momento de los hechos y el inicio del proceso penal por la investigación de éstos sobrepasa por mucho un plazo razonable para que el Estado realice las primeras diligencias probatorias e investigativas para contar con los elementos necesarios para formular una acusación penal, máxime que a ese tiempo habrá que sumar el que tome la realización del proceso penal, con sus distintas etapas, hasta la sentencia firme. Esta falta de investigación durante tan largo período configura una violación al derecho de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares, por cuanto el Estado ha incumplido su obligación de adoptar todas las medidas necesarias para investigar las violaciones, sancionar a los eventuales responsables y reparar a las víctimas y sus familiares.

Sentencia caso de la Masacre de La Rochela versus Colombia de 11 de mayo de 2007. Párrafos 155, 156 y 171. Explaya que, **155** (...) La Corte estima que la ineffectividad de tales procesos penales queda claramente evidenciada al analizar la falta de debida diligencia en la conducción de las acciones oficiales de investigación. Esta falta de debida diligencia se manifiesta en la irrazonabilidad del plazo transcurrido en las investigaciones, la falta de adopción de las medidas necesarias de protección ante las amenazas que se presentaron durante las investigaciones, las demoras, obstáculos y obstrucciones en la realización de actuaciones procesales y graves omisiones en el seguimiento de líneas lógicas de investigación. **156** (...) el eje central del análisis de la efectividad de los procesos en este caso es el cumplimiento de la obligación de investigar con debida diligencia. Según esta obligación, el órgano que investiga una violación de derechos humanos debe utilizar todos los medios disponibles para llevar a cabo, dentro de un plazo razonable, todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue. Esta obligación de debida diligencia, adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados. En este sentido, tienen que adoptarse todas las medidas necesarias para visibilizar los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones de los derechos humanos. **171** (...) este Tribunal considera que, para cumplir con la obligación de investigar en el marco de las garantías del debido

proceso, el Estado debe facilitar todos los medios necesarios para proteger a los operadores de justicia, investigadores, testigos y familiares de las víctimas de hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer el proceso, evitar el esclarecimiento de los hechos y encubrir a los responsables de los mismo.

Sentencia caso Escué Zapata versus Colombia de 4 de julio de 2007. Párrafo 106 indica que (...) Una debida diligencia en los procesos investigativos requiere que éstos tomen en cuenta la complejidad de los hechos, el contexto y las circunstancias en que ocurrieron y los patrones que explican su comisión, en seguimiento de todas las líneas lógicas de investigación. Las autoridades judiciales deben intentar como mínimo, inter alia: **a)** identificar a la víctima; **b)** recuperar y preservar el material probatorio relacionado con los hechos; **c)** identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones; **d)** determinar la causa, forma, lugar y momento en que se produjo el ilícito, así como cualquier patrón o práctica que lo pueda haber causado; y **e)** en caso de fallecimientos, distinguir entre muerte natural, accidental, suicidio y homicidio.

Sentencia caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz versus Perú de 10 de julio de 2007. Párrafo 131 manifiesta que (...) el Tribunal reitera que la obligación de investigar es una obligación de medio, no de resultados. Lo anterior no significa, sin embargo, que la investigación pueda ser emprendida como “una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Cada acto estatal que conforma el proceso investigativo, así como la investigación en su totalidad, debe estar orientado hacia una finalidad específica, la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento, y en su caso, la sanción de los responsables de los hechos.

Sentencia caso García Prieto y otros versus El Salvador de 20 de noviembre de 2007. Párrafos 104, 112 y 115. Menciona en 104, (...) que cabe señalar que la obligación de investigar no sólo se desprende de las normas convencionales de Derecho Internacional imperativas para los Estados Parte; sino que además se deriva de la legislación interna que haga referencia al deber de investigar de oficio ciertas conductas ilícitas y a las normas que permiten que las víctimas o sus familiares denuncien o presenten querellas, con la finalidad de participar procesalmente en la investigación penal con la pretensión de establecer la verdad de los hechos. 112 (...) la obligación a cargo del Estado de actuar con debida diligencia en la práctica de una investigación implica que todas las autoridades estatales están obligadas a colaborar en la recaudación de la prueba

para que sea posible alcanzar los objetivos de una investigación. La autoridad encargada de la investigación debe velar para que se realicen las diligencias requeridas y, en el evento de que esto no ocurra, debe adoptar las medidas pertinentes conforme a la legislación interna. A su vez, las otras autoridades deben brindar al juez instructor la colaboración que éste les requiera y abstenerse de actos que impliquen obstrucciones para la marcha del proceso investigativo. En el presente caso se presentaron actos de esta naturaleza en lo que toca a la investigación relativa a la inspección de los libros de “entradas y salidas” del personal del Batallón San Benito de la extinta Policía Nacional. **115** (...) Para la Corte la falta de respuesta estatal es un elemento determinante al valorar si se ha dado un incumplimiento del contenido de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, pues tiene relación directa con el principio de efectividad que debe irradiar el desarrollo de tales investigaciones. De tal forma el Estado al recibir una denuncia penal, debe realizar una investigación seria e imparcial, pero también debe brindar en un plazo razonable una resolución que resuelva el fondo de las circunstancias que le fueron planteadas.

Sentencia caso Heliodoro Portugal versus Panamá de 12 de agosto de 2008. Párrafo **142** narra que (...) la obligación de investigar violaciones de derechos humanos se encuentra dentro de las medidas positivas que deben adoptar los Estados para garantizar los derechos reconocidos en la Convención. La Corte ha sostenido que, para cumplir con esta obligación de garantizar derechos, los Estados deben no sólo prevenir, sino también investigar las violaciones a los derechos humanos reconocidos en la Convención, como las alegadas en el presente caso, y procurar además, si es posible, el restablecimiento del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por las violaciones de los derechos humanos.

Sentencia caso Tiu Tojín versus Guatemala de 26 de noviembre de 2008. Párrafo **77** acota que (...) en base en lo anterior, el Estado deberá asegurar, como una forma de garantizar que la investigación iniciada ante la justicia ordinaria sea conducida con la debida diligencia que las autoridades encargadas de la investigación tengan a su alcance y utilicen todos los medios necesarios para llevar a cabo con prontitud aquellas actuaciones y averiguaciones esenciales para esclarecer la suerte de las víctimas e identificar a los responsables de su desaparición forzada. Para ello, el Estado garantizará que las autoridades encargadas de la investigación cuenten con los recursos logísticos y científicos necesarios para la recaudación y procesamiento de pruebas

y, en particular, tengan las facultades para acceder a la documentación e información pertinente para investigar los hechos denunciados y puedan obtener indicios o evidencias de la ubicación de las víctimas. En este sentido, cabe reiterar que en caso de violaciones de derechos humanos, las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas encargadas de la investigación o proceso pendientes.

Sentencia caso Ríos y otros versus Venezuela de 28 de enero de 2009. Párrafo **283** añade (...) que la investigación de la violación de determinado derecho sustantivo puede ser un medio para amparar, proteger o garantizar ese derecho. La obligación de investigar “adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados” incluso hasta alcanzar esa obligación, en algunos casos, el carácter de *Ius Cogens*. En casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Tribunal ha considerado que la realización de una investigación ex officio, sin dilación, seria, imparcial y efectiva, es un elemento fundamental y condicionante para la protección de ciertos derechos afectados por esas situaciones, como la libertad personal, la integridad personal y la vida. Se considera que en esos casos la impunidad no será erradicada sin la determinación de las responsabilidades generales –del Estado- e individuales –penales y de otra índole de sus agentes o de particulares-, complementarias entre sí. Por la naturaleza y gravedad de los hechos, más aún si existe un contexto de violación sistemática de derechos humanos, los Estados se hallan obligados a realizar una investigación con las características señaladas, de acuerdo con los requerimientos del debido proceso. El incumplimiento genera, en tales supuestos, responsabilidad internacional del Estado.

Sentencia caso Perozo y otros versus Venezuela de 28 de enero de 2009. En su párrafo **298** apunta que (...) la obligación general de garantizar los derechos humanos reconocidos en la Convención, contenida en el artículo 1.1 de la misma, puede ser cumplida de diferentes maneras, en función del derecho específico que el Estado deba garantizar y de las particulares necesidades de protección. Por ello, corresponde determinar si en este caso, y en el contexto en que ocurrieron los hechos alegados, la obligación general de garantía imponía al Estado el deber de investigarlos efectivamente, como medio para garantizar el

derecho a la libertad de expresión y a la integridad personal, y evitar que continuaran ocurriendo. La investigación de la violación de determinado derecho sustantivo puede ser un medio para amparar, proteger o garantizar ese derecho. La obligación de investigar “adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados”, incluso hasta alcanzar esa obligación, en algunos casos, el carácter de *ius cogens*. En casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Tribunal ha considerado que la realización de una investigación ex officio, sin dilación, seria, imparcial y efectiva, es un elemento fundamental y condicionante para la protección de ciertos derechos afectados por esas situaciones, como la libertad personal, la integridad personal y la vida. Se considera que en esos casos la impunidad no será erradicada sin la determinación de las responsabilidades generales –del Estado- e individuales –penales y de otra índole de sus agentes o de particulares-, complementarias entre sí. Por la naturaleza y gravedad de los hechos, más aún si existe un contexto de violación sistemática de derechos humanos, los Estados se hallan obligados a realizar una investigación con las características señaladas, de acuerdo con los requerimientos del debido proceso. El incumplimiento genera, en tales supuestos, responsabilidad internacional del Estado.

Sentencia caso Anzualdo Castro versus Perú de 22 de septiembre de 2009. Párrafo 135 apoya que (...) este Tribunal ha establecido que para que una investigación de desaparición forzada sea llevada adelante eficazmente y con la debida diligencia, las autoridades encargadas de la investigación deben utilizar todos los medios necesarios para realizar con prontitud aquellas actuaciones y averiguaciones esenciales y oportunas para esclarecer la suerte de las víctimas e identificar a los responsables de su desaparición forzada. Para ello, el Estado debe dotar a las correspondientes autoridades de los recursos logísticos y científicos necesarios para recabar y procesar las pruebas y, en particular, de las facultades para acceder a la documentación e información pertinente para investigar los hechos denunciados y obtener indicios o evidencias de la ubicación de las víctimas. Asimismo, es fundamental que las autoridades a cargo de la investigación puedan tener acceso ilimitado a los lugares de detención, respecto a la documentación así como a las personas. La Corte reitera que el paso del tiempo guarda una relación directamente proporcional con la limitación –y en algunos casos, la imposibilidad- para obtener las pruebas y/o testimonios, dificultando y aún tornando nugatoria o ineficaz, la práctica de diligencias

probatorias a fin de esclarecer los hechos materia de investigación, identificar a los posibles autores y partícipes, y determinar las eventuales responsabilidades penales. Cabe precisar que estos recursos y elementos coadyuvan a la efectiva investigación, pero la ausencia de los mismos no exime a las autoridades nacionales de realizar todos los esfuerzos necesarios en cumplimiento de esta obligación.

Sentencia caso Manuel Cepeda Vargas versus Colombia de 26 de mayo de 2010. Párrafo 118 aproxima que (...) en casos complejos, la obligación de investigar conlleva el deber de dirigir los esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron esas violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias, y no sólo descubrir, enjuiciar y en su caso sancionar a los perpetradores inmediatos. Es decir, la protección de derechos humanos debe ser uno de los fines centrales que determine el actuar estatal en cualquier tipo de investigación. De tal forma, la determinación sobre los perpetradores de la ejecución extrajudicial del Senador Cepeda sólo puede resultar efectiva si se realiza a partir de una visión comprehensiva de los hechos, que tenga en cuenta los antecedentes y el contexto en que ocurrieron y que busque develar las estructuras de participación.

Sentencia caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña versus Bolivia de 1 de septiembre de 2010. Párrafo 158 arguye que (...) la Corte considera pertinente reiterar, como lo ha hecho en otros casos, que la “verdad histórica” documentada en informes especiales, o las tareas, actividades o recomendaciones generadas por comisiones especiales, como la del presente caso, no completan o sustituyen la obligación del Estado de establecer la verdad e investigar delitos a través de procesos judiciales.

Sentencia caso Gelman versus Uruguay de 24 febrero de 2011. Párrafo 194 asevera que (...) la Justicia, para ser tal, debe ser oportuna y lograr el efecto útil que se desea o se espera con su accionar y, particularmente tratándose de un caso de graves violaciones de derechos humanos, debe primar un principio de efectividad en la investigación de los hechos y determinación y en su caso sanción de los responsables.

C.7. Síntesis de estos estándares normativos citados. Como se puede verificar al observar los fallos citados, la Corte IDH a través de su jurisprudencia sólida y robusta ha sostenido un estándar en relación a la **Obligación de Investigar** en materia de derechos humanos, en cuanto tratándose de graves violaciones a los derechos humanos (entre otros el delito lesa

humanidad) los Estados deben realizar determinadas actividades. En concreto realizando un resumen de la Jurisprudencia anterior y apoyándonos además en Eduardo Ferrer Mac-Gregor- (Las siete principales líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aplicable a la justicia penal. Revista IIDH v. 59 pp.45-48). Autor además que es Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

C.7.1. Investigar efectivamente los hechos. En casos de ejecuciones extrajudiciales es fundamental que los Estados investiguen efectivamente la privación del derecho a la vida y castiguen a todos los responsables, especialmente cuando están involucrados agentes estatales, ya que de no ser así se estarían creando, dentro de un ambiente de impunidad, las condiciones para que se repitan estos hechos, lo que es contrario al deber de respetar y garantizar el derecho a la vida.

C.7.2. Si los hechos violatorios a los derechos humanos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, favorecidos por el poder público, lo que compromete la responsabilidad internacional del Estado. En este sentido, la Corte IDH ha establecido que en casos de ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, las autoridades de un Estado deben iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva, una vez que tengan conocimiento del hecho.

C.7.3. El deber de investigar es una obligación de medios, no de resultados, la investigación de este tipo de casos debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa o como una mera gestión de intereses particulares que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares, o de la aportación privada de elementos probatorios. Esto último no se contrapone con el derecho que tienen las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares a ser escuchados durante el proceso de investigación y al trámite judicial, así como a participar ampliamente de los mismos.

C.7.4. Cabe destacar que cualquier carencia o defecto a los responsables materiales o intelectuales, implicará que no se cumpla con la obligación de proteger el derecho a la vida.

C.7.5. La Corte ya ha señalado que la debida diligencia exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue. De otro modo, la investigación no es efectiva en los términos de la Convención.

C.7.6. Para cumplir la obligación de investigar y sancionar a los responsables en el presente caso, se debe: **1)** remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad; **2)** utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y el proceso judicial; y **3)** otorgar las garantías de seguridad adecuadas a las víctimas, investigadores, testigos, defensores de derechos humanos, empleados judiciales, fiscales y otros operadores de justicia.

C.7.7. La investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales.

C.7.8. El Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que la Corte ha definido como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”.

C.7.9. Esta obligación de debida diligencia, adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados. En este sentido, tienen que adoptarse todas las medidas necesarias para visibilizar los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones de los derechos humanos.

C.7.10. El Tribunal considera que, para cumplir con la obligación de investigar en el marco de las garantías del debido proceso, el Estado debe facilitar todos los medios necesarios para proteger a los operadores de justicia, investigadores, testigos y familiares de las víctimas de hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer el proceso, evitar el esclarecimiento de los hechos y encubrir a los responsables de los mismos.

C.7.11. La Corte reitera que el paso del tiempo guarda una relación directamente proporcional con la limitación y en algunos casos, la imposibilidad para obtener las pruebas y/o testimonios, dificultando y aún tornando nugatoria o ineficaz, la práctica de diligencias probatorias a fin de esclarecer los hechos materia de investigación, identificar a los posibles autores y partícipes, y determinar las eventuales responsabilidades penales. Cabe precisar que estos recursos y elementos coadyuvan a la efectiva investigación, pero la ausencia de los mismos no exime a las autoridades nacionales de realizar todos los esfuerzos necesarios en cumplimiento de esta obligación

C.7.12. En casos complejos, la obligación de investigar conlleva el deber de dirigir los esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron esas violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias, y no sólo descubrir, enjuiciar y en su caso sancionar a los perpetradores inmediatos. Es decir, la protección de derechos humanos debe ser uno de los fines centrales que determine el actuar estatal en cualquier tipo de investigación. De tal forma, la determinación sobre los perpetradores de la ejecución extrajudicial sólo puede resultar efectiva si se realiza a partir de una visión comprehensiva de los hechos, que tenga en cuenta los antecedentes y el contexto en que ocurrieron y que busque develar las estructuras de participación.

C.7.13. La Justicia, para ser tal, debe ser oportuna y lograr el efecto útil que se desea o se espera con su accionar y, particularmente tratándose de un caso de graves violaciones de derechos humanos, debe primar un principio de efectividad en la investigación de los hechos y determinación y en su caso sanción de los responsables.

C.7.14. La Corte IDH ha establecido ciertos Principios Rectores, con base en el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas, para las investigaciones cuando se considera que una muerte pudo deberse a una ejecución extrajudicial. Las autoridades estatales que conducen una investigación deben: **1)** Identificar a la víctima; **2)** recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte con el fin de ayudar en cualquier investigación; **3)** Identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones con relación a la muerte que se investiga; **4)** determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier procedimiento o práctica que pueda haberla provocado, y **5)** distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen; se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados.

C.8. Que tal como se ha señalado latamente en los párrafos precedentes, estos son los estándares normativos e interpretativos que se deben ponderar tanto al momento de investigar, como al momento de valorar la prueba del proceso. El Tribunal debe considerar las dificultades de la época, el contexto para reunir la prueba y ver los patrones de conducta de los Agentes del Estado. **Tal como, lo que se ha realizado en esta sentencia** y que determinadas defensas nada expresan. Así del estudio de sus argumentos sucede que no hay

un cotejo y ponderación adecuado de todos los testigos, documentos y peritajes, sino que se refieren a eventos parciales de su propio interés. Ocurre que estas defensas, deben situarse en la sede del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y lo que significa la violación de los Derechos Humanos y el delito de lesa humanidad.

D. JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL SOBRE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS (DELITOS DE LESA HUMANIDAD) PRONUNCIADA POR LOS TRIBUNALES ALEMANES.

D.1. Que en todo caso a propósito de delitos de Lesa humanidad y la estructura legal y normativa que debe ponderarse en la sentencia (debe considerarse- con los ajustes hecho y derecho al contexto chileno- pues también los hechos investigados son graves violaciones a los derechos humanos, en este caso delitos de lesa humanidad y haremos los ajustes precisos y detallados al caso chileno, esto es, Centros de Detención, Regimientos, Destacamentos, Retenes, Tenencias, Comisarías, Bases Navales, Bases Aéreas, Cuarteles, Cárceles, Calabozos y todo otro lugar legal o ilegal que sirvió para detención, tortura o ejecución en la realidad chilena de la época) es muy significativo lo razonado en derecho comparado en los **casos de Iwan Nikolai de Demjanjuk** (condenado el 12 de mayo 2011) **y Oskar Gröning** (condenado 15 de julio de 2015), quienes tenían 91 y 94 años de edad , respectivamente, al ser condenados por Tribunales Alemanes. A continuación se realiza un síntesis en lo pertinente de los artículos de Gerhard Werle y Boris Burghardt-Universidad Humboldt- Berlín sobre el caso Demjanjuk y de Claus Roxin sobre el caso Oskar Gröning.

D.2. Que el primer artículo versa sobre la complicidad en matanzas ocurridas en campos de exterminio nacionalsocialistas (el caso Demjanjuk en el contexto de la jurisprudencia de la República Federal Alemana). Gerhard Werle y Boris Burghardt-Universidad Humboldt- Berlín. Revista Penal México. N°9 septiembre 2015- febrero 2016, pp.181-193. Corresponde al análisis de la sentencia recaída contra Iwan Nikolai Demjanjuk, quien fue considerado cómplice en el exterminio masivo de personas. El 12 de mayo de 2011, el segundo Landgericht (LG, Tribunal Estatal) de Múnich condenó a Iwan Nikolai Demjanjuk, quien se había dado como nombre John para su segunda vida en Estados Unidos, a una pena única de cinco años por complicidad en 16 casos de homicidios calificados, de los que resultaron un total de 28060 muertes. Antes de la revisión de los recursos pendientes, que habían presentado tanto el condenado como la Fiscalía, Demjanjuk murió el 20 de marzo de 2012, a los 91 años. Lo que se

razona es que antes de esta sentencia habría valido, conforme a la jurisprudencia de la República Federal Alemana, que una condena requeriría de la prueba de un hecho delictivo concreto (konkreten Einzeltatnachweis) imputable a cada acusado. Pero lo cierto es que los querellantes alegaron que la fundamentación de la responsabilidad como **cómplice** de Demjanjuk no se fundaría en un novum jurídico, sino que se vincularía con una jurisprudencia que habría sido olvidada solamente por razones de oportunidad política. El caso Demjanjuk implicaría una vuelta a la valoración correcta de acuerdo a la dogmática jurídico-penal. En efecto el segundo Landgericht de Múnich comprobó que Demjanjuk llegó a Sobibór como Trawniki (Se conocía como Trawniki a prisioneros de guerra y personas sometidas a trabajos forzados que recibieron entrenamiento por parte de las SS (Escuadras de Defensa) para colaborar en los campos de concentración y en llevar a cabo el genocidio. En su mayoría se trataba de ucranianos y los así llamados alemanes étnicos (Volksdeutsche) de la Unión Soviética. La denominación tiene su origen en el campo de Trawniki –donde tenía lugar el entrenamiento– que se ubicaba aproximadamente a 40 kilómetros al este de Lublin) el día 27 de marzo de 1943, permaneciendo allí hasta mediados de septiembre del mismo año. El tribunal señaló que si bien no fue posible comprobar las actividades desarrolladas por Demjanjuk dentro del campo de concentración, se consideró el hecho de que **el campo de Sobibór se habría dedicado exclusivamente a la matanza de judíos deportados**. Los Trawniki –y por lo mismo también Demjanjuk– habrían colaborado en todas las fases del exterminio bajo las órdenes del personal alemán del campo. Se habrían repartido en tres turnos: uno de ellos habría estado dedicado a la seguridad externa del campo, otro habría vigilado las labores en el campo y el tercero habría permanecido de guardia. Los turnos habrían durado ocho horas y habrían rotado entre tres días de turnos de vigilancia y tres días de turnos de guardia. Al arribo de un transporte, los Trawniki se habrían ocupado de vigilar a los judíos que llegaban y a los prisioneros que estaban sometidos a trabajos forzosos, que consistían en descargar a los deportados, hacerlos pasar a las cámaras de gas, someterlos a gases letales, y luego el examen y la remoción de los cadáveres. **Cada Trawniki –y por lo mismo también Demjanjuk– habría sabido que formaba parte de un aparato que no buscaba otra cosa que la manera más eficiente de matar al mayor número posible de personas**. Además, todos los Trawniki habrían tenido conciencia de la manera en que los judíos eran exterminados, y de que esto acontecía exclusivamente por motivos de odio racial. Durante el periodo de tiempo en el que Demjanjuk cumplió labores

como Trawniki en Sobibór habrían arribado comprobadamente 16 transportes con 29779 personas deportadas. De ellos, un total de 28060 fueron asesinadas inmediatamente tras su llegada, ya sea en las cámaras de gas o a tiros. En esa línea el homicidio de todas las personas que compartieron un transporte fue valorado por la sala como una unidad de acción desde el punto de vista jurídico. En cada uno de estos actos habría colaborado Demjanjuk como cómplice.

D.3. Que los principales hallazgos de la sentencia son, en este punto, que todos quienes formaban parte de la cadena de mando –comenzando con los miembros de la RSHA (Agencia Central de Seguridad Imperial) encargados de llevar adelante el exterminio de los judíos, pasando por los empleados ferroviarios, las personas en la administración del gobierno general, los directores de campos de concentración, los Oficiales de la SS (Schutzstaffel, fuerzas especiales nazis), los Oficiales de Policía en los campos de concentración individualmente considerados y el personal de vigilancia directamente comandado por ellos– tenían, cada uno, una tarea asignada en la expulsión de ciudadanos judíos de Alemania, planeada y organizada desde Berlín, hacia los países ocupados y controlados por el ejército alemán; en su transporte en los campos de exterminio y –siempre que no fueran seleccionados para ser forzados a trabajar, lo que ocurría con un pequeño grupo de ellos– en su homicidio inmediato y organizado en las cámaras de gas, como en una línea de producción. Sostiene la sentencia que los tres campos de exterminio de Treblinka, Belzec y Sobibór sirvieron al solo propósito del asesinato masivo de la población judía de Europa, y que con ello toda actividad del imputado y de las demás personas que tenían a su cargo tareas de vigilancia era una promoción de la tarea principal del campo de exterminio. En ese contexto, daba lo mismo si debían vigilar los andenes de arribo del tren, guiar a los prisioneros hasta las cámaras de gas, vigilar a los judíos que debían incinerar los cadáveres de los muertos, vigilar a los prisioneros sujetos a trabajos forzados para mantener el funcionamiento del campo y apropiarse de las pertenencias de los difuntos, controlar desde la torre de vigilancia para contrarrestar sublevaciones desde el interior o defenderse ante eventuales ataques de partisanos o realizar el servicio de guardia de reserva para el caso de alguno de estos eventos. Sostiene el tribunal que el peso del actuar individual para el plan común no es relevante para satisfacer la tipicidad de la complicidad, sino que adquiere relevancia solamente para la determinación de la pena, y que, en particular, no es relevante una relación causal, en el sentido de que la contribución del cómplice deba originar la consumación del hecho principal.

D.4. Que asimismo la resolución con otros procesos seguidos por la justicia de la República Federal Alemana por matanzas en los campos de concentración exclusivamente dedicados al exterminio, la Jurisprudencia había seguido la misma posición que luego fue olvidada. Así es posible observarlo, ya en la **sentencia de la sala especial del Landgericht de 1950 contra Hubert Gomerski y Johann Klier** se dice con claridad ejemplar: “El campo Sobibór fue creado con el solo fin de dar muerte a un gran número de judíos”. La sala sigue: “Todos quienes trabajaban en ese campo –alemanes, ucranianos y judíos– tenían su tarea particular, sea que hayan participado inmediatamente de los homicidios o que hayan apoyado indirectamente las tareas del campo. Todas estas actividades fueron en último término causales para el resultado –la muerte de los judíos–, pues sólo por haber existido este conjunto de actividades fue posible el resultado”. Esta argumentación la mantuvo la sala especial del Landgericht incluso para el Klier, quien hizo valer irrefutablemente que el solamente había trabajado en la panadería del campo y luego habría dirigido el comando de los zapatos (Schuhkommando), que se dedicaba a recolectar, seleccionar y almacenar los zapatos de los asesinados en las cámaras de gas. La sala especial del Landgericht hizo nuevamente hincapié en que **“todas las personas que trabajaban en el campo de Sobibór eran engranajes de un sistema que tenía por única finalidad matar a judíos. Toda acción que se llevó a cabo en ese campo servía directa o indirectamente a ese fin. Todas esas acciones fueron necesarias para la operación del campo.** De este modo, tanto la actividad del acusado Klier en la panadería como la actividad que tuvo a cargo de los zapatos fueron causales para el resultado”.

D.5. Que del mismo modo dieciséis años después, en el gran proceso de Sobibór, la sala especial del Landgericht tampoco dudó en clasificar como colaboraciones promotoras del resultado a aquellas que no estaban directamente vinculadas con la operación de exterminio, como por ejemplo el trabajo como tesorero o administrador del campo, o como responsable del abastecimiento de víveres y vestuario del personal del campo. La sentencia dijo sobre este punto: “Allí donde ellos [los acusados] formaban parte de la organización de los campos, [...] todos contribuyeron a hacer posible, por su colaboración funcional, los asesinatos masivos contra los judíos, siendo su causa y promoviéndolos en inmediata cercanía al hecho”. El Tribunal Federal alemán confirmó esa argumentación en cuanto conoció de la revisión de esas sentencias. Particularmente destacable resulta en ese contexto lo dicho respecto de la

sentencia de primera instancia de hechos en el proceso Kulmhof, que se llevó adelante durante los años 1962 y 1963 ante el Landgericht de Bonn contra 12 acusados. Ante la **alegación por parte de algunos acusados de que se los habría condenado como cómplices mediando un error jurídico**, porque ellos solamente habrían llevado a cabo acciones “que [...] se enmarcaban dentro de las tareas entonces asignadas a la policía de protección [Schutzpolizei]”, y por lo mismo habrían sido “valorativamente neutrales” y no podrían ser valoradas como fundamento de complicidad en un asesinato, el Tribunal Federal Alemán respondió claramente: “Conforme a lo constatado [...] ya por su pertenencia al comando especial que fue creado para el sólo fin de aniquilar a la población judía de Polonia y ciertos otros grupos de personas cuya vida era considerada útil, **los acusados han colaborado en el asesinato de las víctimas**. La naturaleza de las tareas que les correspondió realizar a cada uno en la ejecución de acciones individuales deviene en razón de ello –por lo menos en este contexto– irrelevante”. Tampoco en los procesos posteriores tuvieron éxito las revisiones fundadas en alegaciones contra la calificación del trabajo en campos de exterminio como complicidad en el asesinato masivo, que se llevó a cabo en esos campos de exterminio.

D.6. El caso Demjanjuk ha demostrado que el segundo Landgericht de Múnich en ningún caso ha penetrado en nuevo terreno jurídico en lo tocante a las valoraciones jurídicas centrales, sino que ha continuado con un camino que ya había sido trazado. La justicia de la República Federal alemana ha constatado desde siempre que **toda función desempeñada en el funcionamiento de los campos de concentración de Treblinka, Belzec, Sobibór y Chelmno era complicidad en el asesinato masivo**. La declaración principal podía resumirse diciendo que **allí no había actividades neutrales**. Es decir esta valoración fundamental fue confirmada en el proceso contra Demjanjuk. Ella es correcta y resulta de la aplicación de los fundamentos de la complicidad que desde hace tiempo están fijados por la jurisprudencia. Según ellos, se presta una colaboración por medio de cada comportamiento que promueve la comisión del hecho principal objetivamente de cualquier manera. En el caso de formas de comportamiento que, miradas en sí mismas son cotidianas y permitidas, **según la jurisprudencia la situación dependerá del conocimiento que tengan los partícipes: si saben que su actuar promueve la comisión del hecho principal, su acción pierde en todo caso su carácter de acción cotidiana**. Luego el caso Demjanjuk no creó una nueva construcción de la punibilidad a título de complicidad. El proceso se deja entender más bien como una reactivación de principios reconocidos de la

complicidad en relación con homicidios masivos en la época nacionalsocialista. El caso llevó la atención a que estos principios fueron pasados por alto en muchos procesos por largo tiempo.

D.7. Que el segundo artículo versa sobre la **sentencia en el asesinato por medio del servicio en el campo de concentración de Auschwitz**. Sentencia del BGH y comentario de Claus Roxin (Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano. CEDPAL, Editores Kai Ambos John Zuluaga, volumen 2, 2018, pp. 189-209). Se resumen en lo pertinente el análisis de la sentencia de la Tercera Sala Penal del Tribunal Supremo Federal, la que con fecha 20 de septiembre de 2016 decidió por unanimidad rechazar el recurso de revisión solicitado por el acusado (Oskar Gröning) en contra de la sentencia del Tribunal Regional de Luneburgo del 15 de julio de 2015.

D.8. Que el Tribunal Regional (Landgericht) sentenció al acusado a una pena de cuatro años de prisión en **calidad de cómplice** de asesinato en 300.000 casos, todos los casos legalmente coincidentes. Contra su condena, el acusado promovió recurso de revisión basado en la invocación de la violación al derecho formal y sustantivo. El recurso deviene infructuoso. El sentenciado murió a los 94 años antes de empezar a cumplir la sentencia condenatoria. Los fundamentos son: **a)** Una vez trasladado al campo de concentración de Auschwitz, el acusado fue asignado a un puesto en el área de Administración del dinero de los prisioneros. Entretanto había sido promovido al grado de Sargento Segundo de las SS (SSUnterscharführer) y asignado a la Operación Hungría, de igual manera que en la Operación Reinhard. De tal modo que en el transcurso de la Operación Hungría, el acusado, uniformado y armado con una pistola, desempeñó durante al menos tres días -no mayormente precisables-, las funciones de servicio de rampa en la denominada nueva rampa. En primer lugar, tenía la tarea de custodiar en el campo de concentración de Auschwitz el equipaje allí depositado durante la descarga de los trenes que llegaban a Auschwitz y, de esta manera, evitar el robo. Aunque en Auschwitz el robo por parte de los miembros de la SS estaba a la orden del día, la mayoría de estos hechos no fueron perseguidos ya que los autores cedían subrepticamente una parte del botín, a fin de mantener la moral de las tropas. En la rampa, sin embargo, debía impedirse en todo momento que los equipajes fueran abiertos, inspeccionados y saqueados a la vista de los deportados, para no levantar sospechas y evitar revueltas, que pudieran poner en riesgo el procedimiento ulterior de selección y gaseado. Al mismo tiempo y mediante sus funciones en el servicio de rampa, el acusado formó parte del

contexto de intimidación usado para sofocar, ya desde el origen, cualquier idea de resistencia o huida. Además, del servicio de rampa, el acusado estaba encargado, conforme a su función en la sección de administración del dinero de los prisioneros, de la clasificación monetaria, la contabilidad, la administración y el transporte hacia Berlín del dinero de los deportados. Allí, lo entregaba en intervalos irregulares a la Dirección General de Administración Financiera de las SS (SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamt) o lo depositaba directamente en una cuenta de las SS en el Reichsbank. Asimismo, incumbía en todo momento a las funciones de servicio del acusado, la supervisión de los deportados y, en caso necesario, el impedir por medio de las armas cualquier resistencia o intento de fuga; **b)** Desde su participación en la Operación Reinhard, el acusado conocía todos los detalles de los procedimientos empleados en el campo de concentración de Auschwitz. En particular, él sabía que los judíos deportados en forma masiva a Auschwitz eran masacrados aprovechándose deliberadamente de su calma e indefensión. Asimismo, él era consciente de que con sus actividades apoyaba la maquinaria de muerte que operaba en Auschwitz. Él fue -al menos- condescendiente con tal proceder, para evitar ser transferido a las unidades de las SS que combatían en el frente de batalla.

D.9. Que el profesor **Roxin** expresa que la afirmación de la Sala Penal según la cual el acusado ha prestado asistencia a todos estos hechos, no resulta objetable por motivos legales. Además, continúa que esto se aplica en primer lugar con relación a las víctimas frente a cuyo arribo en Auschwitz-Birkenau el acusado se encontraba cumpliendo con el servicio de rampa. No exige mayores discusiones el hecho de que, con su accionar, el acusado prestaba asistencia a los miembros de las SS, los que a su vez cometían asesinatos mediante la previa selección en la rampa y la inmediata ejecución a través del rociamiento del Zyklon B en las cámaras de gas. Añade que el acusado prestó asistencia entonces en el sentido del Art. 27 inciso 1 del Código Penal, por un lado –mediante la vigilancia del equipaje-, a conservar la calma de quienes llegaban y, por el otro -como una parte del contexto de intimidación-, a sofocar toda idea de resistencia o fuga. Ahora bien, razona que también resulta punible el acusado por complicidad en el asesinato respecto de las víctimas que arribaron y a las cuales él no prestó el servicio de rampa. En efecto, aunque no pueda aseverarse que con su accionar el acusado haya prestado asistencia física o psicológica directa a los médicos que participaron en la selección o a los miembros de las SS que realizaron la matanza, el Tribunal Regional no obstante tomó acertadamente como punto de partida que

el acusado por medio del ejercicio general de su servicio en Auschwitz, ya había prestado asistencia a los dirigentes estatales y a las SS, quienes a principios de 1944 ordenaron la Operación Hungría, la que subsecuentemente desde una posición de liderazgo, implementaron o dejaron implementar (para la autoría mediata en el marco de los aparatos de poder estatales).

D.10. Que desde esa perspectiva cavila el autor, que **el acusado tuvo participación en esta facilitación de los hechos**. Era parte del aparato de personal que ya estaba cumpliendo funciones al momento de la orden para llevar a cabo la Operación Hungría en Auschwitz. Él estaba vinculado a la organización de los asesinatos masivos, e independientemente de esto, le incumbía supervisar y vigilar la llegada de los deportados a la rampa y evitar por medio de las armas cualquier resistencia o intento de fuga. Finalmente, más allá de esto, también estuvo involucrado en el aprovechamiento de los bienes de las víctimas, lo que hizo que las SS se beneficiaran incluso luego de la muerte de las víctimas. El hecho de que estas funciones fueran ejercidas en el campo de concentración de Auschwitz por miembros de las SS que eran activos allí, era bien conocido por los responsables cuando se ordenó la Operación Hungría y fue de fundamental importancia para su resolución de actuar y emitir las respectivas órdenes y mandatos. El hecho de que ellos no conocieran personalmente al acusado es jurídicamente irrelevante. Bastaba con que ellos sepan que todas las tareas a desarrollarse para poner en marcha esa mortífera maquinaria, serían cumplidas por subordinados confiables y obedientes, lo que garantizaba una implementación sin obstáculos de la Operación Hungría.

D.11. Que todo según el contexto general de los fundamentos del veredicto, era también conocido por el acusado, quien lo aprobó -al menos- con condescendencia. Ya estaba plenamente informado de los acontecimientos, poco después de su llegada a Auschwitz. Sin embargo, en su empeño por no ser transferido al frente, se unió a la organización del campo y ejecutó todas las órdenes que se le impartieron. Él tenía en claro, por lo tanto, que a través de su servicio, en colaboración con otros, lograba asegurar en todo momento las condiciones necesarias para que las autoridades del Estado y de las SS pudieran decidir y ordenar la ejecución de una operación de exterminio en Auschwitz, ya que dependían de la ejecución a nivel local de sus órdenes criminales. Precisa Roxin que desde el punto de vista subjetivo, no se requiere más para tener por acreditada la contribución del acusado en todos los asesinatos que le fueran atribuidos en la sentencia impugnada por la Operación Hungría.

D.12. Que por ello Claus Roxin considera que la decisión anterior relatada, es correcta y cree que merece la relevancia que se le ha atribuido. Ella deja definitivamente en claro que **los miembros del equipo de un campo de concentración se hicieron culpables por complicidad en el asesinato**, si ellos sabían de los asesinatos cometidos durante su pertenencia al campo y apoyaron la operación del campo dirigida al exterminio a gran escala de vidas humanas.

D.13. Que el autor recuerda que tampoco la **Sentencia de la Segunda Sala Penal del 20.2.1969** (veinte de febrero de mil novecientos sesenta y nueve), a la que se ha remitido en la revisión del acusado y muchas órdenes de sobreseimiento de años anteriores, ha juzgado esto de un modo distinto. Allí se señala lo siguiente: “Una especificación más detallada de los hechos no era posible, pues las muertes en Auschwitz fueron tan numerosas que en su mayoría no pudieron ser identificadas por sus características específicas, como la persona del difunto o el momento exacto en que ello ocurrió... En ese sentido, si frente a asesinatos en masa uno quisiera colocar exigencias más estrictas respecto a la concretización de las ejecuciones individuales, entonces fracasaría la persecución de crímenes cometidos a escala masiva.”

D.14. Que precisa Roxin que **no existen causales de exculpación**. En especial, no viene en consideración el estado de necesidad como consecuencia de una orden (Befehlsnotstand). Tampoco el acusado mismo lo hizo valer para él. Tal como se dice en la sentencia de la Tercera Sala, él estaba “informado en su totalidad [sobre el suceso en el campo]. A pesar de ello, con el anhelo de no ser enviado al frente, él se integró en la organización del campo y ejecutó todas las órdenes que le fueron impartidas.” Esto corresponde al reconocimiento general de que los miembros del campo no fueron obligados a realizar sus actos. Quien se negaba a cooperar, era enviado al frente. A los líderes les interesaba que el funcionamiento de la maquinaria de muerte no fuera impedida por la oposición de algunos. “Hasta hoy no se ha documentado ningún caso en el que un miembro de la unidad militar o policial alemana hubiere sido condenado a muerte, asesinado o por lo menos maltratado, por haberse negado a ejecutar una orden de asesinato.” Con mayor razón no se puede hablar de un error de prohibición exculpante. **Es difícilmente imaginable que quien actúa en un campo de concentración hubiera podido considerar que el asesinato de personas completamente inocentes resultaba conforme al derecho.** Pero incluso de haber sido éste el caso – por ejemplo, debido a la autoría estatal –, una semejante “ceguera jurídica”

no habría merecido ninguna disminución de la pena. En el caso que aquí se discute el acusado tampoco invocó un error de prohibición.

D.15. Que trazando un razonamiento de lo anterior para el caso de Chile y en especial en esta causa podemos escrutar lo siguiente:

D.15.1. Al 11 de septiembre de 1973 en Chile no había Estado de Derecho. Se había quebrado el orden institucional pues los Fuerzas Armadas y de Orden dieron un Golpe de Estado, derribando al gobierno constitucional que había ascendido al poder.

D.15.2. Es decir se retrocedió de inmediato 200 años, y al retroceder estos 200 años y romper el freno de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 se retrocedió por lo menos otros 2000 años, volviendo a vivir la sociedad chilena bajo autoridades despóticas y arbitrarias. Situación que en la historia abundan. Ahora bien, el Estado de Derecho al menos desde la Declaración del hombre y del Ciudadano de 1789 y la misma Constitución francesa de 1791 tiene por fin último proteger a la persona, proteger sus derechos, salvaguardar la libertad. Podemos releer los artículos 2 y 16 de la citada declaración. Artículo 2, la finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del Hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión; artículo 16, Una Sociedad en la que no esté establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación de los Poderes, carece de Constitución.

D.15.3. En este caso, como está documentado en forma amplia públicamente, durante 17 años de quiebre constitucional (régimen militar, dictadura militar), no hubo separación de poderes (al contrario, hubo concentración); se disolvió el poder más significativo de la representación popular como el congreso; el Poder Judicial no tuvo la independencia necesaria para salvaguardar los derechos de las personas. Luego en esa perspectiva, la autoridad tenía un doble resguardo de los derechos fundamentales de las personas. Primero, no había Estado de Derecho, en consecuencia el cuidado hacia los derechos y libertades de las personas le exigía un estándar mayor; en segundo lugar, reuniendo el poder político y militar en sus manos, cualquier afectación a los derechos de las persona se debía tener una necesidad, proporcionalidad y mayor fundamentación, pues de otro modo era sospechosa cualquier actuación pues no se estaba bajo un Estado de Derecho.

D.15.4. En este caso entonces las personas detenidas y llevadas al centro o lugar de detención estaban en una alta indefensión, como puede

observarse en las causas citadas por este Ministro en la ponderación de la prueba y en el análisis de las declaraciones indagatorias.

E. ALEVOSÍA

En cuanto a esta circunstancia calificante del delito de homicidio, sobre esta materia el Tribunal ya se ha pronunciado en causas roles: 45.345, caso Juan Tralcal Huenchuman; rol 27.526 caso Juan Segundo Palma Arévalo y Arcenio del Carmen Saravia Fritz; 27.525 caso Segundo Cayul Tranamil; rol 29.877, caso Nicanor Moyano Valdés; rol 45.344, caso Segundo Moreira Bustos y Juana de Dios Rojas Viveros; rol 29.869, caso Guillermo Hernández Elgueta; rol 29.879, caso Domingo Obreque Obreque; rol 45.343, caso Segundo Lepín Antilaf y otros; rol 57.071, caso Jorge Arturo Toy Vergara; rol 10.854-P, caso Dagoberto Cárcamo Navarro y otros; rol 4-2010-V, caso Víctor Carreño Zúñiga; rol 114.042, caso José Alerto Fuentes Fuentes (Hotel Oriente); rol 114.007, caso Exequiel Zigomar Contreras Plotsqui; rol 44.305, caso Abraham Oliva Espinoza y Luis Espinoza Villalobos; rol 1-2013, caso Alberto Colpihueque Navarrete y otros; rol 6.345, caso José Ananías Zapata Carrasco. Fallos que se encuentran ejecutoriados. En efecto, el Tribunal ha reflexionado lo siguiente:

E.1. En relación a la circunstancia 1° del artículo 391 N°1 (alevosía):

En este caso es aplicable esta calificante. Haciendo presente que hay que hacer un distingo en teoría penal, ya que una cosa es lo que son las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal autónomas, las cuales se clasifican en personales, materiales y mixtas que pueden influir en la determinación de la pena y otra cosa muy distinta es cuando la agravante es parte del tipo penal. Haciendo notar, además, que la alevosía corresponde a aquellas circunstancias calificadas como mixtas, en cuanto por un lado participa de lo material, esto es, la ejecución misma del delito o en los medios empleados, pero también contienen una condición de ánimo o bien condiciones o actitudes del sujeto activo.

E.1.a) Dicho lo anterior, en el artículo 64 del Código Penal, a propósito de la comunicabilidad, es necesario reflexionar que cuando la circunstancia agravante es parte del tipo penal – como es el caso en estudio- dichas circunstancias ya no son agravantes, sino como se explicó anteriormente, son parte de la figura penal, siendo el delito único para los diversos partícipes. En consecuencia, la circunstancia debe afectar a todos, distinguiendo la doctrina entre circunstancias y elementos. Al incorporarse las agravantes a la descripción típica, estas se transforman en elementos del delito.

E.1.b) Según el profesor Mario Garrido Montt (Obra El Delito de Homicidio y sus figuras penales, Ediciones Encina limitada, Santiago, 1976, Página 154 y siguientes) es claro que actuar a traición corresponde a la maquinación tendiente a engañar o aparentar ante la víctima una situación diversa a la verdadera, pues la cautela importa reserva, astucia o maña para engañar. Asimismo, importa aprovecharse de la confianza o lealtad que la víctima ha depositado en el victimario. Es decir, corresponde a simulación, doblez. Por otro lado, obrar sobreseguro, que es la figura que concurre en esta causa, significa crear o aprovechar condiciones fácticas que permiten al agente evitar todo riesgo de su persona, como en cuanto a la realización del acto al momento de la comisión del hecho. Ahora bien, es preciso indicar que en el actuar sobreseguro, puede ser que la situación de seguridad sea absolutamente indiferente para el hechor o deberse a mera casualidad, sin que las condiciones en que obre el hechor – haya o no sido provocadas por él – sean determinantes de la perpetración del homicidio, de modo que, si no hubieran concurrido, el autor a su vez se hubiera abstenido de obrar. En este caso, de acuerdo a lo que se ha razonado hasta el momento sino se hubieran dado esas circunstancias, esto es, que los acusados estuvieran en un número mayor que la víctima, no hubieran actuado.

F. CONVENIO DE GINEBRA

Que a mayor abundamiento, además cabe hacer presente que sobre los Convenios de Ginebra la jurisprudencia ha sido uniforme. Así en causa rol 2182-98 del ingreso de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago "**Caso Luis Almonacid Dúmenez**" de 29 de octubre de 2013, en su considerando 18, **párrafo 6**, señala que "**los Convenios de Ginebra**" consagran el deber del Estado de persecución de los crímenes de guerra, sin poder "auto exonerarse" a su respecto. Tales convenios entraron en vigor en nuestro ordenamiento en las fechas en que fueron publicados en el Diario Oficial, esto es, entre los días 17 y 20 de abril de 1951. Los aludidos Convenios rigen también respecto de delitos cometidos en caso de conflictos armados sin carácter internacional, situación que, jurídicamente, existió en Chile a partir del 11 de septiembre 1973, como se ha afirmado por la doctrina; pero que también, aun cuando se estimare que dicha situación es una ficción, los aludidos convenios son aplicables en virtud de lo dispuesto en el artículo 3° común a todos ellos y ya citado, donde se plasma el principio de humanidad, así como por los principios que emanan de los Convenios de Ginebra son vinculantes por ser parte del derecho internacional consuetudinario, que

pertenece a la categoría del *Ius Cogens*. En efecto, el artículo 3°, común a los cuatro Convenios, prescribe: "en caso de conflicto armado sin carácter internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes contratantes, cada una de las Partes contendientes tendrá la obligación de aplicar por lo menos las disposiciones siguientes: 1. Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluso los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, herida, detención o cualquiera otra causa serán en toda circunstancia tratadas con humanidad. Al efecto, están y quedan prohibidas en cualquier tiempo y lugar, respecto de las personas arriba mencionadas: a) los atentados a la vida y a la integridad corporal, especialmente el homicidio en toda sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, las torturas y suplicios". En consecuencia, las normas sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad confirman el principio esencial en cuanto a que la imputabilidad, el juzgamiento y la condena por tales delitos son procedentes, cualquiera que sea la época en que se hubieren cometido. Se corrobora esta aseveración, por otra parte, en la sentencia de la Excma. Corte Suprema (Rol N°2664-04), en cuanto expresa en su considerando décimo séptimo "Que debe tenerse presente también la llamada Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de 1968 que surge en la actualidad con categoría de norma de *Ius Cogens* o Principios Generales de Derecho Internacional".

G. ANÁLISIS DE LA DEFENSA ESPECÍFICA

23°) En cuanto a las defensas de **VÍCTOR HERALDO CUEVAS SEGUEL**.

Que haciéndonos cargos de las defensas de **fs. 2.598 a fs. 2.618 (Tomo VII)**, interpuesta por el abogado Oscar Álvarez Suarez, y de la defensa de **fs. 2.730 a fs. 2.741 (Tomo VIII)** interpuesta por el abogado Rodrigo Cortes Carrasco, ambos en representación de **Víctor Herald Cuevas Seguel**, el Tribunal estará a lo antes razonado, respecto a la ponderación de las declaraciones indagatorias del acusado y todos los fundamentos pertinentes que se han dado respecto a la relación y valoración de la prueba, en especial lo que se detalló y ponderó con precisión en el título de las consideraciones generales para las defensas. En relación a esta defensa se precisa lo siguiente:

A. Excepciones de previo y especial pronunciamiento: la defensa no interpuso excepciones de previo y especial pronunciamiento.

B. Sobre tachas de testigos y objeciones de documentos: la defensa no realizó tachas a testigos en los términos que exige el artículo 492 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, ni tampoco objeto ningún documento en particular.

C. Excepciones de fondo: La defensa del abogado Oscar Álvarez Suarez opone como excepción de fondo, cosa juzgada y la prescripción de la acción penal. **a). Cosa Juzgada.** Sosteniendo principalmente que los hechos que se le acusa a su representado fueron ventilados hace más de veintiséis años en el Juzgado de Letras de Aysén, en causa rol 4.769., y que el auto de procesamiento generado en dicha causa fue revocado por la Corte respectiva. **b). Prescripción de la acción penal.** Proclamando que desde la fecha de los hechos que no son objeto de controversia, desde diciembre de 1985 a octubre de 2022 han transcurrido treinta años y diez meses; y que tal plazo no ha sido objeto de suspensión o interrupción. Además que del conjunto de hechos, dan cuenta de un procedimiento policial típico, que las causas del deceso de Rubén Antimán si bien resultan atribuibles a la acción de terceros, esos no fueron suficientemente identificados por la víctima. De forma que los hechos no permiten en modo alguno sustentar que se está en presencia de un delito de homicidio calificado y de lesa humanidad y al no ser de lesa humanidad, debe considerarse legalmente prescrito.

C.1. En cuanto a la cosa juzgada: Sin perjuicio, del análisis que se ara continuación de esta excepción, cabe hacer presente que la defensa en modo alguno, estudia o desarrolla con precisión la triple identidad de la cosa juzgada, siendo en este sentido precaria y con falta de fundamentos. Ahora bien, en este fallo, es importante aquilatar lo que a continuación se indicará. La Corte Interamericana de derechos Humanos (Corte IDH), ha manifestado en el fallo Almonacid Arellano y otros versus Chile, de 26 de septiembre de 2006, en su párrafo 154, que “en lo que toca al principio ne bis in idem, aun cuando es un derecho humano reconocido en el artículo 8.4 de la Convención Americana, no es un derecho absoluto y, por tanto, no resulta aplicable cuando: i) la actuación del tribunal que conoció el caso y decidió sobreseer o absolver al responsable de una violación a los derechos humanos o al derecho internacional obedeció al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal; ii) el procedimiento no fue instruido independiente o imparcialmente de conformidad con las debidas garantías procesales, o iii) no hubo la intención real de someter al responsable a la acción de la justicia. Una sentencia pronunciada en las circunstancias indicadas

produce una cosa juzgada “aparente” o “fraudulenta”. Por otro lado, esta Corte considera que si aparecen nuevos hechos o pruebas que puedan permitir la determinación de los responsables de violaciones a los derechos humanos, y más aún, de los responsables de crímenes de lesa humanidad, pueden ser reabiertas las investigaciones, incluso si existe una sentencia absolutoria en calidad de cosa juzgada, puesto que las exigencias de la justicia, los derechos de las víctimas y la letra y espíritu de la Convención Americana desplaza la protección del *ne bis in idem*. En el mismo sentido, respecto al *ne bis in idem* la Excm. Corte Suprema se ha pronunciado en rol N° 78951-2016 por el delito de homicidio de Enrique González Cerda, en sus considerandos séptimo a noveno. Esta posición jurídica la mantiene y ha actualizado la Excelentísima Corte Suprema en causa rol N° **22.276-2022** seguida por el delito de homicidio calificado consumado en la persona de Rodrigo Rojas de Negri y de homicidio calificado frustrado en la persona de Carmen Gloria Quintana Aravena, episodio denominado “Caso Quemados”. En consecuencia, a enero de 2024 los Tribunales que investigan y fallan causas sobre justicia transicional (violaciones a los Derechos Humanos) en conformidad con la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte citada es una obligación aplicar los estándares interpretativos y normativos sobre Derechos Humanos que se han expresado. Por lo tanto se **rechaza esta excepción de cosa juzgada** y así se dispone para lo resolutivo del fallo.

C.2. En cuanto a la prescripción de la acción penal: Que del mérito del proceso el delito que se le imputa al acusado Víctor Herald Cuevas Seguel, en calidad de **autor**, atenta contra los Derechos Humanos, entendiéndose por estos, aquellos que son inherentes a la persona humana y son anteriores al Estado. Este Tribunal ha establecido que corresponden a delitos de lesa humanidad y éste Ministro en todos sus fallos tiene como uno de sus fundamentos el fallo de la Corte Interamericana Almonacid Arellano y otros versus Chile, de 26 de septiembre de 2006, que entre sus considerandos sostiene: “la Corte estima que los Estados no pueden sustraerse del deber de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad aplicando leyes de amnistía u otro tipo de normativa interna. Consecuentemente, los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no se puede conceder prescripción de la acción penal. En consecuencia, esta excepción prescripción de la acción penal del **artículo 93 N°6 del Código Penal se rechaza** y así se dirá en lo resolutivo de este fallo.

D. Auto acusatorio: sobre las alegaciones al auto acusatorio el Tribunal ya realizó las reflexiones pertinentes durante la construcción de la sentencia y la ponderación de la prueba legal y en especial en el resumen del auto acusatorio expresado en las consideraciones generales precedentes.

E. Contestación a la acusación.

Que, haciéndonos cargo de las defensas específicas del acusado Víctor Heraldó Cuevas Seguel, como se desprende de las contestaciones de la acusación fiscal y acusación particular, de las defensas realizadas por los abogados Oscar Álvarez Suarez y Rodrigo Cortes Carrasco, el Tribunal señala lo siguiente:

E.1. En cuanto a la no acreditación del delito y la participación criminal atribuida a su defendido, el Tribunal estará a lo aquilatado, integral y latamente con anterioridad, precisando lo siguiente:

E.1.a. Tal como se ha ponderado desde el inicio los hechos denunciados, tuvieron una plausible seriedad. Es decir, no fue un relato ficticio o inventado, ni tampoco se ha desprendido del mérito del proceso, ni esta defensa lo alegado, que existiera alguna rencilla, interés, reivindicación por algún tema de parte de la víctima como de los familiares de la víctima.

E.1.b. Que continuando con lo anterior, la denuncia de los hechos se comunicó en su momento a la Vicaria de la Solidaridad, quien hizo la denuncia ante carabineros de la época, institución que realizó un sumario (de los cuales el Tribunal no pudo disponer) e interrogó a toda la dotación, pero sin llegar a una determinación.

E.1.c. Tal como se dijo en la ponderación de la prueba, desde el inicio de los hechos hasta la muerte de Rubén Antimán Nahuelquín, hay una coincidencia de múltiples y de diferentes factores, hechos y fechas, lo que se mantuvo en el tiempo. Así, a modo de ilustración, si el relato de Rubén Antimán, que fueron los carabineros quienes lo agredieron y en especial los acusados no fuera cierto, ello está ratificado por sus dos hijos, si eso no fuera cierto, esta ratificado por miembros del hospital quienes la primera información que tuvieron es que el paciente fue agredido por carabineros, si eso no fuera cierto, están la hermana y demás parientes de Rubén Antimán que también tuvieron conocimiento que la agresión fue por carabineros. A lo anterior, hay que agregar que nos encontrábamos en una dictadura, en un régimen militar y la persona que hace la denuncia es una familia, que desde el punto de vista del poder no tenía como influir, tanto en lo político, como en lo militar. Entonces cuál es el interés, que se

investiguen los hechos, se determinen los responsables y se apliquen las penas respectivas. En esta materia la defensa en realidad nada desarrolla.

E.1.d. Así mismo, si la defensa hubiere querido derribar el auto acusatorio debido haber hecho un examen exhaustivo y la coherencia de ellas, situación que no realizó. En consecuencia, este Tribunal vuelve afirmar que efectivamente se produjo un delito de homicidio calificado y en el si le cabe participación al acusado Víctor Herald Cuevas Seguel.

E.2. Con respecto a que no constituye un delito de lesa humanidad, el Tribunal cimenta, que a la vez es importante ahondar en el origen y concepto del delito de lesa humanidad y para esto, cabe citar la sentencia Almonacid Arellano y otros versus Chile, de fecha 26 de septiembre de 2006 puntualizando lo siguiente:

Párrafo 94. El desarrollo de la noción de crimen de lesa humanidad se produjo en los inicios del siglo pasado. En el preámbulo del Convenio de la Haya sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre de 1907. Asimismo, el término “crímenes contra la humanidad y la civilización” fue usado por los gobiernos de Francia, Reino Unido y Rusia el 28 de mayo de 1915 para denunciar la masacre de armenios en Turquía.

Párrafo 95. El asesinato como crimen de lesa humanidad fue codificado por primera vez en el artículo 6.c del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg. Poco después, el 20 de diciembre de 1945, la Ley del Consejo de Control No. 10 también consagró al asesinato como un crimen de lesa humanidad en su artículo II.c. De forma similar, el delito de asesinato fue codificado en el artículo 5.c del Estatuto del Tribunal Militar Internacional para el juzgamiento de los principales criminales de guerra del Lejano Oriente (Estatuto de Tokyo), adoptada el 19 de enero de 1946.

Párrafo 96. Estatuto de Nuremberg jugó un papel significativo en el establecimiento de los elementos que caracterizan a un crimen como de lesa humanidad. Así constituyen actos inhumanos, como el asesinato, cometidos en un contexto de ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Basta que un solo acto ilícito como los antes mencionados sea cometido dentro del contexto descrito, para que se produzca un crimen de lesa humanidad. En este sentido se pronunció el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia en el caso Prosecutor v. Dusko Tadic, al considerar que “un solo acto cometido por un perpetrador en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil trae consigo responsabilidad penal individual, y el perpetrador no necesita cometer numerosas ofensas para ser considerado responsable. Todos

estos elementos ya estaban definidos jurídicamente cuando el señor Almonacid Arellano fue ejecutado.

Párrafo 98. La prohibición de crímenes contra la humanidad, incluido el asesinato, fue además corroborada por las Naciones Unidas. El 11 de diciembre de 1946 la Asamblea General confirmó “los principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal de Nuremberg y las sentencias de dicho Tribunal.

E.2.a. A la vez es importante destacar que los crímenes de lesa humanidad están conformados por un elemento de contexto y por actos ilícitos particulares que, al inscribirse en aquel, se tornan crímenes internacionales. Es decir el asesinato es objetivamente un crimen de lesa humanidad en la medida en que ocurra como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, por lo cual para que se configure debe existir un contexto general, acto criminal en particular y la relación de pertenencia de éste con aquel. En este aspecto importan crímenes respaldados por las autoridades estatales, lo cual de no ser así, habría sido menos gravosa para la víctima sino hubiese existido el ataque contra la población civil. En este contexto la acción criminal es más riesgosa produciéndose una mayor afectación de la víctima y el aumento de la capacidad ofensiva del atacante. Por lo cual la víctima se encuentra imposibilitada de acudir eficazmente a las autoridades estatales para hacer cesar el delito u obtener justicia, del mismo modo el atacante vera aumentado su capacidad ofensiva si cuenta con el respaldo, consentimiento o aquiescencia de las autoridades estatales.

E.2.b. Teniendo en consideración lo anterior es necesario tener presente que en el caso de Chile desde año 1973 hasta el 10 de marzo de 1990 existió una dictadura militar lo que pretendía ese régimen, como lo expuso la Corte antes citada, fue realizar una represión tanto contra las personas opositoras al régimen u otras víctimas que por capricho o abuso de poder fueron detenidas, apremiadas, torturadas, desaparecidas y ejecutadas, existiendo desde ese punto de vista y en relación a los requisitos de los actos de la lesa humanidad una sistematicidad. Un punto importante a la realidad chilena es que se aprecian en diversas causas falladas en materias de derechos humanos tanto por este Tribunal como por causas falladas por la Excelentísima Corte Suprema, es la existencia de un poder que abusa de sus facultades y que deriva en la impunidad. En efecto, esto es al excluir y evitar que se investigue y se sancionen a los responsables tal como se pondera en esta sentencia. La Excelentísima Corte

Suprema ha manifestado que los elementos de sistematicidad y generalidad se interconectan en el sentido que, un acto aislado o aleatorio va constituir un crimen de lesa humanidad cuando hay una organización o planificación y lo general tiene un aspecto cuantitativo, cuando se realiza de forma masiva e involucra a un gran número de víctimas. En este caso, durante todo el régimen militar de 1973 hasta el 10 de marzo de 1990 hubo un abuso arbitrario del poder, de deshacerse de personas, que en criterio de las autoridades de la época, no eran un aporte de la sociedad, personas que estaban en un situación precaria o frágil, esta descripción de las víctimas, que fueron objeto de la represión policial aparece descrita en el Informe Rettig. En este caso, la represión hacia la población civil quedaba en la impunidad, tanto es así, que el sumario llevado a cabo por carabineros no se determinó a ningún responsable. En termino muy simple, no han tenido derecho a la tutela judicial efectiva, no han tenido derecho al debido proceso, tanto Rubén Antimán Nahuelquín como sus familiares, su muerte es parte de la organización y generalidad de la represión que ejercía el régimen militar de la época, por ello constituye para el caso de Chile un delito de lesa humanidad.

F. En cuanto a la Ley 20.357: A diferencia de lo que expone la defensa el artículo 44 de esta ley da la solución, toda vez que indica que: “Los hechos de que trata esta ley, cometidos con anterioridad a su promulgación, continuarán rigiéndose por la normativa vigente a ese momento. En consecuencia, las disposiciones de la presente ley sólo serán aplicables a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior a su entrada en vigencia”, normativa, jurisprudencia y doctrina que se ha explicado detalladamente. En consecuencia, como se desprende de este articulado, no resulta aplicable en esta causa.

G. En cuanto a las eximentes y circunstancias modificatorias de responsabilidad penal y beneficios de la ley 18.216. El Tribunal lo razonará en los considerando posteriores.

H. Prueba del plenario: Que analizado el expediente y el término probatorio, la defensa no ofreció ningún medio de prueba para sostener sus argumentos.

I. Calificación final: En cuanto a la recalificación de los hechos de homicidio con riña del artículo 392 del Código Penal. No es posible dar lugar a esta petición y el Tribunal estará a lo razonado precedentemente puntualizando, que la defensa en modo alguno desarrolla este tipo penal, simplemente lo enuncia. No siendo posible, entonces analizar con seriedad su pretensión. Atendido el mérito de los antecedentes y los argumentos de la defensa, el Tribunal mantiene

la calificación que ha dado precedentemente en esta sentencia y además se ha dado en el auto acusatorio, esto es, **autor** del delito de homicidio calificado de Rubén Armando Antimán Nahuelquín, en su carácter de lesa humanidad.

24°) En cuanto a la defensa de **ALBERTO DANIEL VELÁSQUEZ BARRÍA**.

Que haciéndonos cargos de la defensa de **fs. 2.504 a fs. 2.596 (Tomo VII)** interpuesta por el abogado Maximiliano Murath Mansilla, en representación de Alberto Daniel Velásquez Barría, el Tribunal estará a lo antes razonado, respecto a la ponderación de las declaraciones indagatorias del acusado y todos los fundamentos pertinentes que se han dado respecto a la relación y valoración de la prueba, en especial lo que se detalló y ponderó con precisión en el título de las consideraciones generales para las defensas. En relación a esta defensa se precisa lo siguiente:

A. Excepciones de previo y especial pronunciamiento: la defensa interpuso excepciones de previo y especial pronunciamiento de conformidad al artículo 433 N°7 del Código de Procedimiento Penal, la que ya fue analizada y fallada a fs. 2.775 y siguientes (Tomo VII), con fecha 07 de julio de 2023.

B. Sobre tachas de testigos y objeciones de documentos: la defensa no realizó tachas a testigos en los términos que exige el artículo 492 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, ni tampoco objeto ningún documento en particular.

C. Excepciones de fondo:

C.1. En cuanto a la prescripción de la acción penal: El abogado no desarrolla la institución de la prescripción, solo en la petición concreta de la contestación de la acusación invoca la prescripción de la acción penal. El Tribunal reitera sus fundamentos dado, respecto de la otra defensa del acusado Víctor Cuevas Seguel en cuanto a la excepción de la prescripción penal. Es decir, del mismo modo, del mérito del proceso el delito que se le imputa al acusado Alberto Daniel Velásquez Barría, en calidad de **autor**, atenta contra los Derechos Humanos, entendiéndose por estos, aquellos que son inherentes a la persona humana y son anteriores al Estado. Este Tribunal ha establecido que corresponden a delitos de lesa humanidad y éste Ministro en todos sus fallos tiene como uno de sus fundamentos el fallo de la Corte Interamericana Almonacid Arellano y otros versus Chile, de 26 de septiembre de 2006, que entre sus considerandos sostiene: “la Corte estima que los Estados no pueden sustraerse del deber de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los crímenes

de lesa humanidad aplicando leyes de amnistía u otro tipo de normativa interna. Consecuentemente, los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no se puede conceder prescripción de la acción penal. En consecuencia, esta excepción prescripción de la acción penal del artículo 93 N°6 del Código Penal se rechaza y así se dirá en lo resolutive de este fallo.

D. Auto acusatorio: sobre las alegaciones al auto acusatorio, el Tribunal ya realizó las reflexiones pertinentes durante la construcción de la sentencia y la ponderación de la prueba legal y en especial en el resumen del auto acusatorio expresado en las consideraciones generales precedentes.

G. Contestación a la acusación.

Que, haciéndonos cargo de la defensa específica del acusado Alberto Daniel Velásquez Barría, realizada por el abogado Maximiliano Murath Mansilla, el Tribunal señala lo siguiente:

G.1. En cuanto a la no acreditación del delito y la participación criminal atribuida a su defendido, el Tribunal estará a lo aquilatado, integral y latamente con anterioridad, reiterando los fundamentos dados respecto del acusado Víctor Herald Cuevas Seguel, precisando lo siguiente:

G.1.a. Tal como se ha ponderado desde el inicio los hechos denunciados tuvieron una plausible seriedad, es decir, no fue un relato ficticio o inventado, ni tampoco se ha desprendido del mérito del proceso, ni esta defensa lo alegado, que existiera alguna rencilla, interés, reivindicación por algún tema de parte de la víctima como de los familiares de la víctima.

G.1.b. Que continuando con lo anterior, la denuncia de los hechos se comunicó en su momento a la Vicaria de la Solidaridad quien hizo la denuncia ante carabineros de la época. Institución que realizó un sumario (de los cuales el Tribunal no pudo disponer) e interrogó a toda la dotación, pero sin llegar a una determinación de los culpables.

G.1.c. Tal como se dijo en la ponderación de la prueba, desde el inicio de los hechos hasta la muerte de Rubén Antimán Nahuelquín, hay una coherencia de múltiple y diferentes factores, hechos y fechas, lo que se mantuvo en el tiempo. Así a modo de ilustración, si el relato de Rubén Antimán, que fueron los carabineros quienes lo agredieron y en especial los acusados, no fuera cierto, ello está ratificado por sus dos hijos, si eso no fuera cierto, esta ratificado por miembros del hospital quienes la primera información que tuvieron es que el paciente, fue agredido por carabineros, si eso no fuera cierto, están la hermana y demás parientes de Rubén Antimán, que también tuvieron conocimiento que la

agresión fue por carabineros. A lo anterior, hay que agregar que nos encontrábamos en una dictadura, en un régimen militar y la persona que hace la denuncia es una familia, que desde el punto de vista del poder, no tenía como influir tanto en lo político como en lo militar. Entonces cuál es el interés, es que se investiguen los hechos, se determinen los responsables y se apliquen las penas respectivas. En esta materia la defensa en realidad nada desarrolla.

G.1.d. Así mismo, si la defensa hubiere querido derribar el auto acusatorio debido haber hecho un examen exhaustivo y la coherencia de ellas, situación que no realizó. En consecuencia, este Tribunal vuelve afirmar que efectivamente se produjo un delito de homicidio calificado y en el sí le cabe participación al acusado Alberto Velásquez Barría.

G.2. Precisando la participación del acusado Velásquez Barría, se le reitera a la defensa, que desde el momento que encontrándose en las condiciones que estaba Rubén Antimán, quien por sus propios medios, haciendo un gran esfuerzo pudo llegar a la casa de su madre gritando y quejándose de dolor, siempre manifestó que los agresores eran carabineros. No cualquier carabinero, sino que además eran personas conocidas de él, desde la infancia, como lo es los acusados Cuevas y Velásquez, conocimiento de la infancia que reiteran los acusados. Si se analiza como lo ha hecho este tribunal los hechos, los medios de prueba legal rendidos en el proceso, no existe ningún testimonio, documento que mencione que la agresión y posterior muerte de Rubén Antimán se haya producido por otros terceros, ya sea, otras agencias del Estado o particulares. La defensa además, si quiere derribar el auto acusatorio, tiene que hacer un examen pormenorizado de cada prueba, situación que no realiza, solo invoca testimonios generales de otras personas.

G.2.a. Del mismo modo, se le recuerda a la defensa las normas del Código de Procedimiento Penal, en especial la ponderación de los testigos, en que el art. 464 dispone: “Los jueces apreciarán la fuerza probatoria de las declaraciones de testigos que no reúnan los requisitos exigidos por el artículo 459. Tales declaraciones pueden constituir presunciones judiciales. Igualmente las de testigos de oídas, sea que declaren haber oído al procesado, o a otra persona”. Le permite al Tribunal apreciar la fuerza probatoria de los testigos, tanto inhábiles y los de oídas. En consecuencia, el Tribunal se ha ceñido estrictamente a la Constitución y la Ley.

G.3. Con respecto a que no constituye un delito de lesa humanidad, se reitera lo que se dijo respecto al acusado Víctor Cuevas Seguel, en el sentido

que, a la vez es importante ahondar en el origen y concepto del delito de lesa humanidad y para esto, cabe citar la sentencia Almonacid Arellano y otros versus Chile, de fecha 26 de septiembre de 2006 puntualizando lo siguiente:

Párrafo 94. El desarrollo de la noción de crimen de lesa humanidad se produjo en los inicios del siglo pasado. En el preámbulo del Convenio de la Haya sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre de 1907. Asimismo, el término “crímenes contra la humanidad y la civilización” fue usado por los gobiernos de Francia, Reino Unido y Rusia el 28 de mayo de 1915 para denunciar la masacre de armenios en Turquía.

Párrafo 95. El asesinato como crimen de lesa humanidad fue codificado por primera vez en el artículo 6.c del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg. Poco después, el 20 de diciembre de 1945, la Ley del Consejo de Control No. 10 también consagró al asesinato como un crimen de lesa humanidad en su artículo II.c. De forma similar, el delito de asesinato fue codificado en el artículo 5.c del Estatuto del Tribunal Militar Internacional para el juzgamiento de los principales criminales de guerra del Lejano Oriente (Estatuto de Tokyo), adoptada el 19 de enero de 1946.

Párrafo 96. Estatuto de Nuremberg jugó un papel significativo en el establecimiento de los elementos que caracterizan a un crimen como de lesa humanidad. Así constituyen actos inhumanos, como el asesinato, cometidos en un contexto de ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Basta que un solo acto ilícito como los antes mencionados sea cometido dentro del contexto descrito, para que se produzca un crimen de lesa humanidad. En este sentido se pronunció el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia en el caso Prosecutor v. Dusko Tadic, al considerar que “un solo acto cometido por un perpetrador en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil trae consigo responsabilidad penal individual, y el perpetrador no necesita cometer numerosas ofensas para ser considerado responsable. Todos estos elementos ya estaban definidos jurídicamente cuando el señor Almonacid Arellano fue ejecutado.

Párrafo 98. La prohibición de crímenes contra la humanidad, incluido el asesinato, fue además corroborada por las Naciones Unidas. El 11 de diciembre de 1946 la Asamblea General confirmó “los principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal de Nuremberg y las sentencias de dicho Tribunal.

G.3.a. A la vez es importante destacar que los crímenes de lesa humanidad están conformados por un elemento de contexto y por actos ilícitos particulares que, al inscribirse en aquel, se tornan crímenes internacionales. Es decir el asesinato es objetivamente un crimen de lesa humanidad en la medida en que ocurra como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, por lo cual para que se configure debe existir un contexto general, acto criminal en particular y la relación de pertenencia de éste con aquel. En este aspecto importan crímenes respaldados por las autoridades estatales, lo cual de no ser así, habría sido menos gravosa para la víctima sino hubiese existido el ataque contra la población civil. En este contexto la acción criminal es más riesgosa produciéndose una mayor afectación de la víctima y el aumento de la capacidad ofensiva del atacante. Por lo cual la víctima se encuentra imposibilitada de acudir eficazmente a las autoridades estatales para hacer cesar el delito u obtener justicia, del mismo modo el atacante vera aumentado su capacidad ofensiva si cuenta con el respaldo, consentimiento o aquiescencia de las autoridades estatales.

G.3.b. Teniendo en consideración lo anterior es necesario tener presente que en el caso de Chile desde año 1973 hasta el 10 de marzo de 1990 existió una dictadura militar lo que pretendía ese régimen, como lo expuso la Corte antes citada, fue realizar una represión tanto contra las personas opositoras al régimen u otras víctimas que por capricho o abuso de poder fueron detenidas, apremiadas, torturadas, desaparecidas y ejecutadas, existiendo desde ese punto de vista y en relación a los requisitos de los actos de la lesa humanidad una sistematicidad. Un punto importante a la realidad chilena es que se aprecian en diversas causas falladas en materias de derechos humanos tanto por este Tribunal como por causas falladas por la Excelentísima Corte Suprema, es la existencia de un poder que abusa de sus facultades y que deriva en la impunidad. En efecto, esto es al excluir y evitar que se investigue y se sancionen a los responsables tal como se pondera en esta sentencia. La Excelentísima Corte Suprema ha manifestado que los elementos de sistematicidad y generalidad se interconectan en el sentido que, un acto aislado o aleatorio va constituir un crimen de lesa humanidad cuando hay una organización o planificación y lo general tiene un aspecto cuantitativo, cuando se realiza de forma masiva e involucra a un gran número de víctimas. En este caso, durante todo el régimen militar de 1973 hasta el 10 de marzo de 1990 hubo un abuso arbitrario del poder, de deshacerse de personas, que en criterio de las autoridades de la época, no eran un aporte de la

sociedad, personas que estaban en un situación precaria o frágil, esta descripción de las víctimas, que fueron objeto de la represión policial aparece descrita en el Informe Rettig. En este caso, la represión hacia la población civil quedaba en la impunidad, tanto es así, que el sumario llevado a cabo por carabineros no se determinó a ningún responsable. En termino muy simple, no han tenido derecho a la tutela judicial efectiva, no han tenido derecho al debido proceso, tanto Rubén Antimán Nahuelquín como sus familiares, su muerte es parte de la organización y generalidad de la represión que ejercía el régimen militar de la época, por ello constituye para el caso de Chile un delito de lesa humanidad. Lo que es ratificado y confirmado por la Excelentísima Corte Suprema en causa rol N° 22.276-2022 seguida por el delito de homicidio calificado consumado en la persona de Rodrigo Rojas de Negri y de homicidio calificado frustrado en la persona de Carmen Gloria Quintana Aravena, denominado “Caso quemados”.

G.4. En cuanto a una inexigibilidad de una responsabilidad objetiva en materia penal: A diferencia de lo que expone la defensa, ello no es efectivo, para lo anterior el Tribunal se remite a lo antes razonado. Como se desprende de los medios de prueba legal y el establecimiento de los hechos, existe un relato coherente desde el inicio hasta el final, relato que es confirmado en el tiempo, tal como se razonó anteriormente y que permiten al Tribunal a través de múltiples medios de prueba legal, llegar a la convicción que existió el delito, y que en el le ha cabido participación al acusado Alberto Velásquez Barría.

G.5. En cuanto a la ponderación de la prueba y estándar de convicción: A diferencia de lo que plantea la defensa, el Tribunal se remite a la relación y ponderación integral de la prueba. Esa ponderación integral de la prueba ha permitido construir presunciones judiciales, en virtud del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal. Cosa diferente, es que la defensa no comparta la ponderación, la construcción, pero algo muy distinto es expresar que no hay prueba, que no se pueden construir presunciones judiciales. Un punto importante, es la cita reiterada que hace la defensa a los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre esta materia el Tribunal, una vez más le reitera que, dicha corte internacional ha tenido la oportunidad varias veces no una, de revisar el Código de Procedimiento Penal chileno, a modo de ilustración causa Caso Norín Catrimán y otros v/s Chile sentencia de fecha 29 de mayo de 2014 y para mayor ilustración en la causa Almonacid Arellano y otros versus Chile de fecha 26 de septiembre de 2006, en su párrafo 124 señaló: “La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están

obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que los obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efecto jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de control, de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, interprete última de la Convención Americana”. Lo valioso que se debe destacar es que esta institución denominada control de convencionalidad puede ser definida, en términos simples, como el mecanismo que utiliza la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tanto en sede contenciosa como consultiva para determinar la compatibilidad o no del derecho interno o los actos de los agentes de un Estado, con las disposiciones de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Asimismo, como el ejercicio que realizan los jueces domésticos para realizar el mismo cotejo entre las normas internas, las que dispone la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana (García, Gonzalo (2014): “Preguntas esenciales sobre el control de convencionalidad difuso aplicables a Chile”, en: Nogueira, Humberto (coord.) La protección de los Derechos Humanos y fundamentales de acuerdo a la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Santiago de Chile, Librotecnia. pp. 356-357). Que para aplicar entonces el control de convencionalidad hay que observar por supuesto la Convención Americana- ya citada- en especial los artículos 1.1 y 2. Ello por cuanto los Estados tienen la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna (1.1). Por su lado, su artículo 2 nos expresa, que si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Para mayor ilustración sobre esta materia pasamos a resumir lo que sucedió con posterioridad al fallo de la Corte Interamericana respecto del caso

Almonacid Arellano y otros versus Chile citado. La Excma. Corte Suprema con el objeto de dar aplicación a lo preceptuado en el artículo 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en definitiva, proseguir con la investigación del sumario criminal seguido en el Primer Juzgado del Crimen de Rancagua, relativo al homicidio de Luis Almonacid Arellano, ordena el desarchivo de la causa para continuar con su tramitación, dejando sin efecto la resolución que sobreseyó total y definitivamente a los ex funcionarios de Carabineros involucrados, se reabre el sumario, culminando esta etapa procesal el día 18 de agosto de 2011, con la dictación de la sentencia definitiva de primera instancia dictada por el Ministro en Visita Extraordinaria señor Carlos Manuel Moreno Vega por el delito de homicidio en la persona de Luis Almonacid Arellano. Luego la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua con fecha 14 de enero de 2013, confirma la sentencia de Primera instancia, razonando que tal como lo dispuso la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, citada, el Decreto Ley sobre amnistía que se aplicó en un primer momento en la investigación por el homicidio del señor Almonacid ha violado las disposiciones de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, delito que es además de lesa humanidad e impide aplicar en su favor las disposiciones de derecho interno relativas a la prescripción. Finalmente en el fallo de fecha 29 de julio de 2013 la Excelentísima Corte Suprema rechaza los recursos de casación en el fondo presentados, declarando que la sentencia no es nula. Como puede advertirse el Estado de Chile a través del Poder Judicial cumplió lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dejando sin efecto los sobreseimientos dictados por la justicia militar, y dictando una nueva sentencia, aplicando las normas del Código de Procedimiento Penal. En consecuencia no es efectivo lo señalado por el incidentista en cuanto a la objeción a las diferentes normas del Código de Procedimiento Penal. Lo que realmente de fondo rechaza la Corte Interamericana es que los actos como los del señor Almonacid homicidio queden en la impunidad y no se haga investigación alguna en los términos que exigen los estándares internacionales de derechos humanos.

G.6. Sobre la inconstitucionalidad de las presunciones judiciales: En esta materia, una vez más se le indica a la defensa, que ha equivocado la sede para alegar la inconstitucionalidad de las presunciones judiciales. Si la defensa lo estima pertinente, debe recurrir al órganos especializado que es el Tribunal Constitucional. Ahora bien, para mayor ilustración, el Tribunal Constitucional a rechazado múltiples requerimientos de las defensas en estas causas como

constan en los roles Rol 27.530-A Juzgado de Letras de Carahue requerimiento 5192-18- INA y 5438-18-INA; rol 63.534 Juzgado de Letras de Angol requerimientos 4807-18- INA, 5193-18-INA, 5439-18-INA; rol 57.067 Juzgado de Letras de Victoria requerimientos 5.195-18-INA y 5.440-18-INA; rol 53.680 ingreso del Tercer Juzgado del Crimen de Temuco requerimiento 8558-20-INA; rol 63.556 del Juzgado de Letras de Angol requerimiento 5952-2018-INA. En consecuencia esta materia ha sido larga y ampliamente debatida en el Tribunal Constitucional rechazándose todos los reclamos respecto a las normas del Código de Procedimiento Penal.

H. En cuanto a las eximentes y circunstancias modificatorias de responsabilidad penal y beneficios de la ley 18.216. El Tribunal lo razonará en los considerando posteriores.

I. Prueba del plenario: Que analizado el expediente y el término probatorio, la defensa ofreció prueba testimonial de Aliro Alfonso Segundo Quinan Tecan, quien a fs. 2.834 (Tomo VIII), ratifica declaración jurada y en cuanto al testigo Juan David Villegas Barrientos, a fs. 2.835 a fs. 2.835 vuelta (Tomo VIII), en los mismos termino solo ratifica declaración jurada. Que revisado el expediente el abogado Maximiliano Murath Mansilla acompañó documentos en la presentación de fs. 2.504 a fs. 2.596 (Tomo VII). Cuyos antecedentes según el mérito del proceso a fs. 2.779 (Tomo VIII) con fecha 07 de julio de 2023 se resolvió que se reiterara en la etapa procesal correspondiente. Que respecto a las declaraciones juradas de Aliro Alfonso Quinan y Juan David Villegas, este Tribunal en retirados fallos ha manifestado que este tipo de declaraciones constituyen propias pruebas. Las partes en un debido proceso, no pueden construir propia prueba, toda vez, que aquello lleva al abuso. No pueden ser objeto de la crítica adversarial, siendo el relato desde el inicio contaminado. Lo anterior también, no se limpia porque los testigos hayan ratificado sus declaraciones en juicio, toda vez, que ya fueron construidas por la propia defensa. En todo caso, ampliando la ponderación, a parte de sus origen espurio no permiten derribar el auto acusatorio y menos los razonamiento que se han hecho en este fallo. Del mismo modo, la propia defensa a su acusado lo ubica, no en la comisaría como punto fijo, sino que en labores de población y calle.

J. Sobreseimiento: Advirtiéndole al Tribunal que la defensa sobre esta materia solo enuncia el sobreseimiento en el cuerpo de su escrito, y no desarrolla ningún fundamento plausible para su petición, el Tribunal igualmente razona que respecto a ello y atendido el mérito del proceso, la relación y ponderación integral

de los medios de prueba y por un asunto de racionalidad probatoria, no resulta posible dar lugar a la petición de sobreseimiento y así se dispone para lo resolutivo.

K. Calificación final: No es posible recalificar el delito a cuasidelito de homicidio pedido por la defensa, y el Tribunal estará a lo antes razonado. Lo anterior, por varias razones, de la relación y ponderación de los medios probatorios, no resulta ni material, ni físicamente posible llegar a la conclusión de que se hubiera cometido un cuasidelito de homicidio. Las pruebas ponderadas en especial los informes médicos de la víctima, indican que la actuación corresponde a un homicidio calificado, como se aquilatado. En consecuencia se mantiene la calificación que ha dado precedentemente en esta sentencia y además se ha dado en el auto acusatorio, esto es, **autor** del delito de homicidio calificado de Rubén Armando Antimán Nahuelquín, en su carácter de lesa humanidad.

H. ACUSACIÓN PARTICULAR

25°) A fs. 2.251 a fs. 2.259 (Tomo VI), el abogado David Osorio Barrios en representación de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos formula acusación particular. Comienza reproduciendo el auto acusatorio e indica que los hechos descritos son constitutivos del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en el artículo 391 N°, circunstancia primera del Código Penal, en su carácter de lesa humanidad en la persona de Rubén Armando Antimán Nahuelquín, concordando con la calificación jurídica y participación criminal. En cuanto a la concurrencias de agravantes hace presente que en conformidad al artículo 427 del Código de Procedimiento Penal, al momento de analizar la concurrencia de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, solicita se considere aquellas circunstancias agravantes establecidas en el artículo **12 N° 8, N°10 y N°11** de nuestro Código Penal, dando razones normativa y dogmáticas respecto de cada una de ellas. En lo referente a la determinación de la pena, considera se debe relacionar lo anterior con lo dispuesto en el artículo 69 del Código Penal, dado que estamos frente a delitos de lesa humanidad, citando la Convención Americana de Derechos Humanos y jurisprudencia al respecto. Solicitando se le imponga a cada uno de los acusados la pena de presidio perpetuo simple, más las accesorias legales y costas de la causa.

26°) A fs. 2.411 a fs. 2.415 (Tomo VI) el abogado Ricardo Lavín Salazar en representación por la Unidad del Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio del ramo, formula acusación particular dando por reproducidos los hechos señalados en la letra A) a la E) de la

acusación fiscal, compartiendo la calificación jurídica de los delitos cometidos por los acusados esto es homicidio calificado y su participación. Estima pertinente el querellante evaluar la concurrencia de circunstancias agravantes relacionadas con los hechos investigados en autos, a saber las circunstancias del artículo **12 N°8 y N°12** del Código Penal, respecto de la responsabilidad que les cabe en la comisión del ilícito a los acusados por el Tribunal, toda vez, que se desprende de lo obrado que quienes llevaron a efecto la comisión de estos hechos ostentaban la calidad de funcionarios públicos, buscando la impunidad de sus actos. Esbozando doctrina y jurisprudencia en relación a las circunstancias agravantes. Proclama que a objeto de determinar el quantum de la pena privativa de libertad a imponer a los acusados, requiere se le aplique la pena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo, más las accesorias legales considerando el tipo penal de homicidio calificado, el delito por cuanto se encuentra consumado, su intervención como autores, las circunstancias agravantes y lo dispuesto en el artículo 69 del Código Penal y en atención a la naturaleza del delito de lesa humanidad así como la extensión del mal causado a la víctimas y familiares.

27°) Que del análisis de las acusaciones particulares se observa que todas coinciden en los hechos y la calificación jurídica que ha hecho el Tribunal. La diferencia estriba en la petición de agravantes para los acusados, las que serán analizadas con posterioridad.

I. ADHESIÓN A LA ACUSACIÓN

28°) Que no habiendo adhesiones a la acusación fiscal, sobre esta materia el Tribunal nada tiene que reflexionar.

J. REFLEXIONES SOBRE LESA HUMANIDAD

29°) Para mayor ilustración y atendido además que se ha alegado la prescripción gradual del artículo 103 del Código Penal, que se analizará más adelante, es necesario reflexionar sobre el delito de lesa humanidad.

Que profundizando el origen y concepto del delito de lesa humanidad para un adecuado análisis de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal y determinación de la pena, cabe citar la sentencia Almonacid Arellano y otros versus Chile, de fecha 26 de septiembre de 2006 puntualizando lo siguiente:

Párrafo 94. El desarrollo de la noción de crimen de lesa humanidad se produjo en los inicios del siglo pasado. En el preámbulo del Convenio de la Haya sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre de 1907. Asimismo, el término

“crímenes contra la humanidad y la civilización” fue usado por los gobiernos de Francia, Reino Unido y Rusia el 28 de mayo de 1915 para denunciar la masacre de armenios en Turquía.

Párrafo 95. El asesinato como crimen de lesa humanidad fue codificado por primera vez en el artículo 6.c del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg. Poco después, el 20 de diciembre de 1945, la Ley del Consejo de Control No. 10 también consagró al asesinato como un crimen de lesa humanidad en su artículo II.c. De forma similar, el delito de asesinato fue codificado en el artículo 5.c del Estatuto del Tribunal Militar Internacional para el juzgamiento de los principales criminales de guerra del Lejano Oriente (Estatuto de Tokyo), adoptada el 19 de enero de 1946.

Párrafo 96. Estatuto de Nuremberg jugó un papel significativo en el establecimiento de los elementos que caracterizan a un crimen como de lesa humanidad. Así constituyen actos inhumanos, como el asesinato, cometidos en un contexto de ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Basta que un solo acto ilícito como los antes mencionados sea cometido dentro del contexto descrito, para que se produzca un crimen de lesa humanidad. En este sentido se pronunció el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia en el caso *Prosecutor v. Dusko Tadic*, al considerar que “un solo acto cometido por un perpetrador en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil trae consigo responsabilidad penal individual, y el perpetrador no necesita cometer numerosas ofensas para ser considerado responsable. **Todos estos elementos ya estaban definidos jurídicamente cuando el señor Almonacid Arellano fue ejecutado.**

Párrafo 98. La prohibición de crímenes contra la humanidad, incluido el asesinato, fue además corroborada por las Naciones Unidas. El 11 de diciembre de 1946 la Asamblea General confirmó “los principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal de Nuremberg y las sentencias de dicho Tribunal.

A. Que como ya se ha dicho, por tratarse de un delito de lesa humanidad y no común, sobre esta materia el Tribunal tiene presente lo que en forma reiterada la Excm. Corte Suprema ha manifestado que hechos, como los investigados en esta causa y por los cuales se ha dictado acusación, que corresponden a **homicidio calificado**, es un delito de tal magnitud que deben ser **imprescriptibles**. Asimismo, dicho ilícito es de aquellos que la doctrina reconoce como de **lesa humanidad** y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 14 N°1 y 15 N°2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 1, 2, 8 y 25 de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos, ambos ratificados por Chile, tienen plena vigencia en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que son imprescriptibles e inamnistiables.

B. Que a modo de ilustración, el máximo Tribunal así se ha pronunciado en las causas roles 31.030 – 1994; 469 – 1998; 517 – 2004; 288 – 2012 y 1.260 – 2013, 40.168-2017, 4.080-2018, entre muchas otras. Y de la misma forma, como se ha fallado reiteradamente por este Tribunal en las causas roles: 27.525; 27.526; 45.345; 113.990; 113.989; 18.780; 29.877; 45.344; 45.371; 45.342; 29.869; 27.527; 114.001; 113.986; 63.541; 45.363; 114.048; 10.868-P; 114.003; 10.851; 10.854; 45.359; 54.035; 63.535; 45.343; 57.071; 113.997; 45.354; 45.361; 114.000; 4-2010; 45.362; 114.007; 114.042; 113.996; 29.879; 45.365; 45.367; 44.305.

C. Cabe también hacer presente, que el mismo fallo Almonacid Arellano y otros vs Chile dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 26 de septiembre de 2006, en su párrafo 119, al analizar el Decreto Ley de Amnistía 2.191 y en lo pertinente manifiesta que “las leyes de amnistía con las características descritas (es decir, como la chilena) conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad de los crimines de lesa humanidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana e indudablemente afectan derechos consagrados en ella. Ello constituye per se una violación de la Convención y genera responsabilidad internacional del Estado. En consecuencia, dada su naturaleza, el Decreto Ley N°2.191 carece de efectos jurídicos y no puede seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos, que constituyen este caso, ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni puede tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en Chile”.

D. Sobre la misma materia del delito de lesa humanidad, cabe recordar lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso ya señalado, “**Almonacid Arellano y otros versus Chile**”, en que reitera, a propósito de las leyes de amnistía, entre otros aspectos la doctrina centrada en la sentencia caso “**Barrios Altos versus Perú**” de 14 de marzo de 2001, en cuanto la incompatibilidad de las leyes de amnistía con la Convención Americana de Derechos Humanos. En lo pertinente, el fallo “Almonacid Arellano y otros versus Chile” afirma lo anterior en los siguientes párrafos: 82.5, 82.6, 82.7, 111 y en especial en el párrafo 119 donde la Corte expresa que las leyes de amnistía, como

la chilena, conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana y afectan los derechos consagrados en ella. Ello constituye per se una violación de la convención y genera responsabilidad general del Estado, agregando que el Decreto Ley 2.191, carece de efectos jurídicos y no puede seguir representando un obstáculo para las investigaciones de los hechos, ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni puede tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en Chile. En la misma línea, para sostener como lo ha hecho la Excm. Corte Suprema y este Tribunal, la Corte Interamericana en el fallo aludido manifestó lo siguiente:

82.5. La época más violenta de todo el período represivo corresponde a los primeros meses del gobierno de facto. De las 3.197 víctimas identificadas de ejecuciones y desapariciones forzadas que ocurrieron en todo el gobierno militar, 1.823 se produjeron en el año 1973. Por su parte, “el 61% de las 33.221 detenciones que fueron calificadas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, corresponde a detenciones efectuadas en 1973”. Esta misma Comisión señaló que “más del 94% de las personas que sufrieron prisión política” dijeron haber sido torturadas por agentes estatales.

82.6. Las víctimas de todas estas violaciones fueron funcionarios destacados del régimen depuesto y connotadas figuras de izquierda, así como sus militantes comunes y corrientes; jefes y dirigentes políticos, sindicales, vecinales, estudiantiles (de enseñanza superior y media) e indígenas; representantes de organizaciones de base con participación en movimientos de reivindicaciones sociales. “Muchas veces [las] relaciones políticas se deducían de la conducta „conflictiva” de la víctima en huelgas, paros, tomas de terrenos o de predios, manifestaciones callejeras, etc.” Las ejecuciones de estas personas “se insertan dentro del clima reinante [...] de hacer una “limpieza” de elementos juzgados perniciosos por sus doctrinas y actuaciones, y de atemorizar a sus compañeros que podían constituir una eventual “amenaza”. No obstante, en la época inicial de la represión existió un amplio margen de arbitrariedad a la hora de seleccionar a las víctimas.

82.7. En lo que se refiere a las ejecuciones extrajudiciales –crimen cometido en el presente caso, por lo general, las muertes fueron de personas detenidas y se practicaban en lugares apartados y de noche. Algunos de los fusilamientos al

margen de todo proceso fueron, sin embargo, fulminantes y se efectuaron al momento de la detención. [...] En las regiones del sur [del país] la persona, sometida ya al control de sus captores, [era] ejecutada en presencia de su familia”.

E. En el mismo sentido cabe también hacer presente, que el **fallo pronunciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con fecha 15 de noviembre de 2021, en caso Maidanik y Otros Vs. Uruguay**, mediante la cual declaró la responsabilidad internacional de la República Oriental del Uruguay (en adelante “el Estado” o “Uruguay”) por las violaciones a distintos derechos humanos, en perjuicio de Luis Eduardo González González y Óscar Tassino Asteazu, víctimas de desapariciones forzadas que principiaron durante la dictadura que sufrió Uruguay entre 1973 y 1985, así como de sus familiares, desatándose los siguientes párrafos:

Párrafo 206: ...“en relación tanto con actos de desaparición forzada como respecto a otras graves violaciones a derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, en la misma oportunidad este Tribunal señaló que “es incompatible con las obligaciones internacionales de un Estado Parte en la Convención que éste deje de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos que por su naturaleza sean **imprescriptibles**, en perjuicio del derecho de las víctimas de acceso a la justicia, amparándose en una situación de impunidad que sus propios poderes y órganos hayan propiciado”...

Párrafo 211: “El Estado debe asegurar que las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondientes ex officio, contando, para ese cometido, con las facultades y recursos necesarios²³⁹, inclusive logísticos y científicos, para recabar y procesar las pruebas, así como para acceder plenamente a la documentación e información pertinente y para llevar a cabo las actuaciones y averiguaciones esenciales para esclarecer lo sucedido a las personas desaparecidas y a las víctimas de ejecución extrajudicial”.

Párrafo 246: “La **Corte** recuerda que, al decidir sobre el caso Gelman Vs. Uruguay determinó que “la Ley de Caducidad carece de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos”. Por ello, dispuso que “el Estado deberá asegurar que [dicha ley] no vuelva a representar un obstáculo [...] para la identificación y, si procede,

sanción de los responsables de [...] graves violaciones de derechos humanos [...] acontecidas en Uruguay”.

Párrafo 251: “Considerando lo anterior, la Corte entiende necesario recordar al Estado que: cuando un Estado es Parte en un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, también están sometidos al tratado, lo cual les obliga a velar para que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, de modo que decisiones judiciales o administrativas no hagan ilusorio el cumplimiento total o parcial de las obligaciones internacionales. Es decir, todas las autoridades estatales, están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. [...]. Por el solo hecho de ser Parte en la Convención Americana, todas sus autoridades públicas y todos sus órganos, incluidas las instancias democráticas, jueces y demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, están obligados por el tratado, por lo cual deben ejercer, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, un control de convencionalidad tanto en la emisión y aplicación de normas, en cuanto a su validez y compatibilidad con la Convención, como en la determinación, juzgamiento y resolución de situaciones particulares y casos concretos, teniendo en cuenta el propio tratado y, según corresponda, los precedentes o lineamientos jurisprudenciales de la Corte Interamericana”.

F. En consecuencia, cabe reflexionar lo siguiente:

F.1. La lesa humanidad nos remite a lo más profundo de la mujer y del hombre, puesto que sostiene todos nuestros valores. Además es una verdadera exigencia social y civilizadora.

F.2. La lesa humanidad modela nuestro habitar. Sensibiliza nuestro marco de acción.

F.3. La lesa humanidad insufla, canaliza, transforma y dinamiza nuestro Derecho. Dotándolo de nuevas herramientas y concepciones. Le fija los límites infranqueables ante los cuales mujeres y hombres deben actuar y detenerse.

F.4. La lesa humanidad como un muro invencible, rechaza con toda fuerza la irracionalidad y arbitrariedad.

F.5. La lesa humanidad vence, derrota a la prescripción (en el más amplio sentido), a las simples legalidades del Derecho penal liberal (prescripción, tipos, participación, penas), puesto que, no tienen la capacidad de resolver esos dilemas jurídicos y sociales.

F.6. La Lesa humanidad es la conciencia robusta de la humanidad. Nos muestra el ideal de mujer y hombre, de humanidad.

F.7. La lesa humanidad, con una resonancia infinita, atraviesa todo el universo jurídico y nos sitúa en lugar correcto y verdadero. Esto es, como honestamente debe funcionar nuestra convivencia en la sociedad.

G. Que también es relevante para esta causa, lo que señala dicha Corte Interamericana en relación a la jurisdicción militar, **párrafo 131**, donde la Corte indica que “El Tribunal ha establecido que en un Estado democrático de derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas Militares. Por ello, sólo se debe juzgar a Militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar. Al respecto, la Corte ha dicho que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso”, el cual, a su vez, se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia”. Se hace presente que en ese proceso no consta además, que la Justicia Militar hubiere siquiera iniciado alguna investigación sobre estos hechos, lo que revela la actitud del Estado de mantener la impunidad sobre el delito investigado en esta causa.

H. Cabe puntualizar que en el caso de “**Hilario Barrios Varas**” (**causa rol 25.657-14 de la Excma. Corte Suprema**), en los considerandos cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno se dan todos los elementos que ha descrito la Excma. Corte Suprema, esto es, en síntesis, una represión generalizada del régimen de la época, una hiperseguridad al margen de toda condición de la persona humana, una conformidad con la impunidad de los actos cometidos por los agentes estatales, además, con el amedrentamiento a la población civil. Lo cierto es que los hechos calzan con lo que la Corte interamericana de Derechos Humanos, en el caso citado, lo que ha fallado en forma robusta la Excma. Corte

Suprema y éste Ministro Visitador corresponde sin duda a un delito de lesa humanidad. **Delitos que son imprescriptibles.**

J. CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE RESPONSABILIDAD PENAL

30°) ATENUANTES DE RESPONSABILIDAD PENAL:

A. Que a **fs. 2.598 y siguientes (Tomo VII)** el abogado Oscar Álvarez Suarez, en representación de **Víctor Herald Cuebas Seguel**, alega como atenuantes de responsabilidad penal el artículo 11 N°6 y N°9 del Código Penal.

B. Que a **fs. 2.504 y siguientes (Tomo VII)** el abogado Maximiliano Murath Mansilla, en representación de **Alberto Daniel Velásquez Barría**, alega como atenuantes de responsabilidad penal el artículo 11 N°6; 11 N°9 y artículo 103 del Código Penal. Además de los artículos 211 y 214 de Código de Justicia Militar.

31°) ANÁLISIS DE TRIBUNAL:

A. En relación a la atenuante del **artículo 11 N°6** del texto antes citado: Examinada la circunstancia atenuante del artículo 11 N°6 del Código Penal, solicitadas por las defensas de Víctor Herald Cuebas Seguel y Alberto Daniel Velásquez Barría, se reflexiona lo siguiente: **Se da lugar a esta minorante, en calidad de simple, por no existir mérito para otra calificación**, ya que a los acusados les favorece esta minorante, toda vez que de sus extractos de filiación y antecedentes citados al inicio de este fallo, se puede observar que no tenían antecedentes penales pretéritos, todos a la época de los hechos, esto es, diciembre de 1985. Se califica de simple porque razonar de otra manera en relación a cualquier persona que reside en Chile, se incurriría en una discriminación arbitraria, puesto que solo los que pueden acceder a educación, formación y perfeccionamiento se les califica; pero los que no puede hacer eso (que hay muchas personas en Chile) no se les podría calificar, lo que sin duda constituye una discriminación sobre la materia. Ahora bien, la única defensa que pidió que se calificara, fue de Alberto Velásquez Barría, pero solo es una pretensión general, sin que además haya aportado ningún antecedente que permita al Tribunal calificarla. En todo caso, pertenecer a una institución armada o ser profesional o practicar un oficio, no es un asunto que permita automáticamente calificar una conducta. Deben reunirse circunstancias extraordinarias suficientes, que eventualmente pudiera permitirle la calificación. Cosa que no sucede en este caso, ni menos por ser una atenuante para su calificación discriminatoria.

B. En relación a la atenuante del **artículo 11 N° 9** del Código Punitivo: Analizada esta minorante solicita por la defensa de los acusados Víctor Herald

Cuevas Seguel y Alberto Velásquez Barría, el Tribunal razona lo siguiente: Que no se dará lugar a la atenuante solicitada por las defensas, toda vez que como se ha razonado precedentemente en la ponderación y relación integral de toda la prueba del proceso, no es posible sostener que dichos acusados hayan colaborado sustancialmente a los esclarecimientos de los hechos, en realidad ha sido todo lo contrario, han pasado más de 39 años y con otros elementos probatorios, no con los dichos de estos procesados se ha logrado determinar los hechos y la participación de los responsables. En consecuencia **no se hace lugar** a la atenuante solicitada por los acusados antes mencionados.

C. En relación al artículo 211 del Código de Justicia Militar: Que respecto de esta minorante solicitada por la defensa del acusado **Alberto Daniel Velásquez Barría**, el Tribunal reflexiona lo siguiente: Esta alegación no puede ser acogida. En efecto, no se trata de la ejecución de la orden del servicio sino que se trata de la comisión de un delito de lesa humanidad, en este caso, homicidio calificado. Sobre la aplicación de esta atenuante en los delitos de lesa humanidad, podemos mencionar, entre otras, la **causa rol N° 95096-16**, dictada por la Excmá. Corte Suprema, quien en su considerando 5° expresa “Que en subsidio solicitó se considerara que en el caso de autos concurren las circunstancias eximentes de los artículos 211, 214, 334 y 335 del Código de Justicia Militar, denominadas “obediencia debida” y “cumplimiento de órdenes recibidas por un superior jerárquico”, las que no pueden ser acogidas, pues respecto de los mandatos del superior jerárquico dentro de una institución militar -de Ejército de Chile en este caso-, aparece de los hechos del proceso que la conducta de los acusados obedece a la materialización de sus propios designios, sin perjuicio de la situación de impunidad que el contexto imperante les proporcionaba, idea que se ha desarrollado en los apartados precedentes. Por ello esta defensa no puede ser atendida, pues dada la especial modalidad en que se cometió el delito, no hay antecedentes precisos de que éste haya sido el resultado del cumplimiento de una orden de carácter militar, presupuesto básico para alegar el cumplimiento del deber militar”. Asimismo, **causa Rol N° 38766-2018**, quien en su considerando 26° señala “Que en lo referido las pretensiones de las defensas de Krassnoff, Zapata y Alfaro, para determinar si en la especie se configuran los errores de derecho denunciados es necesario tener en consideración que, de acuerdo al mérito de autos, las defensas de los recurrentes solicitaron durante la secuela del procedimiento, entre otras pretensiones, que se reconociera a favor de sus representados las circunstancias consagradas en los artículos 211 y 214 inciso 2°

del Código de Justicia Militar. Esta pretensión fue rechazada por el tribunal de primer grado, indicando en sus motivos 78°, 83° y 103° que en cuanto se invoca como circunstancia atenuante lo prescrito en el artículo 211 del Código de Justicia Militar, no cabe sino su rechazo, pues no se ha acreditado que la participación en calidad de autor, en los delitos sub-lite, lo haya sido en cumplimiento de órdenes recibidas de un superior jerárquico. Por la misma razón no se dan tampoco los supuestos para la concurrencia de la eximente incompleta en relación con el inciso segundo del artículo 214 del Código de Justicia Militar.” Haciendo referencia a lo dictado por la Corte de Apelaciones de Santiago, en autos **rol N° 2182-98**. Teniendo además presente lo señalado en las consideraciones generales de esta sentencia, en especial lo expuesto en las directrices de la jurisprudencia alemana por el jurista **Claus Roxin**, en cuanto resulta inimaginable que quien actúa en una situación como la establecida en esta sentencia hubiera podido considerar que la ejecución de personas resultaba conforme al derecho. En consecuencia, **esta alegación es rechazada**.

D. En relación al artículo 214 del Código de Justicia Militar: En cuanto fue solicitada por la defensa del acusado Alberto Daniel Velásquez Barría, el Tribunal razona lo siguiente: Esta eximente aplica “cuando se haya cometido un delito por la ejecución de una orden de servicio, el superior que la hubiere impartido será el único responsable”. Luego de citar doctrina indica que nos hallamos en el caso de obediencia debida, insistiendo que en aquel escenario, quien cumple una orden injusta obedece a que en tales hipótesis el inferior se haya en una situación de inexigibilidad. Sobre lo anterior, no es posible acoger la eximente alegada. Toda vez que: **a)** los hechos investigados, en primer lugar, no se tratan de orden de servicio, sino que delitos de lesa humanidad. **b)** En segundo lugar, no existe en el proceso ninguna representación de ilegalidad o antijuricidad al superior. **c)** En tercer lugar, nadie obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho participando en la ejecución de delitos de lesa humanidad. En efecto, no es posible acoger la alegación del artículo 214 del Código de Justicia Militar, ello por no explicar adecuadamente la defensa su posición, no reunirse los requisitos que señalan dichas normas y que además debe tratarse de una orden del servicio o de una actividad castrense, lo que claramente no concurre en la especie, porque aquí se trata de un acto ilícito. Además, no consta en el proceso que el acusado haya representado o suspendido la orden al superior respectivo. En consecuencia, **esta alegación es rechazada**.

32°) INSTITUCIÓN DE LA MEDIA PRESCRIPCIÓN O PRESCRIPCIÓN GRADUAL:

En relación al artículo 103 del Código penal, el Tribunal se hace cargo de ésta Institución, por lo que cabe precisar:

A. En síntesis podemos expresar que sobre esta materia este Tribunal se remitirá a los razonamientos dados respecto a la imprescriptibilidad del delito de lesa humanidad. Luego, siendo el delito de autos catalogado como de lesa humanidad, no es posible aplicar en todo su espectro algún instituto de prescripción. De no ser así, resulta muy difícil sostener la categoría de lesa humanidad. Si los hechos han sido calificados de esa forma debe sostenerse dicha afirmación tanto en la calificación del delito como en la determinación de la pena. Además, en relación a esta materia, el autor **Óscar López** (Derecho Internacional y Crímenes contra la Humanidad, Editorial Fundación de Cultura Universitaria. Uruguay, 2008. Pág. 235 y siguientes) menciona el **caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Cantoral Huamaní y García Santa Cruz versus Perú” de 10 de julio de 2007**, que en su párrafo **190**, señala que la Corte recuerda que el Estado no podrá aplicar leyes de amnistía ni disposiciones de prescripción ni otras excluyentes de responsabilidad que impidan investigar y sancionar a los responsables. Además, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en sus “Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de Chile” del mes de julio del año 2014, señaló que le preocupa la aplicación de la “prescripción gradual” o “media prescripción” contenida en el artículo 103 del Código Penal, a violaciones graves de derechos humanos ocurridas durante la dictadura, lo cual determina la disminución o atenuación de las penas aplicables. Además, en esa materia la **Excma. Corte Suprema, en sentencia en causa rol 28.581-2016 de 24 de octubre de 2016 (causa rol 29.877 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Pitrufquén, caso “Nicanor Moyano Valdés”)** ha manifestado sobre esta materia, en su motivo quinto, que resulta conveniente recordar que el artículo 103 del Código Penal no sólo está contemplado en el mismo título que la prescripción, sino que se desarrolla luego de aquella, lo que revela la estrecha vinculación entre ambos institutos. Sin embargo, como en el caso se trata de un delito de lesa humanidad, circunstancia que el fallo declaró expresamente, lo que condujo a proclamar la imprescriptibilidad de la acción persecutoria, cabe sostener que por aplicación de las normas del Derecho Internacional y dado que tanto la media prescripción como la causal de extinción de la responsabilidad penal se fundan en el transcurso del

tiempo como elemento justificante para su aplicación, la improcedencia de aplicar la prescripción total alcanza necesariamente a la parcial, pues no se advierte razón para reconocer al tiempo el efecto de reducir la sanción, dado que una y otra institución se fundamentan en el mismo elemento que es rechazado por el ordenamiento penal humanitario internacional, de manera que ninguno de tales institutos resulta procedente en ilícitos como el de la especie.

B. Ahondando en esta institución de la prescripción gradual, el último estudio actualizado sobre la aplicación de ésta por los Tribunales y la Excma. Corte Suprema corresponde a la tesista de magister de la Universidad de Chile **Karina Fernández Neira**, en su trabajo “La aplicación de la prescripción gradual del delito en las causas sobre violaciones de derechos humanos” (página 192) quien después de estudiar detalladamente aspectos dogmáticos y legales tanto nacionales como de derecho comparado, concluye “que la aplicación de la prescripción gradual en casos de violaciones a los derechos humanos debe ser rechazada. En los casos antes referidos, la Corte Suprema no motiva correctamente sus sentencias, descuida aspectos dogmáticos y procesales, e incurre en incongruencias argumentativas en el afán de aplicar una institución cuyo diseño histórico-legislativo fue pensado para otras realidades, y cuya aplicación en casos de derechos humanos resulta forzada. Además, aunque la jurisprudencia citada evidencia la evolución de nuestro Tribunal superior, pues éste reconoce explícitamente que el Derecho internacional es una fuente directa de obligaciones internacionales para el Estado de Chile en lo referido al respeto de los derechos humanos, dicha evolución ha sufrido serios tropiezos y contradicciones a causa de los fallos del último bienio. Al aplicar la prescripción gradual a delitos de lesa humanidad, la Corte Suprema, finalmente, compromete la responsabilidad internacional del Estado por el incumplimiento de sus obligaciones internacionales, particularmente respecto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.”

C. Recientemente la Iltrma. **Corte de apelaciones de Temuco en la causa rol penal N°359-2019, de fecha 24 de septiembre de 2019**, pronunciándose sobre la no aplicación del artículo 103 del Código Penal, en su **considerando tercero** señala: “Finalmente, se tiene además en consideración, que la estimación de la prescripción gradual respecto de los responsables de la comisión de delitos de lesa humanidad afecta el principio de proporcionalidad de la pena, pues la gravedad de los hechos perpetrados con la intervención de Agentes del Estado, determina que la respuesta al autor de la transgresión debe ser

coherente con la afectación del bien jurídico y la culpabilidad con que actuó. En este sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de "La Masacre de la Rochela vs Colombia", señaló de manera expresa: "que en la investigación de graves violaciones a los derechos humanos sea imposible reconocer como compatible con la Convención Americana la imposición de penas ínfimas o ilusorias, o que puedan significar una mera apariencia de justicia" (Corte Interamericana de Derechos Humanos, fallo "La Masacre de la Rochela vs Colombia", Sentencia de fecha 11 de mayo de 2007, párrafo N° 191).

D. Del mismo modo, **Excelentísima Corte de Suprema en causa rol N°8914-2018, seguida por el delito de Homicidios calificados en carácter de reiterado de Pedro Antonio Bahamonde Rogel, José Santiago Soto Muñoz, Héctor Hugo Maldonado Ulloa y José Mañao Ampuero**, acoge el recurso de casación en el fondo, deducido por la Unidad Programa Derechos Humanos, de la Subsecretaría de Derechos Humanos contra la sentencia dictada por la Illtma. Corte de Apelaciones de Valdivia, de fecha 05 de abril de 2018, en su aspecto penal, declarando su nulidad y dictando sentencia de reemplazo con fecha 15 de junio de 2020. En dicha sentencia expresa lo siguiente: "**Noveno:** Que, conviene dejar asentado que, aun cuando el reconocimiento de la prescripción gradual, regulada en el artículo 103 del código punitivo, carece de influencia en lo dispositivo del fallo en estudio, la jurisprudencia constante de esta Sala Penal ha señalado reiteradamente que, la calificación de delito de lesa humanidad dada al hecho ilícito cometido, obliga a considerar la normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que excluye la aplicación tanto de la prescripción total como de la llamada media prescripción, por entender tales institutos estrechamente vinculados en sus fundamentos y, consecuentemente, contrarios a las regulaciones de los Cogens provenientes de esa órbita del Derecho Penal Internacional, que rechazan la impunidad y la imposición de penas no proporcionadas a la gravedad intrínseca de los delitos, fundadas en el transcurso del tiempo". Ratificando lo expuesto, con fecha reciente la Excelentísima Corte Suprema en roles N°5780-2023 denominado "Caso Caravana de la muerte episodio La Serena" de fecha 28 de diciembre de 2023 y en causa N°22.276-2022 denominado "Caso quemados" de fecha 05 de enero de 2024, a rechazado la institución de la media prescripción. En consecuencia, esta institución del artículo 103 del Código Penal tampoco es aplicable en la causa y **se rechaza lo solicitado por la defensa de Alberto Daniel Velásquez Barría**.

33°) AGRAVANTES DE RESPONSABILIDAD PENAL.

A. Que en relación a la agravante del **artículo 12 N°8 del Código Penal**, alegadas por los abogados **David Osorio Barrios** a fs. 2.251 y siguientes (Tomo VI) respecto de los acusados. Del abogado **Ricardo Lavín Salazar** a fs. 2.411 y siguientes (Tomo VI) respecto de los acusados. Tal como lo ha dicho este Tribunal en la causa 114.000, homicidio de Exequiel Zigomar Contreras Plotzqui, en causa rol 44.305, homicidios calificados de Abraham Oliva Espinoza y Luis Espinoza Villalobos, con un mayor estudio de los antecedentes y así lo ha resuelto en numerosas causas condenatorias, ya ejecutoriadas este Tribunal acogerá la agravante pedida del artículo 12 N°8 del texto punitivo para los acusados Víctor Herald Cuevas Seguel y Alberto Daniel Velásquez Barría.

A.1. En este punto hay que hacer una distinción importante. En efecto los delitos de lesa humanidad, como ya se han descrito, no es efectivo, que solo puedan ser cometidos por agentes del Estado, es decir, delito de lesa humanidad, no es igual a que se comentan por agentes del Estado. Los delitos de lesa humanidad, también pueden ser cometidos por particulares. En la jurisprudencia nacional hay varios casos en que se ha condenado a particulares, por ejemplo en la causa rol N° 2.182-98, denominado “Episodio Liquiñe”, instruida por el señor Ministro en Visita Extraordinaria Alejandro Solís Muñoz. En ese sentido si bien el auto acusatorio en la descripción de los hechos por la facticidad misma describe a agentes del Estado, el hecho de ser funcionario público no implica automáticamente que la persona se prevalezca de su condición, por ello, lo especial de esta agravante, es decir, si el acusado no hubiera sido agente del Estado, no habrían tenido la posibilidad de actuar con el resguardo para su impunidad, como lo hizo, y eso es lo importante, el hecho de ser funcionario público no es parte de los requisitos de los crímenes de lesa humanidad, como ya se describió en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sólo se requiere ser detenido por una política contra determinada población, no siendo necesario que sean agentes públicos. Además, el artículo 63 no es tajante en esta materia, puesto que la persona siendo funcionario público, podría haber aprovechado de esa calidad y ejecutar el delito por otros factores o circunstancias que es lo que se viene explicando, por ejemplo, por relaciones de amistad, por relaciones de trabajo o por otras situaciones, pero en este caso se aprovecha de la condición de calidad de ser funcionario público. Teniendo además en consideración que se estaba bajo un régimen militar, el que con mayor razón los acusados aprovechan la calidad de funcionario público para cometer el delito. El

delito de homicidio calificado no tiene en el tipo el factor funcionario público, otros delitos tienen la calidad de ser cometidos por funcionarios públicos, pero este no es el caso. Si no hubiera existido el régimen militar, si las personas no fueran funcionarios del ejército de Chile, no habría sido posible que esas patrullas hubieran ejecutados a las víctimas. **Por ello es que debe acogerse la agravante del artículo 12 N°8 del Código Penal.**

B. En cuanto a la agravante del artículo **12 N°10 del Código Penal** invocada por el abogado David Osorio Barrios a fs. 2.251 y siguientes (Tomo VI) respecto de los acusados. En relación a esta agravante que dispone: “Cometer el delito con ocasión de incendio, naufragio, sedición, tumulto o conmoción popular u otra calamidad o desgracia”. No es posible acoger esta agravante, pues de la sola lectura de la acusación se desprende que el Tribunal durante su investigación, no detesto algunos de los elementos que allí se mencionan, ni tampoco la defensa los desarrolla mayormente. En consecuencia **se rechaza** esta agravante.

C. En relación a las agravantes del **artículo 12 N°11 y la del 12 N°12:** alegadas, la de 12 N°11 por el abogado David Osorio Barrios a fs. 2.251 y siguientes (Tomo VI) para los acusados. No resulta aplicable, pues del auto acusatorio se desprende que en este caso los funcionarios de Carabineros de Chile, por su práctica y patrullajes en el contexto de aquella época, son personas que habitualmente portan armas para el ejercicio de sus labores. En ese sentido, si ya se acogió la agravante anterior, en que se estableció que fueron estos funcionarios públicos, personal de Carabineros de Chile, volveríamos a utilizar un mismo elemento para hacer calzar una agravante, puesto que utilizaríamos el elemento personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad, funcionarios que hacen patrullajes en la ciudad, los que siempre utilizan armas. Luego esto va en contra del principio non bis in ídem. **Rechazando** la aplicación de la agravante del artículo 12 N° 11 del Código Penal para los acusados Víctor Herald Cuevas Seguel y Alberto Daniel Velásquez Barría. Además se debe tener presente, como también lo que a continuación se analiza, están íntimamente ligadas con las circunstancias del homicidio calificado alevosía, luego nuevamente se utilizaría un elemento ya razonado por el Tribunal y se violaría el principio non bis ídem.

C.1. En cuanto a la agravante del artículo 12 N°12 del código criminal, solicitada por el abogado Ricardo Lavín Salazar a fs. 2.411 y siguientes (Tomo VI) respecto de ambos acusados. **No es posible acogerla**, toda vez que en el auto acusatorio la calificación del homicidio calificado se hace en los términos de la circunstancia 1° del artículo 391 N°1 del Código Penal, esto es, con

alevosía. Sucede que la calificante citada alude a este mismo concepto, toda vez que ejecutarlo de noche o despoblado es aprovecharse de la indefensión o actuar sobre seguro sobre las víctimas. En consecuencia, no puede utilizarse un mismo elemento incriminatorio dos veces para determinar y aumentar la pena, porque se está violando el principio non bis in ídem. En resumen no es posible acoger esta agravante.

34°) DETERMINACIÓN DE LA PENA. En la determinación de la pena se conjugan varios factores que el sentenciador debe evaluar, entre ellos, como esenciales son:

A. En primer lugar, la concurrencia de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, establecidas en los **artículos 11 y 12** del Código Penal y otras normas del ordenamiento.

B. En segundo lugar, la determinación de la pena regida por los **artículos 50** y siguientes del mismo texto.

C. En tercer lugar, tratándose en este caso de delitos que su penalidad consta de dos o más grados, se deberá aplicar el **artículo 68** del texto punitivo, y si no es así el **artículo 67** del texto citado.

D. En cuarto lugar, tratándose en este caso de delitos de lesa humanidad como se explicará con posterioridad, atendida la gravedad y en consideración a la proporcionalidad de las penas, no procede que los encartados, aparte por la extensión de la pena, obtengan algún beneficios de la **Ley 18.216** atendido a los estándares normativos e interpretativos existentes en la materia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

E. En quinto lugar, dentro de otros elementos, debe considerarse el **artículo 69** del Código Penal.

F. En sexto lugar, el equilibrio adecuado entre el **artículo 74** del Código Penal y el **artículo 509** del Código de Procedimiento Penal (si fuera pertinente). Que de igual forma se ha razonado, debe estarse a los estándares normativos e interpretativos sobre Derechos Humanos de la Corte Interamericana sobre esta materia, en especial el sentenciador tiene que considerar la gravedad de los hechos y la proporcionalidad de la pena, pues se trata de delitos de lesa humanidad.

35°) Que conforme a la calificación jurídica precedente y sus razonamientos posteriores, los hechos materia de la causa corresponden a la figura típica del delito de: homicidio calificado de **Rubén Armando Antimán Nahuelquín**, perpetrado en la comuna de Puerto Aysén, en el mes de diciembre

de 1985. Delito previsto y sancionado en el **artículo 391 N°1 circunstancia primera del Código Penal**, vigente a la época de los hechos, que tiene una pena de presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo.

36°) Cabe hacer presente, que según el auto acusatorio de **fs. 2.096 a fs. 2.131 (Tomo VI)**, con fecha 30 de diciembre de 2021, y la calificación final que se ha hecho en esta sentencia los encartados Víctor Heraldo Cuevas Seguel y Alberto Daniel Velásquez Barría como autores. En este caso a estos acusados les beneficia la atenuante del artículo 11 N°6 del Código Penal la que como se señaló es en carácter de simple. En cuanto a las agravantes a estos acusados les perjudica la del artículo 12 N°8 del código citado. En virtud del artículo 68 del Código Penal haciendo la compensación racional a estos acusados, quedan sin circunstancias atenuantes ni agravantes, pudiendo el Tribunal en su aplicación recorrer toda su extensión.

A.1. Tratándose de un delito de homicidio calificado, la pena a imponer comienza en 10 años y 1 día. Atendida además la extensión del mal causado en virtud del artículo 69 de Código Penal la pena queda en **11 años de presidio mayor en su grado medio, más las accesorias legales.**

37°) Beneficios de la Ley 18.216 y sus modificaciones posteriores. Atendidas las razones que se van a exponer (en especial la extensión de la pena) **no procede ningún beneficio de la ley 18.216 aplicable a los acusados.** Además, se tiene en consideración, los informes del Servicio Médico Legal allegados al proceso respecto de:

A. Víctor Heraldo Cuevas Seguel, a fs. 3.151 a fs. 3.158 (Tomo IX), informe del Servicio Médico Legal de Puerto Montt, el que concluye: “que existe un cuadro psicopatológico compatible según el CIE10 y DSMV con: deterioro neurocognitivo leve. Los déficits cognitivos en su memoria junto con el resultado de MMSE con puntuación de 24 donde da la referencia de sospecha patológica son atribuibles de forma primaria a la presencia de ciertos síntomas afectivos o de estrés y a un envejecimiento normal. En su repercusión en la funcionalidad, el impacto de su cuadro psicopatológico al momento es bajo”.

B. Alberto Daniel Velásquez Barría, a fs. 3.159 a fs. 3.166 (Tomo IX) informe del Servicio Médico Legal de Puerto Montt, que concluye: “no presenta ningún cuadro patológico de base evidente, por tanto, no se evidenció al momento de la pericia la presencia de un trastorno mental de manejo psiquiátrico y se encuentra con sus facultades mentales normales”.

38°) Sobre esta materia y aun en el caso que posteriormente los acusados tuvieran una pena inferior de igual forma **no puede acceder a cumplir la pena en libertad**, en efecto con un mejor estudio y ponderación actualizada de los estándares normativos e interpretativos en materia de derechos humanos es necesario hacer las siguientes reflexiones, como el Tribunal lo ha realizado últimamente en causa rol causa rol 2-2013-V de la Ilma. Corte de Apelaciones de Valdivia, causa rol 45.361 del Juzgado de Letras de Lautaro, causa rol 114.051 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, causa rol 45.357 del Juzgado de Letras de Lautaro, causa rol 114.103 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, causa rol 45.367 del Juzgado de Letras de Lautaro, causa rol 114.017 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, causa ro 2-2012 del Juzgado de Letras de Pucón, causa rol 114.034 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, causa rol 10.914-P del Juzgado del Crimen de Puerto Montt.

A. Un estándar en derechos humanos corresponde a la idea de descubrir mediante un razonamiento judicial una nueva regla que inspire la solución de un caso que puede ser perfectamente aplicable a casos similares. Un estándar importa alcanzar un determinado nivel, puesto que todas las herramientas interpretativas apuntan a una mayor realización de los derechos fundamentales. En este caso la interpretación debe ser plausible conforme al artículo 5 inciso 2° de nuestra Constitución que impele a reconocer y promover tales derechos fundamentales (**García Pino, Gonzalo**: “La consideración de los estándares sobre derechos fundamentales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Tribunal Constitucional”. En Actas XI Jornadas Constitucionales. Temuco 2015, pp. 27 -53). Agregando este Ministro que a partir de la normativa aludida, esta deber ser aplicada e interpretada en conformidad con lo que ha decidido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de derechos humanos (Corte IDH) sobre determinado estándar normativo.

B. Sobre la normativa interna y las prácticas judiciales de los Estados y en este caso del Poder Judicial, ya la Corte IDH en el fallo Almonacid Arellano y otros versus Chile, de 26 de septiembre de 2006, en su **párrafo 124**, señaló: “La Corte es consciente que los jueces y Tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la

aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”.

C. Esta institución denominada control de convencionalidad puede ser definida en término simples como el mecanismo que utiliza la Corte Interamericana de Derechos Humanos tanto en sede contenciosa como consultiva para determinar la compatibilidad o no del derecho interno o los actos de los agentes de un Estado, con las disposiciones de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Asimismo como el ejercicio que realizan los jueces domésticos para realizar el mismo cotejo entre las normas internas, las que dispone la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana (**García, Gonzalo** (2014): “Preguntas esenciales sobre el control de convencionalidad difuso aplicables a Chile”, en: **Nogueira, Humberto** (coord.) La protección de los Derechos Humanos y fundamentales de acuerdo a la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Santiago de Chile, Librotecnia. Pp.356-357).

D. Para aplicar entonces el control de convencionalidad, hay que observar por su puesto la Convención Americana (ya citada) en especial los artículos 1.1 y 2. Ello por cuanto los Estados tienen la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna (1.1). Por su lado su artículo 2 nos expresa, que si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

E. Del mismo modo, debemos analizar ahora si la Corte IDH en su jurisprudencia contenciosa o consultiva ha dictado al menos una sentencia o ha emitido alguna Opinión Consultiva sobre la materia, que permita al Juez respectivo aquilatar que se encuentra en presencia de un **estándar normativo y/o interpretativo** en materia de derechos humanos. En este caso en relación a la

aplicación de sanciones y posibles beneficios respecto a los delitos que consistan en graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos el delito de lesa humanidad. En esta materia podemos observar que sí ha existido por parte de la Corte IDH un estándar y jurisprudencia robusta y contundente sobre la materia.

Siguiendo el razonamiento anterior observamos lo siguiente:

E.1. Caso Barrios Altos versus Perú, de 14 de marzo de 2001, en el párrafo 41, expuso que considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

E.2. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, de 26 de septiembre de 2006, párrafos 111 a 114, la Corte IDH ha señalado: Los crímenes de lesa humanidad producen la violación de una serie de derechos inderogables reconocidos en la Convención Americana, que no pueden quedar impunes. En reiteradas oportunidades el Tribunal ha señalado que el Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que la Corte ha definido como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”. Asimismo, la Corte ha determinado que la investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. Al respecto, este Tribunal ha señalado que no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Este Tribunal ya había señalado en el Caso Barrios Altos que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Resulta útil

destacar también que el propio Estado en el presente caso reconoció que en “principio, las leyes de amnistía o auto amnistía son contrarias a las normas de derecho internacional de los derechos humanos”. Por las consideraciones anteriores, la Corte estima que los Estados no pueden sustraerse del deber de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad aplicando leyes de amnistía u otro tipo de normativa interna. Consecuentemente, los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no se puede conceder amnistía.

E.3. Caso la Masacre de la Rochela vs Colombia, Sentencia de fecha 11 de mayo de 2007, párrafo N° 191, señaló de manera expresa: que en la investigación de graves violaciones a los derechos humanos sea imposible reconocer como compatible con la Convención Americana la imposición de penas ínfimas o ilusorias, o que puedan significar una mera apariencia de justicia.

E.4. Caso Cantoral Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz vs. Perú, de 10 de julio de 2007, en su párrafo 190, puntualiza: La Corte recuerda que en cumplimiento de su obligación de investigar y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos, el Estado debe remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que impidan la debida investigación de los hechos, y utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita dicha investigación y los procedimientos respectivos, a fin de evitar la repetición de hechos tan graves como los presentes. El Estado no podrá argüir ninguna ley ni disposición de derecho interno para eximirse de su obligación de investigar y, en su caso, sancionar penalmente a los responsables de los hechos cometidos en perjuicio de Saúl Cantoral Huamaní y Consuelo García Santa Cruz. En particular, la Corte recuerda que el Estado no podrá aplicar leyes de amnistía, ni disposiciones de prescripción, ni otras excluyentes de responsabilidad que impidan investigar y sancionar a los responsables.

E.5. Caso Masacre de las Dos Erres versus Guatemala de 24 de noviembre de 2009, en el párrafo 129, señala que ante esta situación, la Corte reitera su jurisprudencia constante sobre la incompatibilidad de figuras como la prescripción y la amnistía en los casos de graves violaciones a los derechos humanos, que de manera clara ha establecido que: El Estado debe garantizar que los procesos internos tendientes a investigar y [eventualmente] sancionar a los responsables de los hechos de este caso surtan sus debidos efectos y, en particular, de abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad. En ese sentido, el Tribunal ya

ha señalado que [...]son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos” [...] ninguna ley ni disposición de derecho interno puede impedir a un Estado cumplir con la obligación de investigar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos[...]. En particular, al tratarse de graves violaciones de derechos humanos el Estado no podrá argumentar prescripción o cualquier excluyente similar de responsabilidad, para excusarse de su deber.

E.6. Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha Do Araguaia”) vs. Brasil

de 24 de noviembre de 2010 en el párrafo 155, indica: Adicionalmente, el mismo Grupo de Trabajo manifestó su preocupación que en situaciones post-conflicto se promulguen leyes de amnistía o se adopten otras medidas que tengan por efecto la impunidad, y recordó a los Estados que: es fundamental adoptar medidas efectivas de prevención para que no haya desapariciones. Entre ellas, destaca [...] el procesamiento de todas las personas acusadas de cometer actos de desaparición forzada, la garantía de que sean enjuiciadas ante Tribunales civiles competentes y que no se acojan a ninguna ley especial de amnistía o medidas análogas que puedan eximir las de acciones o sanciones penales, y la concesión de reparación e indemnización adecuada a las víctimas y sus familiares.

F. Como se puede verificar al observar los fallos citados, la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de su jurisprudencia ha sostenido este estándar en materia de derechos humanos en cuanto tratándose de delitos de graves violaciones a los derechos humanos (entre otros el delito lesa humanidad), los responsables deben ser sancionados, la pena debe ser proporcional a la gravedad de los hechos perpetrados por la intervención de Agentes del Estado. Del mismo modo, se debe evitar cualquier práctica o aplicación de normativa interna que restrinja los efectos de la sentencia u otorgue algún beneficio de cualquier tipo para el cumplimiento de la sentencia. Del mismo modo que las penas resulten ilusorias. Todo ello por tratarse de graves violaciones a los derechos humanos perpetrados por Agentes del Estado. Lo anterior, es totalmente diferente al tratamiento penal y procesal penal de la delincuencia común.

G. Sobre esta materia, esto es, de los beneficios que pueden otorgarse a los responsables de los ilícitos penales (tratándose de la delincuencia común) el legislador chileno ya avanzó sobre la materia en la **Ley 18.216**. En efecto en esta ley, si bien el **artículo 33** permite al Tribunal, previo informe favorable de Gendarmería, disponer la interrupción de la pena privativa de libertad reemplazándola por el régimen de libertad vigilada intensiva, previo los requisitos legales, este artículo debe relacionarse con el artículo 1 y siguientes de la citada ley. En efecto el **artículo 1** de la señalada ley indicada, en forma categórica y expresa, prescribe “No procederá la facultad establecida en el inciso precedente (otorgamiento de los beneficios de Remisión condicional, Reclusión parcial, Libertad vigilada, Libertad vigilada intensiva, Expulsión, en el caso señalado en el artículo 34 y Prestación de servicios en beneficio de la comunidad) ni la del artículo 33 de esta ley, tratándose de los autores de los delitos consumados previstos en los artículos 141, incisos tercero, cuarto y quinto; 142, 150 A, 150 B, 361, 362, 372 bis, 390 y 391 del Código Penal”.

H. En esa idea de razonamiento, si bien la Ley 18.216, se refiere a los ilícitos penales de la delincuencia común. Manifiesta la voluntad del Estado de Chile de negar cualquier tipo de beneficios (en forma acotada) para los autores consumados de determinados delitos, en este caso **el homicidio calificado**. En todo caso si ello no estuviera consagrado en la legislación chilena para todos los responsables de los delitos de lesa humanidad (en la época de los hechos investigados) debemos observar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos antes citada, según se ha relacionado. En todo caso- como expone Nogueira, debe aplicarse el control de convencionalidad cuando el derecho interno se encuentra por debajo del estándar mínimo asegurado convencionalmente. Considerando los artículos 1, 2 y 29 de la Convención Americana citada. Además los artículos 26, 31.1 y 27 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados de 1969. (**Nogueira, Humberto** (2014): “Sistema interamericano de protección de derechos humanos, control de convencionalidad y aplicación por parte de las jurisdicciones nacionales” en: Nogueira, Humberto (“coord.”). La protección de los Derechos Humanos y fundamentales de acuerdo a la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Santiago de Chile, Librotecnia, pp. 395-420).

39°) En consecuencia, aplicando el control de convencionalidad, según lo dispuesto por la Corte IDH, en relación a los **estándares normativos e interpretativos** sobre derechos humanos para los efectos de la sanción y

cumplimiento de las penas, en relación a los ilícitos de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos el delito lesa humanidad (como es el caso en estudio) **no es posible** (además de lo razonado y de los estándares normativos) **otorgarle algún beneficio de la ley 18.216 a los acusados** en esta causa y así se dirá en lo resolutivo. De esta forma el control de convencionalidad se manifiesta como una obligación de garantía, es decir, este control se enmarca dentro de un instituto que es el control internacional. Esto es, aquel conjunto de procedimientos y técnicas creadas y destinadas a verificar si el comportamiento de los Estados se adecua o no a lo exigido por normas de conducta internacionales. Este control es una expresión de la obligación de garantía y de disponer medidas en el ámbito interno. Esto implica que el control de convencionalidad cristaliza estas obligaciones para toda autoridad pública. Más aun, dicho control desde una mirada más amplia se enmarca dentro de un instituto que es el control internacional. Esto es, aquel conjunto de procedimientos y técnicas creadas y destinadas a verificar si el comportamiento de los Estados se adecua o no a lo exigido por normas de conducta internacionales. (Núñez, Constanza (2017): El control de convencionalidad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Argentina, ARA, Editores. p. 36). Lo anterior ha sido además ratificado por la **II tma. Corte de Apelaciones de Temuco, el 04 de marzo de 2020, en causa rol 1.052-2019**, en cuanto la no concesión de beneficios de la ley 18.216 a aquellas personas que hubieran participado en graves violaciones a derechos Humanos (lesa humanidad). En consecuencia **no es posible otorgarles a los acusados ningún beneficio y deberán cumplir la pena efectiva impuesta** como se dirá en lo resolutivo.

ASPECTOS RESOLUTIVOS.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 3, 6, 7, 11 N°1, N°6 y N°9, 12 N°8, N°10, N°11, N°12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 50, 51, 52, 56, 61, 68, 69, 103 y 391 N°1 Circunstancia primera del **Código Penal**; artículos 10, 42, 43, 50, 51, 56, 67, 68 y siguientes, 81 a 84, 108 a 120, 121 y siguientes, 424 y siguientes, 447 y siguientes, 451 y siguientes, 456 bis, 457, 458 y siguientes, 471 y siguientes, 474 y siguientes, 477 y siguientes, 481 y siguientes, 485 y siguientes, 488 y siguientes, 499, 500 y siguientes y 533 del **Código de Procedimiento Penal**; **Ley 18.575**; artículos 1, 5, 6 y 38 inciso 2° de la **Constitución Política de la República**; 211, 214 del **Código de Justicia Militar**; **Ley 18.216**; **Ley 19.123** y sus modificaciones

posteriores; **Ley 19.980; Ley 20.357, Convención Americana sobre Derechos Humanos y los Convenios de Ginebra de 1949, se declara:**

EN CUANTO A LOS INCIDENTES.

I. QUE SE RECHAZA el incidente de nulidad procesal deducido a fs. 1 a fs. 21 (Cuaderno separado), por el abogado Oscar Álvarez Suarez, en todas sus partes, sin costas por haber tenido motivo plausible para litigar.

II. QUE SE RECHAZA el incidente de nulidad procesal interpuesto a fs. 36 a fs. 128 (Cuaderno separado), por el abogado Maximiliano Murath Mansilla, en todas sus partes, sin costas por haber tenido motivo plausible para litigar.

EN CUANTO A LA ACCIÓN PENAL.

III. QUE NO HA LUGAR a la excepción de fondo, esto es la **cosa juzgada y prescripción de la acción penal** interpuesta por el abogado Oscar Álvarez Suarez en representación de Víctor Heraldo Cuevas Seguel a fs. 2.598 a fs. 2.618 (Tomo VII).

IV. QUE NO HA LUGAR a las excepciones de fondo, esto es la **prescripción de la acción penal** interpuesta por el abogado Maximiliano Murath Mansilla en representación de Alberto Daniel Velásquez Barría a fs. 2.504 a fs. 2.596 (Tomo VII).

V. QUE NO HA LUGAR al sobreseimiento definitivo solicitado por el abogado Maximiliano Murath Mansilla en representación de Alberto Daniel Velásquez Barría a fs. 2.504 a fs. 2.596 (Tomo VII).

VI. QUE SE CONDENA con costas a VÍCTOR HERALDO CUEVAS SEGUEL, R.U.N 5.355.650-7, ya individualizado en calidad de **autor**, del delito de homicidio calificado, en su carácter de lesa humanidad, en la persona de Rubén Armando Antimán Nahuelquín, perpetrado en la comuna de Puerto Aysén, en el mes de diciembre de 1985, a la pena de **11 AÑOS DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MEDIO**, más las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios público y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

VII. QUE SE CONDENA con costas a ALBERTO DANIEL VELÁSQUEZ BARRÍA, R.U.N. 7.165.629-2, ya individualizado en calidad de **autor**, del delito de homicidio calificado, en su carácter de lesa humanidad, en la persona de Rubén Armando Antimán Nahuelquín, perpetrado en la comuna de Puerto Aysén, en el mes de diciembre de 1985, a la pena de **11 AÑOS DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MEDIO**, más las accesorias legales de

inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios público y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

VIII. Que respecto al acusado **VÍCTOR HERALDO CUEVAS SEGUEL**, según se expresó, no se le concederá algún beneficio de la ley N°18.216, solicitado por la defensa. En consecuencia, deberá cumplir la pena privativa de libertad en forma efectiva, sirviéndole de abono los días que ha estado privado de libertad con motivo de este proceso, lo que se detalla de la siguiente forma:

Arresto domiciliario total: Desde el **15 de julio de 2021**, como consta a fs. 2.020 (Tomo VI), cuando es notificado del auto de procesamiento de fs. 1.981 a 2.016 (Tomo III), en virtud del cual se decreta el arresto domiciliario total. Hasta el **22 de julio de 2021**, donde se le concedió el arresto domiciliario parcial según consta a fs. 2.228 (Tomo VI).

IX. Que respecto al acusado **ALBERTO DANIEL VELÁSQUEZ BARRÍA**, según se expresó, no se le concederá algún beneficio de la ley N°18.216, solicitado por la defensa. En consecuencia, deberá cumplir la pena privativa de libertad en forma efectiva, sirviéndole de abono los días que ha estado privado de libertad con motivo de este proceso, lo que se detalla de la siguiente forma:

Arresto domiciliario total: Desde el **27 de julio de 2021**, como consta a fs. 2.190 (Tomo VI), cuando es notificado del auto de procesamiento de fs. 1.981 a 2.016 (Tomo III), en virtud del cual se decreta el arresto domiciliario total. Hasta el **30 de julio de 2021**, donde se le concedió el arresto domiciliario parcial según consta a fs. 2.228 (Tomo VI).

X. La pena impuesta a los condenados comenzará a regir desde que **se presenten o sean habidos en la presente causa.**

XI. Que una vez ejecutoriada la sentencia, deberán dejarse sin efecto las medidas cautelares personales impuestas a los acusados, oficiándose a los organismos respectivos que fueren procedente.

Notifíquese esta sentencia personalmente a los sentenciados, dirigiéndose los exhortos pertinentes, facultándose a los Tribunales para que citen a los sentenciados personalmente, bajo apercibimiento de arresto, y realicen todas las diligencias para el oportuno cumplimiento de la notificación de esta sentencia, autorizándose si fuera pertinente para concurrir a los domicilios de los sentenciados para la respectiva notificación, pronunciándose sobre las peticiones que hicieran los sentenciados en el acto de la notificación, en especial si presentarán verbalmente recurso de apelación.

Notifíquese a los abogados querellantes. En el caso del querellante Programa Continuación Ley 19.123, del Ministerio de Justicia, notifíquese personalmente en secretaría del Tribunal, a cualquiera de los abogados que tenga representación.

Regístrese y cúmplase en su oportunidad, con lo que ordena el artículo 509 bis del Código de Procedimiento Penal, comuníquese a los diferentes Tribunales en que se tramitaren procesos en contra de los sentenciados para informarles sobre las decisiones del presente fallo y **en su oportunidad, archívese.**

Consúltese si no se apelare y archívese en su oportunidad.

Fórmese cuaderno separado para la revisión de las medidas cautelares, dejándose copia del examen de la última revisión de la medida cautelar y demás piezas pertinentes.

Siendo un hecho ocurrido en el año 1973 remítase por la vía más expedita a la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial.

Rol N° 15.732.-

Dictada por don **ÁLVARO MESA LATORRE**, Ministro en Visita Extraordinaria.

Autoriza don Juan Gabriel Lienan Lienan, Secretario (S) de la ltma. Corte de Apelaciones de Temuco

En Temuco, a diecisiete de enero de dos mil veinticuatro, notifiqué por el estado diario la resolución precedente. (YST).